



PENSAR EL FUTURO DE MÉXICO

COLECCIÓN CONMEMORATIVA DE LAS REVOLUCIONES CENTENARIAS

Espacios públicos
y estrategias campesinas
ante la crisis en México

Luciano Concheiro Bórquez
Arturo León López
coordinadores

ESPACIOS PÚBLICOS
Y ESTRATEGIAS CAMPESINAS
ANTE LA CRISIS EN MÉXICO

| Pensar el futuro de México |
COLECCIÓN CONMEMORATIVA DE LAS REVOLUCIONES CENTENARIAS

Primera edición: 30 de noviembre de 2010

D.R. © Universidad Autónoma Metropolitana
UAM-Xochimilco
Calzada del Hueso 1100
Col. Villa Quietud, Coyoacán
C.P. 04960 México, DF.

ISBN: 978-607-477-391-0

ISBN de la colección: 978-607-477-287-6

Impreso y hecho en México / Printed and made in Mexico

ESPACIOS PÚBLICOS
Y ESTRATEGIAS CAMPESINAS
ANTE LA CRISIS EN MÉXICO

Luciano Concheiro Bórquez
Arturo León López
Coordinadores



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD XOCHIMILCO División de Ciencias Sociales y Humanidades



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Rector general, Enrique Fernández Fassnacht

Secretaria general, Iris Santacruz Fabila

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD XOCHIMILCO

Rector, Salvador Vega y León

Secretaria de la Unidad, Beatriz Araceli García Fernández

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Director, Alberto Padilla Arias

Secretario académico, Jorge Alsina Valdés y Capote

Jefe de la Sección de Publicaciones, Miguel Ángel Hinojosa Carranza

PENSAR EL FUTURO DE MÉXICO.

COLECCIÓN CONMEMORATIVA DE LAS REVOLUCIONES CENTENARIAS

Coordinador general, José Luis Cepeda Dovala

Secretario, Miguel Ángel Hinojosa Carranza

CONSEJO EDITORIAL

Presidente, José Luis Cepeda Dovala

Ramón Alvarado Jiménez / Roberto Constantino Toto / Sofía de la Mora Campos

Arturo Gálvez Medrano / Fernando Sancén Contreras

COMITÉ EDITORIAL

Ramón Alvarado Jiménez / Jorge Iván Andrade Narváez

José Luis Cisneros / Francisco Luciano Concheiro Bórquez

Roberto Eibenschutz Hartman / Francisco Javier Esteinou Madrid

Luis Adolfo Esparza Oteo Torres / José Flores Salgado

Alejandro Gálvez Cancino / Arturo Gálvez Medrano

Raquel Adriana García Gutiérrez / Patricia Gascón Muro

Etelberto Ortiz Cruz / Mario Ortega Olivares

Silvia Radosh Corkidi / Ernesto Soto Reyes Garmendia

Salvador Vega y León / Luis Miguel Valdivia Santa María

ASISTENCIA EDITORIAL

Irais Hernández Güereca (diseño de portada)

Yaritza López Báez / Varinia Cortés Rodríguez

ÍNDICE

Presentación	9
<i>Salvador Vega y León</i>	
<i>Alberto Padilla Arias</i>	
<i>José Luis Cepeda Dovala</i>	
Introducción	
Espacios públicos y estrategias campesinas	11
<i>Luciano Concheiro Bórquez</i>	
<i>Arturo León López</i>	
Al alba: México y sus campesinos en el gozne de los tiempos	35
<i>Armando Bartra Vergés</i>	
La lucha de los campesinos ante la crisis alimentaria en México	69
<i>Miguel Meza Castillo</i>	
<i>Blanca Olivia Acuña Rodarte</i>	
Espacio público y desarrollo campesino en Morelos	99
<i>Elsa Guzmán Gómez</i>	
<i>Arturo León López</i>	
Caficultores organizados de La Frailesca chiapaneca	121
<i>María del Rosario Cobo González</i>	
<i>Lorena Paz Paredes</i>	
Veinte tesis sobre los aportes y retos de las mujeres indígenas al discurso y a las prácticas políticas de los movimientos sociales	143
<i>Ángela Ixkic Duarte Baastian</i>	
<i>Gisela Espinosa Damián</i>	

Dos estrategias de vida que se encuentran en un mismo espacio	161
<i>Gisela Landázuri Benítez</i>	
<i>Liliana López Levi</i>	
“De autonomía a autonomía”. La vinculación para el desarrollo entre la UAM-Xochimilco y el Municipio Autónomo de San Juan Copala	187
<i>Luciano Concheiro Bórquez</i>	
<i>Patricia Delia Couturier Bañuelos</i>	
<i>Carmela Cariño Trujillo</i>	
<i>Armando Martínez Rosales</i>	
Partidos políticos, grupos de poder y organizaciones campesinas en el municipio de Las Margaritas, Chiapas	209
<i>Roberto Diego Quintana</i>	
<i>Carlos Andrés Rodríguez Wallenius</i>	
Desarrollo rural, Estado de excepción y memoria. Una reflexión desde los movimientos sociales	237
<i>Alejandro Cerda García</i>	
Los autores	257

PRESENTACIÓN

Presentamos *Pensar el futuro de México*. Colección conmemorativa de las revoluciones centenarias como parte de la celebración del bicentenario de la Independencia de México y del centenario de la Revolución Mexicana. En reconocimiento de la trascendencia de aquellos dos hechos históricos para la determinación de la realidad contemporánea de nuestro país, los volúmenes que integran esta colección abordan diversos aspectos sociales, económicos, políticos, culturales e institucionales considerados centrales en el desempeño de la sociedad mexicana actual.

El objetivo de la obra en su conjunto es la elaboración de un análisis crítico que permita la mejor comprensión de la realidad contemporánea y facilite un balance de lo que hasta el momento se ha logrado y de cómo deberán afrontarse los nuevos desafíos previstos en el futuro.

Cada volumen de la colección ofrece la visión histórica de un tema, explica las circunstancias actuales de nuestra nación sirviéndose de los hechos pasados considerados relevantes en la conformación del México de hoy, y presenta alternativas para superar tanto los retos del presente como aquellos que ya pueden ser avizorados en el desarrollo histórico de nuestro país. La colección pretende hacer no sólo una revisión descriptiva del pasado, sino una reflexión equilibrada acerca de las fortalezas que posee nuestra sociedad y de aquellas que debe propiciar para esbozar un proyecto de nación en el que se privilegie el bien común en un régimen de respeto a las libertades, las diferencias y los derechos civiles de los ciudadanos.

Salvador Vega y León
Rector de la Unidad

Alberto Padilla Arias
Director de la DCSH

José Luis Cepeda Dovala
Coordinador general de la Colección

INTRODUCCIÓN

Espacios públicos y estrategias campesinas

La encrucijada que vive México, se antoja –en medio de estos tiempos preñados de sentidos escatológicos–, compararla con las condiciones que llevaron a las guerras de Independencia y la Revolución. En este libro constatamos la vitalidad social, cultural y política que emana desde los mundos rurales de nuestro país, en particular de una vuelta al sentido de estrategia,¹ en tanto horizonte de visibilidad histórico² que permite vislumbrar utopías posibles sobre la base de un cambio profundo de la correlación de fuerzas y el bosquejo de proyectos empeñados en una transformación del mundo rural y de México en su conjunto. Son los campesinos e indígenas en el “gozne de los tiempos”³ los que, recuperando su memoria nuevamente, parecen decididos a ser una parte fundamental de los cambios que exige la situación actual.

Las experiencias expuestas en los capítulos que integran este libro muestran cómo las estrategias, producto de las luchas e interacción entre diversos sujetos en un cierto espacio público,⁴ contemplan el *desarrollo*

¹ Daniel Bensaïd, “Sobre el retorno de la cuestión político-estratégica”, *Memoria*, núm. 218, abril, México, 2007, pp. 5-13.

² René Zavaleta, “Clase y conocimiento”, *Historia y Sociedad*, segunda época, núm. 7, México, 1975, pp. 3-8.

³ En el presente volumen, Armando Bartra Vergés lo refiere de esta forma en su artículo “Al alba: México y sus campesinos en el gozne de los tiempos”.

⁴ Al respecto, véanse los trabajos de Arturo León López y Margarita Flores, *Desarrollo rural: un proceso en permanente construcción*, UAM-Xochimilco, México, 1991, p. 189; y el artículo de Elsa Guzmán Gómez y Arturo León López en este volumen.

campesino e indígena como una cuestión de contrapoder, que permite acumular fuerzas para enfrentar los proyectos hegemónicos impuestos por medio de instituciones que centralizan las acciones y tienden a homogeneizar la diversidad. El contrapoder, para un desarrollo económico desde lo productivo,⁵ se combina en un ámbito territorial⁶ con procesos que refieren a la esfera de la reproducción social⁷ y de lo que puede también definirse como “estrategias de vida”,⁸ parte desde dentro y desde abajo; sin embargo, requiere de una conciencia de lo global para desplegar las acciones desde lo local, además de hacer girar sus propuestas para representar un modelo de transformación, el referente esencial de la equidad y el despliegue de formas de democracia que la recrean y reivindican, rompiendo el desencanto generalizado que sobre ella existe⁹ y abren caminos bajo el principio de esperanza.¹⁰

Para los pueblos indígenas y campesinos, la lucha por la tierra –por la “madrecita tierra”–,¹¹ representa el fundamento material y simbólico de su existencia y, con una larga trayectoria de más de 500 años, actualmente se ha proyectado en una abierta insurrección municipal que, desde mediados de la década de 1980, llegó a tomar violentamente uno de cada diez muni-

⁵ Véanse los artículos de Miguel Meza Castillo y Olivia Acuña Rodarte, “La lucha de los campesinos ante la crisis alimentaria en México”; el de Elsa Guzmán Gómez y Arturo León López, “Espacio público y desarrollo campesino en Morelos”; y el de Rosario Cobo González y Lorena Paz Paredes, “Caficultores organizados de La Frailesca chiapaneca”, del presente volumen.

⁶ Carlos Walter Porto-Gonçalves, *La globalización de la naturaleza y la naturaleza de la globalización*, Casa de Las Américas, La Habana, 2008, p. 399; y su texto “Del desarrollo a la autonomía: la reinención de los territorios”, *Memoria*, núm. 238, octubre-noviembre, Cemos, México, 2009, pp. 44-46.

⁷ Véase, en el presente volumen, el artículo de Ángela Ixkic Duarte Baastian y Gisela Espinosa Damián, “Veinte tesis sobre los aportes y retos de las mujeres indígenas al discurso y a las prácticas políticas de los movimientos sociales”.

⁸ Véase, en este libro, el artículo de Gisela Landázuri Benítez y Liliana López Levi, “Dos estrategias de vida que se encuentran en un mismo espacio”.

⁹ Felipe Campuzano Volpe, *Autoritarismo y democracia en América Latina. Los retos de la transición*, DCSH, UAM-Xochimilco, México, 2007.

¹⁰ Véase, de Ernest Bloch, *El principio esperanza 1*, 2003; *El principio de esperanza 2*, 2006; *El principio de esperanza 3*, 2007, Trotta, Madrid.

¹¹ Luciano Concheiro, María Tarrío y Sergio Grajales, “El TLCAN al filo de la navaja: notas para una propuesta de renegociación”, *Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos*, año 5, vol. V, núm. 2, diciembre, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; San Cristóbal de las Casas, México, 2007 pp. 108-128.

cipios de menos de cinco mil habitantes.¹² Esta lucha incesante que busca el poder local para la defensa de la tierra y sus recursos naturales, poco a poco ha ido dibujando procesos de autonomías municipales, regionales, de pueblos indígenas específicos y en general de distintas prácticas de territorialidad que recomponen, en el marco de la disputa con el gran capital y el Estado, parte del espacio rural mexicano.¹³

La marejada más profunda proviene de “los sin nombre... los sin rostro”, entre ellos –destacadamente–, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se alzó en armas en 1994 luchando por la tierra, por la democracia, la libertad, la dignidad y una fraternidad que en su andar busca abrirle los ojos al mundo para detener la barbarie del capital, ejerciendo e imaginando prácticas de la sociedad diversas, donde los muchos mundos quepan en un mundo con sus diferencias, donde los “nosotros”, los “todos somos indios”, puedan regirse por sus usos y costumbres, en sus territorios, de forma autónoma.¹⁴

También destacan las movilizaciones y el movimiento social “El campo no aguanta más” de los campesinos productores de mercado. Las oleadas desde principios de este siglo vinieron de muchos lados, los primeros fueron los maiceros, seguidos de frijoleros, sorgueros, cañeros, piñeros, caficultores, ganaderos, que en sus reclamos y demandas específicas se fueron entretejiendo para enfrentar las políticas neoliberales, hasta acabar definiendo lo que puede llamarse un programa político en defensa de sus productos, pero en lucha por la soberanía y la autosuficiencia alimentaria.¹⁵

¹² Adriana López Monjardin, “1982-1988: un proyecto anticampesino y antinacional”, *Cuadernos Políticos*, núm. 53, enero-abril, Era, México, 1988, pp. 19-33.

¹³ Véanse los artículos de Luciano Concheiro Bórquez, Patricia Couturier Bañuelos, Carmela Cariño Trujillo y Armando Martínez Rosales, “‘De autonomía a autonomía’. La vinculación para el desarrollo entre la UAM-Xochimilco y el municipio autónomo de San Juan Copala”; y el de Roberto Diego Quintana y Carlos Rodríguez Wallenius, “Partidos políticos, grupos de poder y organizaciones campesinas en el municipio de Las Margaritas, Chiapas”, en este libro.

¹⁴ Enrique Dussel, “Sentido ético de la rebelión maya de 1994 en Chiapas. Dos ‘juegos de lenguaje’”, en M. Tarrío y L. Concheiro (coords.), *La sociedad frente al mercado*, La Jornada/UAM-Xochimilco, México, 1998, pp. 369-385.

¹⁵ Al respecto, es importante revisar las obras de Blanca Rubio, *Explotados y excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal*, UACH/Plaza y Valdés, México, 2003; y otro que ella misma coordinó, *El sector agropecuario mexicano frente al nuevo milenio*, IIS-UNAM/Plaza y Valdés, México, 2004. Véase también el artículo de Armando

La lucha económica adquirió así un claro sentido territorial, la agenda agraria de lucha por la tierra volvió a posicionarse, la perspectiva ambiental se convirtió en un claro referente y ambas se extendieron a la defensa del mercado interno y a las propuestas de desarrollo ecológicamente sustentable y culturalmente compatible.

Pero como afirma Armando Bartra en su artículo de este volumen, la “Gran Crisis” actual tiene como característica distintiva la diversidad de formas que la integran, lo que hace que la convergencia de procesos sacuda a México en una debacle multidimensional que en el cruce de milenios implique grandes tránsitos precedidos por crisis agrarias de hace 100 y 200 años, junto con las crisis derivadas del quiebre del modelo neoliberal, la salida especulativa que se busca para el mismo (particularmente en relación con los granos para la alimentación y la producción de agrocombustibles), junto con procesos que expresan una crisis de orden civilizatorio que tiene como una de sus expresiones más violentas la crisis ambiental. Esta cita de crisis impone tiempos turbulentos para los que las estrategias y espacios públicos que les correspondan requieren de múltiples dimensiones que van del altermundismo, “Nuestra América” (como diría José Martí), al espacio de lo nacional y las dimensiones más cercanas, representan también la combinación de tareas de diversos órdenes según sus contenidos y formas de lucha.

Producto directo de las luchas sociales y políticas de las masas rurales que se enmarcan en los efectos que tiene la mundialización sobre la reestructuración espacial del dominio del capital,¹⁶ podemos decir que la lucha por la tierra se ha transformado al representar para los campesinos e indígenas de México, desde la disputa (interna y externa) del medio de producción básico para la economía campesina y su resemantización como referente simbólico de las identidades étnicas, pasando por su adjetivación en las prácticas de territorialidad, del llamado “ecologismo campesino”¹⁷ y la disputa por el poder espacialmente referido, hasta la base de un ejercicio horizontal de la democracia directa y del despliegue de las autonomías indígenas y municipales.

Bartra, “De rústicas revueltas: añoranza y utopía en el México rural”, en John D. Vargas (coord.), *Proceso agrario en Bolivia y América Latina*, Plural Editores, La Paz, Bolivia, 2003, pp. 223-254.

¹⁶ Marco Revelli, “Crisis del Estado-nación, territorio, nuevas formas de conflicto y socialidad”, *Viento del Sur*, núm. 11, invierno, México, 1997, pp. 56-66.

¹⁷ Víctor Manuel Toledo Manzur, “El otro zapatismo. Luchas indígenas de inspiración ecológica en México”, *Ecología Política*, núm. 18, Icaria, Barcelona, 1999, pp. 11-22.

Así, los movimientos sociales observan al desarrollo desde un “Estado de excepción” enfrentado desde la memoria misma acumulada en el seno de los procesos sociales fuertemente cargados de un *sentido identitario*.¹⁸

De esta manera, la defensa de la tierra va más allá de la disputa por el medio de reproducción básico de la economía campesina, puesto que emerge y cobra sentido sobre un espacio sistemáticamente simbolizado, sacralizado y constantemente reconstruido en diversas prácticas de *territorialidad*. Ésta puede ser entendida como “la (re)construcción de una espacialidad propia, subalterna y autónoma a la vez, invisible a los ojos del poder, donde se reconstruye el sujeto colectivo [...] es el espacio social vivido, distinto al espacio físico de realidades materiales, y distinto a las representaciones oficiales del espacio”.¹⁹

La llamada globalización ha despertado y hecho visibles fuerzas diversas que demandan un mayor protagonismo, posibilidad de decisión y participación en diversos ejercicios autónomos de poder. Emerge así la praxis desde lo local, donde las transformaciones y utopías, así como la esperanza de un mundo mejor, aparecen como realizables, como futuros cargados de posibilidad. En medio del convulso escenario de las transformaciones globales renace, paradójicamente, la fuerza de “lo local”, de las comunidades, las regiones, los municipios. Así también surge Atenco, como una comunidad que, desde lo local, despliega diversas formas de (re)territorialización como arma de lucha para enfrentar la brutal (des)territorialización modernizante encarnada en el megaproyecto aeroportuario. Así, la comunidad, como totalidad compuesta de múltiples determinaciones, jerarquizada y estructurada por los propios actores, sujetos y clases sociales constituye el punto de partida y de llegada para entender los modos en que los campesinos dan sentido a las transformaciones globales desde sus propios referentes socio-espaciales o territoriales.

Desde esta perspectiva, nos parece que aun en los tiempos de la modernización avasallante –e incluso, quizá por ello–, la reflexión sobre la comunidad tiene plena vigencia. Es al interior de la misma donde podemos constatar la existencia de innumerables vínculos que se construyen en dife-

¹⁸ Véase el último artículo de esta obra, “Desarrollo rural, Estado de excepción y memoria. Una reflexión desde los movimientos sociales”, de Alejandro Cerda García.

¹⁹ Víctor Toledo Llancaqueo, “Políticas indígenas y derechos territoriales en América Latina: 1990-2004. ¿Las fronteras indígenas de la globalización?”, en P. Dávalos, *Pueblos indígenas, Estado y democracia*, Clacso, Buenos Aires, 2005, pp. 67-102.

rentes niveles, desde el ámbito de género, de lo familiar hasta los más amplios escenarios de los ritos y ceremonias colectivas, pasando por un conjunto de expresiones sociales –como el ámbito de lo microsocioal– que tienen que ver con las formas de organización de los grupos domésticos, las relaciones de los habitantes en los barrios y los patrones de la relación colectiva propios de la vida cotidiana. Todos estos vínculos son producto del largo devenir histórico y le confieren a la comunidad una fuerte identidad cultural, misma que asume un papel de vital importancia en la vida de la comunidad, ya que hace posible, en momentos coyunturales, enfrentar la presencia de amenazas externas.

La lucha por espacios públicos refiere a una forma particular de apropiación territorial, donde el propio espacio y la resistencia interactúan y se impactan mutuamente. Los movimientos sociales, como se plantea en este libro, despliegan prácticas sobre un lugar específico y, al mismo tiempo, dentro de un marco más amplio de reestructuración global del capitalismo, en lo que Ulrich Oslender llama “espacialidad de resistencia”.²⁰

La “espacialidad de resistencia” se objetiviza en territorios productivos, en la reproducción social, y toma forma en nuevos sentidos de lo público, redefiniendo tanto la esfera privada como las dimensiones estatales, desde las prácticas sociales en una espacialidad plural construida por medio de la historia específica que combina luchas ideológicas, religiosas y estrategias de vida. Pero a la vez, los espacios públicos y las estrategias campesinas son un palimpsesto de representaciones, historias reescritas donde se superponen los conflictos.²¹

Puede desprenderse del conjunto de la presente obra, que los tiempos y ritmos de la vida rural son uno de los puntos clave de referencia de las estrategias campesinas desde los espacios públicos, incluyen no sólo los tiempos condensados en las luchas sino los tiempos de vida que toman forma en las diversas actividades, las festividades, las migraciones, la milpa o la producción específica que acaban imponiendo características a las propuestas de transformación económica, social y política.

²⁰ Ulrich Oslender, “Espacio, lugar y movimientos sociales: hacia una ‘espacialidad de resistencia’”, *Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales*, vol. VI, núm. 115, junio, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2002, pp. 20.

²¹ Carlos Zambrano, “Territorios plurales, cambio sociopolítico y gobernabilidad cultural”, en Grupo de Investigación Territorialidades, *Territorio y cultura. Territorios de conflicto y cambio sociocultural*, Departamento de Antropología y Sociología, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia, 2001, pp. 19-67.

Las estrategias campesinas y de otros sujetos y actores sociales como las mujeres, los jóvenes, los indígenas, toman forma en contrapoderes que tienen sentido en una particular combinación de una economía moral o “economía de las multitudes”²² que, desde el nivel de la sobrevivencia y la inserción campesina, en medio de la cita de crisis, retoman las propias experiencias y prácticas de los sujetos sociales ubicando el desarrollo en una “escala humana”.²³ Tenemos así una amplia gama de caminos alternativos que dependen del enlace de las diversas propuestas y de la lucha por espacios de contrapoder y particularmente de tácticas para su consolidación frente a un Estado en “retirada” o de plano con rasgos cada día más firmes de una condición de “excepción”.

En esta perspectiva, el artículo de Miguel Meza y Olivia Acuña, que recoge un balance pormenorizado del neoliberalismo, la crisis y soberanía alimentarias, en particular la crisis de la tortilla, plantea cuáles han sido las estrategias que los campesinos excedentarios han impulsado para disputar el mercado agroalimentario a estas empresas y con ello promover la lucha por la soberanía alimentaria y establecer un programa de disputa por la nación.

Entre los espacios públicos de las estrategias campesinas destacan, en el ámbito productivo de competencia con economías de escala –como el jitomate y otros cultivos–, el caso que analizan en el “Morelos campesino” para el presente volumen Elsa Guzmán y Arturo León: para un cultivo tan difícil, hay una complementariedad y combinación de los mercados y lo que llaman espacios públicos que le permiten, con un especial manejo de la variable tecnológica, que los productores logren una mayor retención de excedentes. Las transformaciones regionales en los Altos de Morelos, que se han dado alrededor del cultivo del jitomate, son producto de dinámicas sociales complejas que establecen redes con diversos agentes que definen relaciones y campos de negociación que los autores definen como “espacio público”, como ámbitos de relaciones democráticas y espacios de recreación de relaciones de igualdad y equidad en torno a ciudadanías de nuevo tipo.

En términos generales, los “nichos” de mercado (café orgánico, miel, turismo ecológico) y los llamados mercados solidarios, junto con el fortalecimiento de los mercados locales y regionales por medio del “trueque” mo-

²² Véanse de E.P. Thompson, *Tradicición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*, 1989; y *Costumbres en común*, Crítica, Barcelona, 1995.

²³ Anna Monjo, “Entrevista a Manfred Max-Neef. Hacia un desarrollo a escala humana, una política participativa”, *Ecología Política*, núm. 7, Icaria, Barcelona, 1994, pp. 7-13.

dero entre los campesinos y otros productores, así como con los consumidores, redundan en un incremento del empleo local, en la diversificación y articulación de las fuentes de ingreso, y en la elevación del grado de autosuficiencia de las unidades campesinas de producción, y del de sus comunidades, permitiendo una “intra-acumulación” por medio de ahorros propios y la formación de organizaciones como las “uniones de crédito” y las “cajas de ahorro”.

En este sentido, la experiencia de organización de los caficultores en Chiapas, descrito en el artículo de Rosario Cobo González y Lorena Paz Paredes, desde la economía familiar, combina la reconversión orgánica de este cultivo con un análisis de los mercados, los agentes directamente involucrados en una búsqueda del “paradigma de la organización social” que, en relación con la economía familiar, son organizaciones “multiactivas” que buscan adaptarse a los cambios diversificando actividades y estrategias; en ello –destacan las autoras mencionadas– “consiste su vitalidad y persistencia”.

El principio de equidad,²⁴ si bien depende –para ser viable– de las estructuras de dominación, representa el eje de la acumulación de cambios en el mundo rural. La equidad tiene un correlato con la base económica, pero también con las relaciones sociales, políticas y en particular las culturales, en las que se desenvuelve el mundo campesino y rural. Por ello, en la búsqueda de la equidad, los movimientos sociales enfrentan la modernización, pero también, en términos más profundos, el núcleo de modernidad que ésta encierra; las formas de dominación no sólo políticas sino las que entrañan la reproducción social del propio dominio, por eso es fundamental una perspectiva de género;²⁵ el camino a la equidad también exige un reconocimiento de la diferencia y de sus posibilidades de expresión autónomas, del reconocimiento de prácticas constituyentes que van más allá del “pacto social”. Vistas así, las estrategias campesinas referidas en este libro no sólo

²⁴ Véanse, de Carlos Guerra, “Democracia y participación ciudadana: ¿en busca de la equidad o de nuevos recursos?”, *Revista Mexicana de Sociología*, año LVI, núm. 3, julio-septiembre. IIS/UNAM, México, 1994, pp. 191-204; Manuel Chiriboga, “Desarrollo agropecuario que necesitan América Latina y el Caribe: democracia económica y crecimiento con equidad”, en *América Latina: opciones estratégicas de desarrollo*, Nueva Sociedad, Caracas, Venezuela, 1992, pp. 219-237; y, del mismo autor, “Desigualdad, exclusión étnica y participación política: el caso de CONAIE y Pachacutik en Ecuador”, *Alteridades*, año 14, núm. 28, julio-diciembre, UAM, México, 2004, pp. 51-64.

²⁵ Kirsten Appendini, “La perspectiva de género en la teoría económica y en los estudios de desarrollo”, *Umbrales. Revista del posgrado en Ciencias del Desarrollo*, núm. 11, septiembre, CIDES/UMSA, La Paz, Bolivia, 2002, pp. 131-162.

son movimientos de resistencia sino de reconstrucción de las propias formas de organización que, en proceso pleno de contradicciones, recuperan y dignifican a los productores o sitúan en términos centrales a las mujeres, a la vez que reconocen alteridades.

La relación entre modernización y equidad es en sí misma contradictoria. La modernización en sentido económico se relaciona con la aplicación de la técnica a la producción y por lo tanto no presupone formas de distribución de la riqueza social ni está vinculada necesariamente con ciertas formas de organización social de la producción ni con determinadas relaciones laborales. Si bien implica estilos de gestión racional de la actividad productiva, éstos sin embargo pueden desenvolverse bajo diverso tipo de unidades productivas, particularmente desde el punto de vista de su tamaño y de las formas de propiedad. En este sentido, un estilo de modernización incluyente, equitativa, implica reestructurar el Estado desde lo local, sobre la base de la participación democrática e incluyente, al tiempo que éste es garante de los recursos²⁶ y específicamente de las formas de propiedad, como la llamada propiedad social, fundamento de la *forma comunidad*.²⁷ Sólo en ese sentido puede pensarse un ajuste en términos amplios, que resuelva simultáneamente el problema de la integración económica y de mercado, con una fundada economía moral estructurante de la equidad, como en el caso de la lucha por la soberanía alimentaria.

En términos generales, lo anterior ha exigido un amplio proceso de participación social que enfrenta temas básicos como los ambientales, y la reforma del sentido de lo público y su expresión en los términos de instituciones eficientes y abiertas a la participación ciudadana, cuyas decisiones emanan de la elaboración de políticas públicas y, por otro lado, de organizaciones sociales con capacidad de demanda y de gestión que representen adecuadamente a sus integrantes. Esto último requiere, como se plantea en este libro, del fortalecimiento de las organizaciones civiles, sociales, de productores y empresas campesinas, de mecánicas de ejercicio del poder interno y de la toma de decisiones, propiciando la elevación en el nivel de conocimientos, destreza y habilidades como factor clave para lograr la apropiación de los procesos productivos, para una real autogestión.

²⁶ Manuel Chiriboga, “Desarrollo agropecuario que necesitan América Latina y el Caribe... *op. cit.*”, pp. 219 y 231.

²⁷ Álvaro García Linera, *Forma valor y forma comunidad*, Clacso/Muela del Diablo/Comuna, La Paz, Bolivia, 2009.

Pero también, que las estrategias campesinas refuercen la llamada economía moral, porque parten de la lógica de la reproducción social y, con ello, dan cabida a proyectos más generales como las luchas mencionadas por la conservación de las semillas, la autosuficiencia alimentaria y la agricultura sustentable. Esta estrategia parte de una concepción distinta de cómo se construyen-reconstruyen los mercados, más allá de la idea que se tiene de ellos económicamente, ya que aparecen como espacios producidos históricamente, ámbitos de distribución y de desarrollo cultural y político.²⁸

La diversificación productiva es constitutiva de la dinámica de reproducción campesina, pero en condiciones de especialización —como puede ser la de los servicios en el caso que tratamos— está directamente ligada a lo que ha dado en llamarse “el manejo del riesgo”, o aquello de “no poner todos los huevos en la misma canasta”. Esto permite disminuir la vulnerabilidad ante los riesgos naturales y del mercado,²⁹ y también está ligado a la creación de agroindustrias y organizaciones de segundo y tercer nivel, y a lo que ha dado en llamarse una “planeación estratégica”, desplegada desde la administración municipal.

En términos operativos, esta estrategia presupone una territorialidad agraria junto con una visión ecológica de desarrollo sostenido, para articular una “verdadera revolución ecológico-agraria que reformule, de manera completamente nueva, las formas de propiedad y de apropiación de los recursos naturales en México”.³⁰ En el sentido que plantea Víctor Manuel Toledo, “No basta ya que se produzca mucho, se requiere además que estos volúmenes se generen sin destruir o deteriorar los recursos que intervienen en el proceso, es decir, que se hagan sostenibles a lo largo del tiempo”.³¹

²⁸ María Tarrío, Luciano Concheiro y Sonia Comboni, “Políticas públicas y campesinado en México. Del modelo neoliberal al movimiento ‘El campo no aguanta más’”, *Tierra Adentro. Revista de Estudios Rurales*, núm. 3, segundo semestre, CEAR/Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 2007, pp. 87-99.

²⁹ Gerardo Alatorre, *La viabilidad de las empresas forestales campesinas*, mimeo, 1994, pp. 7-8.

³⁰ Véanse, de Víctor Manuel Toledo Manzur, “Comentario 1. La crisis ecológica: ¿segunda contradicción del capitalismo?”, *Marx ahora*, núm. 3, La Habana, 1997, pp. 181-183; “Zapata ecológico: la rebelión indígena en Chiapas y la batalla entre la naturaleza y el neoliberalismo”, *Ecología Política*, núm. 13, Icaria, Barcelona, 1997, p. 35; *La paz en Chiapas: ecología, luchas indígenas y modernidad alternativa*, Quinto Sol/UNAM, México, 2000, pp. 256.

³¹ Víctor Manuel Toledo Manzur, “Zapata ecológico: la rebelión indígena en Chiapas y la batalla entre la naturaleza y el neoliberalismo”, *Ecología Política*, núm. 13, Icaria, Barcelona, 1997, p. 37.

Sin embargo, las propuestas y las prácticas de los campesinos a lo largo y ancho del país plantean un camino posible por recorrer, en la perspectiva de la “recuperación del sentido estratégico”.

Las familias campesinas siguen esforzándose para producir los granos para su alimentación, cultivados básicamente en tierras de temporal, de tlacolol, con métodos tradicionales o en procesos que las insertan en el mercado. Pero su producción, depende cada vez más de la capacidad que tenga la unidad doméstica de conseguir fuera del predio los recursos que se requieren para financiar las labores agrícolas indispensables y de espacios que redefinen “lo público”, desde lo social.³² Estos gastos se sufragan con las actividades preponderantes fuera de la agricultura, especialmente el comercio, pero también por medio de las remesas³³ que envían los familiares emigrados y, en parte, de los programas del “pobrisimo oficial”, como el programa “oportunidades”. Estas estrategias de sobrevivencia ligan estrechamente a la población rural de bajos ingresos al mercado de trabajo, así como al del dinero y de productos, haciéndose sumamente vulnerable a toda una serie de cambios negativos relacionados con la crisis.³⁴

La crisis ecológica y social, producto del paradigma de la agricultura industrial moderna, tiene –como dice Bartra en su artículo– una dimensión civilizatoria que obliga a replantear las estrategias de desarrollo rural y los modelos tecnológicos empleados. Parte sustancial de este posible cambio de paradigma son los aportes de la agroecología y disciplinas afines como el control biológico y la etnobiología, que se alimentan del conocimiento de las virtudes ecológicas y sociales de los sistemas agrícolas campesinos. El saber campesino se convierte en un recurso y no en un obstáculo en este cambio de paradigma. En este marco general, vale la pena mencionar un elemento que destaca en el caso de caficultores organizados de La Frailesca chiapaneca.

³² Nuria Cunill Grau, *Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública y representación social*, Nueva Sociedad/CLAD; Caracas, Venezuela, 1997.

³³ Alma Muñoz, “Remesas familiares y su impacto en el crecimiento económico 1950-2004”, *Análisis económico*, vol. XXI, núm. 46, primer cuatrimestre, UAM-Azcapotzalco, México, 2006, pp. 23-57.

³⁴ Véanse, de Luciano Concheiro, María Tarrío y Sergio Grajales, “El TLCAN al filo de la navaja: notas para una propuesta de renegociación”, *op. cit.*, pp. 108-128; Cynthia Hewitt de Alcántara, *Reestructuración económica y subsistencia rural*, México, El Colegio de México, 1992, pp. 50-51; y en este libro el artículo de Armando Bartra.

La agricultura sostenible se caracteriza por cultivos poliespecíficos; control biológico de plagas, malezas y enfermedades; fertilización con materiales orgánicos; la rotación de cultivos; la integración de la agricultura con la ganadería y la producción forestal; y el uso de recursos locales, todos estos elementos se cumplen en la lógica del productor campesino. Es más productivo el policultivo maíz-frijol-calabaza de la llamada milpa.

No se trata de un simple retorno romántico (aunque de ese sentido parta su posible fuerza cultural), que en términos de la “lógica” del mercado sería inviable, lo que se puede referir desde las experiencias que se analizan en los artículos siguientes, es analizar la posibilidad de un modelo de desarrollo que transforme el agro a partir de un manejo adecuado de la naturaleza y del reconocimiento del saber de las comunidades rurales, para sentar ciertas bases para la superación de la crisis ambiental y alimentaria, como parte de la crisis “civilizatoria”.

Este planteamiento es, en cierta medida, una realidad que ha sido impulsada por diversas organizaciones, la mayoría indígenas, que aglutinan cientos de comunidades, especialmente en el sur del país. Destacan los productores de café orgánico, las comunidades forestales de Campeche y Quintana Roo en el trópico y de la Sierra Norte de Oaxaca, los pescadores de varios lagos del centro del país y ribereños a lo largo de las costas. Llamam la atención los importantes éxitos en cuanto a productividad de las comunidades de San Juan Pueblo Nuevo en Michoacán o las de la región de Usila en Oaxaca. En el caso de cultivos de exportación destaca el café orgánico de comunidades de Chiapas y Oaxaca, que han logrado vincularse con nuevos mercados en Europa y Estados Unidos o la cooperativa de vainilleros de la Chinantla o la exportación de la “alegría”. En la misma perspectiva se encuentran las plantas medicinales, junto con el fortalecimiento de ese tipo de medicina, los hongos y varias especias³⁵ y, en un sentido biocultural, puede hablarse de una biodiversidad ligada en términos indisolubles, culturalmente, a los “territorios indígenas” como los define Eckart Boege.³⁶

³⁵ Víctor Manuel Toledo Manzur, “Repensemos el agro: hacia una modernización basada en la reconversión ecológica”, en *La modernización del sector agropecuario*, IIE-UNAM, México, 1991, pp. 378-386; *La paz en Chiapas: ecología, luchas indígenas y modernidad alternativa*, Quinto Sol/UNAM, México, 2000, pp. 256.

³⁶ Eckart Boege, *El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. Hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrobiodiversidad en los territorios indígenas*, INAH/CDI, México, 2008.

En un plano más abstracto pero que permite redimensionar los aspectos citados, tenemos que en términos de la modernidad, la dinámica social que determina la actual crisis es de un orden civilizatorio, porque es resultado directo de la racionalidad última del modelo económico dominante y de la suma de una serie de crisis de distinto alcance.

El cuestionamiento de un camino de desarrollo, que básicamente se fundamenta en las revoluciones industriales (incluimos la revolución verde y la biotecnológica) y en la llamada civilización occidental, tiene un fundamento básico en el patrón sintético mesoamericano. La matriz de civilización indoamericana se estructura en torno a los principios de reciprocidad (en las relaciones sociales y entre los hombres, la naturaleza y el cosmos); auto-suficiencia, con valores derivados que privilegian la diversificación frente a la especialización y desestimulan la acumulación en beneficio de la igualdad, todo ello sustentado en una cosmovisión en la que el hombre no es el centro del universo sino un integrante más que debe encontrar formas de relación armónica con el resto.³⁷ Las estrategias son realmente alternativas en su dimensión civilizatoria, porque si los valores trascendentes de la civilización mesoamericana³⁸ son los ejes que articulan las matrices culturales, según las cuales interpretan y organizan su vida los sectores mayoritarios de nuestra sociedad rural, el “México profundo”, entonces a partir de ellos, de ese otro esquema civilizatorio, es posible diseñar un proyecto nacional inclusivo (es decir, plenamente nacional y verdaderamente democrático), que no pretenda ser autárquico frente a los muchos logros de la humanidad en su conjunto.

La propuesta desde el mundo rural tiene así una cara puesta en las utopías realizables, que a la vez se sostiene en un análisis científico del flujo de energía y de materiales. De esta manera, la propuesta desde un ángulo civilizatorio tiene el sentido de una modernidad alternativa.

En general, fuera de las principales zonas de agricultura comercial, el cultivo de maíz está asociado con el de frijol, calabaza y otros productos agrícolas, que hacen de las prácticas culturales de los campesinos, un punto

³⁷ Eckart Boege y Narciso Barrera, “Producción y recursos naturales en los territorios étnicos: una reflexión metodológica”, en A. Warman y A. Argueta (coords.), *Nuevos enfoques para el estudio de las etnias indígenas en México*, CIIH, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, México, 1991, p. 96.

³⁸ Guillermo Bonfil Batalla, *México profundo. Una civilización negada*, Conaculta/Grijalbo, México, 1989, p. 141.

de arranque para los planteamientos de agricultura diversificada frente a la especializada o “industrial”, que desestimulan la acumulación en beneficio de la igualdad, todo ello sustentado en una cosmovisión en la que el hombre no es el centro del universo sino un integrante más que debe encontrar formas de relación armónica con el resto de la naturaleza.³⁹ Esto hace que el desarrollo tenga que aprender a vivir con, desde y para la diversidad. Las expresiones de la cotidiana diversidad están, como se decía, en la sociedad campesina, y es ahí donde los movimientos, en relación con la cuestión ambiental, pueden tomar un sentido también alternativo, de un ecologismo que sea referente para una síntesis de contradicciones y de posibles alianzas a escala global, partiendo de una propuesta campesina popular, como la denomina Martínez Alier⁴⁰ en alusión al movimiento narodniki ruso, anclado en la madrecita tierra, referido como planteamos en el segundo artículo de este libro, al “mito de origen”.

El territorio, una construcción que obedece a procesos históricos de larga duración sedimentados en la cultura y en un profundo sentido de identidad, está sujeto –como hemos planteado– a momentos históricos de alta concentración de subjetividades que le imprimen un rumbo, y en el que las prácticas adquieren formas políticas, donde los sujetos son productores de su propia realidad y abren sentidos de futuro, donde la *matria*⁴¹ se contrapone y une a la patria. La lucha contra el capital, por la disputa de los recursos, particularmente la tierra, representa sin dudar uno de esos momentos de intensidad social y una “suma” en lo ecológico,⁴² la manera como se construyen los sujetos a pesar y por medio de sus historias, desde su memoria.

El desarrollo campesino ha partido de las necesidades reales y sentidas por la población, especialmente en el ámbito familiar; esto genera la búsqueda de satisfactores que desembocan en valores y normas de conducta establecidos en común,⁴³ base a su vez de una red de identidades y sobera-

³⁹ Eckart Boege y Narciso Barrera, “Producción y recursos naturales en los territorios étnicos: una reflexión metodológica”, *op. cit.*, p. 96.

⁴⁰ Joan Martínez Alier, *De la economía ecológica al ecologismo popular*, Icaria, Barcelona, 1992.

⁴¹ Luis González y González, “Suave *matria*”, en *Invitación a la microhistoria*, Clío, México, 1997, pp. 167-187.

⁴² Carlos Walter Porto-Gonçalves, *Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad*, Siglo XXI Editores, México, 2001, pp. 298.

⁴³ Anna Monjo, “Entrevista a Manfred Max-Neef...”, *op. cit.*, p. 9.

nías que encuentran un principio en la producción de alimentos y en la recreación cultural de las comunidades en un espacio esencialmente “local”. Por eso, al mencionar este referente espacial, se entiende compuesto por micro-organismos no formales, que operan bajo una racionalidad distinta a la del capital, como son las economías domésticas, las comunidades campesinas o la economía sumergida.

El plano de lo local es el de las naturales construcciones de contrapoder y el paso de lo local a lo regional, o de lo micro a lo macro, y de la construcción de organizaciones de segundo o tercer nivel, dependen de una dimensión más bien política, en el sentido tradicional del término, esto es, de una buena estrategia de alianzas y del referente legal e institucional. Los proyectos de desarrollo no se insertan en un vacío semántico, sino en una cultura, en una tradición. El valor simbólico de los logros visibles, en particular los servicios, refuerza los prestigios de distinta índole, tanto la legitimidad de los dirigentes y de las familias “principales”, como el de cada comunidad ante las otras de la región. Cada avance concreto se convierte en un fetiche positivo, más allá de su importancia económica, por su relevancia ideológico-cultural.⁴⁴

Es decir, lo que potencialmente puede hacerse en los ámbitos locales, en general se resuelve localmente, ello choca con las ideas de una globalización aplastante, generadora de dependencias unívocas. Las intervenciones de tipo macro tienen casi siempre una perspectiva homogeneizante que dificulta hacer discriminaciones positivas hacia un sector u otro.⁴⁵

La identidad comunitaria, nos parece que queda expuesta claramente en el caso que analizan Gisela Landázuri Benítez y Liliana López Levi, no está atada a su contraparte: la modernización o la ciudadanización construida a troche y moche, sino que se une como un lugar en la historia y da origen a diversas identidades con el caminar nacional, desde el reforzamiento de la identidad local, entendida por lo que da un sentido al “habitar”. El estudio aborda el caso de los chinamperos, originarios de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, esto es, en un espacio rural-urbano, donde se analizan las estrategias para la reproducción de un espacio agrícola, rural, de gran tradición indígena, con una religiosidad popular muy rica, cargadas de una

⁴⁴ Gerardo Alatorre, *La viabilidad de las empresas...*, *op. cit.*, pp. 5-6.

⁴⁵ Manuel Chiriboga, “Desarrollo agropecuario que necesitan América Latina y el Caribe...”, *op. cit.*, pp. 231-232.

memoria colectiva enraizada en la cultura y el territorio del que se apropian y les es propio.

Existe, por lo dicho en los párrafos anteriores –y si vemos de conjunto las experiencias referidas en este libro–, una tensión entre los abstractos intereses colectivos y los intereses particulares concretos y efectivos. Los grupos de interés generan identidades que se confrontan o sirven de base a colectividades más amplias, por eso la lógica de las identidades sirve como guía de los proyectos de desarrollo alternativos. Así, es fundamental contemplar al desarrollo como “autorreproductivo”, en tanto se finca en la propia lógica de las unidades de producción campesina y, en ese tenor, ver cómo inciden los proyectos productivos en las estrategias familiares de sobrevivencia y reproducción, y –en una perspectiva más amplia– reconocer en la creciente autosuficiencia y avance de la seguridad alimentaria un elemento básico de las estrategias para el campo mexicano.

Estas estrategias son alternativas, en tanto se vuelven hacia lo local y lo regional para adquirir una nueva perspectiva global que rompe con el gremialismo y el economicismo, al conjuntar las luchas por la apropiación del proceso productivo con la de los circuitos de la vida social, lo que supone una organización polivalente de gestión y gobierno de los municipios,⁴⁶ junto con el control comunal, que no estatal, de los medios de producción en la perspectiva del ecologismo de la sobrevivencia.⁴⁷

El tema central es la jurisdicción de cada institución (comunidad, ejido, municipio, reserva, parque, gobierno del estado, Secretaría de Medio Ambiente), pero antes que nada la correlación y ejercicio de la fuerza sobre el espacio para transformarlo en “público”. El movimiento y la recuperación de las “estrategias de vida” han redundado en el control de las condiciones de producción y reproducción, que finalmente representa el control político, económico, cultural, y se expresa en procesos autonómicos por medio de una “territorialización”, es expresión de la sedimentación de las luchas expresadas en el poder jurisdiccional para ejercer autoridad e imponer dominio.⁴⁸

El carácter espacial de la pobreza rural implica la necesidad de generar condiciones propicias para la modernización de las regiones pobres, que abra

⁴⁶ Julio Moguel y Enrique Velázquez, “Crisis del capital y desarrollo sustentable: reorganización productiva y descentralización”, en *El Cotidiano*, año 8, núm. 47, mayo, UAM, México, 1992, p. 69.

⁴⁷ Joan Martínez Alier, *De la economía ecológica...*, *op. cit.*, p. 9.

⁴⁸ Carlos Zambrano, “Territorios plurales, cambio sociopolítico...”, *op. cit.*, pp. 19-67.

oportunidades de empleo y genere condiciones para la modernización de las pequeñas unidades productivas⁴⁹ en el sentido anteriormente descrito.

Territorio plural que hemos referido, donde se ha reescrito la historia sobre las luchas anteriores y se superponen los conflictos. Pero a la vez, esa espacialidad exige pensar estrategias y prefigurar nuevas relaciones sociales. En este paso se transita del territorio y los “espacios públicos” como referente cultural, como un espacio de conflicto, a un espacio político y, en este caso, a un territorio referido a la economía y ecología política. Esta dinámica sociopolítica gira en torno, como ya decíamos, en primer término al derecho de pertenencia a un espacio⁵⁰ público, en una suerte de “ciudadanía campesina”. En este sentido, el dominio sobre la tierra, sobre las reglas no escritas de su movilidad, de su uso, pasan al plano del dominio en cuanto soberanía, y a un ejercicio específico de territorialización de “lo político” frente al fenómeno de la desterritorialización de la política y la crisis del Estado-nación.⁵¹

Varios movimientos han transitando de la defensa de intereses inmediatos al planteamiento de modernidades alternativas, de políticas nacionales y mundiales, especialmente reconociendo que la integración económica latinoamericana debe anteceder a la integración a la economía continental y mundial. A raíz del desarrollo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se han agudizado los contrastes entre norte y sur; por ello, se plantea recuperar varias de las atribuciones de los Estados nacionales desechadas por el neoliberalismo⁵² y un planteamiento de cooperación y desarrollo que incluya la protección ambiental, un desarrollo sustentable, y en general los derechos humanos y laborales, con el planteamiento de un mejor nivel y calidad de vida para la población rural. Particularmente ilustrativo de lo anterior es el artículo de Miguel Meza Castillo y Olivia Acuña Rodarte.

⁴⁹ Manuel Chiriboga, “Desarrollo agropecuario que necesitan América Latina y el Caribe...”, *op. cit.*, p. 222.

⁵⁰ Carlos Zambrano, “Territorios plurales, cambio sociopolítico...”, *op. cit.*

⁵¹ Guillermo Almeyra, “El Estado de competencia. La lucha por otra mundialización y los actores de la resistencia”, en Beatriz Canabal, Aline Hemond *et al.*, *Moviendo Montañas... Transformando la geografía del poder en el sur de México*, El Colegio de Guerrero, Chilpancingo, Guerrero, 2002, pp. 17-30; “Lo político y la política en la mundialización”, en G. Ávalos (coord.), *Redefinir lo político*, UAM-Xochimilco, México, 2002, pp. 299-313.

⁵² Ruy Mauro Marini, “Acerca de la reforma del Estado en América Latina”, en *Estado, nuevo orden económico y democracia en América Latina*, Nueva Sociedad, Caracas, 1992, pp. 177 y 181.

En contradicción con el despliegue de entidades internacionales cada vez mayores, el mundo rural da fundamento a referentes de identidad vinculados a las raíces históricas, étnicas y culturales de cada pueblo, convirtiéndose en referente de particularismos orgánicos a diversos niveles, empezando por el local y regional, esto es, territorializando la democracia, permitiendo un ejercicio horizontal de la misma,⁵³ base del despliegue de procesos autogestionarios y autonómicos.

En el artículo acerca del Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, se analiza el particular camino de los triquis autonómicos, de su recuperación de espacios, específicamente aquellos básicos para la existencia comunitaria.

Hay que recuperar para la memoria el hecho de que la modernización impuesta por medio de las políticas de ajuste estructural ha sido básicamente antidemocrática y ha ejercido un nivel de violencia extremo, al ser socialmente excluyente al beneficiar a unos cuantos y, junto con ello —como refiere Alejandro Cerda en el último artículo de este libro—, en el plano político, prefigura un “Estado de excepción”; por ello, las salidas campesinas están ligadas finalmente al cómo resolver esta cuestión desde lo que él llama los “usos públicos de la historia y la memoria” para la resignificación del espacio y tiempo.

Es importante recordar que si bien se acabó el ciclo de un patrón estatal “organizador” del desarrollo, la inercia de la expansión burocrática hace al modelo actual cada vez más ineficaz, sumado a la escasez de recursos estatales para satisfacer las demandas sociales más apremiantes, por lo que las alternativas dependen más que nunca de los sujetos sociales mismos. A esto se suma, hay que insistir en ello, un proceso de criminalización por parte del Estado de los movimientos sociales.

Es por medio de la apropiación de los recursos —en especial de la tierra—, de un desarrollo con equidad, de las identidades específicas y colectivas, de contrapoderes, de la autonomía, de la “territorialización” de la democracia (en diversos procesos sociales, económicos, políticos, étnicos, culturales; hasta la construcción y el reconocimiento de las autonomías territoriales), que se van construyendo los caminos de un desarrollo desde los movimientos sociales. Esto implica diversos procesos como el reconocimiento pleno de los derechos y cultura de los pueblos indios y las regiones

⁵³ Ruy Mauro Marini, “Acercas de la reforma del Estado...”, *op. cit.*, p. 182.

específicas, así como la revalorización del papel del municipio, el cuestionamiento de la relación con los poderes federales y estatales, la revaloración de la pluralidad y la tolerancia, el nuevo carácter de las alianzas sociales y políticas, el papel de la apropiación real de los procesos y los conocimientos, las prácticas de autogestión, el de un desarrollo “autoreproductivo”, el de una especialización diversificada, de una creciente autosuficiencia y seguridad alimentaria propia.

Por la gran diversidad de condiciones ecológicas y sociales en que se encuentran los campesinos, la construcción de la participación social como recurso del desarrollo sólo puede darse en ámbitos territoriales y con interlocutores institucionales muy próximos, y sólo a ese nivel se pueden corregir y reorientar las opciones identificadas, teniendo en cuenta sus impactos más inmediatos,⁵⁴ a la vez que las instituciones propias que le son básicas a los movimientos se conforman bajo los principios de equidad, esto es, reconociendo las diferencias, siendo incluyentes, al tiempo que se fortalece las instituciones democráticas más generales por medio de procesos de descentralización, de redistribución social y territorial del poder en favor de la sociedad civil organizada. En este sentido apuntan Ángela Ixkic Duarte y Gisela Espinosa Damián en su artículo acerca de los aportes de las mujeres indígenas.

La región puede visualizarse también como un espacio “público” desde el punto de vista de las relaciones Estado-sociedad. Las organizaciones de productores, las cooperativas de ahorro y crédito y las organizaciones campesinas locales constituyen la base para tal desarrollo. Su fortalecimiento complejiza el sistema político local y sienta las bases para la democracia local. Entonces, la descentralización en este marco otorga un rasgo fundamental a las políticas, su heterogeneidad ante situaciones heterogéneas, para responder a las particularidades campesinas. La descentralización administrativa y la democracia local tienden a ser las nuevas fronteras del Estado. Ello implica que los campesinos y los pequeños productores promuevan organizaciones en los ámbitos local y regional, con capacidad de interlocución con otros sujetos sociales. La descentralización constituye un espacio privilegiado para vincular el tema de modernización con equidad, pues permite la representación y participación de los grupos locales, entre los que predominan los sectores pobres.

⁵⁴ Manuel Chiriboga, “Desarrollo agropecuario que necesitan América Latina y el Caribe...”, *op. cit.*, p. 233.

Ciertamente, los límites de ello están dados por el espacio y la capacidad para plasmar acciones políticas concertadas y para recrear los marcos institucionales volviéndolos aptos para que incidan en los procesos de desarrollo. En este sentido, la descentralización constituye uno de los espacios privilegiados para potenciar la integración entre los procesos de transformación económica y social con la democratización, siempre y cuando la descentralización pueda conjugar procesos de socialización y eficacia en la gestión local con una genuina representación y participación local, resolviendo problemas y desafíos, de forma democrática, que una estructura estatal centralizada no puede resolver.⁵⁵

La descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales implican desarrollar la capacidad de administración de los recursos para el desarrollo rural y particularmente la capacidad de administrar y planificar el desarrollo microrregional e identificar y supervisar la ejecución de proyectos. Implica simultáneamente concertar alianzas con los sectores sociales locales y el despliegue de capacidades técnicas para la planificación democrática del desarrollo microrregional.

Obviamente este tipo de trabajo sólo se puede realizar localmente y en estrecha relación con los diversos sujetos y actores, desplegando el sentido participativo, como la capacidad para incorporar sus intereses en la definición y control de las decisiones, la administración y la disposición de los recursos de la gestión pública. Si los actores sociopolíticos principales no optan por defender sus intereses dentro de la institucionalidad democrática, no hay una democracia en el sentido que se ha planteado.

Un problema básico es que los pobres, entre ellos especialmente los del mundo rural, disponen de organizaciones débiles y de reducida capacidad de participación, y que en general el sistema político refleja el poder de actores de mayor poder económico. De ahí que una cuestión central para una política destinada a un desarrollo incluyente está en promover instituciones abiertas a la participación y simultáneamente organizaciones sociales con capacidad de demanda y de gestión.

La descentralización territorial, municipal y regional, pero sobre todo una reinención de los “espacios públicos”, de pasar del “desarrollo” do-

⁵⁵ Fernando Calderon y Mario Dos Santos, “Veinte tesis y un corolario. Hacia un nuevo orden estatal en América Latina”, en *Estado, nuevo orden económico y democracia en América Latina*, Nueva Sociedad, Caracas, Venezuela, 1992, p. 194.

minante a las autonomías o “desarrollo territorial desde las autonomías”,⁵⁶ es un campo de conflicto en gestación que evidencia las diferentes tensiones e incertidumbres de las políticas de modernización del Estado y de la democratización efectiva. Si llegan a predominar políticas que impulsen y refuercen tanto mecanismos locales de eficacia y de racionalización de la gestión, como de una mayor participación y representación en el sistema local de toma de decisiones, posiblemente se verá fortalecida la articulación entre los distintos niveles del Estado y las condiciones de las sociedades regionales o locales, con las consiguientes ventajas para una inserción dinámica de cada espacio económico específico en la economía global, además de lograrse una representación más genuina de los intereses locales a nivel central, como muestran en este libro Roberto Diego Quintana y Carlos Rodríguez Wallenius en su análisis de los partidos políticos, grupos de poder y organizaciones campesinas en el plano municipal. Si predominan políticas que se orientan a una reducción unilateral del gasto de la administración central, a fragmentar demandas y a segmentar los conflictos locales, a manipular el voto o, en el caso extremo, a la pura contrainsurgencia militar, los resultados serán procesos de modernización excluyentes y democracias locales frágiles que no redundarán en un desarrollo económico y que incluso posibilitan o mantienen el caos político y social. La política dominante en México, a pesar de la alternancia partidaria, apoya un ejercicio sobre todo electoral de la ciudadanía política y, debido a la política económica, desvinculado en forma arbitraria de la ciudadanía social.

Las figuras centrales en el escenario político concreto que se vive en las comunidades rurales de nuestro país, por lo general han sido el cacique y el acaparador, cuyas funciones se entrelazan tan estrechamente que podían fusionarse bajo el control de un sólo individuo o familia. El cacique controlaba y controla aún buena parte de los recursos políticos de las localidades o de las regiones, sirviendo como enlace entre los niveles más altos del sistema político, por un lado, y de su clientela local, por el otro; mientras tanto, el acaparador maneja el flujo de los productos desde la comunidad hacia el exterior y viceversa, bajo condiciones de control del mercado que le permiten comprar barato y vender caro sin tener que enfrentarse al reto que significa la competencia. Frente a estos agentes, la democratización se expresa en

⁵⁶ Carlos Walter Porto-Gonçalves, *La globalización de La naturaleza...*, *op. cit.*; “Del desarrollo a la autonomía...”, *op. cit.*, pp. 44-46.

procesos de gestión que dependen de la ampliación de los consensos, pues la suma de más actores y grupos sociales son los que revalorizan este tipo de democracia y le dan un contenido sustancial.

La pluralidad coordinada de los diversos actores es básica para el fin de un centralismo avasallante, excluyente de las mayorías en su diversidad; en ello, la región puede visualizarse también como un sistema socio político en el cual diferentes actores interactúan entre sí, desarrollan una democracia horizontal, territorializada, que cobra diversas formas en los tejidos en red que permiten un mayor despliegue de las iniciativas populares, lo que supone la coordinación de esfuerzos en el plano de las organizaciones campesinas, sindicales, sociales y culturales.

Por otro lado, la reversión del flujo de capitales, las presiones de la deuda y de sus intereses, el deterioro de los precios de intercambio, el aumento de la brecha tecnológica y la incapacidad de actuar frente a ella, también limitan la capacidad de reproducción del Estado. En este contexto, es importante la emergencia de un proceso de democratización con un relativo fortalecimiento de instituciones democráticas y actores sociales y políticos, cuyas decisiones se tomen en sistemas políticos con un juego más amplio para los diversos poderes sociales; así, el resultado será diferente según cuánto y cómo pese el régimen democrático.⁵⁷

Elementos de estos planteamientos de democracia territorial tienen su expresión en planteamientos como el de “pensar globalmente, actuar localmente” y el de “biorregionalismo”, como sistema social para una sociedad sostenible o los planteamientos de “lo pequeño es hermoso”; donde el modelo político gira en torno a la comunidad. Así, este tipo de democracia rinde tributo a la democracia comunitaria tradicional, con el consenso como una de sus prácticas.

Pero la democracia territorial, la construcción de los “espacios públicos”, finalmente hay que subrayarlo, es diferente a la mera “participación” o a la ambigua “democracia económica” y no sólo se circunscribe a lo local, exige de una visión compleja de las autonomías, en especial las autonomías de los pueblos indios, que son la base de la dislocación de los poderes actuales, del modelo hegemónico, ya que revolucionan los principios de las prioridades del modelo económico dominante y de los propios fundamen-

⁵⁷ Fernando Calderon y Mario Dos Santos, “Veinte tesis y un corolario. Hacia un nuevo orden estatal en América Latina”, *op. cit.*, pp. 187-188.

tos del pacto social de la modernidad en crisis, abriendo, paradójicamente desde el mundo rural, los caminos para nuevas utopías posibles, para modernidades alternativas y para procesos de una democracia que tiene su correlato directo en las prácticas sociales que constituyen un poder constituyente contrapuesto permanentemente a los poderes constituidos.

Luciano Concheiro Bórquez

Arturo León López

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Xochimilco

noviembre de 2010

Al alba: México y sus campesinos en el gozne de los tiempos

Armando Bartra Vergés*

En 2010 se cumplen 100 años del inicio de la Revolución y 200 del arranque de la Independencia. Buena oportunidad para revisar pasado y presente siempre que se evite el fetichismo de las efemérides: variante de la teoría de la excepcionalidad que nos presenta a México como país isla transcurriendo con sus propios hitos y de espaldas al mundo. Grave sería que ocupados en tiempos y ciclos domésticos perdiésemos de vista tiempos y ciclos mayores a los que estamos uncidos.

AHERROJADOS

Y lo sería aún más hoy, cuando la globalidad estrecha sus lazos y México está atrapado como nunca en los engranes del mundo a través de una vertiginosa integración a Estados Unidos, sólo comparable con la que tuvimos con España durante la Colonia. Y así como los movimientos independentistas de hace dos siglos no se explican sin las reformas borbónicas (Vázquez, 2009:15-48), la coyuntura mexicana actual sólo se entiende en su especificidad, pero a la luz de las conmociones que sacuden al planeta entero y que nos llegan a través del vecino del norte.

* Profesor-investigador en el Departamento de Relaciones Sociales, UAM-Xochimilco.

México se ha vuelto epítome de dependencia. Obvio es que los procesos globales ciñen cada vez más estrechamente a los nacionales, pero en el caso de nuestro país el condicionamiento *universal* devino forma *particular*. Y es que padecemos más de tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, potencia mundial con la que hemos mantenido una intensa y conflictiva interacción que –en lo tocante al flujo de mercancías y personas– se acrecentó a raíz de las políticas de apertura y desregulación y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El saldo de la vecindad y la historia, pero igualmente del unilateral desarme económico emprendido por nuestros gobiernos desde hace casi 30 años, es la dependencia integral, estructural casi ontológica de México respecto de la nación contigua.

Sometimiento extremo que nos hace excepcionales aun en un mundo de intensas interdependencias como el actual. Lo que a su vez explica que en la crisis recesiva de 2008-2009 el país haya tenido el peor desempeño económico de América Latina, pues fue arrastrado como ninguno por la caída de la producción y demanda estadounidenses.

Esta subordinación es económica: alrededor del 85% de nuestros intercambios son con Estados Unidos y vienen de ese país dos tercios de la inversión extranjera directa; demográfica: 30 millones de personas de origen mexicano viven al norte del Río Bravo, de las cuales 12 millones nacieron en México; energética: nuestra producción de petrolíferos lleva 10 años estancada y recientemente ha caído, mientras que el creciente consumo local de procesados, sobre todo gasolina, diésel y gas licuado por algo más de 13 mil millones de dólares, se importa de Estados Unidos; alimentaria: traemos de ese gigante agrícola 40% de lo que comemos, en particular granos, oleaginosas y lácteos; social: los 400 mil mexicanos que migraron anualmente a Estados Unidos durante los tres primeros lustros del TLCAN, atenuaron el desempleo y mediante las “remesas” –que para 2008 llegaron a 24 mil millones de dólares– elevaron el ingreso familiar y mantuvieron la actividad económica en muchas zonas depauperadas; política: las sucesivas administraciones locales necesitan, para legitimarse, el aval de su vecino y “socio” mayor; diplomática: México nunca ha figurado en el mundo y se distanció de América Latina, lo que dificulta sostener la tradicional independencia de nuestra política exterior respecto de los designios imperiales; de seguridad: al ser ámbito de origen y tránsito de enervantes y haber cedido a la política estadounidense de combatir extramuros al narcotráfico, México enfrenta una “guerra” interna con la delincuencia organizada que no puede sostener sin la colaboración de su vecino manifiesta en el Plan

Mérida; cultural: con políticas que ven la cultura como negocio es imposible para México resistir, o al menos compensar, la invasión de la poderosa industria estadounidense del entretenimiento; científica: el raquíto fomento a la investigación desalienta la producción nacional de conocimiento y nos obliga a importar tecnología que podríamos desarrollar aquí.

El mundo atraviesa por una crisis múltiple y unitaria cuyas sucesivas, paralelas o entreveradas manifestaciones configuran un periodo histórico de inédita turbulencia. Lo nuevo de la Gran Crisis radica en la pluralidad de dimensiones que la conforman; emergencias globales mayores que devienen críticas precisamente por su origen común y convergencia. Y el modo particularmente violento como sacude a México la debacle multidimensional que agobia al planeta entero se explica, en parte, por el alto grado de integración económica subordinada que tenemos con la mayor potencia. Dependencia que determina la fuerza que adquieren aquí los descalabros financieros y productivos metropolitanos, la gravedad que reviste la escasez y carestía de los alimentos, los severos efectos que tiene el progresivo agotamiento del petróleo, la compulsión migratoria que nos desfonda y el impacto que está teniendo la reducción de los flujos transfronterizos de personas y dinero, los estragos económico-sociales que ocasionan el cambio climático y nuestro específico deterioro ambiental, la inmanejable crisis de seguridad provocada por el narcotráfico, dado el modo belicoso que eligió el gobierno para enfrentarlo.

En el cruce de los milenios, México y en particular su mundo rural viven lo que parece un fin de ciclo. Pero esto tiene menos que ver con los grandes tránsitos históricos precedidos de crisis agrarias que se iniciaron aquí hace 100 y 200 años, que con el cambio de época que enfrenta la humanidad toda. Encrucijada inédita, pues resulta del agotamiento de un patrón de acumulación, el llamado neoliberalismo, pero también de un modo de producir y distribuir, el proverbial capitalismo, e incluso de un orden civilizatorio, la sociedad urbano-industrial y su fetiche, el progreso. Entonces, sin negar nuestra especificidad, el mayor reto intelectual y político que enfrentamos es el de ubicar los descalabros domésticos dentro de la Gran Crisis. Y para esto emprenderé un rodeo conceptual.

TIEMPOS TURBULENTOS

La palabra crisis devino muletilla, pero ¿qué entendemos por crisis? Para los economistas es recesión, para los ambientalistas cambio climático antropogénico, para los politólogos desfondamiento de los Estados nacionales, para los sociólogos descrédito de la modernidad... Yo prefiero hablar de crisis multidimensional pero unitaria, cuya radicalidad proviene de que se están cerrando tres ciclos: el patrón neoliberal de acumulación, el capitalismo como modo de producir y la sociedad urbano-industrial como orden civilizatorio. Pero dado que no hay crisis sin sujeto que la asuma (Habermas, 1975:15-18), y los actores colectivos lo son en tanto comparten vivencias, interpretaciones, proyectos y esperanzas, el diagnóstico de la crisis es también el diagnóstico de cómo se la percibe y enfrenta. Y es, por último, una apuesta: la que hace el responsable de la interpretación como un jugador entre otros.

El agotamiento del ciclo neoliberal y su patrón de acumulación –fase histórica particularmente salvaje donde con el conque de la “sabiduría” del mercado se propició que el capital depredara sin medida al hombre, a la naturaleza y al propio capital– es reconocido así sea retóricamente por casi todos, incluyendo al Fondo Monetario Internacional: “El mercado no sana al mercado”, dijo su director Dominique Strauss-Kahn. Y como los organismos multilaterales, los gobiernos nacionales preconizan regulación financiera y políticas de fomento. Muestra de que la fase neoliberal está exhausta, es el revisionismo de los gobiernos latinoamericanos de izquierda, que si no desertaron del capitalismo cuando menos le dieron el esquinazo a los lineamientos más duros del Consenso de Washington.

El neodesarrollismo con brochazos de posdesarrollismo es la respuesta del Cono Sur americano al capitalismo desmecatado imperante en los últimos 30 años. Pero detrás del desfonde de ese *modelo* está el agotamiento del *sistema* económico del que el neoliberalismo fue sólo la fase más reciente.

El capitalismo inaugura siglo con una de sus recurrentes crisis recesivas que balconean la irracionalidad de un modo de producir y distribuir que al enfrentar problemas de subconsumo y disponibilidad *excesiva* de bienes destruye periódicamente puestos de trabajo, patrimonios familiares y parte de su capacidad productiva. Crisis de *abundancia* en un escenario de *escasez* extrema: miles de millones padecen pobreza patrimonial y alimentaria, carecen de agua potable y otros servicios básicos, son diezmados por hambrunas o enfermedades y emprenden éxodos económicos multitudinarios

mientras que las empresas quiebran por no poder vender lo que producen. En el extremo: miles de estadounidenses viven literalmente en la calle mientras que las casas de los que no pudieron pagar la hipoteca están vacías (Bartra, 2009:9-15).

Lo que padecemos es el fracaso del mercado absoluto: de un sistema económico cuyo motor es la acumulación; de un orden codicioso que a todo le pone precio y donde lo único que cuenta es el lucro; de un modo de producir y consumir condenado al crecimiento, pues para el gran dinero dejar de ganar es perder (costo de oportunidad, le llaman); de un “molino satánico” que no sólo genera mercancías, también transforma en mercancía a lo que no lo es: el hombre, la naturaleza y el dinero (Polanyi, 2001:123 y 124); de una máquina codiciosa que en su compulsión lucrativa carcome a la sociedad, erosiona los recursos naturales y se devora a sí misma en sus recurrentes crisis de desproporcionalidad.

La primera recesión del siglo XXI no es saldo del neoliberalismo. De hecho, los excesos financieros que lo caracterizan más bien retrasaron la crisis de sobreproducción mediante apalancamientos insostenibles que hicieron falsamente rentables inversiones redundantes y ficticiamente solventes a los insolventes, hasta que de todos modos el sistema financiero estalló, el mercado se contrajo y se derrumbó la producción. Las crisis cíclicas no resultan de un modelo transitorio como el neoliberal, sino de la irracionalidad intrínseca de un sistema que quizá seguirá dando guerra pero difícilmente vivirá bonanzas nuevas y duraderas, entre otras cosas porque el orden social que sustenta está también exhausto: presa de un agotamiento no sólo económico sino extendido a la vida toda.

Si llamamos “civilización occidental” (Braudel, 1994:12-46) a un orden espacialmente expansivo; ambientalmente predador; socialmente urbano-industrial a la vez que polarizado, clasista, patriarcal y racista; tecnológicamente prometeico; económicamente capitalista; intelectualmente racionalista; moralmente individualista y culturalmente híbrido. Un orden que en su “lucha sin fin contra la civilización tradicional” (Braudel, 1994:12-46), rechaza el pasado y fetichiza el futuro. Un orden que no es imperio sino “economía mundo” (Wallerstein, 1979:21-25), pues se extiende y domina vía mercado. Un orden donde, a raíz del gran vuelco por el que transitamos de ser sociedades *con* intercambios a ser sociedades *para* el intercambio (Polanyi, 2001:123-124), la economía se montó sobre la sociedad, el valor de cambio sobre el de uso, el trabajo muerto sobre el vivo y las cosas sobre el hombre.

Si llamamos al esperpento “civilización occidental”, la presente es una crisis civilizatoria. Debacle de época y no de coyuntura, pues no sólo desfonda el modelo neoliberal imperante durante los últimos 30 años, también pone en cuestión el modo capitalista de producir y socava las bases mismas de la sociedad urbano-industrial.

La decadencia del sistema corroe los valores que lo soportan. Modernidad, progreso y desarrollo fueron palabras que convocaban apasionadas militancias y que hoy se ahuecan. La convergencia de flagelos objetivos de carácter económico, ambiental, energético, migratorio, alimentario, sanitario y bélico que en el arranque del tercer milenio agrava y encona las abismales desigualdades socioeconómicas consustanciales al sistema, deviene potencial crisis civilizatoria porque encuentra terreno abonado por factores subjetivos: estado de ánimo de profundo escepticismo y generalizada incredulidad, ambiente espiritual de descreimiento en los ídolos de la modernidad.

La gran promesa del progreso: conducirnos a una sociedad que al prescindir de toda trascendencia metafísica y apelar sólo a la razón nos haría libres, sabios, opulentos y felices, comenzó a pasar aceite hace rato. Por un tiempo, creer en la regularidad cognoscible y operable de un mundo natural-social desencantado fue dogma de fe en un orden que, al estar presidido por la razón técnico-económico-administrativa, creía haber prescindido de toda ideología de sustento trascendente. Pero la convicción no era suficiente, hacía falta inclinación afectiva, militancia: “Hay que querer y amar la modernidad”, escribió Touraine (1988:65). Y afiliarse a la modernidad era enrolarse en el progreso. En palabras del sociólogo: “Creer en el progreso significa amar al futuro, a la vez ineluctable y radiante”(Touraine, 1988:68).

Fatal y seductor como vampiresa del cine el porvenir fue ídolo tanto del progresismo “burgués” como del revolucionarismo “proletario”, pero los altares de la modernidad fueron paulatinamente desertados. Las élites metropolitanas que durante la segunda mitad del siglo XX vieron hacerse realidad muchas de las premisas del paraíso prometido, pero sin que las acompañara la añorada plenitud, cultivaron un *posmodernismo* desilusionado, donde la subjetividad se desafana del flujo sin sentido del mundo. Después de un esperanzado cuanto efímero coqueteo con la “democracia occidental”, los damnificados del socialismo realmente existente desplegaron una *desmodernidad* pragmática que pasa tanto de las promesas de la “sociedad sin clases” como de las del “mundo libre”. Los pueblos originarios, largo tiempo negados o sometidos, reivindicaron identidades de raíz *premoderna*.

Sostenidos en estructuras longevas, los órdenes civilizatorios corresponden a la “cuenta larga” y no se desvanecen de un día para otro. Así, tanto la duración como el curso de la Gran Crisis son impredecibles. Pero si bien el presente evento patológico podría ser superado por el metamórfico capitalismo, la enfermedad es terminal. Todo indica que protagonizamos un fin de fiesta, tránsito epocal posiblemente prolongado pues lo que está en cuestión son estructuras profundas, relaciones sociales añejas, comportamientos humanos de larga duración, inercias seculares.

Vista en su integridad, la presente es una clásica crisis de *escasez* (O’Connor, 2001:203; Leff, 1986:181; Bartra, 2008a:135-136), patente en la devastación del entorno socio-ecológico operada por las fuerzas productivo-destructivas del sistema. Y es que detrás de la abundancia epidérmica de un capitalismo que se las da de opulento, pues por cada dos personas que nacen fabrica un auto, se oculta la más absoluta depauperación. Un empobrecimiento radical patente en la extrema degradación del entorno humano-natural que nos tiene al borde de la extinción.

Los apologistas de la sociedad industrial se ufanaban de que después de las hambrunas europeas de 1846-1848 habían quedado atrás las emergencias agrícolas del Viejo Régimen. “Parece que la industrialización ha roto, a finales del siglo XVIII y en el XIX, este círculo vicioso” (Braudel, 1994:30). Admitiendo que “no existe actualmente el temor ante las malas cosechas o las epidemias en la vida cotidiana de las sociedades alta o medianamente desarrolladas”, Witold Kula reconoce, sin embargo, que “no deja de ser aun una realidad en los países subdesarrollados” (Kula, 1973:530). Es decir, que la modernidad no rompió el “círculo vicioso” ni acabó con las hambrunas, sólo las envió a las orillas del sistema. Pierre Vilar considera que las crisis por malas cosechas son cosa del pasado en que “la insuficiencia de la producción, en la antigua economía, se *manifestaba* sobre todo por una irregularidad, una incertidumbre”, pero establece igualmente que si bien con el desarrollo tecnológico y comercial “se superarán sin duda cierto tipo de sacudidas [...] otra clase de crisis aparecerá en el seno de la economía capitalista”, y volverán “la incertidumbre, la irregularidad de la producción, del empleo, del nivel de vida” (Vilar, 1993:72).

La cuestión es que esta “otra clase de crisis”, propia de la sociedad industrial, se combina con recurrentes crisis de *viejo tipo*, baches históricos que no son estrangulamientos internos de la economía del gran dinero sino tropiezos resultantes de su rasposa relación con la naturaleza. Y esto lo tenía claro Kula: “cuanto más aprenda a utilizar las posibilidades que le ofre-

ce la naturaleza, cuanto más se la domine, más ha de depender el hombre de ella” (Kula, 1973:528), conclusión “aparentemente paradójica” que lo lleva a especular sobre los posibles efectos venideros del moderno dominio sobre el medio natural. “Al influir sobre el medio [...] el hombre, por encima de la realización de sus objetivos, provoca asimismo una serie de efectos involuntarios [...] La investigación de (*estos*) efectos involuntarios [...] es muy importante para la ciencia, y muy difícil para la ciencia histórica”. Y en una clarividente anticipación, a mediados del siglo pasado el historiador vislumbra una pústula que estallaría cincuenta años después:

En el curso de los actuales procesos de producción, la humanidad lanza anualmente al ambiente una cantidad de anhídrido carbónico equivalente a 1/300 parte de la cantidad total de este gas existente en la atmósfera. Esta es una cantidad desconocida en los anales geológicos de la tierra desde el periodo cuaternario ¿Podremos, acaso, prever los efectos de este proceso al fin de un largo periodo de tiempo? (Kula, 1973:529).

No pudimos. Y por ello estamos entrampados en una crisis de *escasez* del tipo de las que diezmaban a los pueblos agrarios y que la modernidad y sus historiadores creyeron que habíamos dejado atrás.

Menos de dos siglos después del despegue del capitalismo fabril la emergencia por escasez, resultante del cambio climático provocado por la industrialización, amenaza con asolar al mundo entero. Es verdad que la carestía alimentaria reciente no es aun como las del Viejo Régimen pues, pese a que se han reducido severamente, por el momento quedan reservas globales para paliar hambrunas localizadas. En cambio, se les asemeja enormemente la crisis medioambiental desatada por el calentamiento planetario. Sólo que la penuria de nuestro tiempo no será local o regional sino global y en ella habrá escasez de alimentos, pero también de agua potable, tierra cultivable, recursos pesqueros y cinegéticos, espacio habitable, energía, vivienda, medicamentos...

Los pronósticos del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (PICC) de la ONU, son inquietantemente parecidos a las descripciones de las crisis agrícolas de la Edad Media: mortandad, hambre, epidemias, saqueos, conflictos por los recursos, inestabilidad política, éxodo. Lo que cambia es la escala, pues si aquellas congojas ocasionaban migraciones de cientos de miles, se prevé que la crisis ambiental capitalista deje un saldo de 200 millones de ecorrefugiados, los primeros 50 millones en un plazo de 10

años; se estima que para el 2050 habrá mil millones de personas con severos problemas de acceso al agua dulce; y la elevación de un metro en el nivel de los mares afectará directamente durante el próximo siglo a 600 millones de personas. Debido al clima errático y la recesión, en los últimos cuatro años 115 millones se sumaron a los desnutridos y hoy uno de cada seis seres humanos pasa hambre.

NUESTRA AMÉRICA VA

La Gran Crisis se cuela en el imaginario colectivo en la medida en que se diluye el espejismo de abundancia que había sido la gran promesa de la sociedad industrial. Después de las dos guerras mundiales del siglo XX, la fe prometeica en los beneficios resultantes del desarrollo de las fuerzas productivas va dejando paso a la incredulidad. Las sociedades opulentas desertan de una modernidad y un progreso que resultaron vacuos, mientras que los periféricos pasan progresivamente de un desarrollo que, por mucho que se lo adjetive –*autosustentado, integral, sostenible, incluyente, participativo, humano*, etcétera– no abate las carencias.

Si el corto verano de keynesiana regulación económica y Estado de bienestar que entibió los años de la posguerra, despertó expectativas latinoamericanas, el capitalismo desmecatado, rapaz y especulativo que se impone desde fines de la década de 1970, se encargó de cancelarlas. El llamado modelo neoliberal no sólo resultó efímero, tampoco alentó verdaderos entusiasmos, más allá de un puñado de tecnócratas al servicio de las transnacionales, y en la última década de la pasada centuria comenzaron a soplar con fuerza vientos contrarios al Consenso de Washington.

Después del capitalismo regulado que siguió a la crisis de 1929, en el último tercio del siglo XX cursamos una fase de libertinaje financiero, concentración desmedida del capital, sobreexplotación del trabajo, rapiña de los recursos naturales, rentismo y especulación desbordada; flagelos que intensificaron sobremedida la polarización económica y la exclusión, además de ocasionar una inédita erosión de la naturaleza y de la sociedad, que nos puso a un tris de la catástrofe. Sin embargo, los principios y valores que sustentan el capitalismo salvaje pronto comenzaron a perder pie y fueron sus víctimas mayores ubicadas en la periferia quienes iniciaron la demolición. Proceso lento, pues si cambiar paradigmas es relativamente fácil, no

lo es transformar órdenes económicos constreñidos desde dentro y desde fuera, y presas de poderosas inercias.

Casi siempre precedidos y acompañados por amplios movimientos sociales, en algo más de una década la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos viraron a la izquierda apartándose del aún imperante Consenso de Washington. Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y República de Salvador se fueron apartando de la ortodoxia, aunque sea en los estrechos márgenes que deja la globalidad imperial.

La desobediencia franca o moderada de diez países latinoamericanos es causa y efecto del agotamiento de un patrón de acumulación cuyos costos eran pagados al contado por las mayorías y cuyos beneficios se posponían una y otra vez. Así, el descreimiento en el modelo desarrollista se alimenta de los estragos ocasionados por el capitalismo gandalla de las últimas tres décadas, pero lo impulsan también las primeras evidencias de la Gran Crisis y en particular sus dimensiones medioambientales, energéticas y alimentarias. Estrangulamientos que ponen obstáculos adicionales al de suyo poco transitible camino del desarrollo.

Porque, no es lo mismo “despegar” con energéticos baratos, como lo hicieron los países hoy desarrollados, que hacerlo con combustibles caros. No es igual industrializarse con base en agriculturas pujantes y alimentos accesibles, que hacerlo con campos estragados, dependencia alimentaria y comida cara. Y si en el pasado les resultó fácil a los que ahora son desarrollados impulsar la acumulación originaria depredando los recursos naturales y barriendo con las comunidades tradicionales y sus culturas, ya no lo es hoy cuando los costos ambientales y sociales han cobrado visibilidad.

El agotamiento de la fase neoliberal del capitalismo y su paulatina deserción por algunos gobiernos, es un proceso relativamente lento y prolongado que se inició hace más de diez años. Y así como la crisis alimentaria dio la razón a quienes luchaban por la soberanía y seguridad en esa materia, la crisis económica confirma –por si hiciera falta– la absoluta pertinencia del cambio de rumbo. Pero la crisis recesiva no es disparador del cambio. Al contrario, al tiempo que dramatiza la inviabilidad del patrón de acumulación, el descalabro financiero erosiona aceleradamente los ingresos, empleos y patrimonio de los trabajadores, que más allá de las protestas reactivas tienden a adoptar posiciones defensivas y conservadoras. La crisis económica puede ser la puntilla de la fase neoliberal del capitalismo y legitimar las

vías alternas, pero en el corto plazo el deterioro de las condiciones de vida y trabajo abonan más los corrimientos a la derecha que a la izquierda.

La crisis económica de 2008-2009 es la faceta que le faltaba a la polifonía de la Gran Crisis. En este sentido, podemos ser *estratégicamente optimistas*, pues con este último gancho al hígado es difícil que el neoliberalismo se levante indemne. Sin embargo, por sus efectos inmediatos, la recesión oscurece temporalmente el cuestionamiento radical del sistema, que se desprende de la crisis civilizatoria, de modo que por el momento lo que se pone en primer plano es la salvación del capital y no de la humanidad y del planeta, además de que puede generar reflejos conservadores en las mayorías. En este sentido debemos ser *tácticamente pesimistas*.

México a la zaga

Y ¿México qué? Antes que nada una evidencia desoladora: si en el arranque del siglo XX nuestro país marchaba en la vanguardia de las reformas progresistas que después remedarían con mayor o menor intensidad y compromiso social otros países de América Latina, al alba del XXI somos furgón de cola. Tan desfasados marchamos respecto del curso por el que avanzan casi todas las naciones del Cono Sur que algunos dudan de si seguimos jugando en las filas de “Nuestra América” o ya de plano alineamos con los “Americanos” del norte.

México es *periferia* y vive el estrangulamiento general como crisis del *desarrollo* en tanto vía al verdadero *progreso*, ruta privilegiada en que se supone están los países punteros. La condición orillera nos enfrenta a los problemas de un *despegue* (Rostow, 1962) que, pese al tiempo transcurrido desde que se acuñaron las recetas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), no acabamos de transitar. Hace medio siglo algunas teorías del *subdesarrollo* (Frank, 1970; Furtado, 1968; Marini, 1973) intentaron explicar esta trabazón estructural por las asimetrías entre las periferias y el centro. Obstáculos a los que hoy habría que agregar las dificultades que generó la fase neoliberal del capitalismo y también las que provienen de la Gran Crisis.

El capitalismo libertino de los últimos 30 años se caracterizó por el crecimiento especulativo del sector financiero pero también por el predominio de corporaciones globales más interesadas en la apropiación predatora de los recursos escasos que en las inversiones productivas. Un capitalismo *ren-*

tista que practica lo que algunos llamaron “acumulación originaria permanente” (Amin, 1974) y otros han rebautizado como “acumulación por despojo” (Harvey, 2005), mercantilismo rapaz al que le interesan las fuentes de energía, los recursos minerales, las tierras fértiles, los reservorios y fuentes de agua potable, el viento, la biodiversidad, los territorios rentables por factores geoeconómicos o geopolíticos, los climas y paisajes turística-mente valorizables, la infraestructura de comunicaciones, las franjas electromagnéticas que emplean los *massmedia*, la información y los sistemas para acceder a ella y en general aquellas actividades que al privatizarse conforman monopolios económicos o naturales como la salud, la alimentación y el consumo final de las familias, incluyendo franjas del mercado excepcionalmente rentables como las de los estupefacientes, personas y armas: “emprendimientos” delincuenciales que se apropian de lo que he llamado “rentas de la ilegalidad”. A esto hay que agregar el sobredimensionado capital financiero que actuando en la bolsa, el mercado de futuros o de derivados, las hipotecas y el crédito al consumo, lejos de propiciar la actividad productiva recibiendo a cambio una razonable tasa de interés, especula con el dinero para embolsarse insondables rentas.

En México esta vocación rentista del capital coincidió con la fiebre desincorporadora de recursos y actividades históricamente públicas. Así, en los últimos 30 años se consumó la reprivatización de un sistema bancario y financiero que hoy además de transnacional es ineficiente y medra con la deuda pública; se conformó una minería predadora y contaminante donde predominan las inversiones extranjeras; se fortaleció una industria energética paralela a la pública que violentando la Constitución privatiza cada vez más la renta petrolera y las que genera el sistema eléctrico nacional; se consolidó un sistema de comunicaciones hoy privado y monopolístico, donde la lucha por restarle espacios a Telmex poco tiene que ver con la competencia y mucho con la rebatinga por las franjas del mercado más rentables; embarneció un duopolio televisivo que tiene copado el espectro electromagnético y el imaginario colectivo, lucrando políticamente con su posición dominante; se fue estableciendo un sistema de grandes tiendas de autoservicio que barren con el pequeño comercio, estrangulan a los proveedores y tienen en sus manos el abasto familiar. Sin olvidar el vertiginoso negocio del narcotráfico, que al estar entreverado con infinidad de actividades económicas “lícitas”, con el sistema financiero y con el negocio de la política, resulta inextirpable. En suma: un sistema monopolista rapaz y es-

peculativo donde la inversión productiva más que fin en sí misma es medio para realizar las rentas.

En cuanto a las actividades productivas, en las últimas décadas creció la industria maquiladora, cuya “ventaja comparativa” son los bajos salarios y la laxitud con que se aplican las normas laborales y ambientales. Y aquí una vez más nos topamos con rentas, pues lo que no se paga por las “externalidades” ambientales negativas conforma un lucro empresarial a costa de la naturaleza, y la baratura excepcional de nuestra mano de obra se explica por la inexistencia de un libre mercado laboral planetario y la conformación de cotos de sobreexplotación relativa que generan rentas del trabajo afeudalado.

Desde la década de 1970 la agricultura mexicana enfrentaba problemas de crecimiento que las medidas estatistas de los gobiernos de Echeverría y López Portillo (1970-1982) agravaron. Pero el campo se desfondó durante la segunda mitad de la década de 1980 y en la de 1990 como resultado de las medidas derivadas primero por nuestra entrada al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), y después por la firma del TLCAN, por las que el Estado se retiró desordenadamente de las funciones económicas que había venido asumiendo. El problema no fue sólo la reducción del gasto público rural y el desmantelamiento o privatización de instituciones de Estado que aportaban insumos, crédito, seguros, investigación agronómica y asesoría técnica; sistemas de almacenamiento, acopio y abasto, y un extenso sector agroindustrial operado por el gobierno. Lo más grave es que nunca hubo política alternativa, salvo un ciego fetichismo del mercado, según el cual todo consiste en aprovechar nuestras “ventajas comparativas” importando cereales, leguminosas, cárnicos y lácteos de los que presuntamente somos malos productores, mientras que exportamos algunas frutas y hortalizas que se nos dan bien. El resultado fue una severa dependencia alimentaria y una no menos dramática dependencia en el empleo (Bartra, 2003:12-10).

La apertura, desregulación y privatización no fueron privativas de México pero aquí globalización significó una vertiginosa integración a Estados Unidos que nos hace excepcionales y explica el comportamiento reciente de nuestra economía. Ciertamente, las conversiones de lo público en privado no generan por sí mismas crecimiento, pues se reducen a transferir infraestructura preexistente a particulares casi siempre extranjeros, lo que mejora coyunturalmente las finanzas públicas y provoca transitorio ingreso de divisas pero no dinamiza la producción. Sin embargo, en México el

comportamiento de la economía durante el último cuarto de siglo ha sido excepcionalmente malo y con un crecimiento apenas un poco mayor que el de la población, lo que contrasta con expansiones sostenidas de alrededor de 6% anual en los años del llamado “desarrollo estabilizador”. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con el desmantelamiento del mercado interno. Y no me refiero sólo a nuestra capacidad de consumo –final o productivo–, sino a la integración virtuosa de la producción doméstica con la demanda local de insumos y medios de producción (Ortiz, 2007:23-79).

El resultado ha sido una economía no sólo radicalmente extrovertida, sino atendida casi exclusivamente a un socio comercial: Estados Unidos. Lo que significa que los tropiezos del país del norte se transmiten sin atenuantes al nuestro.

La recesión que arranca a fines de 2008 es ciertamente una crisis que nos viene de fuera. Pero México ni siquiera alzó las manos para tratar de parar el golpe. Mientras que el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y casi todos los gobiernos revisaban la ortodoxia del equilibrio financiero e impulsaban medidas anticíclicas para fortalecer los mercados internos y salir de la recesión, aquí seguíamos atados a las fórmulas neoclásicas y aplicando recetas procíclicas y recesivas. Cuando en todas partes se desempolvaba a Keynes y las políticas de regulación y fomento productivo estaban de vuelta, México se atrincheraba en el más rancio neoliberalismo. La postura del gobierno de Calderón fue criticada expresamente por los premios Nobel de economía Eric Maskin y Robert Engle, por Dominique Strauss-Kahn, director del FMI, por Marcelo M. Gíngale, director de Política Económica del BM, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y hasta por la consultora financiera Merrill Lynch. Y a ella se opuso la cumbre de Pittsburg, del Grupo de los 20, que por boca del primer ministro británico manifestó que debían mantenerse los estímulos fiscales, pues la crisis no ha terminado. Sin embargo, el gobierno se aferró a sus recetas, ¿por qué?

El “Acuerdo nacional en favor de la economía familiar y el empleo”, dado a conocer a principios de 2009, era insuficiente pero ciertamente contracíclico y anunciaba prontas inversiones en infraestructura. Sin embargo, para fines de ese año se había invertido apenas una pequeña parte de lo presupuestado y el Ejecutivo Federal proponía al Legislativo una Ley de Ingresos claramente recesiva. Ante la ausencia de argumentos económicos para el empecinamiento, la única explicación es que el gobierno concibe a México como apéndice de la economía estadounidense. Así, en vez de in-

vertir en la reactivación económica, fortalecer el mercado interno e impulsar la diversificación comercial con énfasis en el intercambio sur-sur, como lo hicieron países sudamericanos cuya recesión fue leve y pasajera, México optó por la pasividad y enfrentó una caída de la producción de 6.5%, en 2009. Todo hace pensar que después de algunas desganadas fintas contracíclicas el gobierno de Calderón decidió que, arrimados como estamos a la mayor economía del globo, no tenía caso invertir dinero y esfuerzos en diversificar mercados y estimular el consumo interno, y se redujo a medio contener el desequilibrio fiscal mientras el país espera sentado a que la locomotora económica estadounidense reanude su marcha y nos lo arrastre tras ella como el furgón de cola que decidimos ser.

Creceremos cuando Dios quiera, es decir, cuando lo haga la economía estadounidense. Pero nuestro problema estructural es aún mayor, pues el que algún día se expanda de nuevo la producción nacional no significa que a los mexicanos nos va a ir mejor. Y es que con una economía con débiles cadenas productivas locales y desenganchada del mercado interno, el crecimiento de unas cuantas empresas globalizadas puede impactar al Producto Interno Bruto (PIB), pero no tiene efectos de arrastre sobre el resto ni dinamiza significativamente el empleo, el ingreso y el consumo popular. La exclusión económica de millones de mexicanos resulta del escaso crecimiento de las últimas décadas pero también del modelo de crecimiento. Y no remitirá significativamente si no cambiamos los patrones de desarrollo, pues con un sistema radicalmente extrovertido podremos quizá recuperar el dinamismo económico a rastras del estadounidense, pero sin que esto tenga efectos redistributivos importantes y sin que conlleve bienestar para la población.

Los percances de los que me he venido ocupando tienen que ver con los estragos causados por el treintañero modelo neoliberal y la reciente crisis recesiva. Pero la coyuntura mexicana en el cruce de los siglos está también condicionada por otras dimensiones de la Gran Crisis. Una de ellas, el estrangulamiento energético resultante del tendencial agotamiento de los combustibles fósiles.

El pico de Hubbert (Bartra, 2008:21-22), que marca el declive de la producción petrolera global, señala el fin de una fase histórica de derroche energético que coincide con el despegue y auge del capitalismo industrial. Sin duda los hidrocarburos no se terminarán de un día para otro, pero cuanto más ardua es su obtención más disminuye su eficiencia energética, lo que a su vez hace rentable el aprovechamiento de otras fuentes de energía relativamente más costosas. Esto significa que entramos irremediable-

mente en una fase de energía cara, que si dificulta el crecimiento de las economías de punta, hace casi imposible el “despegue” de los zagueros (Santa Barbara, 2007).

Y esto es verdad también para países con petróleo como México, pues los precios internos de los combustibles fósiles siguen a los externos. La ventaja estaría en la posibilidad de usar la renta petrolera como palanca para el desarrollo, pero para esto hacen falta políticas públicas de fomento, que han estado del todo ausentes, de modo que en las últimas décadas la valorización de este recurso natural ha servido sólo para equilibrar las finanzas públicas y financiar el gasto corriente del gobierno.

Situación que se agrava porque las administraciones neoliberales dejaron que Pemex se rezagara y transfirieron a particulares muchas de sus funciones decisivas, en una privatización silenciosa que hoy se expresa en dependencia absoluta respecto de trasnacionales con las que hay que compartir la renta mediante concesiones territoriales y contratos de riesgo. Por si fuera poco, en vez de agregar valor a su petróleo, México optó por exportar crudo e importar refinados, de modo que hoy la balanza comercial de hidrocarburos es cada vez menos superavitaria y mengua la renta nacional petrolera neta.

Al desastre hay que agregar que la crisis energética no es sólo por escasez tendencial de combustibles fósiles, también por que su empleo es el mayor emisor de gases de efecto invernadero y máximo responsable del cambio climático que nos tiene con el alma en un hilo. Esto significa que a sus crecientes costos directos de producción hay que agregar sus ya inculcables costos ambientales. Es verdad que Estados Unidos y los países más desarrollados generan las mayores emisiones, sobre todo si las medimos per cápita, pero no es menos cierto que los llamados “países emergentes” somos crecientes emisores de contaminantes, pues nos encontramos en una fase del desarrollo en la que, conforme al modelo clásico de industrialización y urbanización, la demanda energética se maximiza. Por una parte, es injusto que los demorados tengamos que aplicar en nuestro crecimiento restricciones ambientales que no aplicaron ni aplican los hoy avanzados. Pero por otra, es inadmisibles que se esgrima el derecho al desarrollo para justificar los propios aportes a la contaminación general. En el fondo, el problema no es quién paga los costos ambientales del desarrollo periférico sino el modelo aplicado, el concepto mismo de desarrollo e incluso la propia idea de que hay que crecer a como de lugar.

Las vías alternas aún no son claras, pero en América del Sur hay intensos debates en torno al tema que, si en algunos casos se limitan a propugnar desarrollos adjetivados –*ecodesarrollo*, *etnodesarrollo*–, en otros exploran conceptos y modelos inspirados en la relación entre naturaleza y sociedad propia de sociedades tradicionales como las originarias del continente, que no han interiorizado el paradigma occidental de progreso. También en México el tema está a debate, pero tanto el gobierno como las mayores fuerzas políticas del país se mantienen al margen de la discusión.

Otro factor que incide en la coyuntura global y por tanto en la mexicana, es la crisis alimentaria que, como la energética, no responde al reciente estrangulamiento recesivo de la economía sino, en este caso, al agotamiento del modelo de agricultura industrial que el capitalismo viene impulsando desde hace más de 200 años y que se aceleró notablemente en la segunda mitad del pasado siglo a resultas de la llamada Revolución Verde.

Aplanar tierras, enclaustrar aguas, especializar cultivos, emplear semillas híbridas y recientemente transgénicas, sustituir con abonos químicos la pérdida de fertilidad natural, mecanizar labores culturales, combatir plagas y enfermedades con agrotóxicos y procesar intensivamente los productos antes de su consumo final son elementos de un paradigma agropecuario que durante casi medio siglo permitió incrementar notablemente los rendimientos agrícolas y con ello la oferta de alimentos, pero que en la última década refrenó la marcha y empezó a mostrar sus debilidades e intrínseca insostenibilidad. Sus efectos nocivos son pérdida de vegetación natural, cosechas estancadas o decrecientes, suelos erosionados y aguas contaminadas, pero también aportes crecientes a los gases de efecto invernadero asociados al cambio de uso del suelo, al empleo abusivo de fertilizantes químicos, a la ganaderización y a las grandes presas.

Asociado al paquete tecnológico está un modelo económico que sobre el autoconsumo y los mercados locales privilegiaba la comercialización a distancia, lo que asociado a la intensa monopolización transnacional –cuatro empresas poseen más de la mitad del mercado de semillas y nueve dominan la producción de pesticidas– puso la agricultura del planeta en manos de unas cuantas corporaciones que, desde el lado de los insumos o del acopio, procesamiento y comercialización de las cosechas, controlan todo el proceso. Al mismo tiempo se impulsaron globalmente políticas de apertura comercial en las economías periféricas, en un desarme económico unilateral por el que muchos países pobres pasaron de ser autosuficientes y aun ex-

portadores de alimentos a la más extrema dependencia alimentaria respecto de las metrópolis.

Situación que se torna explosiva a partir de 2007, cuando los efectos del cambio de hábitos alimentarios en China e India, el creciente destino forrajero de los granos de potencial consumo directo, el empleo de cereales como el maíz para producir agrocombustibles, la elevación de los costos por encarecimiento del petróleo y con él de casi todos los insumos agrícolas, se combinan con malas cosechas en Australia, provocando escasez y mayor caída de inventarios, problema real sobre el que se montan las transnacionales alimentarias para elevar especulativamente los precios y lucrar con el hambre de la gente.

Hoy México compra en el exterior decenas de millones de toneladas de maíz, trigo, frijol y arroz, además de oleaginosas, carne, lácteos y otros productos básicos. Y el problema no está sólo en que para comer dependemos de importaciones estadounidenses, sino también en que el desmantelamiento de nuestra agricultura fue desigual, de modo que mientras se estancaba la cosecha maicera campesina el agronegocio controlaba la mayor parte de la producción nacional de este grano, lo que genera una frágil autosuficiencia en maíz blanco para consumo humano, que no es verdadera seguridad alimentaria, pues las inversiones empresariales en maíz para tortillas se trasladarán a maíz para etanol o a cualquier otro cultivo que genere mayores dividendos. Lo que ya está sucediendo; pero como en México por ley no podemos emplear maíz en la producción de agrocombustibles mientras no seamos excedentarios, algunos empresarios del norte dejaron de sembrar maíz para sembrar sorgo, que es equivalente y cuyo uso en la generación de etanol no está prohibido.

La combinación de cambio climático que hace más erráticas las cosechas, estrangulamiento energético que las encarece, crisis alimentaria que se expresa en escasez y carestía, y recesión económica que vuelve más pobres a los pobres y debilita la capacidad importadora de granos de las economías frágiles, provocaron una emergencia global y la modificación de los paradigmas neoliberales que habitualmente manejaban los organismos multilaterales, de modo que en los años recientes no sólo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sino también el BM y el FMI están aconsejando incrementar las inversiones en agricultura, apoyar la producción interna de alimentos y fortalecer a la economía campesina.

Recomendaciones que casi todos los países han seguido en alguna medida con excepción de México, que mantiene las añejas recetas mercadócratas. Y el encarecimiento de los granos se vuelve un problema grave para un país dependiente como el nuestro, cuyas importaciones por este concepto han elevado notablemente sus costos en los últimos años, al extremo de que recientemente bordearon los 20 mil millones de dólares anuales, monto semejante al de los ingresos por remesas enviadas por los migrados, que habían llegado a 24 mil millones pero están en franca disminución. Así, importar alimentos estadounidenses cosechados ahí por mexicanos y “exportar” campesinos mexicanos que podrían producir aquí esos mismos alimentos, dejó de ser un “buen negocio” que generaba utilidades netas por unos diez mil millones de dólares anuales y hoy comienza a tener saldo rojo.

Lo que enfrentamos en México es la *erosión* generalizada del mundo rural. Un curso prolongado y multidimensional de deterioro, degradación y desarticulación con momentos agudos delimitados en el tiempo y el espacio: escasez especulativa del maíz con la consecuente alza de los precios de la tortilla en 2007; freno a la migración a Estados Unidos por la recesión en ese país y caída en años recientes de las remesas que envían los transterrados; incremento de la violencia asociada con el narco en regiones como Tierra Caliente, en Michoacán, o la Alta Babícora, en Chihuahua; huracanes excepcionales con su secuela de inundaciones y sequías inusualmente prolongadas. Erosión en curso que de no rectificarse a tiempo avanza hacia una crisis general provocada por la combinación de múltiples conflagraciones puntuales, estallando de manera simultánea y retroalimentándose.

Pese a estar articuladas en un desorden sistémico, describiré por separado algunas de las dimensiones de la debacle:

- *Erosión económica*, manifiesta en incertidumbre, poca rentabilidad y bajo crecimiento: un sector de la producción que entre 1945 y 1976 se expandía a una tasa promedio anual de 3.8%, entre 1982 y 2008 bajó su tasa de crecimiento a 2% y en los años del TLCAN, de 1994 a la fecha, la expansión anual fue de sólo 1.8%. En particular las cosechas de granos y oleaginosas se estancaron desde 1980 en alrededor de 30 millones de toneladas y paralelamente en los últimos 15 años se perdieron 2.5 millones de empleos rurales.
- *Erosión de la seguridad alimentaria*, manifiesta en creciente necesidad de importar comida, pues mientras que en 1908 la dependencia del país en alimentos era de 15%, en 2009 fue de 42%: 33% del maíz, 50% del

trigo, 70% del arroz, 97% de la soya, 20% de la carne de res, 33% de la carne de cerdo, 14% de la carne de pollo, 13% de la leche, etcétera.

- *Erosión ecológica*, manifiesta en pérdida de bosques, degradación de suelos, contaminación de aguas, desaparición de especies, desarticulación de ecosistemas.
- *Erosión social*, manifiesta en debilitamiento, descomposición y aun necrosis del tejido comunitario, derivados del deterioro de la economía y los servicios, de la imparable migración, de la expansiva narcoeconomía y de la inseguridad generalizada.
- *Erosión demográfica*, manifiesta en la desproporción que en los porcentajes de población por género y edad, ocasiona un éxodo en el que aún predominan los varones jóvenes, de modo que el campo se feminiza y envejece aceleradamente. Así, por ejemplo, 50% de los ejidatarios tiene más de 55 años y 20% son mujeres.
- *Erosión política*, manifiesta que cada vez más gente descreo en el Estado de derecho y consecuente al delito o se hace justicia por propia mano, en una ingobernabilidad hormiga que, asociada a la militarización de muchas regiones, pone al campo en virtual Estado de excepción.
- *Erosión moral*, manifiesta en pérdida de la esperanza de que algún día mejore la vida en el campo, lo que desalienta a los viejos y motiva la deserción casi unánime de los jóvenes que no vislumbran ningún futuro rural deseable.

No se trata del curso hacia lo que algunos han llamado “nueva ruralidad”, donde decrecen el empleo y el ingreso agrícolas, se urbanizan las formas de vida y surgen movimientos e identidades no tradicionales –étnicas, de género, ambientales. Sin duda, esto sucede desde hace mucho, pero lo peculiar del campo mexicano es que no vive la transición hacia un ordenamiento socioeconómico distinto sino una descomposición y desarticulación aceleradas.

Todas las facetas del desbarajuste son alarmantes pero la que me parece más grave es la erosión de las estrategias productivas de solidaridad intergeneracional con las que ancestralmente los campesinos han buscado asegurar el futuro de familias y comunidades.

Sometidos casi por definición a la incertidumbre climática, sanitaria y económica, los rústicos toman siempre muy en cuenta el largo plazo mediante estrategias productivas que, en las buenas y en las malas, garanticen la preservación de la colectividad. Lo que incluye la permanente preocupa-

ción por incrementar el patrimonio productivo –natural, técnico, económico y humano (haber y saberes).

Esta visión de futuro, que no rechaza la innovación pero es básicamente conservadora por cuanto busca evitar riesgos en los que se ponga en peligro la continuidad del núcleo familiar o comunitario, está hoy en un serio predicamento por la deserción física y espiritual de los jóvenes rurales. Posible fractura que se manifiesta en la tendencia creciente a destinar las remesas que envían los migrados no al patrimonio productivo sino a bienes de consumo duraderos como la vivienda. Por primera vez de manera generalizada las familias rurales mexicanas están reduciendo el horizonte de sus previsiones al de una generación, lo que pone en severo riesgo el siguiente eslabón de la cadena que conforma la milenaria historia campesina.

Algunos lo ven como mal menor, pues el campo cuenta poco en el México del tercer milenio. Y es que en los años recientes la aportación del sector agropecuario al valor de la producción nacional ha sido de alrededor de 4%, ¿por qué alarmarse, dicen, ante el desfondamiento de un ámbito que genera apenas cuatro de cada cien pesos del Producto Interno Bruto (PIB)?

Pero sucede que si bien sólo algo así como 4% del PIB es agropecuario, el agro aún emplea al 16% de la población económicamente activa y el 23% de los mexicanos sigue viviendo en el medio rural. Es decir que la importancia del campo en el empleo es cuatro veces mayor que su peso en el valor de la producción, y sigue siendo el ámbito de residencia de uno de cada cuatro compatriotas.

Pero aun esta ponderación es injusta porque la producción económica en la que el agro es tan poco relevante, incluye entre otras cosas ganancias financieras especulativas, comida chatarra, publicidad chatarra, diversión chatarra y miles de millones de pesos en productos suntuarios que consumen unos pocos, mientras que 4% del PIB agropecuario contiene nada menos que los alimentos, bienes fundamentales cuando la escasez y la carestía de los básicos provocan hambrunas a nivel planetario.

Además de que si bien menos de dos de cada diez puestos de trabajo son agropecuarios, éstos se emplean en labores directamente vinculadas con la reproducción social de la naturaleza, de modo que se trata del eslabón decisivo en la cadena que vincula a la sociedad con el medioambiente, nexo fundamental en tiempos de deterioro ecológico y crisis climática. Porque el campo nos aporta alimentos pero también aire fresco, tierra fértil, agua pura, clima benigno, diversidad de especies, paisajes amables... Dones impagables

que algunos han querido transformar en “servicios ambientales” que coticen en el mercado, cuando son nada menos que las premisas de la vida.

Sólo uno de cada cuatro mexicanos habita en poblaciones de 2 500 habitantes o menos, pero esta socialidad rural, en estrecha simbiosis con la urbana, hace de nosotros una colectividad: un modo específico de convivencia. Y es que el campo es fuente nutricia de nuestra diversidad cultural, una pluralidad que es lingüística, pero también plástica, ornamental, musical, canora, dancística, festiva, arquitectónica, indumentaria, culinaria, espirituosa. Del campo nos vienen modos de ser que nos dotan de identidad y se reproducen en las ciudades: que hay un modo defeño de ser triqui, mixteco o amuzgo, distinto y no del de las comunidades originarias.

Nuestro imaginario colectivo huele a campo, pero también en el ámbito del conocimiento y la tecnología el aporte del agro es inapreciable. Saberes y haceres heredados pero vivos, imprescindibles cuando la homogeneidad tecnológica propia del capitalismo muestra el cobre y nos urgen modos alternos de intervenir la realidad, formas virtuosas de humanizar la naturaleza como la holista, biodiversa y sustentable milpa.

La palabra política viene de *polis* y remite a lo urbano. Pero en México, como en otros países latinoamericanos, algunas de las propuestas más sugerentes para renovar nuestra anquilosada civilidad vienen las añejas experiencias rurales de los pueblos indios.

Sin olvidar que somos porque fuimos y salvo las páginas más recientes, el libro de nuestra historia se escribió en el campo y es obra del México agrario que éramos, que de algún modo aún somos y que debemos seguir siendo si es que queremos tener futuro, pues la idea de que puede haber sociedades puramente urbano-industriales es un peligroso espejismo.

El campo nos ubica en el tiempo histórico, pero también nos dota de espacialidad: nos conforma como territorio construido por quienes lo habitan –no tanto los que se arraciman en un puñado de megaurbes como los que se esparcen a lo largo y ancho del mapa– y quienes lo recorren en su voluntaria o impuesta trashumancia.

El panorama mexicano es desolador. A resultas de una irresponsable integración con el norte, no sólo se estancó la economía nacional durante más de 25 años, la recesión de 2008-2009 nos vapuleó como a nadie en América Latina, provocando un retroceso del que si todo va bien nospondremos en 2012; en cuanto a las dimensiones energética y alimentaria de la Gran Crisis, difícilmente podía irnos peor a pesar de ser un país petrolero. Desastre que se asocia con un profundo desfase de México respecto

de los procesos económicos, sociales y políticos que se vienen desplegando en América del Sur desde hace poco más de una década.

El rezago que nos tiene como furgón de cola del subcontinente tiene dimensiones políticas. La llamada “transición”, por la que países con gobiernos autoritarios o abiertamente dictatoriales adoptaron las formas democráticas, siguió diferentes cursos y en algunos países latinoamericanos fue impulsada por movimientos sociales a los que la democracia representativa clásica, es decir pluralidad de partidos, comicios y división de poderes, les quedaba estrecha, de modo que en vez de una “democracia sin adjetivos” propugnaron por diferentes modalidades de democracia participativa comprometidas con el pluriculturalismo, la justicia social y con la recuperación del nacionalismo. Algunos ven ahí el regreso de los “populismos”, otros vislumbran barruntos de altermundismo.

En todo caso, lo cierto es que los cambios están a la orden del día: nueva constitucionalidad que reconoce derechos inéditos de los pueblos originarios y hasta de la *Pacha Mama*; intensos procesos de descolonización interna en países con fuerte presencia indígena; rediseño del Estado para que incluya modalidades de democracia participativa; reformas energéticas; reformas agrarias... Y todo en medio de una reestructuración de las alianzas políticas y los bloques económicos que va diseñando una novedosa constelación de naciones del Cono Sur.

La democracia, que hace una década estaba de capa caída pues los latinoamericanos sentían que los comicios y la alternancia política no resolvían los problemas de la sobrevivencia, recuperó en gran medida su vitalidad cuando las elecciones se mostraron no como espacio único de participación del ciudadano, sino como eslabón en la tarea de construir desde abajo nuevas correlaciones de fuerza y nuevos pactos sociales.

En México, en cambio, la “transición” no sólo se pasmó, en los últimos años se ha revertido y enfrentamos un peligroso retorno del autoritarismo. Con la particularidad de que desmontado parcialmente el eficaz sistema posrevolucionario que le permitió al PRI gobernar sin sobresaltos mayores durante 70 años, las presidencias de la “alternancia” se han ido debilitando y –como en el siglo XIX– están teniendo que llamar en su auxilio a las corporaciones: ejército, iglesia, dueños de la riqueza y los medios de comunicación masiva. El presumible regreso del PRI al poder federal en las elecciones de 2012, no sería el regreso del nacionalismo revolucionario de la época heroica, ni el retorno de los tecnócratas “ilustrados” de la década

de 1990, sino la reinstauración de las proverbiales mañas del viejo partido de Estado: caciquismo, clientelismo, patrimonialismo.

La derecha democrática que había sido el PAN cuando se oponía a la “revolución hecha gobierno”, devino derecha autoritaria, de modo que la alternancia de partidos en el poder Ejecutivo federal no sólo remachó el modelo económico desnacionalizador y antipopular inaugurado por los últimos gobiernos del PRI, sino que reeditó las peores trapacerías políticas del viejo régimen: fraudes electorales, empleo clientelar de los recursos públicos, corporativismo...

Y la gente ya no cree en la democracia. Según el Informe 2009 de la Corporación Latinbarómetro, que aplicó encuestas en 18 países latinoamericanos, los mexicanos que se dicen “satisfechos” o “muy satisfechos” con la democracia pasaron de 45% en 1997, a 41% en 2006 y a 28% en 2009. Es decir que durante los años de la “transición” la confianza en la democracia, que no era muy alta, perdió 17 puntos porcentuales. Y lo peor del caso es que ante la necesidad de elegir entre “democracia y desarrollo económico sin democracia”, sólo tres de cada diez escogieron la democracia (Fernández, 2010:16).

También en el terreno de las percepciones políticas México está penosamente desfasado, pues mientras que en el subcontinente la satisfacción con la democracia es en promedio de 44%, aquí es 16 puntos porcentuales menor, y los latinoamericanos que puestos a escoger prefieren “democracia” a “desarrollo sin democracia”, son también 44%, contra 30% que somos aquí. Según todos los indicadores, en descreimiento político México ocupa el lugar 17, de 18, sólo por encima de Perú (Fernández, 2010:16).

CAMPESINOS EN LA ENCRUCIJADA

Si preguntamos por los efectos agrarios de la recesión económica, los campesinos mexicanos hablan de astringencia crediticia y presupuestal, se muestran temerosos de que disminuya la demanda de cultivos alimentarios no básicos y si son exportadores reconocen que la devaluación del peso los benefició, nada demasiado dramático para los apocalípticos usos rurales. En cambio cuando se menciona la crisis ambiental abundan en recuento de daños: sequía, temporal errático, retraso de los tiempos de siembra, incremento de plagas, inundaciones... Pero también resienten el encarecimiento de fertilizantes y combustibles derivado de la crisis energética; padecen

como consumidores el encarecimiento resultante de la crisis alimentaria que paradójicamente poco los beneficia como productores; y les pega fuerte tanto la escasez y encarecimiento de la mano de obra ocasionado por la migración y las remesas como la ruina que en las familias dependientes de los envíos de dólares ocasiona su progresiva reducción.

Vapuleados durante décadas por la debacle ambiental, energética, alimentaria y migratoria los pequeños productores agropecuarios acusan menos que otros el reciente estrangulamiento económico.

Sin duda los tropiezos de la economía global afectan al campo; sin embargo, las particularidades del sector agropecuario hacen que el impacto de la recesión económica sea relativamente menor ahí que en otras esferas como la industria y los servicios. En cambio, las demás dimensiones de la Gran Crisis inciden en todos los ámbitos, pero de manera particularmente directa sobre el mundo rural.

Dado que una gran parte de la producción agropecuaria son alimentos básicos con una demanda poco flexible y que en un sector caracterizado por la diversidad agroecológica la obsolescencia y renovación de la tecnología son menos homogéneas y más lentas que en otros, la agricultura tiene un comportamiento contracíclico. Así, en 2009, mientras que la economía caía 6.5%, incluyendo un desplome industrial de más de 8%, la agricultura creció casi dos por ciento.

Es decir que el campo está relativamente *desamarrado* del resto de la economía y de la misma manera que el crecimiento en la industria y los servicios no lo arrastra, tampoco sigue linealmente a estos sectores cuando la tendencia es recesiva.

Por otra parte, en México la producción agropecuaria, pesquera y forestal representa en años normales menos del 4% del PIB, de modo que su comportamiento es poco relevante para el conjunto de la economía, regida por la dinámica de los servicios y la industria. El campo importa mucho más de lo que representa su monto relativo dentro del conjunto de la producción, pero esto se debe al valor no directamente económico de sus aportaciones: como garante de la seguridad alimentaria, como fuente de aportes ambientales, como matriz cultural, como hábitat de casi un tercio de la población, como retaguardia social en las crisis, como espacio de gobernabilidad o ingobernabilidad.

Poco sensible a la recesión, el agro es, en cambio, protagonista mayor de todas las demás dimensiones de la debacle sistémica. Veamos.

Aunque menor que el urbano-industrial, es sustantivo el aporte agrario de gases de efecto invernadero inductores del cambio climático, y el deterioro de los recursos naturales –bosques, tierras, aguas, biodiversidad, entre otros– ocurre mayormente en su ámbito y en gran medida es su responsabilidad.

En cuanto a los efectos del calentamiento global, es claro que todos los padecemos, pero sequías, lluvias torrenciales y huracanes frecuentes y poderosos impactan más al mundo rural.

La crisis energética golpea al agro con fuerza no sólo porque los hidrocarburos le son indispensables como materia prima de fertilizantes y combustibles, sino también porque la opción de los agroenergéticos supone un cambio en el patrón de uso de tierras y aguas que constriñe a la agricultura que cosecha comestibles.

La crisis alimentaria cimbra al agro al evidenciar su decisiva importancia, no tanto en la economía monetaria como en el sostenimiento de la vida, y al emplazarnos a emplear los recursos naturales conforme prioridades sociales y de modo sustentable si no queremos que se extienda la hambruna, la rebelión social, la ingobernabilidad...

Cabe puntualizar que aun si se expresa en los precios, la debacle alimentaria forma parte de la Gran Crisis porque es un problema de escasez. En cambio por el momento no es previsible un tropiezo agrícola por sobreoferta generalizada y caída de cotizaciones, lo que sería una crisis de sobreproducción y formaría parte de la recesión.

Que además de especulación hay un problema de disponibilidad de granos básicos, es decir de tendencial escasez, lo evidencia el que en el mundo los inventarios siguen reducidos y que en 2009 sus precios internacionales descendieron algo frente a los de 2007 y 2008, pero se mantienen altos respecto de las tendencias históricas.

Pero hay también prospecciones que apuntan en el mismo sentido. La FAO (2009), en voz de Hafez Ghanen, estima que en los próximos 40 años tendremos que producir 70% más alimentos. La meta no es técnicamente inalcanzable, pero se topa con tres dificultades: el cambio climático causado por un sistema insostenible que pese a las evidencias se resiste a cambiar, la creciente demanda de biocombustibles que provoca la insaciable sed de energía del mismo sistema y la apropiación privada y especulativa de los recursos naturales de los que depende la producción adicional de comida.

Respecto de esto último, hay que tener presente que, siempre según la FAO, para responder a la demanda alimentaria de los próximos 40 años sería necesario incorporar al cultivo –de preferencia campesino– alrededor

de 120 millones de hectáreas adicionales, sobre todo en Asia, África y América Latina. Pero sucede que en los últimos cinco años, gobiernos e inversionistas privados están comprando o arrendando vertiginosas extensiones de tierras cultivables, sobre todo en países en desarrollo como los asiáticos –Sudán, Pakistán, Kazajstán, Camboya, Uganda, Birmania, Indonesia, Laos, Turquía–, los africanos –Camerún, Madagascar, Nigeria, Ruanda, Zambia y Zimbabwe– y los latinoamericanos –Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Los mayores compradores son Corea, que adquirió 2.3 millones de hectáreas; China, que compró dos millones, y así Arabia Saudita, India, Japón, Egipto, Bahrein, entre otros. Pero también adquieren tierra consorcios privados como Benetton, Mitsui y el holding saudí Bin Laden Group (Muresu, 2009:19-20).

Un ejemplo claro de cómo la crisis poliédrica tiene sobre el campo un efecto mucho más profundo que el de la sola recesión económica, es el impacto de una y otra sobre la migración de origen rural.

Ha corrido mucha tinta en torno al presunto regreso multitudinario de connacionales con motivo de la recesión en Estados Unidos y se ha seguido con atención la tendencia de las remesas que con la pérdida de empleos en el país vecino han tenido una reducción compensada en parte por la devaluación del peso. Sin embargo, el ramalazo es menor que lo anunciado por los alarmistas y posiblemente sus efectos remitirán, en parte, cuando se recupere la economía estadounidense.

Menos patente pero más profundo e irreversible, es el efecto acumulado de la migración remota y prolongada de los jóvenes rurales, sobre las transgeneracionales estrategias de sobrevivencia productivas de familias y comunidades. Núcleos campesinos que, contra su lógica ancestral, dejan de convertir en ahorro productivo el ingreso temporal que representan el trabajo extraparculario a jornal y ahora las remesas, para invertirlo básicamente en bienes de consumo duradero. Esto significa que muchos pequeños productores dejaron de ver más allá de esta generación y que la pérdida de valores, saberes y recursos materiales puede hacer irreversible la descampesinización en curso.

Hay quien piensa que la emigración es positiva, pues reduce población rural y también es favorable que gran parte sea externa, pues quita presión a la proverbial incapacidad de la economía mexicana de crear empleos, al tiempo que las remesas reaniman el mercado interno. Grave miopía: con la emigración dilapidamos el “bono demográfico”, pues la mayor parte de la riqueza creada por nuestros jóvenes transterrados se queda en Estados Uni-

dos. Esto, junto con la desocupación, el subempleo y el trabajo subterráneo que no contribuye con cuotas a la seguridad social, está ocasionando una merma de ahorro nacional que nos llevará a la catástrofe en unos 20 años, cuando seamos un país de viejos que no tomó precauciones económicas ni fiscales para hacerle frente a la inversión de la pirámide demográfica.

El éxodo rural no es sólo ni principalmente un virtuoso ajuste del mercado global de trabajo. En sentido fuerte, la emigración masiva es uno de los efectos más dramáticos de la erosión espiritual y material que el capital ejerce sobre el tejido socioeconómico del mundo agrario, devastación tan irreversible y peligrosa como la que practica sobre los ecosistemas y recursos naturales.

UTOPIÁS RÚSTICAS

La peculiar ubicación de lo rural dentro del sistema hace que el impacto del retroceso económico general sea ahí más leve que en la industria y los servicios. Pero si a los campesinos no les preocupa demasiado que se reanime el postrado capitalismo, sí están vitalmente interesados en ponerle límites y candados a un orden que desde que nació amenaza su existencia. Porque el gran dinero se las tiene sentenciada, el proyecto que los campesinos de México y el mundo han ido bosquejando en las últimas décadas es una respuesta puntal y visionaria a las calamidades que resultan de las diversas dimensiones de la Gran Crisis sistémica.

Golpeados de frente por el deterioro ambiental y el cambio climático; víctimas directas de la crisis energética; protagonistas de la debacle alimentaria; torrente fundacional y aun caudal importante del éxodo transfronterizo; damnificados mayores de un sistema político que si en general está en deuda con la verdadera democracia, en el campo sigue repitiendo las fórmulas clientelares del viejo “ogro filantrópico” los campesinos mexicanos han ido edificando propuestas que al confrontarse con los filos más caladores del capitalismo en su modalidad agraria esbozan una alternativa rural antisistémica no por belicosa y airada sino por radical y visionaria. Veamos:

- Rescatar el campo, salvarlo, es oponerse a la desruralización que el capitalismo emprendió desde sus años mozos.
- Plantear una nueva y más justa relación entre agricultura e industria y entre el campo y las ciudades es marchar a contracorriente de la ances-

tral tendencia del sistema a desarrollar al mundo urbano-industrial a costa del rural-agrario.

- Impulsar una conversión agroecológica orientada a la sustentabilidad social y natural es confrontarse con los patrones científico-tecnológicos depredadores del hombre y la naturaleza impuestos desde la primera revolución industrial.
- Reivindicar tierras, aguas, biodiversidad, saberes y cultura como bienes colectivos es hacerle frente a la compulsión capitalista de mercantilizarlo todo.
- Reclamar soberanía alimentaria y soberanía laboral que garanticen el derecho a la alimentación y a un trabajo digno, dado que comida y empleo no pueden ser dejados a los designios del mercado, es atentar contra el sagrado principio de la libre competencia.
- Conformar el “mercado justo”: mercadeo solidario donde productores y consumidores establecen relaciones no sólo económicas sino sociales es oxímoron en un orden donde el mercado es por definición ciego y desalmado.
- Levantar las banderas de la autogestión económico-social y la autodeterminación política dentro de un sistema donde se pretende que todos nos sometamos a los dictados del mercado y del Estado es un atentado a los principios del liberalismo individualista acuñados desde la Ilustración.
- Proclamar el “buen vivir” –*Sumak kawsay*, en el mundo andino– como opción a un progreso y un desarrollo siempre discutibles como conceptos y que además incumplieron sus promesas, es poco menos que una herejía.

Estas alternativas campesinas permiten avizorar algunos de los rasgos que sin duda habrá de tener una modernidad otra. Altermundismo que en algunos es pura elucubración de cubículo mientras en el mundo rural es realidad en construcción, es utopía hecha a mano.

Quizá porque habitan en la periferia del sistema. Quizá porque sin estar del todo fuera, sí están al margen de las formas más densas del capitalismo urbano-industrial. Quizá porque tanto el gran dinero como el socialismo clásico los expulsaron de sus utopías. Quizá porque siempre han sido vistos como desubicados y anacrónicos. Por todo esto y mucho más, a los campesinos se les da lo antisistémico; imaginan fácilmente alternativas civilizatorias poscapitalistas. Los hombres del campo no son vanguardia de nada

—porque no hay vanguardias— ni tienen la receta —porque no hay receta— pero sin duda son inspiradores.

EL SUJETO

Sin sujeto no hay crisis que valga. Los desórdenes que conmueven al campo y en general los estrangulamientos que socavan al neoliberalismo, al capitalismo en cuanto tal, a la propia sociedad industrial y al imaginario de la modernidad conformarán una crisis civilizatoria si y sólo si las víctimas asumimos el reto de convertir el magno tropezón sistémico en encrucijada societaria. Los tronidos y rechinos de la máquina de vivir y el descarrilamiento de la locomotora productiva plantean interrogantes perentorios pero la respuesta está en nosotros.

Jürgen Habermas nos recuerda que tanto en la medicina como en la dramaturgia clásica el término crisis se refería al “punto de inflexión de un proceso fatal” y aun si en estas disciplinas se pensaba que el curso de la enfermedad o del destino se imponían, la noción de crisis “es inseparable de la percepción interior de quien la padece”, de la existencia de un sujeto cuya voluntad de vivir o de ser libre están en juego. “Sólo cuando los miembros de la sociedad experimentan los cambios de estructura como críticos para el patrimonio sistémico y sienten amenazada su identidad social, podemos hablar de crisis” (Habermas, 1975:18).

A mediados de 2008 tuvimos un evento global de la crisis alimentaria porque a resultas de la carestía de los granos básicos se presentaron emergencias sociales contestatarias en más de 30 países, entre ellos Argentina, Armenia, Bolivia, Camerún, Costa de Marfil, Chile, Egipto, Etiopía, Filipinas, Madagascar, México, Pakistán, Perú, Somalia, Sudán, Tajikistan, Uganda, Venezuela. Movilizaciones que en el caso de Haití, donde el precio del arroz se duplicó en una semana, dejaron varios muertos, decenas de heridos y la caída del gobierno.

En México, cuando menos desde 1995, año en que hubo movilizaciones nacionales que abarcaron desde los minifundista hasta los pequeños y medianos agricultores arruinados por la crisis financiera de 1994, se ha venido conformando un sujeto rural que ya no es el agrarista que fue hasta los primeros ochenta del siglo pasado ni el productivista en que se convirtió durante el resto de la década de 1980 y los primeros años de la de 1990, hoy las convergencias agrarias no luchan tanto por la tierra o por las con-

diciones puntuales de la producción y comercialización, sino contra el dismantelamiento neoliberal de la agricultura y por un proyecto integral de “salvación del campo” sustentado en la llamada “soberanía alimentaria”.

El nuevo protagonista rural fortaleció su presencia política y visibilidad a fines de 2002 y durante 2003, en los mejores momentos del Movimiento “El campo no aguanta más”, que movilizó en la capital de la República a 100 mil hombres y mujeres del campo y en marzo de 2003 convino con el gobierno federal un Acuerdo Nacional que suponía un viraje importante en las políticas públicas para el sector. Pacto que, sin embargo, el jefe del Ejecutivo nunca honró, entre otras cosas debido a la fractura de la convergencia de organizaciones que podía haber exigido su cumplimiento. Con contenido semejante, pero bajo la forma de acciones de sensibilización y difusión dirigidas a la opinión pública, desde 2007 una serie de organizaciones sociales y civiles vienen impulsando la Campaña “Sin maíz no hay país”, que recientemente se extendió a Centroamérica.

Los desórdenes ambientales, que por su propia índole son de despliegue relativamente lento y duradero, han ido configurando una crisis con el surgimiento del movimiento ambientalista en la segunda mitad del siglo pasado. En cuanto a México, además de los habituales grupos de la sociedad civil, tiene presencia creciente lo que Martínez Alier llama “ambientalismo popular” (Martínez Alier, 1992): movimientos locales de base, a veces coordinados en escala regional o nacional, que resisten de diferentes maneras acciones privadas y políticas públicas ecodidas como tala de bosques, grandes presas, minas a cielo abierto, saqueo y contaminación de aguas, urbanización salvaje, biopiratería, difusión de semillas transgénicas entre otras.

Los éxodos transnacionales y la creciente presencia de migrantes indocumentados en las metrópolis, pasaron de dato demográfico a crisis social cuando tres millones de personas, mayormente transterrados de origen latino, se movilizaron en las principales ciudades de Estados Unidos en defensa de sus derechos. En nuestro país, la gente se organiza más para migrar que para enfrentar colectivamente los riesgos del éxodo. Sin embargo, hay convergencias emblemáticas como el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), que arrancó en California con oaxaqueños transterrados y hoy tiene adherentes en Estado Unidos, en las regiones del noroeste mexicano, destino de los jornaleros, y en los propios estados de origen. La lucha principal es por los derechos del migrante, pero más recientemente se ha comenzado a reivindicar el “derecho de no emigrar”, es decir el derecho a en-

contrar en el propio país condiciones adecuadas de vida y trabajo, de modo que el flujo de población sea opcional y no compulsivo como lo es ahora.

Y la crisis económica es tal, no tanto por que hay semblantes angustiados en la bolsa de valores, como porque millones de personas aquejadas por desempleo, deudas y pérdida de patrimonio comienzan a manifestarse en la calle. Como sucedió en las masivas jornadas de protesta y en defensa de los puestos de trabajo y la capacidad adquisitiva del salario, escenificadas en Francia el 29 de enero y el 19 de marzo de 2009. El mejor ejemplo mexicano de resistencia a los efectos de la crisis económica es la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y su causa solidaria, contra el desempleo de 43 mil trabajadores a resultas de la desaparición por decreto de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Y es que los descalabros sociales convocan al pensamiento crítico y la acción contestataria. O, mejor dicho, el desarreglo sistémico deviene crisis en la medida en que involucra la praxis de los sujetos. Protagonistas del drama que son a la vez constituidos y constituyentes de la crisis.

En esta perspectiva, la debacle ambiental, alimentaria, energética y migratoria, a la que hoy se añade la depresión económica, conforman una crisis sistémica en tanto han congregado ya una amplísima gama de discursos contestatarios que ven en ella el fin de la fase neoliberal del capitalismo. Pero en este diálogo se escuchan igualmente las voces de quienes pensamos que la devastación que nos rodea resulta del pecado original del gran dinero: la conversión en mercancía de un orden humano-natural que no puede reproducirse con base en la lógica de la ganancia; de quienes creemos que si para salvarse de sus propios demonios el capitalismo deja definitivamente de ser un sistema de mercado autorregulado, también deja de ser capitalismo y entonces el reto es desarrollar nuevas formas de autorregulación social; de quienes sostenemos que lo que se desfondó en el tránsito de los milenios no es sólo un mecanismo de acumulación sino también la forma material de producir y consumir a él asociada, el sistema científico tecnológico y la visión prometeica del progreso en que deriva, el sentido fatalista y unilineal de la historia que lo sostiene...

Si, a la postre, estas son las percepciones dominantes, entonces –y no antes– estaremos ante una crisis civilizatoria.

BIBLIOGRAFÍA

- Amin, Samir (1974), *La acumulación a escala mundial. Crítica de la teoría del subdesarrollo*, Siglo XXI Editores, Madrid.
- Bartra, Armando (2003), *Cosechas de ira. Economía política de la contrarreforma agraria*, Itaca, México.
- (2008a), *El hombre de hierro. Límites sociales y naturales del capital*, Itaca/UACM/UAM-Xochimilco, México.
- (2008b), “Fin de fiesta. El fantasma del hambre recorre el mundo”, *Argumentos. Estudios críticos de la sociedad*, nueva época, año 21, núm. 57, mayo-agosto, UAM-Xochimilco, México.
- (2009), “Sexto sol”, *Memoria*, núm. 237, agosto-septiembre, México.
- Braudel, Fernand (1994), *Las civilizaciones actuales. Estudio de historia económica y social*, REI, México.
- FAO (2009), “Para 2050 la producción de alimentos deberá ser 70% superior, alerta FAO”, *La Jornada*, 24 de septiembre.
- Fernández Vega, Carlos (2010), “México SA”, *La Jornada*, 5 de enero.
- Frank, Andrés G. (1970), *Desarrollo del subdesarrollo*, ENAH, México.
- Furtado, Celso (1968), *Teoría y política del desarrollo económico*, Siglo XXI Editores, México.
- Habermas, Jürgen (1975), *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*, Amorrortu, Buenos Aires.
- Harvey, David (2005), “El ‘nuevo’ imperialismo; acumulación por desposesión”, *Socialist Register*, Clacso, Buenos Aires.
- Kula, Witold (1973), *Problemas y métodos de la historia económica*, Península, España.
- Leff, Enrique (1986), *Ecología y capital. Hacia una perspectiva ambiental del desarrollo*, UNAM/Siglo XXI Editores, México.
- Marini, Ruy Mauro (1973), *Dialéctica de la dependencia*, Era, México.
- Martínez Alier, Joan (1992), *De la economía ecológica al ecologismo popular*, Icaria, Barcelona.
- Muresu, Stefania (2009), “Privatización de tierras fértiles”, *Memoria*, núm. 237, agosto-septiembre.
- O’Connor, James (2001), *Causas naturales. Ensayos de marxismo ecológico*, Siglo XXI Editores, México.
- Ortiz, Etelberto (2007), *Políticas de cambio estructural en la economía mexicana. Evaluación y perspectivas para un nuevo proyecto de nación*, UAM-Xochimilco, México.
- Polanyi, Karl (2001), *La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo*, FCE, México.

- Rostow, Walt Withman (1962), *The Estages of Economic Growth: a Non Communist Manifesto*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Santa Barbara, Jack (2007), “The False Promise of Biofuels”, International Forum on Globalisation.
- Touraine, Alan (1988), *Crítica de la modernidad*, FCE, Buenos Aires.
- Vázquez, Josefina Zoraida (2009), “La era de las revoluciones e independencias”, en *20/10. Memoria de las Revoluciones en México*, núm. 4.
- Vilar, Pierre (1993), *Crecimiento y desarrollo*, Planeta Agostini, España.
- Wallerstein, Immanuel (1979), *El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI*, T.I./Siglo XXI Editores, España.

La lucha de los campesinos ante la crisis alimentaria en México

Miguel Meza Castillo*
Olivia Acuña Rodarte**

NEOLIBERALISMO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

La soberanía alimentaria en México¹ se ha perdido en los últimos años. El déficit de la balanza alimentaria en 2008 alcanzó la cifra de 4 919 millones de dólares, pues mientras el costo de las importaciones de alimentos alcanzó los 20 695 millones de dólares, el de las exportaciones fue de 15 776 millones (INEGI, 2008), lo que representa un aumento de 251% en relación con el reportado en 2006, último año en el que los precios internacionales de los comestibles se mantuvieron más o menos estables.²

* Profesor-investigador en la UAM-Xochimilco, actualmente en la Cátedra Oscar Uribe Villegas.

** Profesora-investigadora en el Departamento de Relaciones Sociales, UAM-Xochimilco.

¹ Entendida como “la facultad y el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y de tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas”. Este concepto fue puesto en el centro del debate a principios de la década de 1990 por la organización “Vía Campesina”, que agrupa a productores de diferentes partes del mundo y se ha convertido en una idea fuerza, reconocida por organismos como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), sin embargo, este organismo utiliza más bien el concepto “seguridad alimentaria”, que se refiere a que “todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. Los conceptos muestran diferencias importantes.

² Del total del costo de las importaciones de 2008, 22% corresponde a cereales; 17% a semillas y frutos oleaginosos, frutos diversos; 15% a carnes y despojos comestibles; 7% a leche,

Los productos que muestran un mayor desequilibrio son los cereales: el déficit en maíz pasó de 1 101 millones de dólares en 2006 a 2 391 millones en 2008;³ en trigo aumentó de 610.1 millones de dólares a 1 246.9 en el mismo periodo, mientras que en arroz las importaciones alcanzaron en 2008 un monto de 379.8 millones de dólares (INEGI, 2008).

El desequilibrio en la balanza alimentaria también se expresa en el incumplimiento del propio gobierno mexicano para cobrar los aranceles por importaciones fuera de cuota estipulados en el apartado agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Según datos del Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de 1994 a 2007 los aranceles no cobrados por importaciones de maíz fuera de cuota, correspondieron a más de 3 800 millones de dólares. Es decir, aunque formalmente el maíz se liberaría en 2008, prácticamente un año después de la entrada en vigor del Tratado, el mercado de maíz se liberó, y no sólo no se cobraron aranceles sino además las importaciones fuera de cuota representaron más del 42% de las compras totales.

Hay que señalar que el saldo negativo de la balanza agropecuaria ha tenido una participación sustantiva en el déficit de la balanza comercial, representando 41% en 2007 y 35% en 2008 (Márquez, 2009), de tal manera que el triunfalismo del gobierno por el terreno “ganado” en materia comercial a partir del TLCAN, prácticamente se desdibuja al contraponerlo con la situación del comercio agropecuario y particularmente del alimentario.⁴ Algunas estimaciones plantean que el valor de estas importaciones alimenticias es prácticamente igual al de los excedentes por exportaciones petroleras.

Un factor importante en el incremento del déficit de la balanza de alimentos ha sido, sin duda, el aumento de los precios de los comestibles en los últimos años; sin embargo, las causas de fondo que explican las cada

lácteos y miel; 7% a grasas animales y vegetales; 5% a preparaciones alimenticias diversas; 4% a frutas y frutos comestibles, 4% a bebidas y vinagre, y el resto a otros rubros.

³ De acuerdo con el secretario de la Sagarpa, Alberto Cárdenas, tan sólo en 2007 se importaron 10 millones de toneladas de maíz (*La Jornada*, 27 de junio de 2008).

⁴ En los dos últimos años, se ha acentuado el saldo negativo de la balanza comercial agropecuaria al pasar de los 4 224 millones de dólares en 2007, a 5 920 en 2008. Destaca en estos años el papel que tuvieron las importaciones de cereales para este saldo negativo. En el primer año, los cereales representaron 67% de éste; en 2008, prácticamente se mantuvo esta participación negativa al llegar a 66% de las importaciones agropecuarias (Márquez, 2009).

vez más grandes diferencias entre importaciones y exportaciones alimentarias se encuentran en la imposición del nuevo modelo de acumulación de capital, sustentado en la liberalización de los mercados de productos, financieros y de servicios.

La liberalización comercial ha sido un eje estratégico del capital transnacional y de los organismos financieros internacionales, así como de los gobiernos neoliberales mexicanos, los que apoyándose en el argumento economicista miope de que es mejor para el país importar alimentos que producirlos, le apostaron a la apertura comercial y a la desregulación, enarbolando a las supuestas ventajas comparativas y a la rentabilidad como dos de sus principios fundamentales, sin ponderar realmente los efectos económicos y sociales que esta política tendría en el sector rural.

Como consecuencia de estas políticas, desde hace poco más de dos décadas el país empezó a importar cada vez volúmenes mayores de alimentos y no obstante que –de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)– los precios de los cereales se mantuvieron más o menos estables entre 1985 y 2002 (FAO, 2008), el aumento de las importaciones de alimentos ha significado la salida de un monto cada vez mayor de divisas, y en los últimos tres años el costo de importar comestibles en lugar de producirlos localmente le ha salido excesivamente caro al país. Cálculos de algunos estudiosos del tema, estiman que de 1994 a 2008, el comercio exterior agroalimentario acumulado ha tenido un saldo negativo de casi 43 mil millones de dólares, y la transferencia de divisas al exterior por concepto de importación de alimentos en 2008 –20 695 millones de dólares– representó un poco más del presupuesto federal para el campo en ese mismo año, el cual fue de alrededor de 20 400 millones de dólares (Suárez y Polanco, 2009).

Los datos duros demuestran que la liberalización comercial en lugar de establecer un mejor equilibrio de los flujos comerciales entre países, como argumentan los defensores de esta política, ha acrecentado la dependencia de México hacia el exterior, en particular hacia Estados Unidos, país con el que se realiza la mayor parte de las transacciones comerciales.

El abandono del Estado de sus funciones como regulador dejó el campo libre a las grandes empresas –transnacionales y nacionales– comercializadoras de materias primas, las que en buena medida controlan el comercio de los cereales y de insumos –fertilizante, semillas y herbicidas. Es decir, la “mano invisible del mercado” ha dado lugar a la mano visible de grandes grupos empresariales que operan como verdaderos monopolios.

La pérdida de la soberanía alimentaria del país no se debe solamente a que en México no se producen los alimentos suficientes para abastecer a la población, sino sobre todo a la mayor dependencia de los grupos empresariales que controlan la comercialización de los alimentos y de los insumos básicos para la producción agropecuaria, los cuales operan únicamente en función de sus ganancias.

La mayor dependencia de la importación de alimentos y de los grandes grupos monopólicos empresariales ha colocado a México en una situación de extrema vulnerabilidad ante las recurrentes crisis alimentarias.

Como Señala Walden Bello:

[...] no puede entenderse la crisis alimentaria mexicana sin considerar que en los años anteriores a la crisis de la tortilla la patria del maíz fue convertida en una economía importadora de ese gran producto por las políticas de “libre mercado” promovidas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y Washington [...] el control monopólico del comercio doméstico ha asegurado que una elevación de los precios internacionales del maíz no se traduzcan en precios significativamente más altos a pagar a los pequeños productores (*La Jornada*, 2008).

LA CRISIS ALIMENTARIA EN MÉXICO

La crisis de la tortilla

Una manifestación de la crisis alimentaria en nuestro país fue la llamada crisis de la tortilla de principios de 2007. Si bien es cierto que para ese año México ya importaba cerca del 40% de sus alimentos y las principales empresas agroindustriales habían establecido un sistema bien armado de compras en el exterior que permitía deprimir los precios en el mercado nacional para obtener precios competitivos, y que este mecanismo operaba bajo la lógica de asegurar el abasto de alimentos independientemente de su procedencia,⁵ las cosas cambiarían radicalmente unos meses después de la llega-

⁵ En ese sentido, hay que señalar que la FAO ha establecido el “Índice de seguridad alimentaria”, que mide el grado de dependencia alimentaria, a partir de naciones en las que las importaciones de alimentos absorben una cuarta parte o más de los ingresos por exportaciones totales. A partir de este indicador, el gobierno federal considera que nuestro país tiene 94% de seguridad alimentaria; sin embargo, este concepto parte de asegurar los alimentos no importando la procedencia de los mismos.

da de Felipe Calderón a la Presidencia, ya que las cotizaciones de los principales granos se incrementaron significativamente.⁶

Esa situación provocó incrementos desmedidos de los precios de la tortilla, que se dispararon “sorpresivamente” de los seis pesos por kilogramo en el Distrito Federal en noviembre del 2006 a nueve o diez pesos –en algunas entidades de la República llegó a 15 pesos. Esto representó un incremento de 67% en un mes para el caso de la Ciudad de México y de 150% en el interior del país.⁷

El llamado “tortillazo” de Calderón se transformó en un problema político nacional de primera magnitud durante todo enero, frente al cual el gobierno federal argumentó que sólo se trataba de “una burbuja de precios que rápidamente se acabaría”, que era un problema “inflado por los medios” y que “tenía causas externas, fuera del control gubernamental” y que “por lo pronto dejaran de consumir tortillas para abatir los precios”.⁸

Ante la falta de legitimidad que había generado la crisis de la tortilla, el 18 de enero de 2007 el gobierno calderonista decidió firmar en Los Pinos el Acuerdo para Estabilizar el Precio de la Tortilla con la participación del gobierno federal, la Confederación Nacional Campesina (CNC), el sector molinero⁹ y grandes empresas del sector de alimentos en México.

Con el acuerdo se manifestó más claramente lo que desde la campaña por la Presidencia ya todos sabían: la estrecha vinculación entre la élite gobernante y las empresas oligopólicas del país. El acuerdo desnudó la política de alianza con el sector privado y, lejos de pactar la reversión en el incremento de los precios, legitimó el alza al establecer como precio con-

⁶ El problema del incremento del precio de la tortilla no es nuevo, la tendencia se ha acentuado prácticamente desde 1994, ya que entre ese año y 1999 se estima que el precio de la tortilla se incrementó 483% en términos reales (García y Keleman, 2007).

⁷ De diciembre de 1993 a diciembre de 2006, el precio de la tortilla se incrementó, en términos nominales, 650%, al pasar de 0.80 a 6.00 pesos por kilogramo, es decir, hubo alzas promedio anuales de 50% (entrevista Víctor Suárez, 2008).

⁸ Para el gobierno federal el comportamiento de los precios de la tortilla era “normal” y no había motivos para revisar y reorientar las políticas hacia la cadena maíz-tortilla. Que los más pobres disminuyeran el consumo de tortilla ante un incremento de precios no representaba ningún problema de ingresos, nutrición y seguridad para millones de mexicanos; se trataba de un comportamiento perfectamente *racional* de los consumidores en un mercado “libre”: a mayor precio, menor consumo, hasta lograr un nuevo precio de equilibrio.

⁹ El sector molinero sólo comprometía a cinco mil de las 65 mil tortillerías existentes en el país, por lo que en términos generales, el Acuerdo carecía de representatividad.

certado de 8.50 pesos el kilogramo de tortilla y cinco pesos el kilogramo de harina de maíz, aunque el secretario de la Sagarpa recomendó “acudir a las tiendas de autoservicio y supermercados donde la tortilla se vende por debajo de los seis pesos el kilo” (*La Jornada*, 17 de mayo de 2008).

A pesar del pacto el descontento social se acrecentó de tal forma que propició la organización y coordinación de los sindicatos, organizaciones campesinas y sociales en contra del alza de los precios, la falta de una política a favor del campo y de la ausencia de un incremento emergente de los salarios. Ello desembocó en la primera manifestación multitudinaria contra el gobierno de Felipe Calderón el 31 de enero de 2007 cuya consigna más importante fue frenar la carestía de los alimentos.

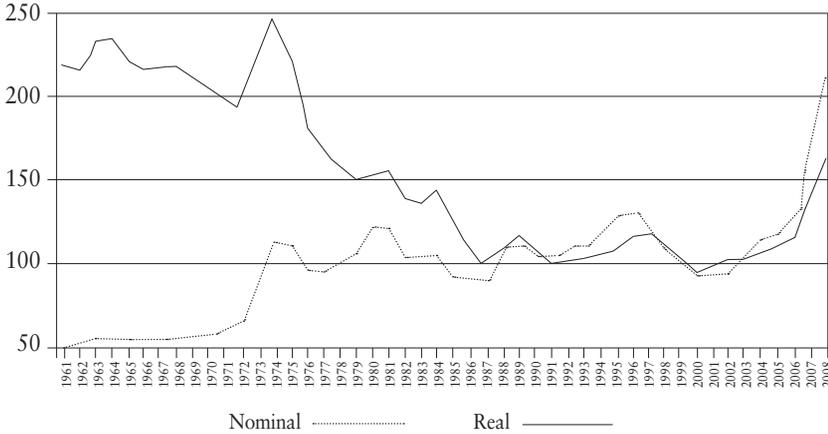
Crisis financiera, volatilidad de los precios de los alimentos y crisis alimentaria

En los primeros meses de 2008, la tendencia al alza de los productos agrícolas que empezó en el 2002 –después de mantenerse más o menos estables durante cerca de veinte años– alcanzó uno de sus niveles más altos de los últimos años. De acuerdo con la FAO, “a mediados de 2008, los precios reales de los alimentos se situaban 64% por encima de sus niveles de 2002” (FAO, 2008).

Según esa dependencia, como se podrá observar en la Gráfica 1, durante el primer trimestre de ese año, los precios nominales internacionales de los principales productos alimentarios alcanzaron los niveles máximos de los últimos 50 años, mientras que los precios en términos reales fueron los más altos en casi 30 años.

De acuerdo con esa institución, el aumento promedio del índice del primer trimestre de 2008 frente al primer trimestre de 2007 fue de 53%. Los aceites vegetales que se encarecieron en más del 97% durante el mismo periodo encabezan la subida continuada de los precios, seguidos por los cereales con un encarecimiento del 87%, los productos lácteos con 58% y el arroz con 46%. Los precios de los productos cárnicos y al azúcar también aumentaron, pero en un grado menor.

Gráfica 1
 Índice de precios de los alimentos de la FAO ampliado
 1998-2000=100



El incremento de los precios en estos últimos años provocó una crisis alimentaria global, que deterioró aún más las condiciones de millones de pobres que ya padecían hambre y desnutrición.¹⁰

Entre las causas más importantes que explican el incremento de precios de los alimentos y de la crisis alimentaria destacan: el descenso de la producción de cereales en los principales países exportadores, la disminución del nivel de reservas mundiales, el encarecimiento de los combustibles y de los fertilizantes, el destino de productos agrícolas (como maíz, oleaginosas, yuca y azúcar) a la producción de biocombustibles, las modificaciones en la demanda, las fluctuaciones del tipo de cambio y la operación de los mercados financieros.

Si bien es cierto que todos los factores mencionados inciden en mayor o menor medida en las variaciones de los precios de los alimentos, desde nuestro punto de vista la causa de fondo de la crisis alimentaria se encuentra en el control que ejercen unas cuantas grandes empresas sobre el sistema mundial de alimentos. Hoy tres grandes compañías –Archer Daniels Midland (ADM), Cargill y Bunge– controlan el mercado mundial de granos

¹⁰ La FAO estima que, principalmente como resultado del aumento de los precios de los alimentos, el número de personas en el mundo que padecen hambre ha crecido a 75 millones en 2007, hasta alcanzar los 923 millones.

(Holt y Peabody, 2008). El gigante químico Monsanto controla tres quintas partes de la producción global de semillas. Por ello no sorprende que al final de 2007, “cuando aparecía la crisis mundial de alimentos, las ganancias de ADM crecieron 20%, de Monsanto 45% y de Cargill 60%” (Holt y Peabody, 2008).

Parece que casi todos los actores empresariales de la cadena mundial de alimentos están ganando una fortuna con la crisis alimentaria. A las compañías de semillas y agroquímicos también le ha ido bien. Monsanto, la mayor firma de semillas del mundo, declaró que las ganancias generales aumentaron 44% en 2007 respecto del año anterior. DuPont, la compañía mundial de semillas número dos, dijo que en 2007 sus ganancias por la venta de este insumo aumentaron 19% en relación con 2006, mientras que Syngenta, la empresa número uno de plaguicidas y número tres de semillas, obtuvo 28% más de ganancias en el primer trimestre de 2008 (GRAIN, 2008).

A este fuerte control monopólico que sobre el sistema alimentario mundial tienen unos cuantos grupos empresariales, hay que agregar un factor que ha desempeñado un papel importante en el incremento de los precios: la especulación financiera provocada por la crisis del sistema financiero internacional.

Ante la fuerte crisis del sistema financiero mundial y el desplome de las acciones de la gran mayoría de las empresas, provocados por la explosión de la burbuja de los créditos de alto riesgo que hacen poco atractivo el mercado bursátil,¹¹ buena parte de las inversiones se colocaron en activos como materia primas, incluyendo los cereales, lo que agudizó el factor especulativo en este mercado y dio lugar a una gran volatilidad en los precios de los cereales.

En un reporte de Economist Intelligence Unit se señala que “como en todos los mercados de materias primas (*commodities*), la actividad especulativa también ha provocado el alza de precios en los relativamente pequeños mercados de materias primas agrícolas; considerando que la mayoría de éstas se cotizan en dólares estadounidenses, representan una cobertura contra la debilidad del dólar” (*La Jornada*, 27 de mayo de 2008). Por otra parte, de acuerdo con el Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), mientras en julio de 2007 el precio del maíz en Estados Unidos fue

¹¹ El índice Dow Jones industrial de la bolsa de Nueva York se ubicó en su más bajo nivel desde septiembre de 2006 al acumular un retroceso de 13.47% desde el colapso de la hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos, ocurrido a principios de agosto de 2007.

de 147 dólares la tonelada, en junio de 2008 el precio alcanzó los 287 dólares por tonelada (FAPRI, 2009).

Los fondos de cobertura y otras fuentes de fondos especulativos están volcando millones de dólares a los *commodities* para escapar de los resbaladizos mercados de valores y de la contracción del crédito; con ello alejan aún más la existencia de alimentos del alcance de los sectores pobres (Stewart y Waldie, 2008).

Según algunas estimaciones, los fondos de inversión controlan ahora entre 50 y 60% del trigo comercializado en los más grandes mercados mundiales de *commodities* (Waldie, 2008). Se estima que el monto de dinero especulativo en futuros de *commodities* –mercados en lo que los inversionistas no compran o venden un *commodity* tangible como el arroz o el trigo, sino que apuestan a las variaciones del precio– fue menor a 45 mil millones de dólares estadounidenses en 2000 y aumentó a 4 175 millones en 2007 (Waldie, 2008).

De acuerdo con GRAIN, el 14 de abril de 2008 Cargill anunció que las ganancias que había obtenido del comercio de *commodities* en el primer trimestre de ese año aumentaron 86% respecto del mismo periodo del año anterior. “La demanda de alimentos en las economías en desarrollo y de energía en todo el mundo está haciendo crecer la demanda de los productos agrícolas, a la vez que la inversión se ha enfocado en los mercados de *commodities*”, declaró Grez Page, presidente de Cargill y uno de sus principales ejecutivos” (GRAIN, 2008).

Actualmente, la volatilidad es una característica implícita de los mercados, y esto es así por la importancia que han cobrado el capital especulativo y la movilidad de capital líquido como resultado de la reforma del sistema financiero mundial impulsado por el Consenso de Washington, y de la liberalización del mercado financiero.

La desregulación y liberalización favorecieron enormemente la movilidad del capital, lo que –como apunta Chenais– trajo “consigo la implementación de una economía internacional de valorización del capital bajo su forma financiera” (Chenais, 2004).

La especulación es una característica del actual modelo de acumulación capitalista y hacerlo con los precios de los alimentos, como las grandes empresas transnacionales en aras de obtener mayores ganancias, es atentar contra la vida de millones de pobres de todo el mundo y en particular de México.

La recesión económica mundial combinada con una mejora en la producción mundial de cereales en 2008 –según la FAO considerablemente mayor de lo que se había pronosticado– ha incidido en los precios de los alimentos y a mediados de ese año empezaron a descender aunque sin alcanzar el nivel de 2006, último año de precios más o menos estables.

A fines de octubre Banxico informó que en el tercer trimestre de 2008 se revirtió la tendencia alcista que habían venido mostrando las cotizaciones de los granos en los mercados internacionales, con excepción del arroz. Entre julio y septiembre las cotizaciones del maíz, trigo y soya disminuyeron 23.6, 23.9 y 21.1% respectivamente; en tanto que el arroz aumentó 6.5% (*La Jornada*, 30 de noviembre, 2008).

Con la disminución de los precios de los cereales la situación cambia pero realmente no mejora. Si como vimos antes la especulación en el mercado de los *commodities* es un factor central en el incremento de los precios de los cereales, también lo es en su baja. Ante el temor de la baja de la demanda de cereales por la fuerte recesión económica y un dólar revaluado, las inversiones en materias primas bajan y presionan a las cotizaciones de las materias primas a la baja aunque esto no quiere decir que los productos elaborados con ellas también bajen, con lo que se mantiene el efecto negativo para el consumidor.

En México la disminución de las cotizaciones de los cereales se presenta a la par que la caída drástica de los precios del petróleo, la disminución de las remesas y de las exportaciones, y una fuerte devaluación del peso.¹² Estos factores combinados mantienen el enorme desequilibrio en la balanza alimentaria. Entre septiembre y diciembre el déficit en la balanza de alimentos se incrementó 33 por ciento.

¹² El Banco de México informa que una intempestiva demanda de dólares en el mercado local de cambios elevó ayer a 11.98 pesos el precio de venta de la divisa estadounidense para las grandes transacciones interbancarias, la mayor cotización del dólar en 16 años, tras una caída del peso de 6.86% en una sola jornada (*La Jornada*, 7 de octubre de 2008). Por otra parte, en enero de 2009 la misma institución da a conocer que “en 2008 las remesas representaron para el país un ingreso de divisas por 25 145 millones de dólares, cantidad inferior en 3.6% a las registradas en 2007, revelando que es la primera ocasión que ocurre una variación negativa en este indicador desde 1995, año en que el organismo recoge estadísticas puntuales” (*La Jornada*, 28 de enero de 2009). Además, el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo paso de 122.41 dólares por barril a fines de junio, a 39.73 en noviembre de 2008, quedando por debajo de los 49 dólares por barril considerado en el presupuesto federal.

No obstante que los precios internacionales de los *commodities* han bajado la situación no ha mejorado más bien ha empeorado, pues se importan más alimentos, sale más caro hacerlo y se tienen menos divisas disponibles. En su reporte sobre las perspectivas mundiales 2009 el Banco Mundial señala que “los términos de intercambio para los exportadores de productos básicos se desplomarán, lo que ejercerá presión sobre los presupuestos de varios países” (Banco Mundial, 2009). Este desplome será particularmente para México, que tiene un fuerte nivel de comercio y otros tipos de vínculos comerciales con Estados Unidos.

La respuesta del gobierno ante la crisis alimentaria

Ante este panorama tan crítico, el gobierno mexicano no se ha planteado en ningún momento cambiar de estrategia; por el contrario, ante la crisis alimentaria que se agudizó en los primeros meses de 2008, lo único que atinó proponer fue más de lo mismo. Así, entre la serie de medidas acordadas con el gabinete para enfrentar la crisis se anunció la “apertura total del mercado nacional a la importación de maíz, arroz, trigo, sorgo y pasta de soya proveniente de cualquier parte del mundo, reducción a la mitad del impuesto a las compras externas de leche en polvo y adquisiciones de frijol libres de arancel; además, aseguró que no habría aumento al precio de la tortilla ya que se incrementarán los apoyos para la cadena maíz-tortilla” (*La Jornada*, 26 de mayo de 2008).

El anuncio de este plan remató con una declaración del jefe del Ejecutivo que suena a chiste cruel, al señalar que la seguridad alimentaria es un asunto de Estado, y por ello no toleraría “especuladores ni acaparadores” y que se castigaría “a quienes pretenden lucrar con la necesidad y el hambre de los mexicanos” (*La Jornada*, 26 de mayo de 2008).

Las organizaciones campesinas –en su mayoría– rechazaron las medidas del gobierno pues consideraron que no eran las adecuadas para enfrentar la crisis y que en lugar de revertir el problema lo agravarían. La CNC las consideró como “un planteamiento de coyuntura y reprochable porque el jefe del Ejecutivo federal pretende solucionar con más importaciones el problema del hambre y de la carestía de los alimentos cuando es evidente que se requiere cambiar de política agropecuaria”;¹³ la Unión General

¹³ Como una muestra más de necesidad del gobierno neoliberal, la CNC advirtió que la importación de 100 mil toneladas de frijol libres de arancel llevaría a la quiebra a cientos de

Obrero Campesino Popular (UGOCP) consideró que “se está impulsando una política importadora que no se conduce del campo, porque lo coloca en la quiebra”, y denunció “que las trasnacionales son dueñas de las cosechas de los próximos cuatro o cinco años”; la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), por su parte, sostuvo que “los precios de soya, trigo y maíz se fijan en el mercado internacional y de nada sirve quitar aranceles si los precios internacionales son altos. En la misma situación están los precios de los fertilizantes, los cuales en este momento tienen las cotizaciones más altas de la historia”; finalmente, la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz (CNPAM) argumentó que “no tiene caso abrir las fronteras cuando lo que requieren los campesinos es que los recursos federales se les entreguen a tiempo” (*La Jornada*, 26 de mayo de 2008).

No obstante los reclamos de las organizaciones, en el mes de junio de ese mismo año representantes del gobierno acordaron con las comercializadoras Cargill, Archer Daniels Midland, Minsa y Maseca, entre otras, darles un subsidio mensual al precio del maíz de cien pesos a partir de agosto sobre un precio de 3 450 pesos que “se suma a la entrega de 190 pesos por flete y 185 por almacenaje y pignoración por cada tonelada de grano” (*La Jornada*, 2 de junio, de 2008).

Este acuerdo demuestra el gran poder y el fuerte control que sobre el mercado de alimentos e insumos tienen los grupos empresariales mencionados, pero también la falta de voluntad e incapacidad del gobierno para enfrentar la crisis alimentaria. De tal manera que hoy más que nunca la seguridad alimentaria del país depende de las empresas trasnacionales que en buena medida son al mismo tiempo las causantes de dicha crisis. Así, en un escenario difícil como el que se presentó en la primera mitad de 2008, la alimentación de la población quedó en manos de dichas empresas, colocando al país en una posición vulnerable.

EL MERCADO NACIONAL DE GRANOS Y SU INJERENCIA EN LA CRISIS ALIMENTARIA

Si bien las condiciones del mercado internacional de granos y el control que ejercen los grandes grupos trasnacionales han incidido de manera par-

productores de una decena de estados, ya que había suficiente oferta para el mercado nacional” (*La Jornada*, 23 de julio de 2008).

ticular en la escasez de alimentos e incrementos de los precios, existen también condiciones específicas del mercado nacional que no sólo tuvieron un papel decisivo en el agravamiento de esta crisis, sino que hoy en día continúan determinando un escenario adverso tanto para los productores de granos básicos en el país como para los consumidores finales.

La batalla por los mercados alimentarios, la búsqueda de mejores precios a las cosechas campesinas, que muchas veces no se expresa claramente a escala nacional, se vive cotidianamente en los ámbitos local y regional, donde los intermediarios menores y grandes llevan a cabo estrategias para deprimir los precios de los granos más allá de las referencias internacionales, generando condiciones de “competitividad” que rebasan las capacidades de los campesinos organizados para construir mercados más justos y equitativos. Esta es una lucha sin cuartel, sin concesiones, pero hay que decir que las ventajas de las grandes empresas se han dado con la anuencia y apoyo gubernamental.

Esto se hizo evidente con la crisis de la tortilla, pues al calor del segundo pacto para estabilizar el precio del alimento, se canalizaron dos mil millones de subsidios públicos a no más de 20 grandes empresas harineras, comercializadoras y del sector pecuario por “hacer el favor” de comprar la cosecha de maíz de Sinaloa, sin ningún compromiso a cambio para bajar los precios del maíz, la harina de maíz, las tortillas o los productos de origen animal. El recurso público se entregó mediante un programa de Sagarpa y Aserca que subsidió en proporciones de 40 a 80% los fletes del maíz a diferentes destinos y cubrió 50% de las prima de cobertura de precios (Suárez, 2007).

Otra medida frente a la crisis fue aumentar al doble las cuotas de importación del maíz, es decir, el acceso de hasta 13 millones de toneladas del exterior que llegarían entre los meses de febrero y marzo (García y Keleman, 2007). La medida respondía nuevamente a los intereses de empresas agrupadas en el Consejo Nacional Agropecuario, las cuales exigieron un aumento del cupo de importación a dos millones 850 mil toneladas de maíz para consumo de aves, cerdo y ganado, lo cual les permitiría, en teoría, frenar los aumentos de otros básicos como el huevo y la carne (*La Jornada*, 19 de enero de 2007).

El fracaso del primer pacto dejó claro que el problema de fondo no se encontraba solamente en el aumento de los precios internacionales, sino que había causas estructurales como la especulación en el mercado interno, el aumento en los precios de los insumos de la cadena maíz-tortilla y el

manejo nacional del abasto bajo una visión neoliberal (García y Keleman, 2007). Incluso el gobernador del Banxico, Guillermo Ortiz, mostró preocupación por los efectos inflacionarios del incremento del precio de la tortilla y llamó a “combatir enérgicamente a los especuladores” como una acción urgente para “garantizar la estabilidad macroeconómica”.¹⁴

De esta manera, la crisis alimentaria dejaba ver un nuevo rostro: el de los consorcios agroalimentarios nacionales. Visto así, no es suficiente ubicar la explicación de la crisis en las causas externas, sino que ésta se agrava y adquiere sus especificidades en los ámbitos local y regional. Además de empresas como Maseca,¹⁵ Bimbo, Bachoco¹⁶ o Minsa,¹⁷ existen otras que en el ámbito regional, concentran y acaparan los granos y controlan sus precios. Empresas como Altex, filial de Bimbo, compra las cosechas de los productores de trigo; los productores de sorgo se enfrentan no sólo a Bachoco, sino a empresas como Malta Texo, que también adquiere el grano en condiciones ventajosas; la empresa sonoreNSE Grupo Mazón,¹⁸ que adquiere las cosechas regionales de los principales granos; el Grupo Viz¹⁹ tiene una importante injerencia en el mercado del sorgo y maíz de algunas regiones; en Puebla y Oaxaca opera el Grupo Romero,²⁰ importante com-

¹⁴ Según consignó la prensa el 12 de enero de 2007, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, declaró en un seminario en el ITAM que los aumentos en los precios de la tortilla y del azúcar obedecían a acciones de especuladores y acaparadores, así como a un mercado poco competitivo. *El Universal* citó a Ortiz en el sentido de que “los incrementos son injustificables y pidió a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto” (*El Universal*, 12 de enero de 2007).

¹⁵ Maseca controla alrededor del 70% del mercado de harina de maíz, con una capacidad manufacturera de 2.3 millones de toneladas.

¹⁶ En 2005, esta empresa controlaba más del 30% de la producción nacional de pollo. Cuenta con más de 400 plantas productoras de pollo, huevo y alimento balanceado.

¹⁷ Esta empresa comparte con Maseca y Agroinsa el mercado de harina de maíz. Cuenta con ocho plantas en México y dos en Estados Unidos.

¹⁸ El Grupo Mazón se encuentra vinculado a negocios agropecuarios, bienes raíces y tiendas departamentales. Uno de sus socios, Jorge Mazón, fue presidente del Consejo Nacional Agropecuario.

¹⁹ Esta empresa es propietaria de las marcas Sukarne y Mezquite. Es una importante productora de carne en canal y en caja, carne de pollo y puerco y comercializadora de pescados y mariscos.

²⁰ Esta empresa avícola y porcícola, encabezada por Socorro Romero, cuenta actualmente con más de 17 millones de ponedoras en la región de Tehuacán, Puebla, y ha iniciado contratos con productores de sorgo en Oaxaca para la producción de carne de cerdo. El Grupo Romero es dueño de la marca de huevo El Calvario.

prador de maíz y sorgo; en Jalisco y Nayarit se encuentra industrias Melder,²¹ la cual no sólo compra las cosechas de maíz y sorgo de campesinos en la región sino que es un importante comercializador de semillas híbridas y alimentos balanceados; en Chihuahua, la disputa por el mercado de maíz amarillo es con la empresa Lala, a través de comercializadores locales; en Chiapas, los productores de maíz no sólo enfrentan a Maseca, Minsa y Sumasa,²² sino al propio gobierno, que a través de Diconsa malbarata las cosechas del grano. Es decir, que el rostro de las empresas es multifacético y en cada región adquiere mecanismos únicos para arrebatar los excedentes campesinos.

Una de las principales estrategias de estos consorcios agroalimentarios se sustenta en la capacidad económica y de infraestructura que les permite controlar las importaciones y distribución nacional de granos. En los mercados locales y regionales, los intermediarios vinculan a las empresas con productores, generalmente desorganizados o con poca infraestructura, para comprar las cosechas. El mecanismo para abaratar la producción de granos casi siempre es la presión que ejercen al adquirir grandes volúmenes y prolongar la compra. Empresas como Bimbo, Maseca y Minsa colocan sus centros de acopio y distribución cercanos a las zonas de grandes productores, “despreciando” las cosechas de los pequeños campesinos quienes frente a las presiones del mercado muchas veces terminan por abaratar su producción.

Desde diferentes esquemas estas empresas logran generar condiciones de mercado adversas para los productores nacionales, quienes en un marco de liberalización comercial, de manera organizada y de lucha por la continuidad de la actividad campesina productora de alimentos y de la soberanía alimentaria, compiten de manera desleal frente a estas corporaciones.

Es importante insistir en que esto es posible por los múltiples apoyos que reciben las empresas de los diferentes niveles de gobierno. Éstos pueden ir desde autorizaciones para exportar maíz blanco a Estados Unidos, Centro y Sudamérica para abastecer sus plantas de harina,²³ desvío de cosechas del

²¹ Industrial Melder es propiedad de Francisco Mayorga Castañeda, director de Aserca y posteriormente secretario de Agricultura en el sexenio de Vicente Fox.

²² Suministros de maíz del Mayab, es una empresa que opera en el sureste, especialmente en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán. Según datos de Sagarpa-Aserca, la empresa fue beneficiada con más de 16 millones de pesos del erario público entre 2005 y 2007 por el concepto de apoyos de cabotaje y/o flete terrestre de maíz blanco de Sinaloa.

²³ Frente a las primeras señales de la crisis alimentaria que se avisoraba, la Secretaría de Economía autorizó, a mediados de 2006, la exportación de 1.5 millones de toneladas de maíz blanco.

mismo grano para uso de forrajes en empresas pecuarias de Sonora, Sinaloa y Jalisco; indiferencia ante el monopolio de empresas como Maseca, que concentran 80% del mercado de harina de maíz o de empresas como Cargill de México que dominan la comercialización y las importaciones de granos; subsidios disfrazados para favorecer importaciones de granos en plenas cosechas a escala nacional; aumento de cuotas de importación como medidas para “enfrentar” la crisis alimentaria, hasta apoyos para financiar los incrementos en el costo de los combustibles por parte de Aserca.

En los últimos meses, estos mecanismos de apoyo gubernamental han sido más evidentes por el desorden en el mercado del sorgo, maíz y trigo. Productores de varias regiones del país tienen almacenadas miles de toneladas de estos granos ante la negativa de malbaratar sus cosechas, pues no sólo las comercializadoras privadas han puesto en operación prácticas anticompetitivas y especulativas que castigan los precios de los productores,²⁴ sino que el gobierno ha favorecido a muchas de estas empresas²⁵ mediante la asignación de fondos emergentes para almacenaje de granos y oleaginosas aprobados por la Cámara de Diputados, originalmente destinados para pequeños y medianos productores (*La Jornada*, 17 de junio de 2009).

Hay que señalar además, que de la mano de su capacidad económica y de los múltiples apoyos gubernamentales se encuentra el factor político, pues varios de los socios de estas empresas están estrechamente vinculados con el poder político en México; incluso algunos de ellos han desempeñado cargos públicos importantes. Eduardo Bours Castelo, por ejemplo, dueño mayoritario de Bachoco, fue negociador y representante del sector privado en el TLCAN, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y actualmente gobernador del estado de Sonora; Jesús Vizcarra Calderón, socio mayoritario de Grupo Viz, fue diputado federal en la LIX Legislatura, presidente de la CNA y actualmente presidente municipal de Culiacán; Socorro Romero, lide-

²⁴ Durante junio de 2009, productores de 12 estados del país realizaron diversas manifestaciones, ya que tienen almacenadas más de 150 mil toneladas de maíz y trigo que no encuentran salida frente a la ínfima oferta de las comercializadoras privadas. En el caso del maíz, el precio internacional se ubica en 3 200 pesos la tonelada, mientras que la oferta de las empresas es de 2 450; el trigo se paga en el mercado internacional a 3 250 pesos y las empresas ofrecen 2 650 (*La Jornada*, 9 de junio de 2009).

²⁵ En Tamaulipas, empresas comercializadoras como Merco Grey, Granero, San Juan e Impulsora Mexicana de Productos Agrícolas, contribuyeron al desorden del mercado de sorgo al incumplir contratos de compra-venta y especular con el grano (*La Jornada*, 17 de junio de 2009).

resa del Grupo Romero en Puebla, ha tenido durante décadas, un papel decisivo en la imposición de candidatos priístas en la región.

Así las cosas, resulta que los productores nacionales, los organizados y los dispersos, se enfrentan a condiciones desleales del mercado, pues éste se encuentra dominado por grandes consorcios que entrelazan su poder económico con prebendas gubernamentales y privilegios políticos que permiten reforzar su dominio y acrecentar sus negocios. ¿Cuáles son las estrategias que los campesinos excedentarios han impulsado para disputar el mercado agroalimentario a estas empresas y con ello impulsar la lucha por la soberanía alimentaria?

La organización campesina y la lucha por la soberanía alimentaria

Los pequeños productores agrícolas –tanto aquellos que obtienen excedentes para la venta como los que producen principalmente para el autoconsumo– han sido los más afectados por el deterioro de la soberanía y el aumento de la dependencia alimentaria, pero al mismo tiempo han resistido y han luchado de diferentes formas y desde diferentes espacios por el derecho a producir sus propios alimentos para el sostenimiento de sus familias. Las formas de resistir y luchar en torno a esta demanda fundamental son diversas; se dan desde diferentes trincheras y en distintos ámbitos, y van desde lo local hasta lo global, pasando por lo regional y nacional. Esta lucha pasa por la necesidad de seguir siendo campesinos y campesinas e implica su negación a desaparecer como trabajadores de la tierra.

Enarbolada como bandera desde 1996 tanto por la organización internacional Vía Campesina como por diversas organizaciones mexicanas, y puesta en el centro del debate pocos años después, la soberanía alimentaria se ha convertido en una demanda fundamental del movimiento campesino y adquiere mayor dimensión en el 2008 debido a la crisis alimentaria.

La importancia de la lucha por la soberanía alimentaria de los pueblos adquiere mayor relevancia y trascendencia no sólo por las dramáticas manifestaciones y revueltas de multitudes hambrientas que se dieron en diferentes partes del mundo en la primera mitad del 2008 como consecuencia de la crisis alimentaria,²⁶ sino también porque los defensores del neoliberalismo

²⁶ En Haití, el 3 de abril, manifestantes en la ciudad sureña de Les Cayes erigen barricadas, detienen camiones que transportaban arroz y lo distribuyen; en la capital, miles marchan hacia

lismo tratan de ocultar que las causas de fondo de este flagelo están en la liberalización comercial y financiera y en el control monopólico que las grandes empresas transnacionales ejercen sobre el sistema alimentario, por lo que lejos de promover cambios de fondo tendientes a resolver la situación, lo que proponen es más de lo mismo.²⁷

*Los campesinos excedentarios de granos
y la lucha por la soberanía alimentaria*

La función que durante décadas cumplió la agricultura campesina como proveedora de alimentos comenzó a debilitarse hacia finales de la década de 1960, y es con el cambio del modelo de acumulación de capital, que tiene como uno de sus ejes la apertura comercial, que la situación se agrava. Sin embargo, lo que nos interesa destacar es cómo, a pesar de años de abandono estatal y de las importaciones masivas de alimentos, los productores nacionales continúan cultivando importantes cantidades de granos básicos que han permitido frenar una mayor dependencia alimentaria.

En el caso de los campesinos excedentarios, es decir de aquellos que no sólo producen para el autoconsumo sino que colocan en el mercado nacional un importante margen de su producción,²⁸ la lucha por la soberanía

el palacio presidencial gritando ¡Tenemos hambre! En Burkina Faso, una huelga general de dos días de sindicatos y comerciantes exige reducciones importantes y efectivas en el precio del arroz y de otros alimentos básicos. En Bangladesh, más de 20 mil trabajadores textiles en Fatullah se declararon en huelga para exigir precios más bajos y salarios más elevados. En Abidjan, Costa de Marfil, miles marchan a la casa del presidente, gritando ¡Tenemos hambre! y ¡La vida es demasiado cara, nos estás matando! Protestas similares tienen lugar en Camerún, Etiopía, Honduras, Indonesia, Madagascar, Mauritania, Níger, Perú, Filipinas, Senegal, Tailandia, Uzbekistán y Zambia.

²⁷ Tan es así que el gobernador del Banco de México afirma “que el éxito –para recobrar el rumbo del crecimiento y la generación de empleos– dependerá de iniciar inmediatamente las reformas económicas que se requieren para flexibilizar los mercados, salvaguardar el Estado de derecho y elevar la competitividad de la economía en su conjunto. No hay otra fórmula para la prosperidad y el desarrollo de la población” (*La Jornada*, 21 de marzo de 2009).

²⁸ Según las propias estimaciones de la Sagarpa, a través de su sistema de información, de la última cosecha de maíz blanco, que fue cercana a 24 millones de toneladas, fueron comercializables casi 70%, lo cual indica que incluso aquellos pequeños productores de maíz logran colocar en el mercado nacional una importante producción que en su mayoría es canalizada al consumo humano.

alimentaria se manifiesta en dos sentidos: por un lado, en la tenaz persistencia de su actividad agrícola en el marco de la búsqueda de mejores condiciones del mercado; y por otro, en el ámbito de la movilización social para revertir las políticas neoliberales.

Los campesinos excedentarios siempre han estado ligados al mercado, sin embargo las condiciones de éste se han transformado significativamente en el marco de la liberalización comercial y la privatización de entidades estatales. Así, mientras en las décadas de 1960 y 1970 los productores de granos básicos lograban comercializar buena parte de sus cosechas a través del sistema Conasupo, hoy en día el libre mercado se caracteriza por estar altamente segmentado pero concentrado al mismo tiempo. Se estima que del total de la oferta de granos, 65% es acaparada por empresas comercializadoras que van desde firmas trasnacionales hasta “bodegueros” locales que aparecen como “prestadores de servicios”, pero que en la práctica operan como pequeños y medianos “coyotes” al servicio de las grandes empresas;²⁹ el resto de las cosechas es comercializado por organizaciones campesinas.³⁰ El mercado agroalimentario se caracteriza entonces por la existencia de un gran número de compradores dirigidos³¹ por unas cuantas empresas nacionales y trasnacionales agroalimentarias, frente a una oferta altamente desorganizada.

Esta situación ha provocado un evidente deterioro de las condiciones de vida de los productores de granos. Para enfrentarla el gobierno ha considerado como estrategia impulsar la agricultura por contrato y canalizar los

²⁹ En los últimos ciclos, en la región del Bajío, se calcula que las trasnacionales comercializan alrededor de 20% de los granos; los comercializadores nacionales 25%, mientras que los locales y regionales concentran otro 20 por ciento.

³⁰ Entrevista con Ismael Flores, director de Siacomex (ANEC, 2009).

³¹ En esta complejidad del mercado alimentario en los ámbitos local y regional, si bien los compradores locales aparecen desligados de las firmas nacionales como Bachoco, Bimbo o Maseca, o bien de empresas como Cargill, ADM y Bunge, lo cierto es que éstas son las que manipulan el mercado a través de la determinación de precios, “enviando” las señales al resto de los compradores. Estas empresas no cuentan con mucha infraestructura, no arriesgan, sino que por un lado rentan bodegas pero sobre todo operan con compradores locales, quienes ofrecen servicios de acopio, almacenamiento y procesamiento de granos a estas empresas y quienes se considera, según entrevista con Ismael Flores, hacen el trabajo sucio a los grandes consumidores. Así, tanto los productores desorganizados como los propios comercializadores a pequeña escala, están sometidos a las reglas del mercado que imponen las grandes empresas. Se considera que en el caso del Bajío para maíz blanco, quien realmente determina el precio son Maseca, Minsa y Cargill.

subsidios por medio de los compradores. Sin embargo, las importaciones masivas de cereales por parte de las empresas privadas,³² incluso en plenas cosechas a escala nacional, han provocado la saturación de los mercados y el desplome de los precios internos (Steffen, 2003).

Enfrentarse a las nuevas condiciones del mercado resulta pues sumamente complicado, de tal suerte que construir alternativas viables ha obligado a desplegar una constante y creativa renovación organizativa, social y política.

En esta dinámica, la movilización social de los campesinos excedentarios ha tenido la claridad de demandar la revisión de las políticas neoliberales, es decir, no sólo basta disputar continuamente los mercados regionales, sino que resulta obligado proyectar la lucha hacia un nuevo marco regulatorio por parte del Estado. En este sentido se ubican precisamente las demandas centrales de lo que fue el movimiento “El campo no aguanta más” (MECNAM) y de lo que hoy en día es la campaña “Sin maíz no hay país”.³³

La discusión por la soberanía alimentaria comenzó a cobrar vida significativamente desde agosto de 1996, dos años después de la entrada en vigor del TLCAN y de sus primeros efectos en los productores excedentarios, pero en 2003 logró colocarse en la agenda nacional precisamente con las primeras movilizaciones del MECNAM, cuya principal base social sin duda fueron los campesinos medios de este país, productores excedentarios de granos básicos y algunos pequeños exportadores de café, pimienta y miel, entre otros.

³² A partir de una serie de entrevistas, Cristina Steffen ha documentado cómo los consorcios agroalimentarios de todas las escalas, han tenido una mayor incidencia en la determinación de precios, sobre todo a partir de las importaciones. Así, plantea cómo Bimbo importa la mayor parte de su trigo; Maseca 30% del maíz que hariniza; Gamesa ha disminuido sus compras nacionales incrementando las importaciones; Tablex, procesa al año 112 mil toneladas de importación; Bachoco, que compraba cerca de 200 mil toneladas de sorgo al año en el Bajío, ha disminuido drásticamente sus adquisiciones a 30 mil en el ciclo 2000-2001 (Steffen, 2003).

³³ La lucha por la soberanía alimentaria ha sido una exigencia del movimiento campesino mexicano al menos desde 1995, recuperada en 2003 por el MECNAM y consolidada por la campaña “Sin maíz no hay país” desde 2007. La estrategia ha tenido importantes avances y se ha colocado en el debate no sólo por los evidentes saldos negativos de la política neoliberal sino, ante todo, porque la agricultura mundial entró en una nueva fase de precios altos y el avance de la hambruna (*La Jornada del Campo*, 13 de mayo de 2008).

No es casual, 2003 marcaba casi diez años de apertura comercial y los campesinos, que históricamente han producido para el mercado, comenzaron a resentir más claramente los efectos de ésta, así es que podríamos decir que el MECNAM surgió y se consolidó al calor de los primeros signos de la crisis alimentaria.

En este terreno, en los últimos años las manifestaciones más importantes del movimiento campesino a escala nacional, también han reivindicado de manera sobresaliente el tema alimentario. En 2007 por ejemplo, en el contexto de las movilizaciones de enero de ese año y como producto de la llamada Declaración del Zócalo, se elaboró una propuesta por la soberanía alimentaria en la que se planteaba, entre otras cosas, un “programa emergente de impulso a la producción y productividad sustentable de maíz y frijol (y de una canasta alimentaria básica) bajo los principios de soberanía alimentaria y constitución de una reserva estratégica de maíz blanco que impida la especulación, renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, exclusión del maíz blanco y el frijol y combate a los oligopolios y la especulación en el sector agroalimentario” (*La Jornada*, 1 de febrero de 2007).

En junio del mismo año se lanzó oficialmente otra iniciativa en torno a la lucha por la soberanía alimentaria: la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y por la Reactivación del Campo “Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco. ¡Pon a México en tu boca!”. La campaña fue impulsada por organizaciones de la CONOC, ANPAB-Barzón, CNPA, AMAP, GEA, Greenpeace, Comercio Justo México, Instituto Maya, Oxfam y más de 300 organizaciones, intelectuales, artistas, científicos y ciudadanos de pie (*La Jornada del Campo*, 12 de febrero de 2008). A partir de ahí, múltiples, vigorosas y creativas manifestaciones han caracterizado esta lucha por el derecho a la alimentación.³⁴

Estas manifestaciones sociales han adquirido un carácter nacional y han tenido una gran trascendencia en tanto han incorporado a otros sectores de la sociedad; sin embargo la lucha cotidiana por la soberanía alimentaria

³⁴ La campaña busca reunir un millón de firmas de apoyo que serán enviadas al Congreso y al gobierno federal para exigir que se vigilen las importaciones y exportaciones de maíz y frijol; prohibir la siembra de maíz transgénico en México; aprobar el Derecho Constitucional a la Alimentación y la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional por la Cámara de Senadores y promover que el maíz mexicano y las expresiones culturales que involucra se inscriban en la Lista de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, por la UNESCO.

está en realidad en las localidades y regiones en las que los productores organizados enfrentan día a día a las empresas agroalimentarias ya mencionadas.

Las estrategias de las organizaciones de productores de granos básicos son múltiples. A partir del trabajo colectivo han logrado compactar la oferta de granos y con ello buscar mejores precios; han creado instrumentos financieros para anticipar el pago de sus socios; han impulsado políticas de subsidios para apoyar la comercialización; han buscado diferentes mecanismos para agregar valor a sus cosechas.

En principio, una parte de estos campesinos organizados han tenido que construir mercados alternativos que los han llevado a vender sus cosechas a Diconsa y a la industria de la masa y la tortilla, sector que resulta una opción frente a los grandes consumidores³⁵ y a quienes se acude ofreciendo el maíz con cierto valor agregado (almacenamiento, envasado, conservación, encostalado, cribado o transportación). En la fase de la disputa por los mercados agroalimentarios estos canales de comercialización resultan una opción porque a partir de la organización es posible ofertar un producto y servicios adecuados a las necesidades de los consumidores.³⁶ La apuesta a futuro, sin embargo, es construir mercados alternativos solidarios que permitan intercambiar la producción campesina con zonas de consumo también campesinas.

Es decir, la lucha por la soberanía alimentaria es una batalla cotidiana en las regiones productoras de alimentos mediante estrategias sociales de organización que se expresan en alternativas económicas para mejorar las condiciones de comercialización. En este sentido es importante señalar que los campesinos excedentarios que enfrentan a estas empresas, lo hacen desde la organización social, sin ésta los productores quedan en manos de las comercializadoras privadas.

La estrategia principal es lo que las organizaciones llaman “administración campesina de la oferta” o “reordenamiento del mercado”, esto es, un mecanismo de intervención en el mercado que se expresa mediante diferen-

³⁵ Se calcula que la industria de la masa y la tortilla abarca entre 45 mil y 60 mil establecimientos a escala nacional y que procesa cerca de tres millones de toneladas de maíz al año. Este sector no cuenta con infraestructura; tiene una demanda constante semana a semana; generalmente requieren de un maíz muy cribado y aquintalado, a la puerta de su molino, condiciones que se convierten en oportunidades para los productores organizados.

³⁶ Entrevista con Ismael Flores, director de Siacomex (ANEC, 2009).

tes modalidades en las distintas regiones y cultivos, pues otra característica del mercado agroalimentario es que opera diferenciadamente en las zonas productoras y con dinámicas distintas por cultivo e incluso por ciclo productivo, de tal manera que tendríamos que hablar de la existencia de mercados regionales y de una lucha por parte de los campesinos excedentarios que se ubica en el ciclo primavera-verano, ya que en este periodo se concentran los productores temporaleros.³⁷

El mayor control de la oferta y ordenamiento de la misma, está sustentada en tres condiciones mínimas que han desarrollado muchas organizaciones en los últimos años: organización empresarial campesina; capacidad financiera y de administración de riesgos, así como contar con infraestructura y equipo. Si bien los intermediarios cuentan también con muchos de estos elementos, la diferencia es que la organización campesina cumple una función social en las regiones, no sólo porque equilibra las fuerzas en el mercado de granos, sino porque mejores precios mejoran tanto el ingreso familiar como la vida comunitaria. De esta forma, aunque intermediarios y productores organizados entran al juego del mercado, la diferencia radica en que las organizaciones, además de establecer mecanismos más democráticos en la toma de decisiones y operaciones comerciales, buscan mediante diversos mecanismos, sobrepuestos que son redistribuidos entre los socios o canalizados por medio de proyectos sociales. Mientras la lógica de cualquier intermediario es comprar barato y vender caro, las llamadas empresas campesinas³⁸ operan bajo un concepto de vender a precios competitivos al consumidor con el mejor precio al productor.³⁹

Hay que señalar que la diferenciación de los mercados agroalimentarios frente a los diferentes niveles de desarrollo de las organizaciones de campesinos excedentarios, ha generado también logros distintos en los mercados regionales. En el caso de productores asociados a la ANEC, en los últimos ciclos se ha logrado acopiar y comercializar cerca de 50% del volumen de maíz de Nayarit; en Campeche, aun con las deficiencias de los procesos en

³⁷ La complejidad del mercado y de las estrategias para enfrentarlo está asociada al hecho de que la producción de granos básicos se concentra en un corto periodo, mientras que la demanda es constante, de tal manera que hay que “administrar” las cosechas lo mejor posible porque de ello dependen mejores condiciones de comercialización.

³⁸ El concepto de empresa campesina los ha llevado a construir nuevos liderazgos, la necesidad de una continua capacitación, la obligación de incorporar nuevas tecnologías, un nuevo lenguaje empresarial sostenido en beneficios sociales.

³⁹ Entrevista con Ismael Flores, director de Siacomex (ANEC, 2009).

el estado, las organizaciones también han logrado comercializar 50% de este grano; en Tamaulipas, las organizaciones de ANEC ya controlan 20% del sorgo.

Para estos campesinos, enfrentar las nuevas condiciones del mercado ha significado una transformación de su cultura organizativa, de sus prácticas sociales y de su relación con el Estado. Ya no basta con exigir la asignación de recursos públicos, intervenir en la discusión de las reglas de operación de los programas de gobierno o participar en los distintos comités estatales, si bien esto ya marca una nueva forma de “hacer política” y una nueva relación con el Estado, en el terreno concreto, la lucha también está en la disputa por los mercados agroalimentarios.

Parece una gran contradicción, una ironía del destino, pues lo que aquí se plantea es que para enfrentar al neoliberalismo los campesinos lo están haciendo “entrándole” al mercado, es decir, compitiendo, pero como planteaba un analista en torno de los pequeños granjeros de Estados Unidos, “si en esta pelea van a prevalecer los valores sociales de la gente, se debe comenzar por defender el espacio del mercado contra el poder de colusión de los monopolios emergentes” (Greider, 2001).

Así, para resistir al neoliberalismo y enfrentar la crisis alimentaria, los campesinos excedentarios están utilizando como instrumento al propio mercado, pero aquí la alternativa es que éste sea equitativo y justo. Como señala De Souza, de lo que se trata es de construir alternativas económicas concretas, graduales, viables en el contexto del dominio del capitalismo, pero fundadas en principios no capitalistas. En este sentido, el autor plantea justamente que una de las estrategias es la “vuelta hacia lo local”, en la que cotidianamente los campesinos excedentarios de granos en México, le han dado una nueva dimensión al mercado corporativo dominante.⁴⁰

La acción social desde este nivel genera en el terreno concreto alternativas no sólo de resistencia, sino que modifican realmente las condiciones de “hacer” mercado. Sin embargo, estas experiencias tienen que articularse con otros niveles de resistencia y de transformación y en ese sentido es que la movilización social que generó el MECNAM y la campaña “Sin maíz no hay país” adquieren sentido en la lucha por la soberanía alimentaria.

⁴⁰ Véanse otras ideas que se desarrollan en este sentido, en De Souza y Rodríguez (2006).

La lucha por la soberanía alimentaria de los campesinos pobres

Otra expresión de la lucha campesina por la soberanía alimentaria, menos visible pero no por eso menos importante, es la que llevan a cabo cotidianamente decenas de miles de unidades familiares campesinas e indígenas del país, cuyo objetivo principal es asegurar el autoabasto de alimentos, particularmente de los granos básicos como maíz y frijol, no obstante que eventualmente algunas de ellas también obtienen pequeños excedentes de esos granos que venden localmente.

De acuerdo con fuentes oficiales, de la producción nacional de maíz, que en 2008 fue de 23 millones 333 mil toneladas, cerca del 30% se destina al autoconsumo familiar y el 70% restante se comercializa (Sagarpa, 2009). Sin embargo, en entidades como el Estado de México, Puebla, Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Yucatán la producción de ese cereal que se destina directamente para la alimentación familiar es mucho mayor (Sagarpa, 2009); de acuerdo con Aserca, en 2006, 56% de los productores de maíz sembraron menos de dos hectáreas, cuya cosecha destinaron principalmente al autoconsumo familiar. Por otra parte, según las mismas fuentes, aproximadamente 20% de la producción total de frijol se destina al autoconsumo, aunque al igual que en el caso del maíz, hay estados donde el porcentaje es mucho mayor (Sagarpa, 2006).

Este tipo de unidades familiares campesinas desarrollan estrategias complejas para garantizar su alimentación y reproducción social, cuya diversificación de actividades es una de sus principales características: el cultivo del maíz de manera combinada o por separado con otros productos como frijol, chile, calabaza, ajonjolí, jamaica, pimienta, copra, café, cacahuete, frutales diversos y arvenses;⁴¹ la economía de traspatio con la cría de gallinas, guajolotes, chivos, borregos, cerdos e incluso algunas cabezas de ganado mayor; el trabajo a jornal en determinadas temporadas del año; la elaboración de diversas artesanías de distintos materiales y los ingresos vía remesas de algunos integrantes de la familia, conforman un complejo sistema cuyo objetivo principal es la autosuficiencia alimentaria y la subsistencia.

En esencia, lo que producen estas familias campesinas no son mercancías sino productos que tienen como objetivo primordial garantizar la alimentación y satisfacer las necesidades básicas, no obstante que eventualmente ten-

⁴¹ La combinación de cultivos depende del clima, de las cualidades agroecológicas de las parcelas y de los mercados regionales de productos.

gan que acudir al mercado a vender parte de su producción o su fuerza de trabajo. Las diversas estrategias que despliegan miles de campesinos que producen principalmente para el autoconsumo forman parte de la lucha por la soberanía alimentaria. Aquí nos referiremos específicamente y en forma somera a sus estrategias productivas.

El uso de los abonos químicos, promovidos por la llamada revolución verde –que al mismo tiempo que permiten la sobreutilización de la tierra le van restando productividad– ha creado dependencia hacia estos insumos y muchos campesinos lo usan por necesidad, pues si no los rendimientos son muy bajos o simplemente la cosecha no se da. Por otro lado, la práctica de asociación de cultivos, propia de la milpa tradicional (maíz, frijol, calabaza y una gran variedad de plantas), se ha deteriorado en buena medida con el uso de herbicidas, de tal manera que se ha inducido al monocultivo,⁴² sin embargo, los productores buscan nuevas alternativas y definen otras estrategias.

Muchos campesinos que producen principalmente para el autoconsumo recurren a las semillas mejoradas y por ende a los agroquímicos, porque venden un poco de su producción de maíz y ese tipo de semilla alcanza mejores rendimientos y tiene más peso; sin embargo, no dejan de sembrar semillas criollas que ellos mismos seleccionan y la intercalan con otros cultivos como el frijol y la calabaza, porque, por un lado, consideran que obtienen un cereal con mejor calidad nutricional, las tortillas son de mejor calidad y va mejor con sus gustos y su cultura y, por otro, obtienen otros productos básicos para la alimentación de la familia.

Debido a que por tratarse de cultivos cíclicos, la cosecha se obtiene en un tiempo determinado mientras que el consumo de alimentos es constante, la mayoría de estas familias cuando pizca el maíz y el frijol crea su propia reserva con la intención de tener alimento para sus integrantes el mayor tiempo posible y si se puede para todo el año.⁴³ El tiempo de duración de esta reserva depende del volumen de maíz cosechado, del número de miembros

⁴² En muchos casos se tiene que recurrir al fertilizante químico porque de lo contrario los rendimientos son muy bajos o simplemente la cosecha no se da. Muchos productores utilizan fertilizantes inadecuados a las características agroecológicas de la tierra porque son los más baratos. Es común que los herbicidas se usen porque con ellos se reduce sustancialmente el costo de la limpia de la parcela, sobre todo debido a que la mano de obra se ha encarecido por la fuerte migración.

⁴³ Las prácticas para conservar las reservas de maíz son diversas dependiendo de las condiciones climatológicas de cada región y de los recursos con los que cuentan las familias campesinas.

de la familia y de los animales de traspatio, y en función de eso se define si hay que comprar —ya sea en forma de harina o en grano— o si se puede intercambiar un poco en la comunidad. Asimismo, la intención de tener esta reserva es tratar de garantizar la alimentación durante épocas críticas.⁴⁴ Pero además, en la medida en que tengan grano suficiente para satisfacer sus necesidades de consumo probablemente no se verán obligados a comprar el grano a un precio mayor, por lo que desde esta perspectiva, la semilla se convierte en un ahorro al que recurren conforme lo necesitan.

Las unidades de producción familiar que tienen excedentes de maíz y no lo venden a los intermediarios y acaparadores, lo intercambian por otros bienes con integrantes de la misma localidad, más bien bajo el principio de la reciprocidad, en la misma lógica bajo la cual se realiza el intercambio de trabajo o lo que se conoce como “mano vuelta”, relación que no pasa por un pago con dinero.

Casi todas combinan productos destinados principalmente al autoconsumo con otros dirigidos a la comercialización. La lógica de estas combinaciones se sustenta en que de esta forma el ingreso monetario que obtienen por la venta de estos últimos les proporciona liquidez para financiar algunas actividades de los primeros, además de que eventualmente les sirven también para cubrir otras necesidades de la familia. El componente monetario no está ausente en las unidades de producción familiar, pero está en función del consumo de los integrantes de la familia.

En esta tesitura, normalmente el maíz se combina con cultivos comerciales de ciclo más corto con el fin de cosecharlos y venderlos antes de la cosecha de maíz, de tal forma que con el dinero de su venta el campesino puede cubrir —en mayor o menor medida— los gastos de la pizca, desgrane y acarreo del maíz financiándose así actividades fundamentales de la cosecha del grano básico, de manera que esto les permite tener recursos monetarios sin verse obligados a vender el cereal, fundamental para la alimentación de la familia.

Las diversas actividades de traspatio de las unidades familiares son parte relevante de sus estrategias para alcanzar la autosuficiencia alimentaria. La producción de huevo, leche, hortalizas y otros productos son complementos importantes de la alimentación de la familia.

⁴⁴ En esencia, era más o menos la misma lógica con la que trabajaba la Reserva Técnica Reguladora operada por la Compañía de Subsistencia Populares (Conasupo), cuyo objetivo era complementar las acciones de regulación y abasto de granos básicos para la población con el fin de preservar la soberanía alimentaria.

Recurrentemente, estas unidades familiares tienen que vender algún animal –marrano, chivo o bovino– o contratarse como jornalero para obtener dinero que les pueda servir para cubrir algunos gastos. Desde esta perspectiva, los animales funcionan como un ahorro al que el campesino recurre con miras a obtener alimentos que la familia no produce o para satisfacer otras necesidades.

Además, frecuentemente tienen que pedir dinero a prestamistas particulares o vender su cosecha –ya sea de manera anticipada o al momento de obtenerla– a intermediarios a precios normalmente bajos para tener liquidez. Esto provoca tensiones en su estrategia para garantizar el abastecimiento de alimentos de la familia. Por eso en algunos casos estos productores, que por sus propias condiciones no tienen acceso al financiamiento convencional u oficial, se han asociado a entidades financieras para ahorrar y recibir crédito o han creado sus propios fondos de ahorro y préstamo; desde esta perspectiva, la constitución de esas instancias financieras autogestivas se convierten en parte de la estrategia familiar para mantener o alcanzar la soberanía alimentaria.

Ante un panorama en el que ni el Estado ni el mercado son capaces de ofrecer el financiamiento en condiciones adecuadas para las unidades campesinas de autoconsumo, estas familias de escasos recursos han buscado nuevas alternativas de financiamiento basadas en la economía solidaria, pues las cajas operan con base en los propios recursos de los socios; ellos son los que definen las reglas del juego; todos tienen los mismos derechos y obligaciones y pueden participar en la administración de la sociedad y en la designación de administradores, y el reparto de los beneficios es en proporción al ahorro y préstamo de cada uno de los socios.

A diferencia del crédito ofertado por la banca comercial u oficial que en general está condicionado a la realización de actividades específicas, los préstamos que reciben de los fondos son de libre disponibilidad y lo pueden utilizar para lo que realmente necesiten.

Poder contar con recursos financieros generados por ellos mismos se convierte en un instrumento importante en la lucha de las familias por la soberanía alimentaria, con el elemento adicional de que dicha posibilidad pasa por la organización y en algunos casos ésta involucra a la comunidad. La posibilidad de obtener financiamiento en condiciones más adecuadas para aumentar la producción de alimentos de la familia es un elemento fundamental para lograr la soberanía alimentaria, misma que, en síntesis, se sustenta en primer término en el sistema alimentario desarrollado por

las familias campesinas e indígenas, que producen principalmente granos que no son mercancías sino productos que satisfacen necesidades básicas. Estas unidades familiares despliegan relaciones de intercambio comunitario basadas en los principios de la reciprocidad y la solidaridad.

BIBLIOGRAFÍA

- ANEC (2009), *Base estadística*, ANEC, México.
- Banco Mundial (2008), *Informe*, 30 de mayo.
- (2009), *Perspectivas económicas mundiales 2009. Actualización de las proyecciones*, 30 de marzo.
- Bello, Walden (2008), “Cómo fabricar una crisis global”, *La Jornada*, 27 de mayo.
- Campaña nacional “Sin maíz no hay país” (2009), “Carta abierta al presidente de los Estados Unidos”, *La Jornada*.
- Chenais, François (2004), *La mundialización financiera. Génesis, costos y desafíos*, Losada, México.
- De Souza, Boaventura y Rodríguez, César (2006), “Para ampliar el canon de la producción” en VV.AA. *Desarrollo, eurocentrismo y economía popular. Más allá del paradigma neoliberal*, Ministerio para la Economía Popular, Caracas, Venezuela.
- Economist Intelligence Unit (2008), “Petróleo: especuladores en la mira”, *La Jornada*, 29 de julio.
- El Universal*, 12 de enero de 2007.
- FAO (2008), *Aumento de los precios de los alimentos: hechos, perspectivas, impacto y acciones requeridas*, junio.
- FAPRI (2009), “Las perspectivas de los mercados internacionales de FAPRI”, IX Foro de Expectativas del Sector Agroalimentario y Pesquero, México.
- FMI (2009), *Perspectivas de la Economía Mundial*.
- García Rañó, Héctor y Keleman, Alder (2007), *La crisis del maíz y la tortilla en México: ¿modelo o coyuntura?*, Colmex/ANEC, México.
- González Chávez, Humberto y Macías Macías, Alejandro (2007), “Vulnerabilidad alimentaria y política agroalimentaria en México”, *Revista Desacatos*, núm. 25, CIESAS, México.
- GRAIN (2008), “El negocio de matar de hambre. Es necesario cambiar radicalmente la política alimentaria ¡ya!”, en *Introducción a la crisis alimentaria global*, Barcelona.
- Grieder, William (2001), “La rebelión de los granjeros”, *La Jornada*, 14 de enero.

- Holt-Giménez, Eric y Peabody, Loren (2008), “De las revueltas del hambre a la soberanía alimentaria: un llamado urgente para reconstruir el sistema alimentario”, en GRAIN, *Introducción a la crisis alimentaria global*, Barcelona.
- INEGI, (2008), *Boletín de información oportuna del sector alimentario, abasto y comercialización*, núm. 277, INEGI, México.
- La Jornada*, 28 de enero; 21 de marzo; 26 y 27 de mayo; 2, 27 y 28 de junio; 19 de julio; 7 y 30 de octubre; 7, 15, 26 y 30 de noviembre de 2008. 28 de enero, 16 de marzo y 31 de mayo de 2009.
- Márquez Ayala, David (2009), “Reporte económico”, *La Jornada*, 16 de marzo.
- Rostros y voces (2009), *Cuando sube el precio de los alimentos... ¿quién gana, quién pierde?*, Oxfam Internacional, México.
- Sagarpa (2009), “Balanza nacional disponibilidad-consumo. Información Básica”, Sagarpa/SIAP, mayo.
- (2007) *Situación actual y perspectivas del maíz en México 1996-2012*, Sagarpa/SIAP, México.
- (2004), *Situación actual y perspectiva del frijol en México 2000-2005*, Sagarpa/SIAP, México.
- Steffen, Cristina (2003), “Las nuevas políticas para la comercialización de granos y sus efectos en los ejidatarios de Guanajuato”, en Diego, Couturier y Concheiro, *Políticas públicas para el desarrollo rural*, UAM-Xochimilco, México.
- Steward, Sinclair y Waldie, Paul (2008), “US food producers, speculators square off”, *Globe and Mail*, 23 de abril [www.theglobeandmail.com].
- Suárez, Víctor y Polanco, Iván (2009), “Datos duros y tupidos. La importación de alimentos en tiempos del TLCAN”, *La Jornada del Campo*, núm. 20, suplemento en *La Jornada*, 14 de mayo.
- Suárez Carrera, Víctor (2007), “El tortillazo de Calderón o la crisis de los precios de la tortilla: dependencia, monopolios e inseguridad agroalimentaria en México”, *Revista Territorios*, núm. 2, IEAR-Congcoop, Guatemala.
- Vía Campesina (s/f), “Declaración de Maputo”, V Conferencia Internacional de la Vía Campesina [www.viacampesina.org].
- Waldie, Paul (2008), “Why grocery prices are set to soar”, *Globe and Mail*, 23 de abril [www.theglobeandmail.com].

Espacio público y desarrollo campesino en Morelos

Elsa Guzmán Gómez*
Arturo León López**

Entre las transformaciones de las últimas décadas que se viven en el mundo y en cada uno de los países, se distinguen algunas tendencias generales como la preponderancia de los procesos urbanos frente a los rurales, la importancia de la tecnología como bastión de cambio, el desplazamiento de los ámbitos culturales tradicionales, entre otros. Así, de manera particular, existen intensas interacciones entre lo conocido como vida y formas rurales y urbanas; una cercanía de espacios y ámbitos otrora lejanos y ajenos que, en realidad, se ubican como reflejo y parte del complejo de procesos que actualmente conocemos como globalización. Esto lleva a reconocer la existencia de nuevos arreglos y cotidianidades en las formas de vida, así como diferentes inserciones de la población rural en la sociedad.

Hace un siglo, México era un país fundamentalmente rural; hoy día la preponderancia poblacional y las dinámicas económicas muestran la preeminencia de las urbes, así como de los sectores económicos secundarios y terciarios. De igual modo es notoria la persistencia de una población rural, que si bien es minoritaria frente al total nacional, en una situación reconocida de marginación social y económica, continúa teniendo presencia y funciones indispensables para la dinámica y desarrollo general nacional.

* Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

** Profesor-investigador en el Departamento de Relaciones Sociales, UAM-Xochimilco.

La población rural, que actualmente abarca 25% del total nacional y aumenta en números naturales, tiene bajo su resguardo grandes superficies de territorio; por ejemplo, sólo en cuanto a las tierras de propiedad social de ejidatarios y comuneros, población fundamentalmente campesina entre los que se cuentan 5.6 millones de sujetos de derecho, tienen 105.9 millones de hectáreas en sus manos, sus pueblos y trabajo (INEGI, 2007), en las cuales se encuentran las zonas forestales, agrícolas, ganaderas y cuerpos de agua, recursos que cumplen funciones como generadores de alimentos y materias primas, madera, variados productos de recolección, y funciones ambientales tales como captación de agua, generación de oxígeno y regulación del clima. Los productos y servicios que en estas zonas se generan resultan indispensables para la vida urbana, para el desarrollo industrial y para la dinámica de los mercados nacional e internacional. Igualmente en las zonas rurales se guardan múltiples elementos culturales que resguardan la cultura tradicional y cambiante que conforma un amplio y complejo mosaico de visiones del mundo, conocimientos, ritos, prácticas, redes sociales, etcétera, base y parte de la riqueza cultural de nuestro país.

El reconocimiento de las transformaciones y tendencias actuales en el conjunto de la población y regiones del país, que incluye tanto los nuevos procesos como las permanencias, lleva, desde nuestra perspectiva, a la necesidad de reconocer lo irreversible de los cambios y la complejidad de ellos, los cuales tienen como base historias y objetivos múltiples que entrelazan procesos de resistencia desde las culturas campesinas, que derivan en distintos balances urbanos-rurales (frente a la visión de la mera disolución de los elementos rurales por los urbanos), y nuevas concepciones de lo rural (frente a las visiones tradicionales de caracterización de lo rural a partir de una vida aislada, atrasada y meramente agrícola), lo que lleva a un cambio de consideración de lo campesino; es decir, consideramos necesario hablar de los campesinos de hoy.

El análisis de este trabajo se fundamenta en la amplia experiencia regional de cinco décadas de cultivo hortícola de los productores agrícolas del norte de Morelos. El proceso de adecuación de la técnica agrícola a las condiciones campesinas y la inserción del producto en el mercado nacional, las necesarias interacciones con múltiples actores de la sociedad, la construcción de redes y los aprendizajes permanentes llevó a que los productores y sus familias definieran características peculiares a las estrategias de vida, las cuales cumplen la función de ser herramientas dentro de un largo y complejo camino de construcción de desarrollo que han dado pie a trans-

formaciones regionales. Esta experiencia nos permite discutir el concepto de desarrollo desde la conformación de un orden social determinado, como proceso alternativo a la reproducción de una sociedad heterogénea y excluyente de grupos como los campesinos.

MORELOS CAMPESINO

Las transformaciones aceleradas, la urbanización y crecimiento poblacional, marcan la realidad del estado de Morelos en las últimas décadas. El espacio estatal se ubica en cercana interacción con la capital del país, ocupa un territorio pequeño de 4 960 km² con alta densidad de población (323 habitantes/km²), como producto del incremento poblacional local de las últimas décadas, y por procesos de inmigración desde otros estados, como Guerrero y el Distrito Federal (hacia la década de 1980), llegando actualmente a 1 555 296 habitantes (INEGI, 2000).

De 1970 al 2000 la proporción de la población rural (de localidades de menos de 2 500 habitantes) pasó de 30.1 a 14.6% (INEGI, 2005) respecto del total estatal. Esta transición poblacional hacia lo urbano llevó a la disminución de la representatividad de la Población Económicamente Activa (PEA) agropecuaria, al disminuir paulatinamente respecto de la PEA total, llegando en el 2000 al 13%. En Morelos se ha manifestado un crecimiento caótico de las periferias conurbadas con alta densidad de población. Asimismo, la vivienda de tipo residencial, en fraccionamientos de lujo y turísticos, ha tenido auge en los últimos años, y al igual que las anteriores representan presión sobre los terrenos rurales aledaños a las ciudades y en distintos espacios del estado atractivos para estos proyectos. Es decir, el crecimiento urbano induce en las zonas rurales a la fragmentación de territorios productivos y forestales, competencia por el uso del suelo, por la disponibilidad de agua, así como contaminación de la misma. Esto ha implicado la especulación de la tierra por empresas inmobiliarias, fortalecida por la puerta abierta a la venta de la tierra ejidal y comunal a partir de las modificaciones al artículo 27 constitucional.

La expansión urbana tiene implicaciones y relación directa con las transformaciones en la agricultura y la adopción de la modernización tecnológica. Por un lado, el crecimiento de la población urbana forma parte de una tendencia nacional que da lugar a la ampliación del mercado de alimentos, lo que permite a los productores morelenses incorporarse al cultivo de pro-

ductos de alta demanda nacional y redituabilidad potencial, como lo son las hortalizas, las que en tierras y prácticas campesinas morelenses se adaptan bien. Por otro lado, la urbanización abre los caminos a carreteras hacia todos los rincones de Morelos y acerca la entrada de la tecnología agrícola, pero también de nuevas pautas de consumo, es decir, como parte del escenario rural se vislumbran servicios, estructuras y múltiples elementos propios de las ciudades, lo que se considera una *urbanización difusa*¹ en los distintos ámbitos de la vida rural (social, económica, productiva, etcétera).

Esta cercanía entre las zonas rurales con las urbanas es muy clara en Morelos, donde encontramos una red de carreteras y caminos que comunica a las 833 localidades del estado, e interconecta a las 753 localidades de menos de 2 500 habitantes, con las localidades medias, distribuidas a lo largo de todo el territorio estatal, y con las 23 de más de 10 mil habitantes (INEGI, 2000). Estas últimas localidades articulan la distribución de servicios y los flujos de migración y movilidad laboral de la población, formando una red de comunicación y traslados de la población local y mercancías, e inserta los flujos con otros estados.

Como parte de las transformaciones de las últimas décadas, las finales del siglo XX y los años subsecuentes, han sido especialmente difíciles para los campesinos de todo el país, entre ellos los morelenses. Esto debido al proceso de ajuste estructural como parte de la definición neoliberal en la política nacional, que ha girado la política agrícola hacia la desregulación del mercado, la apertura de la frontera nacional al mercado mundial, mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros convenios, priorizando los productos de comercio exterior y con exportaciones limitadas e importaciones de productos alimentarios básicos.

En este marco, donde la disminución del peso económico del sector agrícola es causa y consecuencia,² las inversiones públicas para el campo se han restringido mediante la desestructuración del sistema de instituciones ofi-

¹ Hervieu y Viard (2001) conciben este fenómeno ante la articulación de elementos considerados urbanos en los pueblos rurales, es decir, fuera de la ciudad, como la escolarización, los medios masivos de comunicación, el potencial de movilidad, que se vinculan con una vida de acuerdo con ciertos ritmos de la naturaleza, el arraigo de la tierra, y otros elementos tradicionales.

² El porcentaje del PIB del sector económico primario (agropecuario, forestal y pesquero) ha disminuido dentro del total del peso de la economía nacional, de tal manera que en los años que van del siglo XXI, a escala nacional sólo corresponde 5.5% a este sector, y en el ámbito estatal alrededor del 10% (Presidencia de la República, 2008; INEGI, s/f).

ciales y paraestatales que conformaban el sistema de servicios agrícolas (sistemas de crédito y seguro agrícola, Conasupo, Inmecafe, Conafrut, Pronase, Fertimex, etcétera), y la limitación de las políticas agrícolas a planteamientos asistencialistas o políticas focalizadas, como los programas Oportunidades, Procampo, Alianza para el Campo, que no impulsan la posibilidad de inversiones productivas, ni el acceso a recursos para todos los productores. Además, de manera especial a partir de la década de 1990, el impulso a las empresas trasnacionales regionales para la producción externa ha acentuado las dificultades para los productores pequeños y medianos a participar en el mercado de productos agropecuarios.

Entonces, el conjunto de transformaciones que se vislumbran en Morelos dentro de la lógica o modelo neoliberal, lleva a que los recursos naturales y productivos sean dinamizados en el marco del mercado libre, lo que ha venido a profundizar los enfrentamientos de intereses de diversos agentes y comunidades campesinas, generando conflictos importantes. Esta disputa de espacios y recursos confronta a agentes tales como comerciantes, agencias inmobiliarias, proveedores de insumos agrícolas, comerciantes y todo tipo de intermediarios de productos agrícolas, programas de gobierno, etcétera.

No obstante que los procesos urbanos trastocan las actividades agrícolas de los productores de Morelos, aún es posible distinguir que, en el marco productivo estatal, las pequeñas unidades campesinas mantienen actividad que sostiene una gran parte del territorio en producción. Lejos de ver el campo abandonado, existe intensa actividad en las distintas regiones en las épocas de siembra, cultivo y cosecha, especialmente en el ciclo de temporal, gracias a una precipitación abundante para el ciclo agrícola primavera-verano.

La mayor parte de la superficie del territorio estatal (396 526 hectáreas, equivalentes al 80%) se encuentra bajo régimen de tenencia de propiedad social, considerados a los 201 ejidos y 33 comunidades agrarias en el estado, de manera que parte de la actividad agropecuaria recae en estas tierras, agregándose a ellas tierras de minifundio en propiedad privada, que se intercalan en un mosaico complejo y cambiante de usos de la tierra morelense. Se considera que sólo 8% de las unidades productivas son de carácter empresarial, el resto es considerado de tipo campesino no comercial (INEGI, 2001). Esto último no significa, como veremos más adelante, que los campesinos no lleven sus productos al mercado, sino que no es la única finalidad de la unidad de producción.

El uso predominante que tienen las tierras de propiedad es el agrícola, pues de los 234 ejidos y comunidades existentes en el estado, 222 la tienen como actividad presente, y entre éstos, en 204 la mayoría de la población se dedica a ella; de igual manera en 199 ejidos se dedican a actividades ganaderas y 33 de recolección de recursos naturales (en 7 y 18 ejidos la mayoría de la población se dedica a dichas actividades, respectivamente).

Las parcelas disponibles corresponden a la denominación de minifundio, en tanto el promedio de la extensión de la parcela de propiedad social, que cada sujeto de derecho (ejidatario, comunero y posesionario) tiene es de 2.6 hectáreas, siendo una de las cifras más pequeñas a escala nacional (INEGI, 2001). Por otro lado, en las regiones rurales, además de actividades agropecuarias, se realizan otras que corresponden igualmente al uso de los recursos. Así, existen 131 ejidos y comunidades donde se llevan a cabo actividades de distinto tipo, clasificadas como de extracción de materiales para la construcción (36), extracción de otros minerales (2), pesquera (25), artesanal (15), industrial (8), turística (27), acuícolas (39) y otras (8). Estas actividades complementan los ingresos y la satisfacción de necesidades que los productores logran tener con la producción a escala del minifundio, con tierras en su mayoría de temporal, en 147 ejidos, y más de 90 mil hectáreas en producción agrícola³ con limitada infraestructura –bordos para riego existentes sólo en 88 ejidos, 30 tractores en funcionamiento en 22 ejidos (INEGI, 2007).

El escenario productivo muestra múltiples unidades, en su mayoría familiares, de las que forman parte los jóvenes. Si bien se reconoce que en 66 ejidos y comunidades la mayoría de los jóvenes no permanecen en sus comunidades y salen preferentemente a Estados Unidos como medida de búsqueda de empleo y recursos, aún se tienen 168 comunidades en que la mayoría de los jóvenes permanecen en sus localidades y se integran a las actividades locales, preferentemente agropecuarias (INEGI, 2007). Estas unidades productivas, de pequeña y mediana producción, de acuerdo con las distintas regiones del estado, las aptitudes de la tierra y posibilidades de riego sostienen un mosaico amplio de cultivos. Según datos de Sagarpa-SIAP (s/f), en 2006 se sembraron 117 284.42 hectáreas, de las cuales 92 550.10 fueron utilizadas en el ciclo de temporal de lluvias, y 34 734.32 se

³ Poco más de 92 mil hectáreas es la superficie destinada a la producción agrícola de temporal en 2006 en Morelos (Sagarpa-SIAP, s/f).

cultivaron bajo condiciones de riego en los dos ciclos del año (primavera-verano, y otoño-invierno).

Los principales cultivos son: el sorgo, que ocupa la mayor superficie, ya que en los últimos años ha repuntado dada la posibilidad de sembrarlo bajo temporal, contar con el impulso oficial y un mercado en crecimiento; la expansión de este cultivo se ha dado sobre tierras anteriormente dedicadas al cultivo de maíz. Este último ocupa actualmente el segundo lugar en cuanto a la superficie destinada, predominante en especial en el ciclo de temporal, se siembra en todos los municipios del estado y tiene como destino importante el consumo de las propias familias campesinas; el elote (mazorca fresca) y el criollo pozolero tiene un mercado amplio que permite mayores posibilidades de ganancias que otros productos. Las tierras de temporal también se cubren de múltiples variedades de frijol, jitomate, tomate verde, pepino, avena forrajera, cacahuete, nopal, durazno y aguacate, como cultivos principales, además de, al menos, 40 más en pequeñas proporciones. En condiciones de riego se destaca la presencia de elote, maíz para grano, arroz, frijol ejotero, calabacita, caña de azúcar y múltiples hortalizas (especialmente cebolla, pepino y calabacita) y flores que, a pequeña escala se cultivan y venden en plazas locales, e incluso llegan al mercado nacional.

Como contraparte de la actividad agropecuaria local se cuentan los procesos de emigración, la cual en el estado si no se considera generalizada, se reconoce cada vez más su influencia, y ahora se manifiesta de manera heterogénea en los diferentes municipios de acuerdo con la capacidad de generar empleos y con la historia de migración y redes sociales construidas. En los municipios del norte la migración es menos recurrente, en los que resaltaríamos la alta y generalizada vocación agrícola como Tlalnepantla; en contraste en Axochiapan en el sur y Coatlán del Río, en el poniente del estado, los flujos migratorios son más intensos. En general, se cuenta con seis municipios con alta migración, 12 con actividad migratoria media y 15 con baja migración.⁴

Entonces, la mayor parte de las familias mantiene su residencia fija en las localidades rurales, y desde ellas se relacionan con múltiples agentes y procesos externos, igualmente reciben y vinculan una población móvil que labora

⁴ Conapo (con base en la muestra del 10% del *XII Censo de Población y Vivienda 2000*). “Morelos: indicadores sobre migración a Estados Unidos, índice y grado de intensidad migratoria por municipio”.

y habita por tiempos distintos fuera de los pueblos o en ellos pero realizando actividades del sector secundario y terciario, lo que complejiza los procesos rurales. De esta manera, las comunidades campesinas usan y sostienen sus recursos de diversas formas dentro de múltiples procesos con objetivos y en sentidos diferentes y contrapuestos, como el crecimiento urbano, deterioro del suelo, incremento de vías y medios de comunicación, especulación del mercado y viejas y nuevas formas de acumulación de capital.

ESTRATEGIAS DE VIDA, DESARROLLO CAMPESINO Y ESPACIO PÚBLICO EN MORELOS

En Morelos, la actividad agrícola sigue siendo hasta hoy un espacio importante y un eje de la vida rural, ciertamente no es el único, el principal, ni muchas veces suficiente para satisfacer las necesidades de la familia, pero forma parte de la estrategia global de reproducción campesina, con diferentes pesos de acuerdo con las decisiones que en cada unidad familiar se tomen para estructurar la misma.

La presencia y persistencia de los grupos campesinos en la sociedad actual, indica que éstos logran su reproducción a partir de configurar estrategias de vida, constituidas por procesos complejos de organización de actividades internas, uso, adaptación y movilización de recursos propios, transmisión y generación de conocimientos y experiencias, negociación con diversos actores y participación en ámbitos públicos, y procesos de toma de decisiones bajo pautas e iniciativas culturales de los grupos campesinos. Es decir, son herramientas específicas de desarrollo.

De esta manera, el concepto de desarrollo se vuelve eje del análisis, pues es el que nos permite ubicar a las estrategias en un plano amplio de análisis social para entender dicha persistencia de los campesinos, a pesar de que el conjunto de políticas públicas y procesos sociales que se han desplegado a lo largo de la historia del país son opuestos a la vida y lógicas rurales.

De acuerdo con la historia agrícola estatal, la estructuración de estrategias de vida y productivas se relaciona con la apertura del mercado nacional de productos agrícolas ante el incremento de una población urbana a mediados del siglo XX. Como parte de la oferta necesaria, a partir de la década de 1960 se creó una estructura productiva que incluyó de manera creciente a las hortalizas, esto representó la posibilidad de insertar una producción que bajo distintos procesos regionales particulares se generaron en

Morelos, creando subregiones de cultivos hortícolas y procesos sociales asociados a ellos, que se fueron difundiendo y entrecruzando. Así, en el norte del estado, a partir de una innovación tecnológica que permitió cultivar las plantas de jitomate rastreras en grandes extensiones con espalderas de varas y alambre, este cultivo se difundió con objetivos comerciales e integró a las formas campesinas de sembrar y de vivir.

El recorrido de esta historia habla de un proceso de cambios que se fueron dando en las parcelas, en las familias y en la región, en cuyo camino se distinguen distintas etapas de aprendizajes, adquisición de destrezas técnicas y comerciales y participación en el mercado. De esa trayectoria y de su situación actual interesa resaltar, como eje importante de la transformación regional, el papel de los campesinos y sus familias como generadores de múltiples conocimientos y búsquedas para integrar el proceso productivo a una estrategia más amplia que complementa y apoya otras actividades que han realizando –como la siembra de cultivos de autoconsumo. Así, dentro de una dinámica de recreación de redes comunitarias y relaciones externas, se distingue una tendencia de innovación tecnológica moderna, y la participación campesina en un mercado sostenido por procesos de acumulación de capital que, al hacerlo, les permite beneficios económicos propios y cambios en su condición de vida –que con otros procesos de trabajo no logran. Se trata de campesinos que cambian su vida, su trabajo, el mercado y construyen formas particulares de desarrollo en su región.

Las estrategias campesinas, concebidas con la complejidad de pautas de diversidad y complementariedad mencionadas anteriormente, se concretizan en la estrategia de los campesinos jitomateros, como un ejemplo de un proceso de conformación de espacio público dentro de un camino de construcción de desarrollo y de ciudadanía.

El análisis a partir del espacio público intenta retomar el conjunto de elementos y procesos que inician en la cotidianidad de las actividades y decisiones que dan lugar a las estrategias familiares y culminan en las relaciones sociales y la conformación de una región, para la reproducción campesina, así se incluyen aspectos tangibles e intangibles de un conjunto de actividades campesinas que se combina bajo las lógicas y objetivos de la unidad familiar, buscando optimizar los recursos disponibles mediante una fuerte inversión de trabajo, y distribución de éste entre todos los miembros, de tal forma que no represente gastos económicos significativos. Entre los resultados se tienen los productos de autoconsumo, uso propio, mantenimiento, incremento material de instalaciones e instrumentos de trabajo y

vida, así como la transmisión generacional de conocimientos. Paralelo a lo anterior se encuentran las actividades destinadas a obtener ingresos económicos para la vinculación con el consumo, el mercado y los múltiples espacios de la reproducción que el autoabasto no cubre, que contemplaría a la producción de mercancías agrícolas, a diferentes escalas, artesanales y a la venta de la fuerza de trabajo, dentro o fuera del lugar de origen; combinadas según las posibilidades lo permitan, tales como la disponibilidad de recursos (tierra, agua, instrumentos técnicos, etcétera), el acceso a mercados, las relaciones parentales y comunitarias, la división de actividades entre la familia, etcétera.

Las estrategias como complejos que atraviesan diversos niveles y aspectos, abordan las acciones –que representan decisiones ante opciones– que realizan productores, mujeres y familias en una situación particular y condiciones generales, con objetivos múltiples a partir de un panorama amplio de condiciones internas –individuales, familiares, comunitarias– y externas –crisis nacionales y mundiales, políticas públicas, transformaciones del paisaje, normas en el mercado–; es decir, las unidades familiares utilizan su experiencia en el manejo de diferentes cultivos, intercalando ciclos, procesos productivos, obteniendo múltiples productos en ritmos, espacios y tiempos diferenciados para enfrentarse al mercado, pero igualmente a sus propias necesidades de subsistencia.

Especialización diversificada

En los Altos de Morelos, considerando que en esta región siempre se ha practicado la agricultura bajo el régimen de temporal, el aprendizaje de los campesinos a lo largo del tiempo ha consistido en el conocimiento de las múltiples circunstancias existentes alrededor de la lluvia, como pueden ser los indicios del lapso temporal de lluvias, de su intensidad o escasez y de los vientos durante este periodo.

El periodo de temporal está caracterizado por una gran intensidad de trabajo agrícola necesario para aprovechar al máximo el recurso agua, presente exclusivamente cuatro meses (de fines de junio a fines de octubre), además de una fuerte dinámica comercial. Como complemento de este periodo se encuentra el de secas (enero-mayo) que, de acuerdo con los resultados del primero, contiene las tareas de organización de los productos, ganancias y pérdidas de éste, las nuevas actividades productivas y comer-

ciales que no requieren humedad pluvial, así como la definición y organización del trabajo del año subsecuente con las tareas que se vislumbren para el mismo, es decir, es un periodo de cierre y reinicio, como parte de un solo ciclo de renovación continua, necesario para garantizar empleo todo el año, recursos económicos que retroalimenten las inversiones necesarias para cada actividad productiva, así como la permanente incertidumbre que significan riesgos ambientales y en el mercado, de perder las ganancias o las inversiones realizadas en la producción.

Entonces, si la inserción de los horticultores temporaleros al mercado es condición de incertidumbre, de inseguridad, ellos acondicionan sus propios recursos y circunstancias hacia la mayor seguridad posible, acercando su actividad hortícola a las propias lógicas como campesinos: utilizando la diversidad, complementariedad y optimización de actividades y recursos para asegurar resultados básicos y posibilidades de continuidad, cambiando, adaptando, inventando e improvisando.

En el análisis de los grupos campesinos en Morelos se reconocen diversas maneras de organizar las estrategias de vida desde realidades concretas y cotidianas. En distintos estudios realizados hemos distinguido la combinación y complementariedad de dos componentes fundamentales, estos son: un *componente de seguridad* y otro de *vinculación al mercado*, los que a su vez conjuntan diferentes actividades en arreglos que los individuos llevan a cabo de acuerdo con una determinada organización social, familiar y laboral, sustentada en decisiones racionales con bases culturales interiorizadas (normas y valores) que dan lugar a formas particulares de vida. La viabilidad de éstas se concreta en el uso de recursos propios y negociaciones con los distintos actores de la sociedad; es decir, se superan los marcos de la familia y lo campesino para participar en ámbitos externos, e incluso constituir una manera particular del espacio público, que más adelante se explica.

Así, los productores van echando mano de sus recursos y experiencias para llevar a cabo el trabajo agrícola de la mejor manera en los aspectos sobre los que tienen capacidad de incidir (aplicación de agroquímicos, vigilancia permanente para obtener el mejor producto posible, opciones adecuadas para comercializar el producto en el mejor precio posible) y contrarrestar o “sufrir menos” ante los aspectos que no pueden controlar, como es lo impredecible de las inclemencias del clima y de las dinámicas del mercado, especialmente los precios, evitando, hasta donde se pueda, que los posibles riesgos los lleven a daños o pérdidas, como no obtener

ganancias o incluso no recuperar todo lo invertido. Esto podría significar no seguir sembrando y tener que incorporar decisiones distintas a las agrícolas, como trabajar temporalmente en otro ámbito o incluso migrar a Estados Unidos en la búsqueda de dólares para recuperar los recursos perdidos en el ámbito regional.

La intensificación del trabajo, dentro de esta estrategia, significa la diversidad de cultivos y el uso de tecnología moderna. Estas dos formas, si bien corresponden a lógicas productivas distintas (la campesina y de modernización tecnológica), se complementan y entrecruzan, ya que dicha tecnología es utilizada para ampliar y consolidar la diversidad de cultivos. De esta manera, el sentido campesino de complementariedad fortalece la capacidad de los sujetos de participar en el mercado y obtener ganancias comerciales.

En las últimas dos décadas, la estrategia de especialización jitomatera ha incluido el fortalecimiento de la diversidad, derivando en lo que llamamos la *especialización diversificada*, se ha visto que el cultivo de jitomate convive con grandes superficies de maíz, y cada vez más también con pepino, tomate, calabaza, chile, nopal, ebo, frijol, etcétera, con combinaciones particulares de cultivos dependiendo del lugar específico. Cada cultivo tiene su técnica especial, pero podemos ver en campo y en los testimonios de los productores, que los aprendizajes del jitomate y algunas técnicas se aplican a los otros cultivos, a unos más que a otros, de acuerdo con las necesidades y resistencias de éstos, pero todos se van complementando.

El pepino, a diferencia de hace diez años que no se envaraba, ahora se cultiva prácticamente con las mismas técnicas que el jitomate, exceptuando sólo los herbicidas específicos y un tejido más fino en los hilos de las espaldas. El tomate verde desde la década de 1980 comparte tierras y técnicas con el jitomate, sustituyéndolo donde la incidencia sin control de la mosquita blanca impide la continuidad del segundo, también ayuda a que el campesino compense un poco la alta inversión y los riesgos, pues no es tan “plagudo”, que permite no invertir tanto dinero, además el precio es menos inestable, aunque más bajo que el del jitomate; de esta manera, el tomate verde se acopla al aprendizaje de las técnicas, no implica tantas ganancias pero tampoco tantas pérdidas.

El maíz comparte parcelas y preparación del suelo mecanizada, pero técnicamente se distinguen prácticas más tradicionales, pues, en la región, se siembra principalmente semilla criolla, del *pozolero*, algunos productores continúan sembrando con palo y se tapa con el pie —aunque otros ya han introducido el tractor en todas las labores, especialmente los que con

las ganancias del jitomate han podido comprarse uno—, y hasta donde se puede no se fumiga, pero, bien sea para la venta o para el autoabasto alimentario familiar, cumple la función de sostener la seguridad básica de la reproducción familiar y con esto, la posibilidad de seguir sembrando jitomate y apostando a la ganancia.

La diversidad de cultivos implica distintos ritmos de crecimiento y desarrollo de las plantas, así como necesidades de labores en diferentes tiempos. De manera general, el panorama de complementariedad de cultivos es como sigue: el pepino tiene un periodo de desarrollo de dos meses, el tomate verde de tres, el jitomate de cuatro y el maíz se puede cosechar de los cuatro a los seis meses de crecimiento. Las fechas de siembra de cada cultivo se van programando de acuerdo con la duración de los ciclos y organizando unos con otros para que sean paralelos, intercalados o subsecuentes, especialmente si cuentan con riego complementario, pueden poner dos o tres cultivos subsecuentes en la misma parcela, o dos cultivos de periodo corto en el tiempo de temporal. Estos ciclos distintos permiten organizar la distribución de tiempo y parcelas de cada cultivo, calcular los momentos de las múltiples labores y los cortes de los frutos. Es decir, cada huerta requiere ser envarada, abonada, fumigada, etcétera, en distintas fechas, además de requerir cortes de cosecha a destiempos, con lo que prácticamente se trabaja cada cultivo una o dos veces por semana durante todo el periodo de lluvias, representando trabajo continuo que exige intercalar gastos, vigilancia y laboreos. En el momento que comienzan las cosechas se obtienen ingresos económicos que permiten financiar los gastos de los cultivos de ciclos más prolongados. De esta forma, los diferentes cultivos se complementan y apoyan mutuamente en recursos y productos.

El cultivo del maíz se atiende paralelamente a las hortalizas. Las labores del maíz no son semanales, ni se invierte tanto tiempo y trabajo como en las huertas; en ellas se aplican todas las energías y recursos posibles para obtener los mejores frutos, rendimientos y ganancias. Si los recursos escasean la milpa se mantendrá al mínimo de inversión y la huerta tendrá la prioridad. Cuando terminan los últimos cortes de las huertas, se pasa a la cosecha del maíz, dado que es una labor pesada, el pago de jornaleros es necesario, que se cubrirá con parte de las ganancias de la venta de jitomate y otros. Las mazorcas se cortan con todo y hojas y se llevan a las casas. La posibilidad de tener maíz a gran escala, con la consecuente venta de mazorca y semilla, significa la retención de los propios productores en su lugar, con lo que la migración durante el tiempo de secas ya no es una obligación

sino una opción frente al balance de sus condiciones particulares. El periodo de secas tiene varios significados en términos de la reproducción familiar, ya que es cuando en el seno de la misma se hace el balance de recursos de las ganancias obtenidas y las posibilidades de inversión, gastos y actividades a realizar.

Obteniendo productos de alta o baja calidad todos irán cumpliendo con su destino. Las hortalizas, sólo en el drástico caso que se prefiera no cortar por perder más si se hace, se integra al mercado de la mejor forma de acuerdo con sus posibilidades de comercialización, éstas a fin de cuentas dependen de los recursos con que cuente, liquidez para pagar los gastos de corte y flete, transporte para llevarlo al mercado, y relaciones con comerciantes. Podrán vender la huerta en pie, o vender a pie de huerta, pagar un camión para llevar la mercancía a la Central de Abasto de Cuautla o de México. Lo más difícil de la comercialización en realidad no es hacer llegar el producto a la plaza, sino es que ese día haya un buen precio, que costee los gastos invertidos, por lo menos, y sobre todo que represente ganancia; la mayoría de las veces no habrá tal ganancia real, aunque alguna parte de la producción logrará buen precio en el momento en que el mercado no está saturado de jitomate. Aunque el precio sea definido en la Central de Abasto de México, el efecto de éste no es parejo para todos los productores, pues el producto está marcado por la calidad y homogeneidad con que llegue empacado, de lo que dependen los mejores precios del día; además, ante la amplitud de opciones en un mismo día, cada producción puede ser vendida de diferentes formas: a granel a los intermediarios foráneos que llegan a las parcelas o a las pequeñas bodegas instaladas en la región, seleccionarlo y venderlo a algún comerciante bajo acuerdo previo, o llevarlo a la central de Cuautla a los fleteros, o directamente a la Ciudad de México con bodegueros conocidos. Cada opción implica costos y precios de venta diferentes, y de acuerdo con el precio del día y los contactos comerciales establecidos, cada productor define su mejor decisión.

Considerando que hay dinero especialmente por la venta de las huertas, se decidirán los nuevos recursos que se adquieren: compra de tierras, camiones, tractores o simplemente materiales para la producción como cajas y charolas para almacigos, así como animales para engordar con los granos cosechados.

Construcción de espacio público

Las transformaciones regionales en los Altos de Morelos que se han dado alrededor de la adopción del cultivo del jitomate han llevado consigo dinámicas sociales complejas en las que los campesinos se han ido vinculando a múltiples agentes internos y externos, quienes anteriormente no participaban en esta dinámica regional. Este campo de relaciones y necesidades de negociación se ha desplegado como parte de las necesidades de insertar el cultivo de jitomate al mercado, de acuerdo con los requerimientos de éste.

Al interior de la región se han creado oficios y actividades especializadas que van entretejiendo nuevas relaciones con y entre los productores, como por ejemplo, la renta del tractor, el arrendamiento de tierras, la producción de plántula, la constitución de grupos que solicitan la compra de insumos a los programas de gobierno, las ventas de huerta en pie, la presencia de prestamistas, los convenios de préstamo/comercialización, además de las diferentes relaciones y formas existentes para la comercialización de los productos agrícolas y la compra/venta de fuerza de trabajo. De igual manera, una parte sustantiva que se ha detonado con este cultivo es la compra de agroquímicos e insumos tecnológicos para la producción, los cuales en general provienen de diferentes industrias nacionales y trasnacionales, y llegan a los productores a través de los promotores de laboratorios, de las tiendas de proveedores, o por los técnicos o ingenieros de las instancias gubernamentales que aplican los diversos programas agrícolas.

La complejidad de procesos, actividades, entrelazamiento de sujetos, objetivos e intereses distintos que implica la participación de distintos agentes en la trama de relaciones sociales, representa una modalidad regional específica que se ha conformado de acuerdo con la dinámica del mercado nacional, que significa en última instancia, la aportación de recursos y esfuerzos múltiples que se van materializando en reproducción para cada uno de los actores sociales, en un proceso de transferencia de excedentes hacia los sectores con mayor poder y en una acumulación diferenciada.

Entonces, los espacios productivos y de comercialización en la complejidad mencionada es lo que acercamos al concepto de *espacio público*.⁵ Éste

⁵ El concepto de “espacio público” se utiliza desde diversas acepciones; para algunos, es producto de la descentralización en el marco neoliberal ante el mayor distanciamiento del Estado, lo cual no significa que dé lugar a una real apropiación de los procesos desde y por los actores, ya que puede llevar a una mayor segregación de poblaciones marginadas, y a le-

es entendido, en principio, como el espacio de interacciones ubicado entre lo público estatal y el ámbito privado (a partir del concepto de Habermas, citado en PNUD, 2007). Es decir, se trata de una esfera pública no-estatal, en la cual, en esencia, se resaltan los procesos de negociación, de encuentro y desencuentro entre diferentes actores de la sociedad que definen tendencias y alcances en términos de su reproducción y posicionamiento dentro de la sociedad, y traspasan los límites de las contenciones estatales, que en los Altos de Morelos significan los ámbitos de vida, producción y relaciones que la gente desde su propia cultura y recursos ha construido.

En dicho marco campesino, el espacio público se concreta con la extensión de la acción individual, por ejemplo las actividades productivas hacia la vinculación e interacción con ámbitos colectivos, institucionales, económicos (mercados) y sus diferentes actores para la concreción de las estrategias de reproducción y configuración de nuevas formas de acción y pertenencia de los individuos en los ámbitos comunitarios, familiares, productivos, institucionales, relacionales, etcétera. Se trata de la constitución de relaciones sociales sin intervención de instituciones y actores estatales. Los jitomateros han construido estas relaciones con agentes y han participado desde que el proceso de horticultura comercial detonó, como son los jornaleros, comerciantes y vendedores de insumos, que con el paso de los años se han ido agregando y diversificado múltiples agentes especialmente comerciales de venta de insumos y compra de productos; también se han diluido otros como los gubernamentales, que en algún momento tuvieron presencia en términos de programas de exportación, financiamiento y transferencia tecnológica, pero actualmente algunas de estas funciones no existen y otras se han minimizado. Esta confluencia de agentes, con sus cargas culturales cada uno y las relaciones que establecen en los ámbitos particulares es lo que se interpreta como la construcción de un espacio público que dinamiza a la región toda.

Dichas negociaciones requieren procesos de organización, apropiación cultural, aprendizaje, educación, capacitación, participación política, gestión, acción colectiva, interpretados como caminos y logros que posibilitan

gitimizar el papel central del mercado. Otra postura enfatiza que el fortalecimiento de la esfera pública no estatal podría significar un avance democrático (Lander, 1998; Bresser y Cunill, 1998), también se alude a los espacios públicos como ámbitos homogéneos de relaciones democráticas o al menos de igualdad entre todos los ciudadanos.

a los individuos y grupos tener acceso a servicios y perspectivas de vida que garantizan su subsistencia, es decir, procesos de desarrollo, en tanto logran la expansión de opciones, oportunidades y libertades, con lo que generan agencia (Sen, 2000).

En la conformación de dicho espacio público se pone en juego la forma de vida de los campesinos, su propia concepción de ésta, las decisiones y necesidades individuales, las identidades colectivas, las concepciones y prácticas alrededor de las relaciones con la naturaleza y los recursos productivos, las experiencias y las formas de interacción social. Las relaciones que conforman este ámbito en los Altos: participación del trabajo familiar, división y complementariedad entre actividades de los productores y de las mujeres, aprendizaje de los jóvenes, ayuda con los parientes, uso de recursos (tierra) de familiares (de padres, por ejemplo), ayuda mutua y trabajo entre parientes, comunicación de información entre amigos, parientes en las comunidades sobre insumos, ventas, tendencias de precios; compras y ventas en común.

Igualmente se concibe que el espacio público es en sí mismo una construcción política, ya que en él se disputan, negocian y acuerdan objetivos, intereses y recursos que dan lugar a la reproducción social de los diferentes grupos, en este caso los campesinos, en los ámbitos familiar, comunitario y de la sociedad en general (Bolos, 2008). Así, los espacios públicos se configuran de procesos y experiencias, con estructuras variables, negociaciones concretas y complejas, redes tradicionales (parentales, de compadrazgo, por ejemplo) e innovadoras (con nuevos intermediarios), relaciones plurales y experiencias concretas. En éstos se generan procesos que los individuos, grupos, organizaciones y comunidades encaminan hacia la resolución de problemas inmediatos, proyectos, procesos productivos que permitan, dentro de una sociedad con divisiones de clase, diferencias políticas, y marginación de ciertos grupos, plantearse, por ejemplo, mejorar su condición, negociar con otros actores de la sociedad, reivindicar derechos, exigir ciertas demandas a las instituciones gubernamentales, abatir pobrezas, disminuir marginación o concretamente tener acceso a los recursos y servicios a que legalmente toda la población tiene derecho, pero que la política estatal actual no lo considera. Así, están definiendo caminos viables de desarrollo y cuestionando las formas capitalistas y, sobre todo, ampliando la perspectiva de las posibilidades de transformación y construcción.

Esto deriva en la construcción de formas de pertenencia a la sociedad por vías de la utilización y movilización de los recursos y relaciones propias

de los sujetos, ganado lugares frente a la sociedad como el que los productores jitomateros son reconocidos en las plazas y centrales de abasto nacionales, las comunidades de la región se registran con índices bajos de migración, las familias se plantean alternativas diferentes de estudios y trabajos para los hijos, las condiciones de vida se encuentran por arriba de la pobreza extrema, los productores desde sus aprendizajes de negociación productiva arriban a disputas políticas, etcétera.

En este caso, interesa resaltar la utilización de las estrategias campesinas en caminos propios de desarrollo, al tener como perspectiva la creación de un nuevo orden social determinado de acuerdo con pautas históricas y culturales propias, donde los destinos finales no son el objetivo mismo, sino las experiencias particulares, prácticas cotidianas, decisiones, y negociaciones de los grupos, reforzados con aprendizajes y crecimiento colectivo en permanente construcción entre caminos múltiples.

Los procesos de conformación y transformación de las múltiples relaciones sociales muestran tendencias generales de apertura de los ámbitos de interacción, desde los espacios familiares y comunitarios hacia el mercado regional y nacional.

Los ámbitos familiares y comunitarios contienen las posibilidades de seguridad de las actividades productivas y de la reproducción social, se mueven con ventajas de su propia lógica, al ser espacios y relaciones contruidos por ellos, no impuestos o definidos de manera externa; esto les da posibilidades de incursionar en ámbitos de riesgo, donde no cuentan con capacidad de definir los resultados de su participación, como en el mercado o en la compra de insumos y la comercialización de sus productos. Ahí los campesinos se vinculan de manera desventajosa, única manera de incursionar en estos espacios y obtener sus propias ventajas, como las ganancias, y a través de ellas y la integración en la estrategia global, construyen, forman parte y logran la recreación de los escenarios productivos y reproductivos a partir acciones, decisiones, trabajos, condiciones particulares de los diferentes grupos y sus interacciones con los otros.

CONCLUSIONES

La historia regional del cultivo de jitomate con fines comerciales a lo largo de medio siglo, muestra un complejo de procesos de transformación a dis-

tintas escalas –individuales y colectivas–, que trastoca tanto a los habitantes de la misma, especialmente a los campesinos, como a múltiples actores externos vinculados paulatinamente a dichos procesos, a través de las redes de relaciones configuradas. Este proceso se adapta a las dinámicas nacionales de mercado, de cambios tecnológicos, de pautas de consumo bajo las propias condiciones campesinas, tanto en el sentido del sostenimiento de su cultura, como en la confrontación de su situación de vulnerabilidad y marginación social en que los pequeños productores campesinos viven en nuestro país.

De esta manera, consideramos que el conjunto de decisiones técnicas, que a lo largo de la historia jitomatera han conformado el día a día de los procesos productivos, está marcado por iniciativas permanentes de los productores y sus familias como acciones de autonomía y ejercicio de capacidades que apuntan hacia la conjunción de elementos sustanciales para la construcción de ciudadanía.

Los principios complementarios de la *especialización diversificada*, como forma de producción, permiten entender la manera peculiar en que los jitomateros, hoy horticultores campesinos de Los Altos de Morelos, han logrado mantener un cultivo técnicamente difícil y riesgoso bajo las condiciones de minifundio, poca mecanización, sin riego, capacidad inestable de inversión, sorteando la situación de riesgo permanente, tanto frente a las condiciones ambientales (clima y plagas), como hacia el mercado de productos perecederos (dadas las fluctuaciones de precios). Es decir, la experiencia jitomatera muestra que para adoptar un cultivo especializado los campesinos lo han integrado a su forma de producción y vida campesina, en la que la diversidad representa la base de la seguridad, tanto para sostener el cultivo como para garantizar la reproducción social de los grupos.

El jitomate, en un principio, y ahora la diversidad de cultivos, ha forjado una base material al interior de las familias, de las diferentes comunidades de la región que los cultivos de autoconsumo no permiten. Por esto, se afirma que la comercialización del jitomate genera ganancias y permite la adquisición de bienes, servicios y perspectivas de vida y sueños, difíciles de conseguir en las condiciones campesinas generales en nuestro país; con esto se visualiza una perspectiva de cambio permanente, tanto en las formas de producir como en la vida cotidiana, y las posibilidades de acceso a múltiples recursos (como pueden ser bienes materiales, educación, viajes, etcétera) que mantiene en los productores la voluntad, interés y capacidad para organizar

el trabajo y la vida familiar, comunitaria y regional en el sentido de garantizar el sostenimiento y continuidad de los cultivos hortícolas comerciales.

Este acceso y generación de recursos y empleo es sostenido por una red de relaciones sociales que van desde vínculos de origen familiar, amistades y compadrazgos que se despliegan para posibilitar, de la mejor manera, la producción y la comercialización, a partir de las cuales logran proveerse de los servicios agropecuarios que las instituciones gubernamentales en sus programas agrícolas limitados no garantizan, como son los créditos, seguros agrícolas, gestión comercial, capacitación, etcétera.

Con el acercamiento a las transformaciones permanentes en las formas de vida y las relaciones sociales queda claro que en el conjunto de la población general existen acciones y actitudes distintas a lo que desde lejos y fuera se asignan a las posibilidades campesinas de manera genérica. Con esta experiencia se contradice la idea ancestral de que los campesinos no cambian, y que ya no cumplen funciones sociales y económicas trascendentes dentro de nuestra sociedad, y muestra que a pesar de que no haya políticas para el sector rural campesino, logran generar empleos, recursos, y pueden sustentar transformación permanente y formar parte de redes complejas de relaciones, además de su propia condición campesina.

La autonomía base de este proceso, sustentada por las decisiones y constituciones de redes de relaciones, además de generar recursos y procesos necesarios como agricultores, también genera sujetos que amplían sus perspectivas de trabajo y vida hacia ámbitos más vastos que las parcelas y las comunidades, hacia los espacios públicos, y genera perspectivas distintas de vida. Así, por ejemplo, los aprendizajes que este proceso implica han llevado a que las relaciones al interior de las comunidades potencien la vida política de los mismos bajo la participación en las instancias comunitarias, en los partidos políticos, en las negociaciones con los programas institucionales existentes, construyendo y siendo parte de una vía de democracia participativa.

En última instancia, los jitomateros enfrentan y evitan subsistir en condiciones de marginación, lo que los vincula a la sociedad en general de manera distinta, es decir conforman, desde sus unidades familiares, comunidades y regiones, lugares dinámicos y propios frente a la sociedad y el Estado, es decir, construyen ciudadanía.

Esto nos refiere a procesos incluyentes, en tanto los productores y sus familias con sus acciones y recursos establecen vínculos con la sociedad y acceden a servicios y formas de vida que ésta no les reconoce en sus instrumentos

políticos. La viabilidad de estas formas alternativas depende, en buena medida, de la capacidad de sobrevivir y reproducirse dentro del contexto del dominio del capital, donde la construcción de ciudadanía se vislumbra como meta del proceso permanente de desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA

- Bolos, Silvia (2008), *Mujeres y espacio público: construcción y ejercicio de la ciudadanía*, UIA, México.
- Bresser Pereira, Luiz Carlos y Cunill Grau, Nuria (1998), “Entre el Estado y el mercado: lo público no-estatal”, en L. Bresser y N. Cunill (coords.), *Lo público no estatal en la reforma del Estado*, Paidós Ibérica, Argentina.
- De Piero, Sergio (2003), “Pensando el espacio público en la globalización: cuatro reflexiones”, *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, vol. 1, núm. 4, Universidad Bolivariana, Chile.
- De Sousa Santos, Boaventura (2006), *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires)*, Clacso, Argentina.
- y Rodríguez, César (2006), “Para ampliar el canon de la producción”, en *Desarrollo, eurocentrismo y economía popular: más allá del paradigma neoliberal*, Ministerio para la economía popular, Venezuela.
- Duhau, Emilio y Giglio, Angela (2004), “Espacio público y nuevas centralidades. Dimensión local y urbanidad en las colonias populares de la Ciudad de México”, *Papeles de Población*, núm. 41, julio-septiembre, UAEM, México.
- Guzmán, E. y León, A. (2008), *Campesinos jitomateros. Especialización diversificada en los Altos de Morelos*, UAEM/Plaza y Valdés, México.
- Hervieu, Bertrand y Viard, Jean (2001), *L'archipel paysan*, L'aube, France.
- INEGI (1991), *Censo Agrícola y Ejidal 1991*, INEGI, México.
- (2000), *Censo de Población y Vivienda 2000*, INEGI, México.
- (2001), *Censo Agrícola y Ejidal 2001*, INEGI, México.
- (2007), *Censo Agropecuario y Ejidal 2007*, INEGI, México.
- (2008), *Censo Agrícola y Ejidal 2008*, INEGI, México.
- (s/f), *Sistema de Cuentas Nacionales*, INEGI, México
- Jollivet, Marcel (1988), *Pour une agriculture diversifiée*, L'Harmattan, Francia.
- Lander, Edgardo (1998), “Límites actuales del potencial democratizador de la esfera pública no-estatal”, en L. Bresser y N. Cunill (coords.), *Lo público no estatal en la reforma del Estado*, Paidós Ibérica, Argentina.
- Pérez, Ana María y Oraisón, Mercedes (2008), “Exclusión, participación y construcción de ciudadanía. Una aproximación al estudio de los procesos de exclu-

- sión/inclusión”, Congreso PreAlas, Centro de Estudios Sociales, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina.
- Pineda Pablos, Nicolás (1999), “Tres conceptos de ciudadanía para el desarrollo de México”, *Este País*, núm. 34, agosto, México.
- PNUD (2007), *El estado del Estado en Bolivia. Informe nacional sobre desarrollo humano 2007*, PNUD, Bolivia.
- Presidencia de la República (2008), *Segundo Informe de Gobierno*, Poder Ejecutivo Federal, México.
- Sagarpa-SIAP (s/f) [www.siap.gob.mx/ventana.php?idLiga=1042&tipo=1].
- Schnapper, Dominique (2000), *Qu'est-ce que la citoyenneté?*, Gallimard, Francia.
- Sen, Amartya (2000), *Desarrollo y libertad*, Planeta, México.
- Silva, Juan Claudio (2001), “Ciudadanía: entre el debate crítico, la lucha política y la utopía”, *Última década*, núm. 14, Chile, pp. 91-114.

Caficultores organizados de La Frailesca chiapaneca*

Rosario Cobo González
Lorena Paz Paredes**

Enclavado en la finca Cuxtepeques de Herman Martín Pohlenz, en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la biosfera El Triunfo –cuyos bosques de niebla se declaran en 1990 como los más espectaculares y de mayor extensión en el territorio mexicano–, se encuentra un pequeño pueblo habitado por 70 familias dedicadas a la producción de café “de altura”, muchas de ellas socias de la Unión Ramal Santa Cruz (URSC) que acopia y exporta este grano aromático a Estados Unidos y Europa en el sistema de Comercio Justo.

Para llegar a este poblado de la región Frailesca en la Sierra Madre de Chiapas, ubicado a 1 300 metros sobre el nivel del mar y parte del corredor de vegetación que comunica a las Reservas de la biosfera El Triunfo y La Sepultura, hay que tomar un camino de terracería desde Nuevo Paraíso, que en los temporales se vuelve un lodazal intransitable porque la lluvia desgaja los cerros. Si se corre con suerte se llega por fin a los pinos, encinos

* La información del presente ensayo fue recabada en un trabajo de campo en la región Frailesca de Chiapas en julio de 2009, en conjunto con personal de la Unión de Pequeños Productores de Café, Ramal Santa Cruz, a quienes las autoras capacitaron y acompañaron en la realización de autodiagnósticos familiares de asociados a dicha Unión. Esta tarea fue parte del diplomado “Estrategias sociales para el desarrollo humano sustentable. Los retos de las organizaciones productivas rurales”, para agrupaciones campesinas chiapanecas, financiado por Ban-chiapas y el Corredor Biológico Mesoamericano (CBMM), y en el que participaron la UAM-Xochimilco y el Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural “Maya”.

** Investigadoras del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural “Maya”.

y liquidambar del bosque de niebla donde el gorjeo de las chachalacas se mezcla con el rumor del agua que fluye por los innumerables arroyos de la sierra, donde relámpagos de loros cruzan el cielo y a cada vuelta del camino se abre un nuevo abanico de verdes.

VIAJE AL PASADO

Pero llegar a la finca Cuxtepeques no es sólo adentrarse en un paisaje alucinante de formas, paisajes y colores, es también un viaje en el tiempo: un regreso al Chiapas de fines del siglo XIX, en el que un puñado de aventureros y capitalistas extranjeros tentaban a la fortuna estableciendo vertiginosos cafetales. Los alemanes provenientes de Hamburgo, Bremen, Lûbeck y de la vecina Guatemala, se ubicaron primero en Soconusco, donde establecieron o compraron plantaciones, construyeron beneficios de café y edificaron casas señoriales de estilo teutón, pero también rudimentarias viviendas para los mozos. Bautizadas con exóticos nombres como Hannover, Germania, Bremen, las fincas se extendieron igualmente por la vertiente atlántica hasta La Frailesca, donde estaban Prusia, Liquidámba, Suiza, etcétera. Ahí se acercaron alemanes, ahora mexicanizados, como Sonnemanns, Diestel y Pohlenz, socios o administradores de la parte agrícola de los grandes negocios transnacionales que llevaban el grano aromático del trópico donde se producía, a las metrópolis europeas donde su consumo iba en ascenso (Bartra, 1996:193-198).

Además de cafetales y plantas de beneficio, los finqueros tenían potreros para el ganado, así como bosques y terrenos quebrados que no ocupaban en sus plantaciones. En estas tierras marginales se fueron estableciendo cultivos alimentarios, pues para arraigar a los trabajadores venidos de otras zonas y disponer de brazos para la cosecha y otras labores, el patrón acostumbraba cederles pequeñas parcelas o pegujales donde éstos sembraban milpas de autoconsumo (Spenser, 1988).

Las fincas funcionaron sin problemas hasta los primeros años de la pos-revolución, cuando la nueva legislación agraria prohibió plantaciones mayores de 300 hectáreas y declaró afectables los terrenos incultos. Para evadir la ley y disfrazar sus latifundios, muchos finqueros fraccionaron y repartieron entre familiares y personeros parte de sus tierras. Y en vez de dar pegujales a los peones acasillados, mejor les vendieron parcelas alrededor de la propiedad, creando con ello un cinturón de defensa contra solici-

tantes de tierra o simples invasores. Algunos hacendados convencieron de sembrar café a los recientes propietarios por ellos cobijados y hasta les dieron plantas y les prestaron herramientas de trabajo. Así, fueron desapareciendo las milpas pegujaleras y todo el entorno se cubrió de cafetales, plantaciones de la finca o de sus arrimados que finalmente sumaban sus cosechas al negocio del patrón.

Una historia por el estilo es la de “Los Cuxtepeques”, pero no se trata sólo de historia pues las viejas relaciones de corte feudal siguen marcando la vida de cientos de pequeños cafetaleros.

CUXTEPEC Y SU ENTORNO

Don Herman Martín Pohlenz es dueño del pueblo Finca Cuxtepeques y de casi todo lo que hay ahí. De él son la enorme bodega y la secadora y beneficio de café movidos con sistemas hidráulicos –porque aquí el agua abunda y corre–, pero también son suyas las viviendas, la iglesia, la tienda y la fuente cantarina que está en medio de la plaza. Las interminables huertas que cubren todo lo que la vista alcanza, desde el centro del pueblo hasta el borde de las montañas, son cafetales de don Martín. Más allá, en el perímetro de la finca, están las parcelas campesinas que el hacendado les ayudó a comprar y escriturar hace más de 20 años. Algunos cuxtepeños dicen que con una superficie de 8 mil hectáreas, la finca de Pohlenz es una de las mayores de Chiapas y otros creen que es la más extensa de México y hasta de Latinoamérica.

Cerca de los Cuxtepeques nacieron caseríos como San Isidro, que se formó a fines de la década de 1970 con familias de peones. Don Marianito Gómez, de 77 años, que fue caporal de la finca por más de tres décadas, cuenta cómo el patrón ayudó a la peonada a comprar tierras federales en el perímetro de las suyas:

Los apoyados fuimos yo y otros catorce, que en dos años pagamos la deuda por 303 hectáreas [...] Ya como dueños sembramos milpa y chilacayote, pero don Martín nos animó a meter café [...] Agarramos tierras en los puros bordes de las suyas y así está él defendido de las invasiones de fue-reños (Entrevista 1).

Los habitantes de otro poblado del rumbo: Santa Anita, son tzeltales nacidos en Tenejapa, que en la década de 1970 llegaron a trabajar a la finca Las Nubes, propiedad de Guillermo Sonnemans, como Pohlenz, de origen alemán. Al principio viajaban cada año con todo y familia de Los Altos a La Frailesca y terminada la pizca se regresaban. Hasta que a principios de 1980, el finquero les ofreció 147 hectáreas por 120 mil pesos. El más memorioso fundador del caserío, don Antonio, cuenta que le dijeron: “No tenemos dinero, somos peones”. Pero él los convenció, “nomás sigan trabajando en mi finca –les dijo– y me pagan con la mitad de su jornal. Y así –recuerda don Antonio– diez familias compramos y empezamos con el café pero ahora como propietarios [...] Igual nacieron otros ranchitos con paisanos de Tenejapa, en terrenos que el patrón ayudó a comprar” (Entrevista 2).

Los de Santa Anita hablan tzeltal y las mujeres bordan en telar de cintura. Si una les pregunta dicen, “De aquí no somos, somos de Tenejapa”. Pero los jóvenes ni siquiera conocen ese lugar, pues nacieron en los tejabanos de la finca.

La gente del pueblo Finca Cuxtepeques habita en casa prestada. Si los cuxtepeños ponen piso de cemento, mejoran el techo o construyen una pila, saben que se arriesgan a perder esas mejoras porque el finquero puede pedirles la casa cuando quiera o mudar a la familia si es su capricho. Pero aun así aprecian al patrón. Y es que don Martín les presta dinero, les compra café y hasta les ayuda a hacer trámites agrarios y a gestionar programas públicos. Además, la mayoría se emplea por temporadas en los cafetales o las plantas procesadoras de Pohlenz.

Don Javier Flores, quien ya rebasa los setenta, tiene cuarenta años de trabajar en el beneficio de café, y vecinos de su misma edad como don José Cándido, toda la vida han sido caporales a las órdenes del “patrón”. Y como ellos, los de San Isidro, Berlín o Santa Anita, hombres y mujeres, se contratan en la finca por uno, dos y hasta tres meses: hacen “chaporros” o limpias del cafetal, regulan la sombra de chalunes, agobian, podan, desmusgan y fertilizan la mata.

Claro que ya no son acasillados o acasilladas, ahora son dueños de un pequeño cafetal de dos, tres y hasta cuatro hectáreas –que por cierto se ha venido achicando con la herencia, pues al hijo que empieza “se le dan cuando mucho sus tres cuerdas (menos de una cuarta parte de hectárea) para que meta su propio café” (Entrevista 2), y aunque tienen poco se sienten orgullosos trabajando lo propio en vez de ser simples mozos de finca.

Algunos se dan cuenta de que sus parcelas en los bordes de la finca dan la apariencia del pejugal de sus abuelos. “Pero –dicen– aunque tengamos que seguir jornaleándole al patrón porque del café propio no se vive y con algo tenemos que completarnos, ahora no es lo mismo” (Entrevista 3). Y efectivamente, no lo es.

LOS CAFICULTORES SE ORGANIZAN

En el pueblo finca Cuxtepeques dos grupos de pequeños cafetaleros se unieron a la Unión Ramal Santa Cruz para vender su café a buen precio, mejorar la calidad del grano y exportarlo al Mercado Justo.

Vivíamos cansados de los coyotes que nos amarraban con anticipos a cuenta de cosecha –dice don Javier– Y así fue que hace diez años nos juntamos en un paraje llamado La Playona, bajo la sombra de un árbol, y decidimos organizarnos [...] En la Ramal, además de comercializar café orgánico, nos damos préstamos a tasas de interés muy bajas (2% mensual en vez del 15% que nos cobran los comerciantes) [...] Desde entonces estamos en el sistema orgánico y en vez de químicos abonamos la mata con composta: una revoltura de pulpa de café, hojarasca y ceniza. El lavado y seleccionado del grano lleva mucho trabajo, porque entregamos a la Ramal puro grano sazón y parejito, el vano lo dejamos al sol para venderlo chibola al coyote (Entrevista 4).

Antes de unirse en la Ramal muy pocos lavaban su café, lo vendían como cereza o “uva” al finquero que tiene planta de beneficio, o lo asoleaban para darlo chibola o capulín al acaparador. Gracias a la organización muchos consiguieron pequeñas despulpadoras y se hicieron de tanques de lavado y fermentado, y de patios de asoleadero. Y así empezaron a exportar café pergamino en mercados del Comercio Justo, que pagan mejores precios que el convencional.

En esta zona, la altitud de las plantaciones va de 1 300 a 1 700 metros sobre el nivel del mar y los cafetaleros de la Ramal presumen tener altas densidades por hectárea: de 3 mil y 3 500 plantas, con variedades criollas como árabe, borbón y mundo novo, de porte alto, pero también caturra: mata chaparrita que ensaya rápido. En manejo orgánico, sus rendimientos pueden llegar hasta 26 quintales por hectárea. Aunque don Martín y otros finqueros doblan esta cifra porque aplican fertilizante químico y renuevan

constantemente sus cafetos. Los pequeños productores trabajan sus huertas con la familia, pero no se dan abasto y tienen que contratar peones, sobre todo en el corte. Así, de diciembre a marzo van llegando a la zona familias guatemaltecas a cortar el café, tanto de los finqueros como de los campesinos.

La temporada de cosecha es de trabajo duro para todos. La familia entera del productor sube al cafetal. Las mujeres llevan las provisiones que se ocuparán para darle de comer a los cortadores y ahí se afanan cocinando nixtamal, moliendo, echando tortilla y parando frijoles, durante casi cuatro semanas que las dejan exhaustas. En este tiempo es cuando los que están en la Ramal piden un anticipo a su organización que luego pagarán con la venta de café. Sin embargo, a veces algunos miembros de la familia del productor, incluyendo hijas y esposas, se emplean en la pizca de la finca para juntar el dinero y pagar a sus propios cortadores.

Laberíntico y abigarrado sistema productivo y laboral en el que peones venidos de Guatemala y pequeños cafetaleros mexicanos con plantaciones propias, cosechan tanto las huertas del finquero de origen alemán como las de los campesinos. Complejo orden social en que para mantener su equilibrio económico el pequeño caficultor debe ser al mismo tiempo peón del finquero y patrón de los pizcadores migrantes. Y el círculo se cierra si tomamos en cuenta que este peón–campesino–patrón, se volvió cafetalero por cuenta propia, por obra y gracia del finquero, que veía en su clientela afeudalada una fuente segura de mano de obra y un cinturón protector contra el reparto agrario. Un finquero al que siguen estando agradecidos y para el que eventualmente trabajan, pero del que cada vez dependen menos en lo que toca al café, pues su organización les da autonomía y acceso a mejores mercados. Y el círculo se cierra cuando la Unión Ramal Santa Cruz, que forma parte de Comercio Justo, lucha porque en este sistema, concebido para beneficiar a los pequeños productores y a los consumidores conscientes, no puedan entrar grandes fincas como la de Martín Pohlenz, en cuyo casco y en cuyas casas algunos siguen viviendo.

UNIÓN RAMAL SANTA CRUZ

La sierra de La Frailesca tiene condiciones privilegiadas para la producción de café de altura y estrictamente de altura. Las tierras de excelente calidad, regadas por generosos caudales de agua, la vuelven una de las zonas más

disputadas por los compradores del aromático. Comprar café en esta sierra es llave garantizada a los mercados internacionales *gourmets* y los de especialidad.

Aquellos pequeños caficultores que desde la década de 1970 emprendieron su propia producción, que al fin de cada ciclo se veían acosados por finqueros, acaparadores, y que terminaban vendiendo su grano en condiciones muy desventajosas, iniciaron en el año 2000 un proceso organizativo que cristalizó en la constitución de la URSC.

Conocida hoy por socios y agrupaciones hermanas simplemente como “la Ramal”, esta Unión surgió en busca de mejores precios y más seguras opciones comerciales, pues por esos años el café en el mercado convencional llegó a sus más bajas cotizaciones en las que se prolongaba, como tendencia general, la estrepitosa de los precios internacionales iniciada a finales de la década de 1980.¹ Y los pequeños productores, inspirados en la experiencia de otras agrupaciones cafetaleras chiapanecas, empezaron a forjar la suya propia. Así lo cuenta uno de los pioneros:

En las tardes nos juntábamos a platicar y nos dimos cuenta de que, a pesar de que ya éramos dueños del cafetal, seguíamos pobres. Todo se lo llevaba el coyote. Fue cuando el precio se vino abajo, y por más que trabajábamos duro en la parcela y como jornaleros en las fincas, cada día estábamos peor.

De este modo, en pequeñas reuniones bajo algún árbol frondoso o en las bancas de los poblados, las pláticas continuaron por más de un año, hasta diciembre de 2001, en que 83 pequeños cafetaleros de siete comunidades se deciden a formar la URSC, que por su figura jurídica es una Sociedad de Producción Rural. Desde entonces, la organización ha ido creciendo y se ha consolidado hasta contar, en el ciclo 2008-2009, con 537 socios de 26 comunidades, con una superficie cafetalera total de 1 804 hectáreas, distribuidas en parcelas de 3.3 hectáreas en promedio, aunque algunos disponen de apenas algunos surcos.

¹ La megacrisis de los precios del café inicia en el trienio de 1989-1993, debacle que, después de una breve recuperación en el ciclo 1994-1995, colapsa más hondo en 1998 hasta llegar en el ciclo 2002-2003 al punto más bajo, con precios promedio menores a 50 dólares por 100 libras.

Cuadro 1
Extensión por socios

Superficie	% de socios
Menos de media hectárea	15
Entre media y cuatro hectáreas	60
Entre cinco y 10 hectáreas	15
Más de 10 hectáreas	10

La Ramal tiene sus oficinas en el cruce de veredas que comunica a las regiones serranas con la carretera principal Tuxtla Gutiérrez-América Libre. Encrucijada que se conoce localmente como la “ramal”, expresión de donde proviene el nombre de la Unión. En este desolado paraje, donde se entreveran senderos empinados y pedregosos, la Ramal inicia sus operaciones en 2001, año en que construye una bodega con capacidad para almacenar cinco mil quintales de café.² Y también un beneficio seco que, sin embargo, ha sido imposible poner en operación ya que se carece de corriente eléctrica trifásica indispensable para ese tipo de maquinaria.

La experiencia de acopio y venta directa inicia en el ciclo 2001-2002 y no sin tropiezos. En esos años la organización reúne cerca de dos mil sacos de café, entregados por los 87 socios fundadores, para los que busca un mejor precio que el que pagaban los acaparadores.

Tras un largo proceso, otras organizaciones de la misma región habían logrado entrar con café orgánico al Mercado Justo, que paga mejor por el aromático producido por pequeños caficultores organizados en cooperativas, y aún más si cosechan un grano producido sin agroquímicos, es decir “orgánico”. Pero la naciente Ramal, pese a que disponía de un aromático de calidad, carecía de certificación, proceso que toma cuando menos tres años.

Y la situación se le complica, porque un año antes había llegado a la región la empresa Starbucks, presentándose como “líder a nivel mundial en la compra, tostado y venta de café”, y ofreciendo como carta de presentación precios y estímulos muy semejantes a los del Comercio Justo.

Con todo, la organización debutante logra vender bien su café, gracias al apoyo de la Unión de Ejidos “San Fernando”, ubicada en la parte central

² Un quintal de café pergamino pesa 57.5 kilogramos.

del estado y con una experiencia de más de 25 años en el acopio y exportación del aromático.

Paralelamente, alentada por el favorable diferencial de precios que se consigue con café orgánico comercializado en el Mercado Justo, la Ramal decide emprender la conversión a este modo de cultivo, y para el ciclo 2003-2004 obtiene certificación de su café como orgánico y ensaya las primeras ventas directas en mercados alternativos.

Pero el momento resulta inoportuno, pues si en el ciclo 2002-2003 el precio de café en el Comercio Justo era tres veces mayor que en el mercado abierto, al año siguiente repuntan los precios en el mercado convencional, lo que hace menos atractivos los mercados solidarios.

Así lo cuentan directivos de la organización:

Apenas en 2004 empezamos las ventas en el mercado orgánico y justo, de modo que no nos tocaron las épocas cuando el precio solidario triplicaba al convencional. Pero aun así no nos vamos a rajar. Y tal vez el día en que vuelvan a caer los precios del grano en la bolsa, nos daremos cuenta que no estábamos equivocados cuando nos organizamos para comercializar. Porque los precios del café así son, suben y bajan (Entrevista 5).

La decisión de mantenerse con café orgánico vendido en el Comercio Justo y no sucumbir a la tentación que representa el alza circunstancial de los precios convencionales no es poca cosa, pues para poder operar en el mercado alternativo los productores tienen que realizar esfuerzos adicionales tanto en labores de cultivo como en inversión de tiempo en reuniones, y de dinero para sufragar las numerosas inspecciones y certificaciones que demandan los compradores.

Pese a que organizarse para producir mejor café y para vender conjuntamente en mercados alternativos tiene obvias ventajas, no es fácil para los socios resistir las ofertas de los compradores privados y sobrevivir a las fluctuaciones de un mercado convencional donde a ratos los precios superan a los del Comercio Justo. Pero con casi diez años de vida, el saldo de la Ramal es positivo. Hoy la organización cuenta con la certificación de Certimex, NOP y Comercio Justo, y en el ciclo 2008-2009 acopió y comercializó más de 15 mil quintales del grano, 90% café orgánico. Además ha incrementado y diversificado sus mercados y a la fecha tiene nueve contratos comerciales con clientes de Holanda, Estados Unidos, Francia e Inglate-

rra.³ Hoy la Ramal se ha consolidado como una de las mejores empresas de acopio y comercialización de café de La Frailesca.

Cuadro 2
Captación de café
2008-2009

Categorías	Socios	Hectáreas	Quintales
Café orgánico	434	1 459	13 497
Café en transición 2 y 1	86	248	1 632
Total	520	1 707	15 129

FUENTE: Unión Ramal Santa Cruz (2010).

LA AMENAZA DE STARBUCKS Y LA MALDICIÓN DE LOS AÑOS DE BUENOS PRECIOS

A fines del siglo XX, con la demanda creciente de productos sanos y respetuosos del medio ambiente, nuevos actores aparecen en el mercado del café. Y de la misma manera que en el pasado los alemanes llegaron a La Frailesca y El Soconusco atraídos por las bondades y el clima, al comenzar el siglo XXI numerosos compradores concurren a la región para disputarse las cosechas del buen aromático que ahí se produce.

Hace diez años la beligerante entrada de Starbucks a la zona, forzó recomodos tanto en las prácticas comerciales de los compradores privados tradicionales como en las de las organizaciones sociales. La trasnacional desestabiliza primero a la red de compradores que trabajaban para compañías como Cafés California, reduciendo sensiblemente su captación de grano. Pero también copta a varias agrupaciones sociales.

En La Frailesca, seis organizaciones le venden a Starbucks durante dos años, hasta el ciclo 2003-2004, en que la empresa, ignorando acuerdos previos, impone a Agroindustrias de México S.A. (AMSA) como único canal de entrega. Así lo cuentan productores que vivieron el proceso:

³ Actualmente la Ramal vende a compradores como A. Van Weely B.V., de Holanda; Interamerican Coffe, Royal, Volcafe Specialty Coffee, International Coffee Corporation, The Serengenti Trading Co., de Estados Unidos; Maison Jobin de Francia; y Twing Trading LTD de Inglaterra.

Intentaron hacernos a un lado en la comercialización, porque dizque las organizaciones ya no teníamos que meternos en la selección del grano, en el control de calidad, en la exportación, sólo entregarle a AMSA el producto en bruto (Entrevista 6).

El argumento era que las agrupaciones cafetaleras no habían entregado en tiempo y forma la cosecha comprometida, lo que “demostraba una falta de capacidad en el proceso de maquila y exportación” (*La Jornada*, 2004).

Así, cuatro colectivos de La Frailesca –Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas (Cesmach, SC), la SSS, Finca Triunfo Verde, Organizaciones de Productores de Café de Ángel Albino Corzo (OPCAAC), y la Organización Regional de Productores Agroecológicos (ORPAE)– rompen con Starbucks y deciden buscar alternativas de comercialización. Es precisamente en esos años de feroz competencia con el comprador transnacional que detrás de AMSA ha fortalecido su presencia en La Frailesca, que la Ramal se inicia en la comercialización.

En esta batalla mucho ayuda la coordinación de las diversas organizaciones de pequeños caficultores, tanto en Coordinadora Estatal de Pequeños Productores de Café (Coopcafé),⁴ como en la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC).⁵

Coopcafé participa en instancias nacionales, latinoamericanas e internacionales, donde se deciden precios y políticas del Comercio Justo, además de incidir significativamente en la definición de políticas públicas.

Las agrupaciones de pequeños caficultores de La Frailesca, como URSC, Finca Triunfo Verde, Cesmach, ORPAE, OPCAAC y *Comon Yaj Nop Tic* en-

⁴ En la Coordinadora Estatal de Pequeños Productores de Café (Coopcafé) participan 32 organizaciones de las regiones Altos, Sierra, Centro, Selva, Norte y Frailesca, con 15 mil pequeños productores con superficies que en promedio no rebasan las dos hectáreas, dedicados principalmente a la producción y comercialización del café y pertenecientes, en su mayoría, a las etnias tzotzil, tzeltal, chol, tojolabal y zoque.

⁵ La CNOC nace formalmente en julio de 1989 en el “Primer encuentro nacional de organizaciones cafetaleras”, por iniciativa de 25 agrupaciones de pequeños productores de café de seis entidades del país: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Puebla y de la Huasteca potosina, con el propósito de impulsar un frente común en defensa del sector social cafetalero. Se trata de una respuesta inusitada ante la crisis nacional e internacional de la cafecultura y el desmantelamiento del Inmecafé, que condenaba a la desaparición a miles de pequeños caficultores. La CNOC nace en condiciones críticas de la actividad y su creación obedece a la necesidad de un mecanismo de coordinación permanente del movimiento cafetalero a escala nacional, capaz de proponer y negociar políticas públicas favorables al sector y de enlazar experiencias organizativas regionales.

tre otras, han tenido que competir con Starbucks y su filial nacional, AMSA, quienes junto con una larga cadena de pequeños intermediarios o “coyotes” de poca monta, concurren a la región poco antes de la temporada de corte para asegurarse parte de la excelente cosecha. Y aunque todas las agrupaciones campesinas han negociado precios favorables del aromático con sus compradores de la Unión Europea y Estados Unidos, no han podido evitar que algunos socios comercialicen parte de su cosecha por fuera de la agrupación a la que pertenecen.

Y es que aparte de ofrecer precios atractivos en tiempos de altas cotizaciones de bolsa, la transnacional y sus filiales compran sin preguntar si el grano es inocuo o convencional y producido con agroquímicos. En cambio las empresas sociales se esmeran por captar un café orgánico de calidad, seleccionado según distintos tamaños, procedencias y alturas, observando las más estrictas reglas de producción y procesamiento. Lo que sin duda les permite posicionarse firmemente, pero termina por atosigar a los socios, que a veces optan por la vía más fácil aunque sus ventajas sean efímeras.

La pugna por acopiar, que confronta a transnacionales, coyotes y organizaciones cafetaleras se ha hecho más aguda con el aumento de las cotizaciones del grano en el mercado convencional que, como antes se mencionó, desde el ciclo 2004-2005 le pisa los talones al precio que se paga por el orgánico en el Mercado Justo, grano en cuya producción se invierte tres veces más trabajo.

En 2009 la competencia regional fue particularmente difícil para grupos como la Ramal, que pagó a sus socios un precio de anticipo de 1 200 pesos el quintal, mientras que entre enero a mayo, durante la temporada de corte e inmediatamente después, AMSA y su cadena de coyotaje ofrecían un precio firme de 1 100 y hasta 1 700 pesos. Y aunque el precio final que obtuvieron los socios de la Ramal acabó siendo de 1 860 pesos el quintal, y otras organizaciones como la SSS Finca Triunfo Verde o Cesmach dieron hasta 2 mil y 2 100 pesos, en los meses previos a las liquidaciones, que se entregaron en junio y julio, muchos socios vendieron parte de su cosecha a coyotes o directamente a AMSA, poniendo en peligro los compromisos comerciales de sus agrupaciones.

Y es que en el mercado del café y de otros cultivos en los que concurren pequeños productores organizados que han edificado mercados alternativos, se presenta una paradoja: los años de malos precios en el mercado convencional son buenos para las asociaciones, mientras que son malos para ellas los años de buenos precios, tiempo en que las ventajas de estar

organizado y vender en mercados alternativos no son tan evidentes de modo que sufren deserción de algunos socios que se desbalagan seducidos por los cantos de sirena de coyotes y corporaciones.

EL SUTIL EQUILIBRIO DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

Aunque la cafeticultura es la principal actividad de los campesinos organizados de esta zona y para la mayoría la venta de aromático aporta el mayor ingreso monetario, los jornales, los subsidios gubernamentales y en algunos casos las remesas que envían los que migraron, también son significativos.

Como hemos dicho, muchos caficultores se emplean temporalmente en las fincas y cafetales de parientes o vecinos, mientras otros trabajan fuera de la región y algo aportan a la familia. Una entrada de dinero nada despreciable son los subsidios: Fomento Productivo, que va destinado a solventar labores del cafetal; Procampo; Oportunidades, cuyo monto varía según el número de niñas, niños y jóvenes que asisten a la escuela y que generalmente reciben las mujeres cada dos meses junto con pláticas de salud y otros servicios médicos; y meses a las familias no incluidas en Oportunidades.

Por término medio la venta del aromático representa entre 60 y 80% de los ingresos monetarios anuales de una familia cafetalera de La Frailesca, los salarios entre 17 y 30% y un porcentaje semejante los subsidios.

Además de los ingresos monetarios que generan, las familias valoran mucho los variados productos para el consumo familiar que proporcionan el cafetal y la milpa. Como las huertas están a la sombra de árboles maderables y frutales, ahí se recogen nanches, aguacates, papaya, plátano, limones, etcétera, y del ramerío que dejan las labores de desombre, se saca leña para alimentar los fogones del hogar, además de que en el cafetal se encuentra todo tipo de hierbas medicinales y comestibles: chipile, hierbamora, yuca o cabeza de jolote. Habiendo modo, sembrar milpa es un verdadero privilegio, porque aparte de maíz, frijol y calabaza, también se levanta algo de chile, tomate, y hasta un poco de cacahuate. Y si se aprovecha el traspas para la crianza de animales y la siembra de hortalizas, el aporte de huevos, carne, verduras, plantas medicinales y condimentos es grande y valioso, pues además de que se ahorra dinero se tienen a la mano alimentos sanos y nutritivos.

Pero las comunidades de la sierra de Cuxtepec son deficitarias en maíz, pues sólo algunos campesinos de las tierras bajas siembran milpa. Y es que la altura, lo escarpado de la serranía y la ubicación de los pueblos y sus terrenos laborables en la zona de amortiguamiento de la Reserva, dificultan el cultivo maicero. Así, gran parte del grano viene de fuera. Conasupo lo vende en las cabeceras municipales y en los pueblos mejor comunicados como Nuevo Paraíso o Independencia, pero las remontadas rancherías de la parte serrana dependen de los acaparadores, que en ocasiones cambian maíz por café en términos muy desventajosos para el campesino.

En el caserío de San Isidro, donde viven cinco familias, casi no hay milpas. “Es por lo pendiente de los terrenos –explican los pobladores. Y cuando sembramos, los ventarrones tumban la mazorca. Todo el maíz que ocupamos lo trae la Choya” (Entrevista 7). La Choya es un comerciante que llega al pueblo en la temporada de corte del café, entre septiembre y octubre, precisamente cuando se consume más maíz porque hay que alimentar a los pizcadores y sus familias. El año pasado el introductor vendió la tonelada a 5 600 pesos, mientras que en las tiendas de Conasupo de otras localidades donde las hay, costaba 3 700 pesos. “Como sube en su camioneta –explican– el flete cuesta y algo tiene que ganar, ¿no?” (Entrevista 7). De modo que el acaparador abastece de maíz caro al poblado y cuando hace trueque se lleva café de excelente calidad. Un negocio redondo para la Choya pero pésimo para los campesinos, muchos de ellos de la Ramal, que al cambiar café por maíz en un trato leonino, pierden parte de los ingresos que les reporta vender el resto de la cosecha en el Mercado Justo.

Un vistazo a la economía doméstica de los pequeños productores de café asociados a la Unión, muestra la diversidad de actividades en las que se afanan los miembros de una familia presuntamente “cafetalera” para garantizar su sobrevivencia.

Un ejemplo ilustrativo de economía doméstica regional, lo encontramos en una familia de la comunidad tzeltal de Monte Albán, conformada por 11 personas, tres de ellas adultos, que si no es media sí es representativa. Este núcleo trabaja un cafetal de 2.4 hectáreas, con rendimientos de 10 quintales por hectárea, y cosecha alrededor de 25 quintales al año. En el ciclo 2008-2009, esta familia vendió 23 quintales de pergamino orgánico a la Ramal a 1 800 pesos el quintal, además de 110 kilos de café cereza y 40 kilos de pulpa y vano, que comercializó a través del acaparador a 12 pesos kilo, por lo que obtuvo un total de 43 200 pesos por venta de café.

Como la unidad doméstica es numerosa y la huerta pequeña, las labores del cafetal se atienden familiarmente y apenas se contrata 5% de los requerimientos laborales del corte, de modo que los costos monetarios por este concepto son muy bajos. En total, de las 286 jornadas que se invierten en labores de mantenimiento, corte, acarreo, despulpado, lavado, fermentado y secado del grano, solamente 15 son contratadas, y dado que en 2008 el jornal local se pagó a 80 pesos, la familia desembolsó 1 200 pesos por ese concepto. A esto hay que agregar los costos por equipo y maquinaria –recursos que le salieron baratos, pues por medio de la Ramal los consiguió subsidiados de programas públicos– y cuya amortización representa otros 1 044 pesos. En total, el dinero desembolsado en la producción de café fue de 2 244 pesos y dado que por el grano le pagaron 43 200, su ingreso monetario neto fue de 40 956 pesos. Adicionalmente la familia recibió 980 pesos por hectárea por el programa Fomento Productivo, así que su ingreso neto final por concepto de café ascendió a 43 308 pesos.

Algunas mujeres de la familia venden en comunidades vecinas bolsas y blusas que ellas mismas usan y que sus madres y abuelas les enseñaron a hacer en telares de cintura. Las tejedoras aportan al ingreso monetario familiar como 600 pesos al año. Otro ingreso monetario significativo es Oportunidades, programa por el que esta familia con numerosos hijos menores llega a percibir hasta 8 400 pesos al año. Y sin duda son muy buenos los 20 250 pesos en jornales devengados por tres trabajadores del mismo núcleo que se contrataron por temporada en los cafetales del finquero. En el Cuadro 3 se anotan los ingresos monetarios anuales de la familia.

Cuadro 3
Ingresos monetarios netos anuales de una familia campesina
de 11 miembros de la comunidad Monte Albán, 2009

Concepto	\$
Venta de café	40 956
Venta de textiles	600
Subsidios (Fomento productivo y Oportunidades)	10 752
Salarios	20 250
Total	72 558

Debe quedar claro que este saldo monetario anual neto de poco más de 70 mil pesos, no es la ganancia de una presunta “empresa” familiar, pues a los ingresos brutos se le restaron sólo los costos monetarios efectivamente desembolsados en el ciclo y no el valor del trabajo familiar invertido, de la tierra y de otros recursos productivos coadquiridos en el mercado. Así pues, más que de una utilidad empresarial se trata de la parte monetaria del ingreso con que la familia campesina busca garantizar su subsistencia, algo más parecido a un “salario” que a una “ganancia”.

Ahora bien, 72 558 pesos para 11 personas significa un ingreso diario per cápita de 18 pesos, algo más de un dólar. Monto que según los criterios del INEGI, estaría apenas por encima del ingreso de la población en condición de extrema pobreza, lo que resulta chocante cuando nos referimos a una familia que produce y exporta café. Claro que a diferencia de los pobres urbanos, los campesinos que siembran milpa y tienen animales y huertos de traspatio, disponen de alimentos que en algo compensan sus ingresos monetarios.

Aparte del café, la familia siembra milpa en una superficie de media hectárea cuya cosecha alcanza para el abasto de seis meses, de modo que garantizar el consumo de todo el año supone comprar 2.5 toneladas de maíz en las tiendas de Nuevo Paraíso, donde se vende al precio Conasupo de 3.50 pesos el kilo. La milpa requiere unas 10 jornadas de trabajo familiares y no implican desembolso de dinero, pero hay que ponerle fertilizante y herbicida, lo que tiene un costo de 1 280 pesos. En total el grano autoproducido les cuesta en dinero casi siete veces menos que el comprado. Así, aunque la siembra de maíz no es muy rendidora pues se trata de un cultivo aventurero que a veces se dobla con los vientos, si sale bien librado de los ventarrones vale la pena el esfuerzo, pues la familia autoabastece la mitad de su consumo del cereal, además del inseparable frijol de milpa, que le alcanza para todo el año.

Si se comparan los ingresos en dinero en el año con los gastos monetarios anuales en bienes y servicios para la subsistencia, que la familia estimó en unos 62 540 pesos, nos encontramos con un precario y ajustado equilibrio. Así, un bajón en los precios del café, la pérdida de algún subsidio –por ejemplo las becas de Oportunidades cuando los hijos menores crezcan–, la reducción de los ingresos salariales en la localidad o fuera de ella o gastos inesperados pero recurrentes como los que se derivan de las enfermedades, puede resultar catastrófico para la sutil economía familiar.

Y más o menos como este núcleo doméstico de la comunidad tzeltal de Monte Albán, sobreviven en el filo de la navaja cientos de familias de pequeños productores de café de La Frailesca. Es por ello que muchos se han organizado para producir un aromático de calidad orgánica y exportar a Estados Unidos y a la Unión Europea, con lo que han logrado una mejor situación que la de los cafetaleros “libres”, productores de grano convencional atrapados en las redes de coyotes, intermediarios y transnacionales.

BUSCANDO UN PARADIGMA DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

Como hemos visto, decir que los productores de café organizados de La Frailesca son “cafetaleros” es una inadmisibles simplificación. Sin duda cosechan el aromático, pero su subsistencia depende de muchas más cosas, así que si quieren servir realmente a sus socios, las organizaciones no se pueden limitar al acopio y comercialización de café: así como los grupos domésticos son diversificados en sus estrategias de sobrevivencia, así las organizaciones en que se agrupan deben ser multiactivas.

Las congojas múltiples de las familias campesinas, no sólo las que tienen que ver con la producción y comercialización, ha sido preocupación constante de organizaciones como la Ramal, Cesmach o Finca Triunfo Verde, cuyos objetivos van más allá de acopiar y vender un grano de calidad en mercados selectos y a precios justos.

Agrupaciones como Cesmach, por ejemplo, promueven proyectos comunitarios de pequeña ganadería, siembra de hortalizas y frutales de traspatio, capacitación de jóvenes en oficios diversos, impulso al ahorro comunitario. Actividades donde participan mujeres, jóvenes y niños con la mira de vivir mejor, de comer más sano, de educarse, de tener acceso a atención médica, de disponer de vivienda adecuada, de contar con empleo en las propias comunidades evitando así la migración y desintegración familiar.

Esta también ha sido la estrategia de la Ramal, que en 2005 emprendió acciones de rescate para restañar las heridas que provocó el huracán “Stan”, un meteoro que desgajó cerros, arrasó poblados, destruyó viviendas, tumbó cafetales y mató ganado, provocando desolación y más pobreza. “Nunca habíamos sufrido tantas pérdidas” (Entrevista 8), asegura un directivo de la Unión. Entonces la Ramal puso en marcha un agresivo plan de rehabilitación de cafetales, y apoyó la reconstrucción de viviendas y la reparación de caminos, trabajos que en algunas comunidades se volvieron

cotidianos. Así, a partir de ese siniestro, la Unión empezó a incursionar en ámbitos distintos al de los que perseguía en el momento de su fundación, acciones que resultaron tanto o más importantes para la vida de las familias campesinas que la exitosa venta de café.

Otro grave problema de los campesinos de la región es el acceso adecuado y oportuno al maíz y otros productos de primera necesidad, sobre todo en comunidades serranas como San Isidro, que dependen casi totalmente de los voraces comerciantes. Así, a fines de 2009 la Ramal pone en marcha una idea que venía trabajando tiempo atrás: una red de abasto de maíz, frijol, arroz, azúcar, sal, aceite, jabones, y otros productos básicos, que permita acabar con los abusos de los introductores y satisfacer de mejor manera las necesidades primordiales de las familias.

En el ciclo 2009-2010, la asamblea de socios acordó destinar el premio social⁶ que recibe la organización por la venta del café en el sistema de Comercio Justo, a la construcción de un almacén receptor y redistribuidor de granos y otros productos de primera necesidad. En el proyecto participan seis comunidades de la zona baja, que disponen de excedentes maiceros con los que pueden abastecer parte de los requerimientos de las familias de zonas serranas que son deficitarios en el grano (Cuadro 4).

El modelo es simple y básicamente el mismo que siguen los comerciantes privados, con la diferencia de que la organización no lucra con las urgencias alimentarias de la población: los caficultores deficitarios en básicos pueden obtenerlos en el almacén a cambio de una parte del aromático que de por sí entregan a la Ramal para su comercialización. De este modo, en su aún corta vida, el sistema ha distribuido 60 toneladas de maíz y 13 de frijol.

La red de abasto es estratégica [dicen los directivos de la Unión], estamos abatiendo la inseguridad alimentaria mediante la entrega de productos básicos a precios justos y eso es muy importante en la economía de las familias [...] Con estas acciones habrá mayor cercanía de los socios con organiza-

⁶ En el sistema del Comercio Justo, se establece un precio base o precio mínimo, que presumiblemente corresponde al valor real de los costos de la producción de café, directos e indirectos (materiales, sociales, ecológicos) del pequeño productor. El “premio social” es un sobreprecio otorgado a las organizaciones campesinas del Comercio Justo, generalmente se destina al impulso o fortalecimiento de proyectos colectivos, pero en condiciones de precios altos en el mercado de aromático convencional, parte de los fondos del “premio social” se destinan a completar el precio pagado al socio cafetalero.

Cuadro 4

Localidad	Hectáreas de maíz	Hectáreas de frijol	Total hectáreas	Producción de maíz kg	Consumo	Excedente	Producción de frijol kg	Consumo	Excedente
Sajonia	37,0	24,25	61,25	91 700	18 200	73 500	18 400	4 800	13 600
La Selva	30,0	0,50	30,50	123 000	4 500	118 500	3 600	1 400	2 200
Monte Albán	15,5	6,50	22,00	14 200	13 700	500	4 350	3 200	1 150
Nuevo Paraíso	11,5	10,25	21,75	15 900	9 900	6 000	5 650	2 600	3 050
Plan Libertad Alta	17,5	16,50	34,00	33 100	18 100	15 000	8 750	4 050	4 700
Plan Libertad Baja	45,5	36,00	81,50	96 000	37 500	58 500	25 500	13 000	12 500
Totales	157,0	94,00	251,00	373 900	101 900	272 000	66 250	29 050	37 200

Fuente: Unión Ramal Santa Cruz (2010).

ción. No queremos ser una empresa que sólo se ocupa del café. En la región hay muchas carencias: abasto, salud, caminos, vivienda [...] a todo eso hay que entrarle (Entrevista 8).

Junto con el sistema de abasto, la Ramal está impulsando la diversificación productiva. Se trata de ayudar a que los pequeños cafetaleros que disponen de terrenos apropiados, hagan milpa con prácticas innovadoras, y para ello se están apoyando en el programa Maíz Intercalado con Árboles Frutales (MIAF). La idea es crear una suerte de banco de abonos y biofertilizante que se distribuyan por medio de la red de abasto.

A través de estos proyectos complementarios a la producción y comercialización del grano aromático café, los directivos y asesores de la Ramal están reconociendo que los socios, esto es, los dueños de la Unión, son más que simples cafetaleros, son también consumidores, milperos, artesanos, migrantes, jornaleros, etcétera; y asumiendo como propia esta diversidad. Así que además de una empresa comercializadora de café, la Unión es una organización multiactiva donde se canalizan las variopintas necesidades, querencias y esperanzas de los socios. Si los socios son más que productores de café, su organización también es mucho más que una empresa comercial.

Y es que en el fondo el modelo de las organizaciones de los pequeños productores rurales no es tanto el de la empresa privada sino el de la familia campesina, que se adapta a los cambios diversificando actividades y estrategias, y en ello consiste su vitalidad y persistencia.

BIBLIOGRAFÍA

- Bartra, Armando (1996), *El México Bárbaro. Plantaciones y monterías del sureste durante el Porfiriato*, El Atajo Ediciones, México.
- ; Cobo, Rosario y Paz Paredes, Lorena (1996), “Dos siglos de cafecultura en México a muchas voces”, *Ojarasca*, núm. 46, diciembre-junio, ProMéxico Indígena, México.
- Celis, Fernando (2008), “Un futuro mejor para los cafetaleros”, *La Jornada del Campo*, núm. 9, junio, México.
- ; Hernández, Luis; García, Arturo *et al.* (1991), “Cafetaleros. La construcción de la autonomía”, *Cuadernos de desarrollo de base*, núm. 3, México.
- Cesmach (2006), “Documento de la Cooperativa”, Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas, SC, México.

- Cobo, Rosario, (2009), “Estrategias económicas de familias campesinas cafetaleras en cuatro regiones de México”, tesis de maestría, ENAH.
- y Paz Paredes, Lorena (2009), *Diagnósticos socioeconómicos de unidades familiares y comités cafetaleros asociados a la URSC. Triunfo Verde de la región Frailesca*, México.
- Comercio Justo (2004), “El poder de un mercado diferente. Informe de Actividades 1999-2004”, folleto, Comercio Justo, México.
- Conoc-Coopcafé, (2006), “La comercialización de café orgánico. Situación actual y perspectivas”, folleto, México.
- Coopcafé (2006), “Informe de avance de actividades 2006 del Programa de Desarrollo Social 2005-2007”.
- Coopcafé-CNOC, (2007), “Café y Comercio Justo. Una alternativa de desarrollo para las organizaciones de pequeños productores”, folleto, México.
- Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (2006), “El mercado y precios del café 2006-2007”, folleto, México.
- Fondo Acción e Instituto Maya (2000), “Estudio de gran visión: café. Veracruz-Guerrero-Chiapas y Oaxaca”, documento, México.
- Instituto Maya (2007), “Evaluación externa del Programa trianual de desarrollo social de la Coopcafé 2005-2007”, documento, México.
- La Jornada* (2004), 26 abril, México.
- Najera, Olivia (2002), “El café orgánico en México”, *Cuadernos de Desarrollo Rural*, núm. 48. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
- Paz Paredes, Lorena (1995), “Una mirada al periodo de crisis de la cafeticultura mexicana”, *Cuadernos Agrarios*, núms. 11-12, Nueva época, Federación Editorial Mexicana, México.
- Spenser, Daniela (1988), “Los inicios del cultivo de café en Soconusco y la inmigración extranjera” en *Los empresarios alemanes, el tercer Reich y la oposición de derecha a Cárdenas*, tomo I, Casa Chata/CIESAS/SEP, México.

OTRAS FUENTES

- Comercio Justo México [www.comerciojusto.com.mx].
- Entrevistas a directivos, socios, técnicos y asesores de la URSC, Triunfo Verde y Cesmach, Chiapas, 2009.
- Entrevista 1, don Marianito de San Isidro, julio de 2009.
- Entrevista 2, don Antonio de la comunidad de Santa Anita, julio de 2009.
- Entrevista 3, campesino del pueblo Finca Cuxtepeques, julio de 2009.
- Entrevista 4, don Javier de Los Cuxtepeques, julio de 2009.
- Entrevista 5, miembros del actual Consejo de Administración de la URSC.

Entrevista 6, Javier Luna Cruz, socio de Cesmach y ex presidente de la Coopcafé, julio de 2009.

Entrevista 7, campesino de San Isidro, municipio de la Concordia, Chiapas, julio de 2009.

Entrevista 8, directivo de la URSC, julio de 2009.

Red de consumidores de café [www.redcafe.org/noticafe.htm].

Veinte tesis sobre los aportes y retos de las mujeres indígenas al discurso y a las prácticas políticas de los movimientos sociales

Ángela Ixkic Duarte Baastian
Gisela Espinosa Damián*

Las mujeres indígenas han estado presentes en todas las luchas que las organizaciones rurales han librado durante décadas. Sin embargo, es hasta la década de 1990, como resultado de un largo, complejo y heterogéneo proceso, cuando emergieron en América Latina y en México como un sujeto social con voz propia. En el caso de México, fueron la conmemoración de los 500 Años del “descubrimiento” de América, y el alzamiento zapatista en 1994, las coyunturas políticas que permitieron la visibilización, primero de movimientos mixtos con reivindicaciones étnicas y de clase, y luego de las mujeres indígenas con reivindicaciones étnicas, de clase y de género, como nuevos sujetos en el espacio político del país. Estas mujeres comparten con los varones de sus organizaciones y comuni-

* Gisela Espinosa es profesora-investigadora en el Departamento de Producción Económica y en el Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco [giselae@correo.xoc.uam.mx]. Ángela Ixkic Duarte es antropóloga y realiza una estancia posdoctoral en la UAM-Xochimilco, en la cual participa como docente en el Posgrado en Desarrollo Rural [angelaixkic@hotmail.com].

dades las reivindicaciones centrales del movimiento mixto, pero al mismo tiempo cuestionan los elementos culturales que les impiden a ellas, por ser mujeres, gozar de los mismos derechos y libertades, participar con equidad en la toma de decisiones, usufructuar o poseer recursos y tener acceso a oportunidades al igual que los varones, o que las mujeres y varones de otros grupos sociales.

Pese a la diversidad étnica, lingüística,¹ productiva y cultural de la población indígena mexicana, el conjunto de pueblos indígenas coincide en una posición subordinada y se reconoce como objeto de discriminación étnica, de explotación económica, marginación social y pobreza extrema. Estas desafortunadas convergencias dejan claro que el patrón colonial de poder (Quijano, 2006:53-58) cambió de piel luego de la Colonia, pero mantuvo los criterios racistas de exclusión, y que ni la Independencia ni la Revolución ni la modernización y el desarrollismo de la posrevolución modificaron. Las políticas integracionistas visualizaron a los pueblos indígenas como inferiores, dignos de tutela estatal, incapaces de participar activamente en la construcción del proyecto nacional; nunca como sujetos ciudadanos sino como fuerza de trabajo susceptible de altos grados de explotación; poseedores estorbosos de tierras, bosques y recursos naturales que otros ambicionan; productores de artesanías y alimentos que podían comprarse a precios ínfimos.

El malestar social que genera esta posición subordinada, también ha alimentado resistencias, rebeldías e identidades subversivas; ha nutrido un imaginario político que apunta a otro mundo posible, donde las diferencias étnicas y culturales no sean objeto de políticas de homogeneización ni de exclusión y discriminación. La posibilidad de una democracia radical que, como dice Mouffe (1999), reconozca lo particular, lo múltiple, lo heterogéneo y mantenga a la vez un criterio de igualdad, es un horizonte en cuya dirección caminan los movimientos de mujeres.

El trecho por recorrer es aún muy grande, pero la marcha se ha iniciado desde distintos espacios y las mujeres indígenas están haciendo aportes fundamentales. A diferencia de otros momentos, cuando sólo parecían engrosar las protestas masivas y participar en la logística de las movilizaciones, haciéndose cargo de la cocina, la limpieza y el cuidado de los niños, hoy las mujeres indígenas tienen voz, reivindicaciones y perspectivas políticas pro-

¹ En México hay 65 lenguas indígenas, cada una enraizada en una larga historia social, rica en saberes y con expresiones culturales propias.

pías. Si bien comparten las luchas de los movimiento étnicos por el reconocimiento de sus culturas, su autonomía, sus territorios y sus derechos colectivos, también asumen una posición crítica frente a las desigualdades de género presentes en las culturas de sus pueblos, exigen equidad y respeto a sus derechos y desarrollan procesos organizativos y de lucha, que han puesto en el centro sus identidades y reivindicaciones de género como nunca antes lo habían hecho.

Su presencia trae consigo un nuevo planteamiento político y epistemológico, que conjuga las demandas colectivas de los pueblos indios con sus derechos individuales y reivindicaciones específicas de género, iniciando así la desnaturalización de las contradicciones que antes estaban perfectamente integradas a los imaginarios sociales de la región. Desde los márgenes ellas irrumpen como una nueva voz en el movimiento indígena, en el movimiento feminista y en los movimientos sociales.

Todavía hasta fines del siglo pasado, el papel que las mujeres indígenas habían tenido en las luchas de sus pueblos no era plenamente reconocido: por un lado eran marginadas por las dinámicas sexistas de las organizaciones mixtas, y por otro, muchos investigadores sociales representaban al movimiento indígena y campesino como un todo homogéneo, sin analizar sus diferencias internas, entre ellas las de género. El movimiento indígena se reconstruía a partir de las declaraciones, de los documentos públicos y de las experiencias de los dirigentes varones, donde generalmente no aparecía el papel desempeñado por las mujeres. Actualmente ellas están escribiendo sus propias experiencias personales y organizativas en textos de carácter autobiográfico o testimonial (Sánchez, 2005; López, 2001; Rivera, 2005; Alianza de Mujeres Rurales por la Vida, Tierra y Dignidad, 2007). Estos trabajos hablan de la recuperación de su voz frente a tantas investigaciones sobre ellas en las cuales no estaba su palabra.

Los análisis y reivindicaciones que estas mujeres han ido madurando en múltiples reuniones, encuentros locales, regionales, nacionales y latinoamericanos. La amplitud y crecimiento de sus organizaciones y redes de relación, el impacto de sus discusiones y acciones, permite decir que no estamos ante un proceso aislado, secundario o efímero, sino ante un movimiento con profundas raíces y motivos, y ante la emergencia de un nuevo sujeto social cuyos procesos y discursos cobran cada vez mayor reconocimiento y empiezan a modificar el proyecto político del movimiento indígena y de los movimiento altermundistas. Aunque cada experiencia local tenga sus particularidades y, en el plano micro, no todos los procesos hayan alcanzado el

mismo grado de desarrollo o madurez, alcance o profundidad, es clara la trascendencia y la importancia del movimiento global, que se ha ganado a pulso su lugar.

Creemos que la riqueza de su experiencia y su discurso ha ensanchado y radicalizado el proyecto político del movimiento indígena, del movimiento feminista, del de mujeres y en última instancia, de los movimientos sociales. Sin embargo, los cambios se dan en medio de la resistencia. Por un lado, la participación activa de las mujeres indígenas dentro del movimiento mixto y las críticas que ellas formulan, generan malestar y conflictos en su ámbito de intervención más cercano, que son las organizaciones indígenas, las comunidades y sus propias familias. Por otro, para el feminismo no resulta comprensible el discurso específico de género de las mujeres indígenas, ni su resistencia a asumir la agenda política construida por este movimiento en otros espacios. En ambos casos, el reconocimiento de la riqueza política que traen consigo los movimientos de mujeres indígenas va lográndose a contracorriente; con ello se tornan lentas y difíciles las alianzas y el cambio al que se aspira.

Luego de la Revolución mexicana, sería hasta fines de la década de 1950, y sobre todo a partir de 1968, que los movimientos sociales cuestionaran con fuerza la legitimidad del sistema político, clientelar y corporativo y, ante la dificultad de lograr sus reivindicaciones sociales y dirimir los conflictos políticos dentro de los parámetros institucionalizados, plantearon nuevas formas de lucha y participación social, convirtiéndose así en un contrapeso muy importante al partido de Estado. Sería en la coyuntura electoral de 1988, en medio de la década perdida y el desplome del bloque socialista, que los movimientos sociales de nuestro país, revaloren la política institucional, la democracia y el respeto a los derechos ciudadanos, como vías de cambio social. Pese a que de entonces a la fecha, la alternancia en el poder ha dejado atrás al partido de Estado, el logro de reivindicaciones sociales y el respeto a los derechos ciudadanos siguen siendo una asignatura pendiente, no sólo porque la alternancia y la competencia electoral no han representado mejoría alguna para la ciudadanía, sino porque no se cumplen las reglas institucionales, y porque los movimientos sociales, especialmente el movimiento indígena, también han planteado infructuosamente la necesidad de modificarlas.

En este marco reflexionamos acerca de los aportes de las organizaciones de mujeres indígenas al debate político y académico sobre la transformación social en México, y sus esfuerzos por reorientar los significados y los

límites de las formas de hacer política en nuestro país. Partimos de considerar que los significados construidos en la cotidianidad de la vida organizativa son una pieza clave para definir proyectos y estrategias. En nuestro país, el movimiento indígena no sólo ha cuestionado las formas de hacer política sino el concepto mismo de nación, señalando entre otras cosas, que los sistemas normativos de los pueblos originarios han sido históricamente excluidos del marco jurídico legal que rige al Estado-nación y, consecuentemente, de los espacios de poder. Las mujeres indígenas, a su vez, señalan que también es necesario abrir espacios para que sus voces y propuestas sean escuchadas en las instancias de decisión de sus pueblos. La inclusión y reconocimiento de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas, no sólo implica dar cabida a nuevos actores, sino reformular el marco jurídico legal de la nación y los sistemas normativos de sus pueblos, dando lugar a un nuevo concepto de nación y a otras formas de ciudadanía.

Ahora que termina la primera década del siglo XXI y que nuestro país se halla en una de las peores crisis de su historia, se hace necesario repensar no sólo el modelo económico que se está resquebrajando, sino las formas de relación social, las formas de hacer política y las lecciones que nos ofrecen los movimientos sociales. Es por ello que exponemos veinte “tesis” sobre los movimientos de mujeres indígenas, elaboradas a partir de nuestra experiencia directa de investigación y acompañamiento a procesos organizativos de mujeres indígenas, así como del seguimiento y análisis del proceso organizativo y de lucha que estas mujeres están desarrollando en diversas regiones de México y de América Latina.² Desde esa reflexión de conjunto escribimos tesis sobre el carácter de sus identidades políticas, la naturaleza de sus proyectos y discursos políticos; sus tensiones con otros actores sociales y movimientos, sus aportes a la construcción de nuevos discursos y prácticas democratizadoras de los movimientos sociales, los retos y perspectivas que hoy enfrentan.

² Ixkic Duarte realizó sus primeros estudios sobre el tema a partir del acompañamiento a guatemaltecos refugiados en México durante el retorno a su país, del que salieron por el conflicto armado; también ha trabajado con mujeres nahuas de la Huasteca veracruzana, y actualmente con nahuas y mestizas pertenecientes a la agrupación Defensa Popular de Oteapan (DPO) y el Frente Popular del Sur de Veracruz (Freposev). Gisela Espinosa, en colaboración con la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), realizó un estudio sobre mortalidad materna en zonas indígenas de cinco estados del país; recientemente y también en colaboración con la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas (CGMI) ha escrito una historia de su proceso organizativo y de sus contribuciones a la construcción de la ciudadanía de las mujeres.

Así, hemos establecido diálogos académicos y políticos con organizaciones de mujeres indígenas buscando, a partir de esfuerzos diversos, contribuir al fortalecimiento de sus procesos organizativos y, al mismo tiempo, ensanchar la mirada feminista que pretende situar la particularidad de las reivindicaciones indígenas de género en sus contextos culturales y sociales. Nuestra experiencia con organizaciones como la Conami, la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas (CGMI) o el Frente Popular del Sur de Veracruz (Freposev), y la Defensa Popular de Oteapan (DPO), así como la cercanía que hemos mantenido con otras organizaciones de mujeres indígenas, nos sugieren compartir las siguientes tesis en el entendido de que la experiencia de este sujeto social es relativamente nueva y que aún está en construcción el bagaje conceptual que ilumina el análisis.

VEINTE TESIS

Uno. Las desigualdades agrarias y socioeconómicas, el autoritarismo político, la discriminación étnica, las políticas modernizadoras y excluyentes, la deficiente procuración de justicia, el no respeto a derechos sociales, económicos y políticos, han sido motivo de rebeldía y acción de distintas fuerzas sociales en México y América Latina. Cuando menos en los últimos 50 años, organizaciones rurales de base campesina e indígena, han luchado contra el caciquismo, por la tierra, contra la explotación de sus bosques, por precios justos de las cosechas y de las artesanías, por crédito rural, contra la imposición de gobernantes, por el respeto a los derechos políticos, por el abasto rural, por la introducción de servicios y caminos a las comunidades, por la salud y la educación, contra la violencia. En años más recientes, afirmando sus identidades étnicas y confrontando las políticas homogeneizantes, diversas organizaciones han luchado contra la discriminación y por el reconocimiento de las culturas y por los derechos de los pueblos indígenas. En todos estos procesos han estado presentes las mujeres campesinas e indígenas; ellas han sido sostén, base social, apoyo logístico y operativo, a veces escudo, partícipes constantes y, durante mucho tiempo, silenciosas y aparentemente marginales. Pero su presencia, su experiencia, su escucha, su reflexión desde ese lugar marginal que han ocupado, fue incubando su palabra y empezó a revelarse el fondo opresivo que opera contra ellas por pertenecer a clases explotadas y subalternas, por ser indígenas y por ser mujeres.

Dos. Son varios los factores que favorecieron la creación de un discurso indígena de género y de la voluntad colectiva que lo sustenta en distintas regiones de México y América Latina: durante varias décadas, la participación y las reivindicaciones indígenas se diluyeron en los movimientos campesinos, moderados o radicales, pacíficos y sujetos a las vías institucionales o subversivos e ilegales y hasta guerrilleros; en esas largas décadas de predominio del movimiento campesino, los discursos políticos destacaron el carácter de clases explotadas rurales y las reivindicaciones agrarias o por la “apropiación del proceso productivo”; ya en la década de 1990, el auge del movimiento indígena que trajo consigo la conmemoración de los 500 años del “descubrimiento de América”, el levantamiento zapatista de 1994 y la difusión de la Ley Revolucionaria de Mujeres³ del EZLN, desató una ola de reuniones, reflexiones y procesos organizativos y de formación de mujeres indígenas que se intensifica en la segunda mitad de la década de 1990 y se extiende a la primera década del siglo XXI. La interacción de las mujeres indígenas con organismos civiles y académicas feministas, con las iglesias, especialmente con la teología de la liberación, o con servidoras públicas que apoyan sus proyectos o sus encuentros y diálogos políticos con organizaciones de mujeres de la América indígena, también ha favorecido la emergencia de este nuevo sujeto social. Otras experiencias también marcaron sus aprendizajes políticos y la posterior construcción de reivindicaciones de género, como el acceso creciente de las mujeres a la educación, su mayor contacto con medios de comunicación masivos, su relación directa con los mercados, como vendedoras de productos o de fuerza de trabajo, su participación creciente en los flujos migratorios o sus nuevas funciones familiares y sociales cuando los varones se van. La confluencia de procesos, tiempos, actores sociales, generaciones y perspectivas políticas, ha sido decisiva para que las mujeres indígenas configuren un discurso crítico de género y vayan construyendo una propuesta de transformación social que si bien incorpora ideas, conceptos y propuestas surgidas en espacios no indígenas o en instan-

³ La Ley Revolucionaria de Mujeres fue dada a conocer por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994; reconoce los derechos de las mujeres a asumir cargos públicos, a heredar tierra, a decidir sobre su propio cuerpo. Como lo señalan Aída Hernández (2008) y Mágina Millán (2008), independientemente de su grado de aplicación, la Ley ha tenido una importancia simbólica para las mujeres indígenas organizadas no sólo en Chiapas sino en distintas latitudes, debido a que legítimas demandas por las que organizaciones diversas venían luchando desde tiempo atrás.

cias globales, parte de los contextos específicos en que viven y de sus experiencias y discursos políticos en movimientos mixtos, para apropiarse y resignificar todos los elementos y crear un discurso propio.

Tres. Así, la emergencia de este nuevo sujeto social implicó la construcción de una nueva identidad colectiva enraizada en una gran diversidad de experiencias sociales y políticas, reelaboradas desde una conciencia común sobre las injusticias de género que sufren las mujeres indígenas. Sus identidades abrevan de los discursos y experiencias previas: las lecciones y reivindicaciones del movimiento campesino y de los movimientos populares contra el despojo, la explotación y el autoritarismo; de las experiencias autogestivas en la producción y los mercados frente a un Estado paternalista y corporativo y un conjunto de agentes del capital que operan en el medio rural; de la iglesia liberadora; de los discursos emancipadores del feminismo, de las luchas por la democracia y la participación en procesos electorales contra el partido de Estado; de la conciencia de la discriminación étnica y la afirmación de sus culturas e identidades indígenas, de la resistencia a proyectos desarrollistas que desconocen sus culturas y sus aspiraciones, de las experiencias de procuración de justicia desde abajo, de la organización productiva y económica de mujeres rurales. Estos procesos que han marcado sus vidas, sus identidades políticas, su imaginario social y su visión de futuro, se “re-presentan” y “resignifican” a la hora de constituir la nueva instancia, expresando la plasticidad y el carácter multidimensional de sus identidades políticas.

Cuatro. Al nuclearse en diversas organizaciones y en otras instancias regionales, estatales o locales, las indígenas son las mismas y a la vez otras: recrean discursos y pertenencias políticas previas, pero los renuevan con una perspectiva de género culturalmente situada. Adoptar una perspectiva de “género”, no ha sido un añadido o un nuevo eje de lucha, sino una mirada fresca y crítica sobre el todo, una reflexión que les permite develar los mecanismos de exclusión, discriminación y desigualdad contra ellas en todos los espacios y planos de la vida social. *Equidad y justicia de género* se articulan a añejos discursos campesinos y de clase, y a las reivindicaciones culturales y étnicas de las dos últimas décadas; empiezan a atravesar diagnósticos, perspectivas y proyectos de cambio no sólo de mujeres, sino del movimiento social y en especial del movimiento indígena mixto. Para todas ellas la lucha por la equidad de género es fundamental, pero se plantea siempre como par-

te de una lucha más amplia al lado de sus pueblos y organizaciones. Es claro que el imaginario en torno a las relaciones de género y a lo femenino se ha transformado a partir de estas experiencias organizativas.

Cinco. Desde un inicio, una buena parte de los proyectos de las mujeres indígenas en diversas latitudes, estuvieron marcados por una noción de derechos. No tanto porque ellas estuvieran familiarizadas con el tema, sino porque a diferencia de los movimientos rurales e indígenas anteriores al neozapatismo, que enfatizaron demandas y pliegos petitorios antes que los derechos, el movimiento de mujeres indígenas enmarca sus reivindicaciones en el cumplimiento, respeto y ampliación de sus derechos; tanto porque participan en un movimiento mixto que lucha por elevar a rango constitucional el reconocimiento de la autonomía de sus pueblos y sus derechos colectivos; como porque su propio movimiento es alentado por una propuesta legislativa surgida desde dentro del movimiento indígena, la Ley zapatista de mujeres y porque las mujeres que apoyan sus procesos toman como tarea central la difusión de los “derechos de las mujeres”: los económicos, sociales y políticos, los humanos y reproductivos, el derecho a no ser violentadas bajo ninguna modalidad. Todo ello ha marcado su agenda, su trayectoria, su posicionamiento frente a otros actores y su perspectiva de cambio social.

En este proceso, las mujeres indígenas no han sido simples receptoras o reproductoras del discurso relativo a los derechos, sino interlocutoras creativas, constructoras de nuevos derechos y de nuevos significados sobre viejos derechos, en función de sus procesos y contextos. Este aspecto de la experiencia de las indígenas organizadas permite reflexionar acerca de la “localización” de los discursos globales sobre temas como *ciudadanía*, *democracia* o *derechos* para comprender el peso que tienen en sus acciones y de qué manera se reflejan en el escenario nacional. A partir de la apropiación y resignificación de estos conceptos globales, las integrantes de las organizaciones hablan de las transformaciones que buscan, convirtiéndolos en importantes herramientas de lucha.

Seis. Equidad de género y respeto a sus derechos como mexicanas, como indígenas y como mujeres, son pilares de su discurso y sus acciones, lo cual apunta a la construcción y fortalecimiento de un nuevo sujeto social: mujeres indígenas que pugnan por un cambio con equidad de género; simultáneamente, de un sujeto político que está construyendo, desde la marginalidad

social y desde la orilla de los movimientos sociales, su ciudadanía: mujeres indígenas que luchan por su reconocimiento y sus derechos. La conversión de sus malestares en reivindicaciones sociales, derechos, proyectos y experiencias, va cargada de múltiples posibilidades emancipatorias. La triple opresión de las mujeres indígenas,⁴ se expresa también en distintos planos de sus procesos de cambio. Claro que nada es parejo, ascendente o lineal, en cada espacio y proceso se avanza y se retrocede, se enfatiza tal o cual asunto y, aunque ningún problema viene solo y cada acción tiene múltiples efectos, aunque al observar el conjunto las acciones tocan todos los problemas, el todo es demasiado grande y complejo para abarcarlo en un solo proceso o momento. Tanto en el plano personal como en el colectivo, la heterogenidad, el abigarramiento, la dispersión, la continuidad y la fragmentación coexisten. Los procesos son complejos.

Siete. La acción de las mujeres indígenas se expresa, entre otros aspectos, en la transformación del espacio público, social y político, hasta hace poco con protagonismo casi exclusivamente masculino. Hoy, las mujeres indígenas intervienen en asuntos de interés común, dicen su palabra, disienten o asienten, proponen, desarrollan sus propios puntos de vista, empiezan a ser sujetos sociales y ciudadanas; también empiezan a ser reconocidas como interlocutoras válidas por movimientos sociales, instituciones públicas y organismos civiles, pero además, sus voces empiezan a oírse con fuerza en las organizaciones indígenas mixtas, en las asambleas comunitarias, la gestión con agencias gubernamentales, la interlocución con el Congreso de la Unión y en foros internacionales. Su palabra expresa una visión crítica de género, propone equidad y reivindica los derechos de las mujeres sin ignorar otras demandas sociales, cosa que no había ocurrido durante décadas de participación de mujeres indígenas y campesinas en los movimientos sociales.

Ocho. También el espacio privado, familiar, doméstico, el de las relaciones personales, es tocado por las nuevas ideas, aspiraciones y acciones de las mujeres indígenas. Una de sus primeras victorias se libra internamente, en

⁴ Se habla de la triple opresión que enfrentan las mujeres indígenas aludiendo a la económica, debido a su clase social; a la cultural o al racismo, por ser indígenas en sociedades en las que eso implica estar al margen del proyecto nacional; y a la subordinación por ser mujeres. Esta perspectiva implica también que las tres opresiones o situaciones deben ser analizadas en forma simultánea o entrelazada, porque no ocurren de manera independiente.

ellas mismas: perder el miedo, hablar, atreverse a salir de casa, negociar con sus parejas el cuidado de los niños, exigir que se comparta el trabajo doméstico, defenderse de los golpes y de todo tipo de maltrato o violencia, promover el derecho a decidir sobre su unión de pareja, sobre su cuerpo, sobre su maternidad, ir ganando libertad de movimiento. Sus propios conceptos acerca de la tradición y la costumbre, las relaciones de pareja, la maternidad, las relaciones de género se están transformando rápidamente. Esto no está exento de conflictos personales o familiares, incluso en los espacios comunitarios. Mediante su práctica diaria las mujeres van construyendo lógicas de acción política que atraviesan la vida cotidiana. Estas lógicas son propositivas y están en constante transformación.

Nueve. Los cambios en los espacios privado y público no ocurren con independencia, se influyen mutuamente: lo privado empieza a ser asunto de interés común, primero para las mujeres en sus propias organizaciones donde comparten problemas y definen sus reivindicaciones o acciones; pero poco a poco esas propuestas invaden las preocupaciones y agendas de los movimientos sociales e indígenas: lo privado se lleva al espacio público; y desde éste también se interviene en el ámbito privado: la ley contra la violencia hacia las mujeres, los derechos reproductivos, los derechos humanos, empiezan a regular relaciones humanas en cada microespacio; ahí también se busca reconocimiento y respeto a sus personas, a sus derechos y a sus libertades. En este sentido, la irrupción de las mujeres indígenas en los movimientos sociales contribuye a flexibilizar la tajante división y la asignación sexual de los espacios público y lo privado.

Diez. La reciente historia organizativa de las mujeres indígenas permite observar los diferentes modos, espacios y dimensiones en que se ha construido y se vive la desigualdad social, étnica y de género; así como la naturaleza diversa de los procesos orientados a deconstruir la inequidad y experimentar nuevas formas de vida. La subversión de las relaciones de género, la dimensión cultural y política contenida en las luchas socioeconómicas de las protagonistas, la multiplicidad de sus obstáculos y adversarios, los “pequeños grandes pasos” que está dando este joven movimiento social, tiene costos personales y saldos positivos para ellas, por un lado, el tiempo dedicado al activismo consume parte del tiempo y la energía que antes destinaban a la vida familiar y al trabajo doméstico, las sobrecarga de trabajo y responsabilidades; pero a la vez que sufren estas presiones, más

fuertes aún por la escasez de recursos económicos y de servicios públicos y de seguridad social que amortigüe sus ausencias; también van ganando espacios personales y colectivos, van logrando, a pulso, el reconocimiento de sus liderazgos y de sus proyectos sociales.

Once. La voz de las indígenas amplía, profundiza y radicaliza las perspectivas y el proyecto del movimiento indígena. Así como a ellas han llegado ideas de mujeres de otras latitudes, sus propias experiencias y reflexiones circulan en espacios muy lejanos. Su proyecto se localiza y globaliza socializando lecciones y aprendiendo de otras experiencias.

Doce. Las mujeres indígenas tienen demandas por tierra, créditos agrarios y financiamiento para proyectos productivos; al mismo tiempo reivindican el reconocimiento de los derechos colectivos de sus pueblos, y sus derechos específicos como mujeres. Plantean nuevas formas de relación con la naturaleza y entre los géneros, nuevas concepciones sobre la economía y las formas de organización social; otras maneras de relacionarse con su cuerpo. Exigen que se respete su derecho a decidir en todos los ámbitos. De esta forma, muestran el carácter multifacético de sus procesos, la dimensión cultural de las reivindicaciones económicas y la dimensión material de las demandas culturales; la dimensión política de sus acciones.

Trece. La lucha de las mujeres indígenas se desarrolla en múltiples frentes simultáneamente. Es una confrontación con el Estado, al cuestionar las políticas económicas y la falta de servicios eficientes y dignos; es un esfuerzo continuo por construir cotidianamente alternativas económicas a partir de proyectos productivos con alcances diversos; es la reivindicación de las identidades culturales como un espacio de resistencia ante la homogeneización buscada durante décadas por las políticas públicas; es la valoración de lo colectivo y de lo comunitario frente al individualismo extremo fomentado por el modelo capitalista; y es también la valoración y búsqueda de reconocimiento de lo individual sin perder el espíritu colectivo. Como se ha dicho arriba, la defensa de reivindicaciones de género culturalmente situadas tanto frente al feminismo hegemónico como al movimiento indígena mixto. En este sentido, es también una propuesta innovadora de cómo hacer política, que logra articular luchas vinculadas a distintos tipos de opresión con reivindicaciones diversas que comparten un conjunto de valores éticos y políticos.

Catorce. A la lucha por el reconocimiento de sus pueblos como sujetos de derecho, por su autonomía, sus derechos colectivos y su cultura; ellas suman la crítica a las “malas costumbres” y la lucha porque se reconozcan y respeten los derechos y la autonomía de cada una. Derecho colectivo e individual no aparecen aquí como conceptos contrapuestos o excluyentes, sino como normas deseables para reconocer a los pueblos indígenas y a las mujeres indígenas como personas, como personas en colectividad y como colectivo en sí; para reconfigurar su papel y relación en la familia, la comunidad, la organización mixta, el movimiento social, las instituciones públicas. Desde esta experiencia se aportan elementos para pensar en el marco jurídico de una nación pluriétnica y multicultural con equidad de género.

Quince. Una vertiente dominante del feminismo (Moller, 1996) considera que la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y la lucha por los derechos de las mujeres son antagónicas. Según esta lógica apoyar la lucha de los indígenas por la construcción de la autonomía y por el respeto a sus derechos, implica avalar los controles culturales que hay hacia las mujeres en contextos indígenas. Esta afirmación opera como si en contextos no indígenas no hubiera controles hacia las mujeres, y como si las tradiciones y costumbres que subordinan a las mujeres no pudieran ser transformadas sin que las culturas se pierdan. Frente a esta suposición, la presencia de las mujeres indígenas organizadas sugiere que no se trata de negar la subordinación de género, pero tampoco de representarlas como simples víctimas del patriarcado ni de otras estructuras de poder. Junto con ellas, creemos que es políticamente relevante documentar sus estrategias frente al capital, frente al Estado y frente a aquellas tradiciones que ellas consideran que deben ser transformadas porque las someten, discriminan o lastiman.

Dieciséis. Para crecer y consolidarse como un sujeto social, las mujeres indígenas han tenido y tienen que remontar rezagos, salvar la dispersión geográfica de sus núcleos organizados, establecer puentes lingüísticos, enfrentar constantemente la escasez de recursos; todo ello dificulta y hace lento su proceso; pero quizá lo que más traba su avance es el conflicto, la oposición, la incompreensión y la exigencia. Parejas y familiares, compañeros –a veces compañeras– de las organizaciones mixtas, autoridades de la comunidad, servidores públicos, vecinos; un abanico de personas frena su movimiento, critica, rumora contra el prestigio de las activistas, duda de su capacidad, descalifica. Modificar la cultura y las relaciones de poder no es cosa fácil,

atreverse a mover el orden social de género se vive como un atentado contra el buen comportamiento y la convivencia pacífica. Desnaturalizar la subordinación de género y salir de la casa y de la zona de silencio social, ha implicado y sigue implicando conflictos en todos los espacios.

Diecisiete. En el marco de los movimientos sociales, los aportes de las mujeres indígenas de distintas latitudes apuntan, por un lado, a la reconstrucción del proyecto político del movimiento indígena desde el reconocimiento de la discriminación, exclusión y subordinación de género; por otro, a la reconstrucción del proyecto político del movimiento feminista desde el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica de las sociedades y de las mujeres en particular. En ambos casos se evidencia la necesidad de aceptar la diversidad y la diferencia, no para justificar la desigualdad social, la exclusión o marginación del “otro”, no para tratar de homogeneizar lo diferente, sino para reivindicar criterios de igualdad respetando la diferencia en la perspectiva de una democracia radical.

Dieciocho. Al ser los pueblos indígenas uno de los grupos poblacionales con mayores índices de marginación social, la mayoría de las organizaciones de mujeres indígenas empiezan a movilizarse para satisfacer necesidades como agua, vivienda, salud, trabajo e ingreso, tierra, defensa de los recursos naturales, etcétera; la dimensión socioeconómica de sus procesos, ha conducido a una amplia vertiente de la literatura feminista sobre América Latina –fundamentada en Molyneux (2003)–, a catalogarlos simplemente como *movimientos de mujeres*, pues se interpreta que estas movilizaciones femeninas giran sólo en torno a *demandas prácticas de género* (relacionadas con necesidades inmediatas, básicas, económicas y materiales, “de clase” se dice en algunos textos); en lugar de luchar, como los *movimientos feministas* por los *intereses estratégicos de las mujeres* (relacionados con las libertades, la igualdad y equidad de género, el ejercicio de la sexualidad, la participación en el espacio público y el cuestionamiento a las relaciones de poder que subordinan y oprimen a las mujeres). Bajo esta óptica, los movimientos de mujeres no son feministas porque carecen de reflexión política alguna sobre las relaciones de género y sólo buscan solución a las necesidades de sobrevivencia. Este tipo de análisis tiene una fuerte incidencia en las visiones sobre el desarrollo y sobre el trabajo aplicado en regiones rurales; nosotras creemos que las experiencias de las mujeres indígenas organizadas contradicen su lógica, muestran la multiplicidad de

planos y dimensiones de reflexión y cambio social contenidos en los procesos desarrollados por estas mujeres. El hecho mismo de participar en lo cotidiano y de manera continua, genera muchas tensiones en todos los planos y está implicando un cuestionamiento explícito a las relaciones de poder dentro de las familias, de las comunidades y de las organizaciones; y abre paso a visiones críticas sobre sus realidades locales o regionales.

Diecinueve. La presencia de las mujeres indígenas como sujeto social no sólo plantea cuestionamientos políticos (fundamentalmente frente al Estado, al capital, al sexismo y al racismo), sino también sugiere reflexiones de corte epistemológico. Colocan sobre la mesa la necesidad de replantear la falsa dicotomía entre modernidad y tradición; plantean la condición dinámica de las costumbres y de la cultura; y dejan al descubierto que si bien las tradiciones pueden ser utilizadas para justificar la reproducción de los sistemas de dominación, también pueden funcionar como herramientas de emancipación y transformación. De la misma forma, nos recuerda la discusión acerca de la tensión entre los derechos individuales y colectivos que la filosofía liberal ve como irresoluble o que, en todo caso, suele resolver privilegiando los derechos individuales sobre lo colectivo.

Veinte. En algunas regiones del país, como en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, el movimiento indígena y campesino ha sido fuertemente golpeado por la represión gubernamental. Especialmente en estos lugares las mujeres indígenas han desarrollado diversas formas de resistencia. En algunos casos se han apropiado de los espacios que el mismo Estado ha creado como parte de una política de desarrollo, generalmente planeada e implementada desde arriba. Recientemente la violencia del Estado contra los movimientos sociales se ha incrementado visiblemente, y las organizaciones hablan de que hay más mujeres víctimas de la represión que antes.

MIRANDO AL FUTURO DESDE EL PRESENTE

En este artículo hemos compartido veinte tesis sobre el movimiento de mujeres indígenas y sus contribuciones a las prácticas políticas de los movimientos sociales en nuestro país. De la misma forma nos hemos referido a los cuestionamientos que ellas plantean frente al Estado, al capital y a cier-

tas estructuras comunitarias, organizativas y familiares que las limitan. Hemos hablado también de los aportes que hacen a las formas de construir y analizar los movimientos sociales y, de modo particular, los movimientos indígena y feminista. A modo de conclusión nos interesa delinear algunos aspectos del momento en que se encuentra el movimiento de mujeres indígenas, y señalar retos que, a nuestro juicio, está enfrentando.

Por una parte, hay que destacar que en la década de 1990, en un periodo en que el movimiento indígena se colocó en el centro del debate político sobre la democracia y las reformas al marco jurídico constitucional desde una perspectiva multicultural y pluriétnica, la emergencia de las organizaciones y luchas de las mujeres indígenas atrae también la mirada sobre sí, y muestra la diversidad de tensiones que encierran los movimientos mixtos, la multiplicidad de mecanismos de exclusión, discriminación y subordinación que operan simultáneamente sobre algunos de sus actores, en el momento en que los reflectores apuntan hacia los movimientos indígenas.

Hoy, el movimiento indígena no está ya en el centro de la escena política, no tiene la fuerza y la simpatía social que tuvo en 1994, cuando el levantamiento zapatista, ni la capacidad de convocatoria y apoyo que alcanzó en el 2001, cuando la Marcha del Color de la Tierra logró la convergencia de todos los movimientos indígenas del país, en torno a las demandas centrales del movimiento expresadas en la Ley de Derechos y Cultura Indígenas consensuada entre el gobierno federal y el EZLN, misma que no sería aprobada por el Congreso de la Unión. La ruptura del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, la cancelación de sus relaciones con los partidos políticos, la crisis de la democracia representativa y de la política institucional, todo ello formula muchas interrogantes no sólo sobre el curso y las perspectivas de las organizaciones de mujeres indígenas, sino sobre el propio movimiento indígena mixto.

Hoy es claro que el reconocimiento de la condición multicultural de la nación adquiere distintos significados y encierra contradicciones y tensiones entre las reformas que ha propuesto el movimiento indígena y las que forman parte del andamiaje jurídico necesario para afianzar el neoliberalismo (Sierra, 2004). Por un lado, no se aprueban las propuestas surgidas del consenso; pero por otro, el Estado enfatiza discursivamente la necesidad de un mayor acceso a la justicia para los pueblos indígenas y la importancia de los derechos de las mujeres indígenas, en especial de los derechos humanos como marco para la defensa de su dignidad; elabora leyes y reglamentos que apuntan a la penalización de la violencia doméstica, promueve

caminos de resolución alternativa de conflictos, algunos de los cuales reconocen, de manera parcial, la práctica del derecho indígena. Pese a que las demandas centrales del movimiento indígena no están resueltas, hay rendijas y pequeñas luces que apuntalan al movimiento y fortalecen la posición de las mujeres en la búsqueda de equidad y de respeto a sus personas. Por ello, creemos que hay que reflexionar más profundamente sobre los aportes y límites de la multiculturalización del Estado para el movimiento indígena y de mujeres indígenas en particular.

La persistencia de la marginación y desigualdad social que azota a los pueblos indígenas, la continuidad de una política pública marginal y generalmente asistencialista hacia ellos, la profunda crisis que vive nuestro país al finalizar la primera década del siglo XXI, la intensificación de los flujos migratorios indígenas que esta situación acarrea, la crisis de la izquierda institucional. Este panorama ofrece muchos retos para que los movimientos indígenas logren sus reivindicaciones, consenso político y una articulación más permanente. Como parte de ellos, las mujeres indígenas también están viviendo momentos difíciles. Sin embargo, el hecho de que los temas indígenas no ocupen hoy un lugar central, no significa que el movimiento esté apagado ni que sus demandas hayan sido olvidadas o mucho menos satisfechas. Pese a que los problemas son compartidos por varones y mujeres, en los últimos años, son las mujeres quienes han mantenido mayor vitalidad en sus redes organizativa, sus encuentros, sus procesos de lucha.

El fortalecimiento y embate de un conservadurismo que justifica la inequidad en las relaciones de género, la moralina en torno a la sexualidad y la reproducción como destino de la mujer; somete a los movimientos de mujeres indígenas a otros retos, pues los cambios culturales que ellas promueven despiertan la resistencia y el conflicto, y estas reacciones internas a su movimiento, a sus comunidades y sus familias, pueden ser aprovechadas para “demostrar” la falta de consenso sobre las agendas del movimiento.

Los pueblos indígenas no son ajenos a la intensificación de la violencia de Estado ni a la producción social e institucional de la violencia, situaciones trágicas que se suman a la criminalización de la protesta y la militarización del espacio público; todo ello marca la cotidianidad de las organizaciones sociales. La represión que se ejerce contra hombres y mujeres, debilita aún más a organizaciones y comunidades. En este contexto, se perfilan como tareas importantes documentar y analizar el impacto de la violencia sobre el movimiento de mujeres indígenas.

BIBLIOGRAFÍA

- Alianza de Mujeres Rurales por la Vida, Tierra y Dignidad (2007), *Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Memoria, lucha y realidad*, Oxfam, Guatemala.
- Espinosa Damián, Gisela (2009) *Cuatro vertientes del feminismo en México. Diversidad de rutas y cruce de caminos*, UAM-Xochimilco, México.
- Hernández Castillo, Aída (2008), “Diálogos e identidades políticas: génesis de los procesos organizativos de mujeres indígenas en México, Guatemala y Colombia”, en Aída Hernández Castillo (coord.), *Etnografías e historias de resistencia. Mujeres indígenas, procesos organizativos y nuevas identidades políticas*, CIESAS, México.
- López Mejía, Alma (2001), “Empoderamiento y participación política de las mujeres mayas kichés”, ponencia presentada en el Primer Encuentro mesoamericano de estudios de género, Antigua, Guatemala.
- Millán, Márgara (2008), “Nuevos espacios, nuevas actoras. Neozapatismo y su significado en torno a las mujeres indígenas”, en Aída Hernández Castillo (coord.), *Etnografías e historias de resistencia. Mujeres indígenas, procesos organizativos y nuevas identidades políticas*, CIESAS, México.
- Moller Okin, Susan (1996), “Desigualdad de género y diferencias culturales”, en Castell, Carme (comp.), *Perspectivas feministas en teoría política*, Paidós, Barcelona.
- (1999), “Is multiculturalism bad for women?”, en Moller Okin, Susan, *Is multiculturalism bad form women?*, Princeton University Press, Nueva Jersey.
- Molyneux, Maxine (2003), *Movimiento de mujeres en América Latina. Estudio teórico comparado*, Cátedra, España.
- Mouffe, Chantal (1999), “La democracia radical ¿moderna o posmoderna?”, en *El retorno de lo político*, Paidós, Barcelona.
- Rivera, Tarcila (1999), *El andar de las mujeres indígenas*, Chirapaq, Lima.
- Sánchez Nestor, Marta (coord.) (2005), *La doble mirada. Voces e historias de mujeres indígenas latinoamericanas*, Unifem/Instituto de liderazgo Simone de Beauvoir, México.
- Sierra, María Teresa y Hernández, Aída (2004), “Globalización, derechos indígenas y justicia desde una perspectiva de género y el poder: una propuesta comparativa”, Proyecto de investigación, CIESAS/Conacyt.

Dos estrategias de vida que se encuentran en un mismo espacio

Gisela Landázuri Benítez
Liliana López Levi*

El análisis de los procesos de desarrollo actuales habría que revisarlos desde el desarrollo de los pueblos, de la población rural y sus procesos de transformación, del diseño de estrategias de reproducción que les permiten contender con sus condiciones de marginalidad, en la búsqueda de mejores condiciones en los mercados de productos y de trabajo, en su cultura, sus apegos y en su entorno local.

En este sentido, el desarrollo local puede explicarse a partir del análisis de las estrategias de reproducción del territorio; con base en sus actores, en la identidad que los vincula y en un proyecto común enraizado en un lugar concreto. Se trata de la construcción de un espacio social, fundamentado en la sensación de pertenencia y en el trabajo conjunto, que unen a la población que comparte un lugar y que, a partir de ciertos elementos, le dan sentido al habitar, independientemente de si se trata de personas originarias del lugar por generaciones o de si son migrantes en busca de mejores oportunidades.

El estudio que se presenta a continuación,¹ aborda el caso de los chinamperos, originarios de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, que sustentan su pertenencia en el hecho de que han estado ahí por generaciones, y de

* Profesoras-investigadoras en el Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.

¹ Se trata de un estudio cualitativo basado en entrevistas abiertas realizadas en San Gregorio Atlapulco y en Hueyapan, Puebla.

los migrantes de Hueyapan, Puebla, quienes consideran estar ahí en forma transitoria, porque ahí encontraron trabajo. Ambos son representantes de dos procesos, aparentemente ajenos uno del otro; dos estrategias de reproducción de sus propias comunidades, que se perciben distintas, cuyos orígenes son geográficamente distantes, pero que por el momento coinciden en un mismo espacio y aportan a un mismo proyecto productivo. Se trata de productores directos y de trabajadores asalariados que mantienen una relación laboral en torno a la producción agrícola en las chinampas. Cada uno despliega una serie de estrategias de supervivencia y reproducción que se transforman de acuerdo con el contexto e interacciones con el resto de la sociedad nacional.

A partir de su participación en las chinampas, los agricultores de ambos territorios llevan a cabo estrategias de supervivencia y reproducción, que tienen un impacto tanto en San Gregorio Atlapulco, como en Hueyapan y les permiten continuar con sus formas de vida, con sus tradiciones, sus fiestas patronales, la reproducción de sus relaciones sociales, de su memoria colectiva y de sus grupos familiares.

En el caso de los originarios se trata de familias productoras subordinadas a las dinámicas del mercado, encarnadas en los intermediarios y las tiendas de autoservicio. Mientras tanto, los migrantes mantienen una relación de subordinación laboral, combinan el trabajo asalariado con la producción de autoconsumo en su tierra natal. Ambas son poblaciones de origen indígena,² que luchan por la supervivencia material, social y cultural desde ámbitos rurales, en los que la base de reproducción sigue siendo la unidad campesina familiar.

Reconocer los procesos que se están construyendo y la transformación de diferentes grupos de las comunidades mencionadas, pasa por entender el desarrollo no solamente a partir de las relaciones, de los procesos de producción y del mercado de trabajo, sino descubriendo a los actores en sus inclinaciones culturales e identitarias, que pautan junto con lo económico sus estrategias de reproducción. En este contexto, destacamos dos elementos centrales: la productividad agrícola y la religiosidad popular, ambas crean un vínculo entre los habitantes del lugar y conforman buena parte de su arraigo territorial. Aunque es importante aclarar que dichos actores se

² En el caso de San Gregorio, esa huella tradicional se reconoce por una serie de relaciones y prácticas culturales comunitarias; y en el caso de Hueyapan se manifiesta por el uso cotidiano del náhuatl, así como por una organización y estructura comunitaria.

insertan en sociedades rurales heterogéneas, por lo que sus expresiones de desarrollo rural responden a los sectores poblacionales particulares.

LAS CHINAMPAS EN EL TIEMPO

La chinampa, como sistema productivo, existe desde tiempos prehispánicos y ha sobrevivido por más de quinientos años. Técnicamente consiste en terrenos agrícolas hechos con lodo del fondo lacustre. Para su construcción se alternan capas de dicho lodo con tiras de césped hasta lograr una parcela de 25 centímetros sobre el nivel de las aguas. Las pequeñas islas que resultan, quedan afianzadas a su alrededor con árboles de ahuejotes. Su estructura rectangular permitía la humedad por filtración (González, 2006), sin embargo, en la actualidad, debido a las características del suelo, se ha tenido que recurrir al riego y al bombeo de agua de los canales.

La práctica ha subsistido y se utiliza principalmente para la siembra de hortalizas y flores, pero su extensión fue menguando con el tiempo. Todavía a principios del siglo XX, las chinampas se extendían por la parte sur del antiguo lago de Texcoco, en Xochimilco y Milpa Alta; los canales que cruzaban la ciudad permitían que, hasta tiempos recientes, se llevara la producción de estas zonas a los principales mercados de la Ciudad de México. Ahora el área que ocupan es mucho menor.

A pesar de su apreciable reducción territorial, el lugar de las chinampas en la historia regional y en el paisaje de la cuenca de México ha marcado una tradición e identidad que va más allá de los grupos campesinos y que ha sido de particular importancia no sólo para San Gregorio Atlapulco, sino que le ha ganado incluso el reconocimiento de la UNESCO, en 1987, como patrimonio de la Humanidad; y en México, en 1992, como área natural protegida.

A partir de lo anterior, San Gregorio Atlapulco es oficialmente una zona prioritaria de preservación y conservación del equilibrio ecológico. Lamentablemente, el territorio y su espacio natural están en riesgo ecológico por la pérdida de ríos y manantiales, por el hundimiento del suelo en la región, el deterioro de las tierras agrícolas, la contaminación, la presencia de especies parásitas, las descargas de aguas residuales, agravadas por la permeabilidad del suelo que propicia el contacto de aguas negras con los mantos acuíferos, la pérdida de terrenos agrícolas y su sustitución por espacios habitacionales, los asentamientos irregulares, el cambio en las actividades

productivas, donde se incrementa la población ocupada en actividades secundarias y terciarias (González, 2006; INE, 1992; PAOT, 2005).

La chinampa se convierte para muchos pobladores en un símbolo de su tierra y tratan de rescatar su tradición. De manera tal que diversos grupos –por ejemplo, el grupo Tiempo y Agua– se han organizado para defender la tradición, para difundir su importancia y reivindicar su territorio.³

Por ejemplo, en la ofrenda del día de Muertos, colocada en el centro de San Gregorio, junto a varios objetos que aluden al trabajo en las chinampas, se despliega una manta con la siguiente inscripción:

CHINAMPA TIERRA SAGRADA

A cuántas generaciones has dado sustento y profesión
Gracias por darme identidad, estoy en deuda contigo

ROBERTO PÁEZ

El paisaje chinampero, heredero de una gran tradición, ha ido cambiando con el tiempo, trastocando la memoria colectiva, la identidad local, el arraigo y el sentir de los habitantes que orgullosamente se proclaman *originarios* de la zona. En la actualidad, San Gregorio Atlapulco ha sido absorbido por la Ciudad de México. Su paisaje ya no es únicamente rural y de agricultura. Su centro es un espacio urbano con calles, comercios, escuelas, viviendas, peatones, automóviles y bicitaxis. Esta última, es una de las actividades en las que se han incorporado mayoritariamente los migrantes de Hueyapan.

A partir de estos cambios en el espacio productivo de San Gregorio, las generaciones mayores recuerdan con nostalgia al espacio agrícola de antaño.⁴ Los jóvenes, en cambio, ya están insertos en otra dinámica, una que pertenece más al mundo de lo urbano. Salen de su localidad a estudiar, a trabajar en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Sin embargo, aún hay entre ellos quienes reivindican la imagen rural, a partir de la lucha

³ A lo largo de la historia de San Gregorio Atlapulco la lucha por la defensa de su tierra frente a externos que buscaban apoderarse de ellas, tuvo varios episodios. Uno de ellos que se inicia desde la Reforma continuó durante el periodo revolucionario y los une a Zapata, en defensa de sus tierras. Otra más reciente, en la década de 1950, fue la defensa de los terrenos donde después se construiría la biblioteca y el deportivo. La última fue la lucha contra la expropiación del ejido en la década de 1980.

⁴ Entrevistas con la Maestra Cipriana, realizada el 18 de septiembre de 2006; y la señora Gregoria, realizada el 15 de abril de 2006.

por recuperar las tradiciones, por rescatar la chinampa o como trabajadores de las hortalizas.

Encontramos como productores directos un buen número de jóvenes con estudios universitarios, concluidos o sin concluir, trabajando actualmente las chinampas, como recurso ante el desempleo profesional o simplemente como una opción laboral rentable.

El paisaje chinampero adquiere un gran significado para el arraigo y la memoria colectiva. Sin embargo, la productividad se ha visto favorecida por el trabajo, conocimiento agrícola y tradición de los migrantes de Hueyapan.

SAN GREGORIO ATLAPULCO, PUEBLO ORIGINARIO, MARCO DE LA PRODUCCIÓN CHINAMPERA

La riqueza ecológica, productiva y cultural de la zona chinampera no se refleja en el bienestar de su población. De la población masculina y femenina total de San Gregorio Atlapulco (19 265), la mitad está en un muy alto y alto grado de marginación, con 49.93 y 51.27% respectivamente. Los más vulnerables son los niños y jóvenes, que desde 12 años y más representan 73.69%.⁵ Esto se explica por la marginación histórica de esta población de origen náhuatl, las condiciones del mercado de productos y por las dimensiones de las parcelas.

La cotidianidad de este pueblo está marcada por prácticas y relaciones que corresponden tradicionalmente a la identidad de un pueblo originario. Sus rituales vinculados a la religiosidad popular, las formas de organización para los diferentes festejos, así como la defensa de la tierra cuando han sido amenazados por el proceso de urbanización.⁶

⁵ La población ocupada en diferentes sectores de la economía es de 7 295, siendo el sector terciario al que la gente se encuentra más vinculada con un porcentaje de 70.35 que en número está cuantificada en 5 132 personas. Le sigue 59.08%, empleados y obreros (4 310), el sector secundario pasa a ser el de más bajo porcentaje pues sólo 10.76% se ocupa en éste, con un número de 785 personas; 5.26 % son peones y jornaleros, apenas 384 personas del total de la población. Los que trabajan por cuenta propia son aproximadamente 2 070 personas o sea 28.38%, y sólo 3.91 no recibe ingreso por trabajo (Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, s/f:1).

⁶ “No es, por lo tanto, accidental que en los pueblos que han tenido una larga lucha por la defensa de su territorio y de sus derechos comunitarios haya surgido un movimiento que se apropia de la denominación de ‘pueblos originarios’, como es el caso de los comuneros de Milpa Alta y de algunos pueblos de Xochimilco, como San Gregorio Atlapulco, uno de los más tradicionales y aguerridos en la delegación” (Medina, 2007:34-35).

El fundamento existencial de las comunidades indias a lo largo de la historia ha sido el trabajo agrícola y la defensa de la tierra que lo hace posible; la lucha por sus derechos agrarios ha constituido un poderoso estímulo para la construcción de una densa red de relaciones sociales y económicas con las que se ha tejido una ideología comunitaria, la comunalidad, y se ha configurado una conciencia histórica particular (Medina, 2007:59).

De hecho, la cohesión comunitaria se vio afectada hace algunas décadas cuando se confrontaron posiciones, que justamente se oponían al fraccionamiento de las tierras, o a la venta del ejido, que algunos líderes aceptaron. La fractura social mermó la organización comunitaria, la solidaridad, la colectividad propias de las comunidades indígenas o rurales.

Habrá que mirar en el ámbito productivo, organizativo y cultural los cambios y permanencias identitarios, de este pueblo de origen náhuatl, que tuvo que enfrentar la urbanización acelerada de la ciudad más grande del mundo. Además de la producción en las chinampas y en la zona cerril, particularmente por algunas prácticas de ayuda mutua, o por la función de autoconsumo en esta última, otras prácticas y relaciones en el ámbito de la religiosidad popular como por ejemplo, la estructura de cargos en la organización de la fiesta patronal y otras celebraciones, han contribuido a mantener la ruralidad de este pueblo. Más allá de las incursiones a la ciudad, el arraigo a la tierra persiste.

El mito fundacional de San Gregorio, de acuerdo con Roberto Páez, está asociado a las chinampas. Debe la segunda parte de su nombre a los grupos nahuas que lo fundaron, y la primera, a una historia de evangelización colonial, cuando los españoles decidieron hacer del sitio un homenaje a San Gregorio Magno, a quien le construyeron su templo en 1559.

Dos son los elementos centrales a la identidad local del pueblo que nos ocupa: su sistema de producción agrícola y la fiesta en honor a su santo patrono, San Gregorio Magno. Aunque en el lugar conviven muchos imaginarios sobre los significados de su territorio, sobre quienes lo habitan y sobre las formas de vida, existe un imaginario dominante: San Gregorio Atlapulco es territorio de chinampas. El origen prehispánico de dicho sistema productivo, le confiere al territorio el lugar de inscripción de un pasado histórico.

Varios intelectuales le han dado distintas interpretaciones al jeroglífico toponímico. Sóstenes Chapa prefiere hablar de Atlapulco como “lugar que está metido dentro del agua” (Chapa, 1957:39).

El reconocimiento de ese origen prehispánico fortalece esa identidad de pueblo originario. Los lechugeros,⁷ por ejemplo, se agrupan para participar en la fiesta patronal, financiando alguna de las actividades artísticas que acompañan la fiesta. En fin, hay una pertenencia socioterritorial⁸ a la chinampa ya que:

- Les da sustento como medio de subsistencia.
- Les da vida.
- Se establece un vínculo afectivo.
- Es parte de la memoria colectiva: como tierra natal, revive recuerdos de la infancia.
- Como paisaje, también como belleza natural.⁹
- Como entorno ecológico privilegiado, por cierto muy deteriorado, y tema de preocupación de los jóvenes del grupo “Tierra y Agua” que la consideran en extinción.¹⁰

A pesar de que se ha venido transformando, urbanizando, en la memoria colectiva y en la representación actual, para una buena parte de la población la chinampa es un “geosímbolo”. “Cuando yo era chico, hasta aquí llegaba la chinampa” dice el señor Gerardo¹¹ señalando el patio de su casa, en el corazón actual de la zona urbana de San Gregorio.

Así, al mantener el vínculo con la chinampa, también se mantiene la identidad. Mantiene una “cultura íntima”, aduce también al conocimiento que se reproduce cotidianamente al trabajar la tierra con técnicas muy particulares: haciendo chapines donde germinan las semillas, con el lodo de los

⁷ La lechuga, en sus diferentes variedades, es uno de los productos más socorridos actualmente.

⁸ “El territorio puede ser considerado zona de refugio, medio de subsistencia, fuente de recursos, área geopolíticamente estratégica, circunscripción político-administrativa, etcétera; pero también como paisaje, como belleza natural, entorno ecológico privilegiado, objeto de apego afectivo, tierra natal, como lugar de inscripción de un pasado histórico y de una memoria colectiva, en fin, como “geosímbolo” (Giménez, 1998:5).

⁹ La señora Elia refiere que en una exposición de fotografías sobre las chinampas preguntaban de qué país eran esos paisajes.

¹⁰ Elaboraron el video “San Gregorio un pueblo en extinción”, en el que alertan sobre la contaminación, desecamiento y pérdida de los canales, fundamentalmente como resultado de las políticas públicas que han afectado a la zona. Uno de ellos, biólogo, pronostica sólo 20 años más de vida a las chinampas.

¹¹ Entrevista realizada el 18 de noviembre de 2008.

canales, amansándola con los pies descalzos para que no se endurezca... domesticando la verdolaga y los quintoniles... incluso incorporando nuevas tecnologías, como los viveros y los “túneles” que protegen a las plantas en el invierno, y permiten producir flores y hortalizas durante todo el año.

LA REPRODUCCIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DE UN ESPACIO RURAL-URBANO

Si bien las condiciones de reproducción de los nativos de San Gregorio son distintas de los migrantes de Hueyapan, la unidad organizativa tanto económica como social y cultural en ambos casos es la unidad doméstica. El grupo doméstico “constituye la instancia decisoria en el proceso por el que los recursos humanos y materiales disponibles se movilizan y combinan para lograr su reproducción económica” (Bueno y Hernández, 2007:253). Las decisiones que se dan en el seno de estos grupos domésticos, tienen características socioculturales particulares.

Las diferentes opciones con que cuentan unas y otras unidades domésticas, están dadas por lo que Cuéllar llama “contextos de oportunidades” (Bueno y Hernández, 2007:257). En el caso de San Gregorio la fertilidad de las tierras, la profesionalización de ciertos miembros de la familia, el acceso a trabajos urbanos, la contratación de peones o el apoyo mutuo configuran dicho contexto, para los migrantes de Hueyapan lo que se presenta es un apremio de cubrir las necesidades familiares ante el déficit de la producción agrícola en sus parcelas, los bajos salarios en otras opciones económicas locales como la maquila. Sin embargo, en ambos casos las decisiones parten de encontrar un equilibrio entre los ingresos familiares y el consumo de la unidad doméstica. El ámbito social comunitario al que pertenecen ambos grupos permite socializar algunas actividades más allá de la unidad doméstica, a partir de un conjunto de actividades económicas e intercambios horizontales de bienes y servicios.

Otro factor presente en una definición de estrategias de reproducción a nivel de unidad doméstica es el ciclo de vida en el que se encuentran sus miembros. Veremos cómo, en el caso de San Gregorio, hay cambios generacionales que apuntan a la profesionalización de sus miembros; en el caso de los de Hueyapan la temporalidad y el traslado de uno o más miembros de la familia hacia la ciudad está íntimamente asociado a ese ciclo de vida. Es importante destacar la incorporación de los distintos miembros de la fami-

lia en las actividades de dicha unidad socioeconómica: las mujeres en ocasiones como productoras directas, en otras con la preparación de los alimentos para los peones, o desarrollando actividades complementarias como el cuidado de animales de traspatio o actividades artesanales, incluso los niños encargados de llevar la comida a la chinampa y también apoyando en el cuidado de los animales.

En cada caso los ejes organizadores de la economía doméstica pueden ser distintos y las combinaciones múltiples: la producción agrícola como reguladora de la vida económica o el trabajo asalariado, sea como profesionista o peón. Lo que es cierto, es que en ambos casos las actividades se complementan y en el caso de los migrantes se acompañan por traslados continuos a su lugar de origen, para atender las distintas labores agrícolas.

En ambos casos, también se establece una relación con la estructura social más amplia, ya sea a través del mercado de trabajo por medio de la venta de la fuerza de trabajo o del mercado de productos con la venta de los objetos producidos.

Las unidades de producción en las chinampas

Las relaciones que se establecen en San Gregorio Atlapulco corresponden a la vida rural, en diferentes aspectos: la interacción de diferentes miembros de la familia en las actividades productivas y no solamente a nivel de familia, sino con otros vecinos y miembros de la localidad; el apoyo mutuo, la asociación para la producción de dos o tres productores; las múltiples funciones que asume una misma persona como productor, empleado, maestro o profesionista, comerciante.

Las dinámicas colectivas familiares y comunitarias de solidaridad son características de las sociedades tradicionales. De hecho, hasta hace algunas décadas las faenas (trabajo comunitario) eran parte de la organización comunal. Éstas se fueron perdiendo, así como la estructura de gobierno tradicional a partir de varios factores que debilitaron esa cohesión social: la pérdida de la lengua, desde las escuelas, las fracturas sociales en los conflictos por la tierra de las décadas de 1950 y 1980, el abandono del campo y la influencia urbana.

Los campesinos o productores de viveros, como prefieren llamarse, sí siguen ensayando diversas estrategias de apoyo mutuo ya sea a través de grupos de trabajo o de asociaciones con otro productor. Mediante esta co-

laboración para el trabajo se reducen los costos de la contratación de trabajadores.

En la comercialización se promueve la diversificación de los compradores a quienes venden en el mercado local, hay quienes venden a intermediarios, y también en la Central de Abasto tienen diferentes clientes: aquellos que llegan de manera directa día a día, hay quienes tienen una cartera de clientes que solicitan pedidos específicos. Estas diversas formas de asociarse para la producción como para la venta buscan paliar las formas desventajosas en la producción y comercialización.

Hay diversas formas también de acceso a la tierra, además de la propiedad, están las tradicionales como el préstamo de tierras, la mediería, y otras más modernas como el arrendamiento. O sea hay varios tipos de productores tanto en el acceso a la tierra, el aspecto organizativo del trabajo, como del mercado que atienden. Hay productores que rentan porque no tienen tierra, y hay otros que rentan para ampliar su producción más allá de sus propias parcelas. Por lo general, los propietarios tienen parcelas de mil metros cuadrados,¹² son pequeños productores, aunque hay unos cuantos grandes productores que logran cuantiosas cosechas (40 cajas de lechuga diaria, o sea alrededor de 800 lechugas), otros especializados en producción orgánica y otros con plantas frigoríficas en construcción, o que también acopian producto de otros productores.

El acceso a la tierra y la decisión de hacer de la producción chinampera una actividad económica central o no, arroja un mosaico de posibilidades: desde quien vive de la producción de sus parcelas y además vende su fuerza de trabajo como peón,¹³ para completar sus ingresos, hasta quienes rentan tierra de otros, acaparan su producción y tienen grandes compradores de las hortalizas. Quienes venden en el mercado local, y quienes cuentan con camiones para llevar su producción a la Central de Abasto y entregar a compradores especializados en productos orgánicos o a grandes distribuidores.

La relación campo-ciudad se ha dinamizado. De hecho, toda una generación se volcó a la ciudad tanto para formarse y profesionalizarse, como para encontrar otras opciones laborales.

¹² De acuerdo con el estudio de Alberto González (2005), 75% de las chinampas de la muestra levantada en San Gregorio es menor a la quinta parte de una hectárea, 10.8% mide entre una quinta parte y un tercio de hectárea y sólo 2.8% supera el tercio de hectárea.

¹³ Son muy pocos los peones originarios, la mayoría son migrantes.

En el ámbito productivo, los ciclos agrícolas de los plantíos en las chinampas, están dados por el patrón de cultivos, que se ha ido modificando de acuerdo con las exigencias del mercado. Antes se sembraba maíz, frijol, chilacayote; actualmente acelga, espinaca, lechuga italiana, francesa, sangría y otras hortalizas para la gastronomía *gourmet*.

Las unidades campesinas no son solamente unidades de producción, sino también de relaciones y expresiones sociales y culturales. El territorio es entonces un espacio por el que se construyen relaciones sociales, identidades, pertenencias y, por qué no, huellas del pasado que se comparten en la memoria colectiva.

En cuanto al trabajo en las chinampas, las estrategias cotidianas están marcadas como en todo contexto rural, por las relaciones con la naturaleza. No sólo se cuida y se disfruta la tierra, sino también el entorno, los árboles, el agua; aunque también se lamenta y se sufre por un lado el desecamiento de los canales, por otro, de inundación de las chinampas, efecto de políticas de urbanización y de ataque a la periferia rural de la ciudad desde hace un siglo.¹⁴

Por otro lado, la relación campo-ciudad también se expresa en el ámbito productivo. Los ritmos del mercado y el manejo de hortalizas, de corta vida, marcan una interacción diaria.

Los aspectos culturales e identitarios, de identificación primaria, no dependen estrictamente de la intensidad de trabajo directo, pues durante la profesionalización, si bien algunos abandonan el campo, otros mantienen la producción con el trabajo de familiares o peones. Por ejemplo, Vicente Godoy, empleado público durante 30 años, nunca dejó de sembrar. Ahora, como jubilado, “defiende la tierra” sembrando. Elia y Ricardo retoman la producción agrícola al heredar las tierras del padre, y lo hacen con tanto entusiasmo que ella abandona su trabajo en una encuadernadora en la que laboraba y él, profesor de matemáticas, trabaja doble turno, uno en la escuela y otro en las chinampas.

En los casos en los que los productores y sus familias están abocados exclusivamente a la producción agrícola, su identificación como campesinos o ahora productores de vivero, como se autodenominan, es más clara.

¹⁴ El acueducto construido durante el porfiriato para entubar el agua de los manantiales de la zona, para abastecer la capital; la perforación de pozos a mediados del siglo pasado, la inundación de tierras ejidales y de las chinampas con aguas tratadas, para unos como efecto de soluciones técnicas ineficientes al desecamiento de los canales, para otros como medida de castigo político ante el rechazo a la expropiación de tierras ejidales para proyectos turísticos.

Muchos miembros de la generación que abandonó el campo, lo han retomado, o lo han hecho sus hijos. En los últimos años, las chinampas han sido una alternativa al desempleo de los jóvenes. El cultivo de las chinampas pasa de abuelos a nietos, como es el caso de Fernando Márquez, que al perder su trabajo y dejar la universidad aprendió con su abuelo el cultivo de hortalizas. Egresados de las universidades que no encontraron un empleo también encontraron una opción en esta actividad.

Es ahí donde la multifuncionalidad aparece. A la jornada burocrática o de estudio, por ejemplo, se suman las labores agrícolas, por las tardes y noches o los fines de semana, las de la comercialización, en la madrugada, para quienes venden en la Central de Abasto.

Están también las funciones organizativas y administrativas de las tareas que otros miembros de la familia o trabajadores asalariados ejecutan. La identidad campesina se refuerza en la medida en que algunos chinamperos son también productores de maíz y frijol en las tierras cerriles.¹⁵ Ahí, las tierras de temporal además del cultivo de esos productos básicos para el autoconsumo, albergaron tradicionalmente la cría de ganado mayor y menor.

Estas son “las estrategias locales a partir de las cuales los pueblos indios van construyendo resistencias y estrategias de vida que les permiten su persistencia diaria en un mundo de cambios” (Castellanos, 2000:57).

La interacción rural-urbana marca rupturas y continuidades. Es así como lo rural se reconstruye continuamente sin que esto implique la destrucción de la cultura, sino nuevas formas de identidad territorial (Ávila, 2005:48).

Para comprender las estrategias de vida y reproducción sociales acudimos a describir la cotidianidad de las chinampas, y las formas de organización de una familia, que después de sumarse a la profesionalización acorde a su generación, actualmente dedica gran parte de su tiempo y energía a la producción y comercialización de lechugas y otras hortalizas.

¹⁵ Esta actividad también ha disminuido, en la medida que la producción de autoconsumo ya no se valora, sea porque las mujeres ya no elaboran las tortillas, sea porque resulta incoachable invertir en ese tipo de productos.

*La cotidianidad de los chinamperos*¹⁶

Para Ricardo y Elia, dos chinamperos de San Gregorio hijos de campesinos, su labor es cuestión del azar del destino. Sus padres los habían educado para dejar el campo, pero después de ver abandonadas las tierras que eran su herencia, se motivaron a cultivarlas como un pasatiempo sin dejar de lado sus funciones como profesionistas.

Recuerda Ricardo que mucha gente sacó adelante el estudio de sus hijos con el trabajo en la chinampa, así que en su generación la mayoría son maestros. En las décadas de 1960 y 1970 muchos de los agricultores dejaron la chinampa, pues el gobierno había drenado el agua para surtir a la ciudad de México. Con la crisis de la década de 1980 algunos de los que habían dejado el campo regresaron a los cultivos como una opción de supervivencia.

Los jornaleros que se contrataban cuando ellos eran unos “chamacos”, provenían de Toluca, después vinieron del estado de Hidalgo.

Así fue como desde 1993 empezaron por sembrar rosales y plantas de ornato, aunque no conocían del negocio, vendían en plazas, mercados y supermercados, de este modo fue como retomaron un oficio que básicamente es una tradición en este pueblo de Xochimilco. Con el tiempo incursionaron en el cultivo de lechuga e hicieron la contratación de un peón quien les ayudó para sacar la producción, buscaron un lugar en la Central de Abasto para vender diariamente de las cinco hasta las seis de la mañana. Para Ricardo fue una ardua labor ocuparse tanto de sus clases en la secundaria que iniciaban a las siete de la mañana, como de la venta de lechuga, pero concertado con Elia ahora ella es la que se hace cargo del negocio en las mañanas.

Desde las ocho de la mañana empiezan a llegar los peones para desayunar y comenzar las labores en la chinampa, en la tarde Elia se encarga de hacer café y calentar la comida para darles su segunda ración, apenas duerme tres horas en la noche, porque su trabajo no le da abasto, debe hacer el mercado diariamente y dejar preparada en las noches la comida para el día siguiente.

Cuando son las seis de la tarde ella ya tiene todo listo para transportar la producción al embarcadero y dejar ahí la mercancía que luego es trasladada por camiones y canoas hasta la Central.

¹⁶ Entrevista realizada el 8 de noviembre de 2008.

Sin embargo, a Elia le gusta mucho el campo, dejó de trabajar en la encuadernación para meterse de lleno en esta tarea, para ella es otro ambiente y otra vida:

[...] yo desde las tres de la mañana vengo, hay que guisar en carbón, hago mis cazuelas, un kilo de arroz, pongo frijoles, yo voy a dejar la semilla, a veces a ensemillar, al corte y vamos saliendo a veces hasta las nueve de la noche. En tiempo de lluvias cortamos bien mojados, en tiempo de heladas lo mismo con frío y descalzos porque no se puede entrar a cortar en la chinampa con zapatos, pues se echan a perder. Yo, gracias a Dios nunca me enfermé, además lavo la ropa de los hijos, que el trasterío, que el patio, que mis flores y todo eso.

Esta rutina se hace de lunes a sábado, día del pago a los peones. Cuando por algún motivo faltan por alguna circunstancia como su asistencia a las fiestas patronales de su pueblo, o fallan, a ellos les toca asumir su función, pero generalmente hay otros labriegos que son recomendados para contratación. Sus hijos ayudan en vacaciones, cuando sus estudios lo permiten.

Los jornaleros en la chinampa se dedican a las labores de limpieza del campo, barbecho y luego a sacar el lodo para que germinen las semillas en el almacigo donde se depositan alrededor de 10 mil piezas, entonces ahí crece, nace, se desarrolla y cuando está más grande se afloja para darle espacio a la planta. Así lo describe Elia, “se afloja el chapín y luego ya se deja unos tres días, de ahí se prepara el terreno para sembrar, ahora sí el chapín se siembra, y de ahí es regar, fumigar y desyerbar y después viene el corte”.

A veces escasean los trabajadores. Aunque, ello ha ido cambiando.

En un principio venían los señores a trabajar. Estaban una temporada y se iban y también vinieron los de Puebla, estaban una temporada, se van y otra vez. Pero los cambios económicos del país los han obligado a que ya no vayan tan seguido o que traigan a su familia.

Además de lechugas, de vez en cuando cultivan verdolaga, aunque el proceso de siembra es diferente, es más rápida la cosecha.

Ese producto no se cultivaba como ahora, era silvestre. Esto porque cuando nosotros éramos chamacos había mucho atraso económico. Las señoras iban a juntar verdolagas, quelites y todo en los sembradíos de otras verduras. Y en la tarde iban al mercado de Xochimilco.

Mi abuelo juntaba sus verdolagas, diario se llevaba un ayate. Pero su gusto era, porque empezaban los transportes; irse en pesero y regresar en pesero, nomás a Xochimilco. Aquí, como nadie tenía carro, coche, le gustaba nomás ir y regresar. Diario las vendía. Todo el mundo andaba juntando verdolagas silvestres, hasta que a alguien se le prendió el foco y juntó la semilla y empezaron a cultivarla.

Cuenta Elia que anteriormente los padres y abuelos se dedicaban al cultivo de apio y coliflor.

[..] yo me acuerdo que ellos lavaban los apios con un trapo, tallaban los tallitos y quedaban. Pero luego se puso bien barata [la coliflor], por eso también se dejó de cultivar. Ya es muy poca, no se cultiva como antes que sacaban canoas.

Además, agrega que uno de los cultivos que se está recuperando es el cilantro, porque hace mucho tiempo que ya ni se cultivaba, ni se daba, “está saliendo muy bonito”.

Y es que San Gregorio compite en producción con otros lugares como Guanajuato, Puebla, Cuautla, y ahora Mixquic, que adquirió la semilla en San Gregorio y está metiendo verdolagas al mercado, pero no con la misma calidad y cantidad. Anteriormente los chinamperos eran los únicos verdolagueros que abastecían el Distrito Federal. Sus productores llegan todos los días a la Central en aproximadamente cinco carros, con unas 200 cajas cada uno, en total mil cajas, con dos mil docenas de verdura.

La fiesta su organización y significado

La tradición católica y la religiosidad popular han marcado la identidad de Xochimilco, no sólo de San Gregorio. Se trata de una región que tiene más fiestas religiosas que días en el año, donde cada pueblo hace una fiesta importante en honor a su santo patrono, a diversas imágenes religiosas y celebraciones eucarísticas, y en ellas salen a las calles y convierten una cuestión de fe en un festejo local, ligado al territorio. En este sentido, cabe destacar que se trata de un lugar donde la religión católica y en particular la religiosidad popular representan, más allá del culto, un núcleo base para la organización comunitaria y el arraigo a la localidad. Para varias de estas

celebraciones se nombran mayordomías¹⁷ y comisiones encargadas de organizar las actividades rituales y festivas. Participan en ellas desde grupos constituidos *ex profeso* para la celebración, hasta las organizaciones de productores, como la de lechugeros que este año patrocinó la orquesta que amenizó varias horas la fiesta patronal.

De acuerdo con Roberto Páez,¹⁸ estudioso de la historia de su pueblo,

[...] lo que organiza la iglesia es un sincretismo. Detrás de todos eso hay una gran representatividad desde el punto de vista indígena de la tradición de nuestro pueblo; o sea, la religión católica sustituyó la tradición religiosa prehispánica, ahí están los cultos. San Gregorio lo relacionan con el culto a la tierra, el 12 de marzo es una fiesta netamente indígena que ya existía, los franciscanos buscaron un santo que se pareciera a la fecha y sustituirlo o emparejarlo, eso es la fiesta de San Gregorio, hay representación indígena y de tipo español.

Para él, la fiesta patronal coincide con la de la fertilidad, que inicia un ciclo productivo. Así lo plasma en una pancarta en la fiesta patronal del 2009:

FIESTA A LA FERTILIDAD

En épocas de la gentilidad, San Gregorio Atlapulco vivía una relación importante entre el hombre y la naturaleza, dicha relación era objeto de diversas acciones simbólicas encaminadas al culto de la fertilidad y de los cerros, prueba de ello es el templo de los dioses a la fertilidad conocida como Malinche, resguardada por el guerrero (Juan Tamborilero), en el cerro de Xilotepec; por otro lado, en el cerro de Teutli (cosa adorada), el doce de marzo marcaba el inicio de los calendarios agrícolas de Atlapulco, donde se realizaba el ritual del palo volador Coapatlalques, como una acción de la fuerza de la naturaleza, que influenciaba sobre los medios de sobrevivencia de integridad física y bienestar social. Para que lloviera se castraban los nuevos

¹⁷ “La base del sistema de usos y costumbres es precisamente el sistema político religioso comunitario, eje de reproducción de sus identidades étnicas y culturales; remitido a su papel organizador del ciclo ceremonial anual, sus implicaciones políticas se mantenían en un segundo plano, sobre todo por la vigencia de un régimen autoritario en el que no tenían representación, aunque se hacían presentes en coyunturas en las que estaba de por medio la defensa de su territorio, lo cual se expresa en diferentes momentos de la historia reciente de la Ciudad de México” (Medina, 2007:33).

¹⁸ Entrevista realizada el 10 de abril de 2009.

magueyes, ahuyentaban las nubes con granizo, los animales no hicieron daño a las siembras, tuvieron buenos productos.

Efectivamente, durante la fiesta, además de que se alternan danzas de concheros,¹⁹ la danza de las aztequitas con las de los vaqueritos, las pastoras, o las que recuerdan la presencia de los moros en la sociedad española; también se combinan rituales y cantos de la liturgia católica, con otros como la música de mariachi, todos ellos constituyen ofrendas al santo patrón. Muchas otras actividades festivas acompañan la semana de celebración a San Gregorio: peleas de gallos, jaripeos, baile popular, conciertos con cantantes populares y grupos musicales de gran renombre, y no pueden faltar los castillos y juegos pirotécnicos, acto en el que las dos manzanas en las que se dividió en alguna época al pueblo, compiten por presentar el mejor espectáculo. Los recursos grupales y comunitarios que se erogan en esa fiesta, ascienden a cientos de miles de pesos. Nada más un castillo costó este año cerca de 200 mil pesos. En la fiesta patronal de San Gregorio se reproduce también:

Una densa red de intercambios [...] La forma más sencilla y frecuente de los intercambios comunitarios es la que se desarrolla en ocasión de las fiestas patronales, cuando llegan representaciones de varios pueblos llevando sus promesas, es decir, regalos para la iglesia; se identifican por el estandarte que portan y son recibidos formalmente por los organizadores de la fiesta del pueblo anfitrión, quienes les ofrecerán comida y hospedaje, cuando es necesario (Medina, 2007:54).

Es notable ver el gran número de grupos de danzantes concheros que llegan para la fiesta, de diferentes localidades del centro del país.

LA MIGRACIÓN DE LOS HUEYAPENSES, ESTRATEGIA DE REPRODUCCIÓN CAMPESINA

Como señalamos al inicio, a San Gregorio Atlapulco llegan inmigrantes de diversos estados. Un buen número de ellos provienen de Hueyapan, Puebla,

¹⁹ Al bailar en el atrio de la iglesia, consideran que también están honrando al centro ceremonial prehispánico sobre el cual seguramente se edificó el templo católico.

el grupo más marginado y discriminado de entre los peones, aunque también reconocido como de buenos trabajadores. Se trata también de indios de origen náhuatl, entre los que también la religión ha sido un elemento de cohesión y organización comunitaria.

Hueyapan es un pueblo localizado en la sierra norte de Puebla, con una población que –de acuerdo con el *Conteo de población y vivienda* (INEGI, 2005; en Ayuntamiento del municipio de Hueyapan, 2008:10)– asciende a 11 105 habitantes, de los cuales 5 814 viven en la cabecera municipal. Se trata de una región de gran valor biológico y cultural. Sus habitantes están orgullosos de sus paisajes y de su gente, de sus tradiciones, de sus fiestas y sus artesanías. Tiene como principales actividades económicas a la agricultura. La actividad principal concentra 50% de la población, sector primario dedicado al cultivo de maíz y frijol de temporal, así como árboles frutales de granada, chirimoya, durazno y ciruela, que tuvieron su tiempo de auge hace más o menos 10 años. Actualmente, los precios que ofrece el mercado en las frutas son incosteables y se prefiere dejar perder la cosecha. Otra actividad que ocupa a un gran número de mujeres es el bordado de chales. Se encuentran también algunas maquiladoras en el municipio. Sin embargo, eso no garantiza la subsistencia y los obliga a migrar en busca de mejores oportunidades, como ocurre en muchas regiones del campo mexicano; algunos se van a Xochimilco, otros a Estados Unidos. En palabras de Tibido Cabrera Martínez,²⁰ comisionado de ecología y de la Dirección de Protección Civil en Hueyapan:

Aquí la actividad que predomina es la agricultura y la ganadería, especies menores porque no son ganaderos solamente es traspatio, gente de parcela que trabaja en sus pequeñas parcelas. Aun así no son autosuficientes, por eso mismo es que nuestra gente emigra, por la restricción de la economía, y [...] porque el salario mínimo es bajo, son 50 pesos [...] Nuestra gente cree que dentro de las urbes hay más supervivencia [...] allá son 120 pesos. Tendrá unos 30 años, que la gente migra.

En San Gregorio se les pide “lo que saben hacer: ser campesinos, el cuidado de las parcelas, ahí se necesita perseverancia y trabajo”.

²⁰ Entrevista realizada el 29 de noviembre de 2008.

La migración desde Hueyapan no se explica a partir de un desarraigo de su lugar de origen, sino con base en la pobreza y la falta de empleo, que los obligan a dejar su tierra y muchas veces a su familia, como estrategia de supervivencia. Según afirma Tíbido Cabrera, las cosas ya no son igual que antes, aunque se siembra el maíz, el frijol, la granada y el aguacate, ahora se dan agusanados y no están tan buenos como las cosechas anteriores, les ha caído mucha plaga, al parecer dicen que “la tierra se ha infectado”, tal vez por la acción de los químicos agrícolas y por el cambio climático en el medio ambiente.

La emigración de Hueyapan obedece fundamentalmente a razones económicas: la escasa productividad de la tierra, las condiciones de la comercialización, la dificultad de obtener precios justos por sus productos, y a las estrategias propias familiares de ahorrar, de juntar dinero para una futura compra de un terreno, la construcción de su casa o para estudiar.

Al igual que la mayor parte de la población jornalera migrante que proviene de entornos rurales, la pobreza y la marginación es una de las razones por las que la población de Hueyapan migra. La problemática local se expresa en su alto índice de marginación, cuantificado en 0.889. Además, en 2005, Conapo catalogó al 100% de las comunidades pertenecientes al Ayuntamiento del municipio de Hueyapan como de alta y muy alta marginación (Ayuntamiento del municipio de Hueyapan, 2008). En el plan de desarrollo municipal de Hueyapan, Puebla, aparece la siguiente observación sobre la migración:

Hueyapan enfrenta uno de los principales problemas que aquejan a los municipios marginados, la migración. La falta de oportunidades laborales, aunado al bajo poder adquisitivo de los pobladores, fomenta la migración constante de los pobladores; quienes en su búsqueda por generar recursos económicos deciden abandonar sus lugares de origen como una medida extrema por allegarse de capital monetario que le permita acceder a mejores condiciones de vida (Ayuntamiento del municipio de Hueyapan, 2008:12).

El mismo documento habla de una migración de casi 50% de la población masculina entre 20 y 59 años. Tíbido C., funcionario del municipio, comenta que el tipo de migración es fundamentalmente temporal, ya que la población va y viene. Desde su perspectiva, las razones o motivaciones de la mayoría de los desplazamientos son “el sueño de una casa y un buen porvenir”. Una de las constantes, entre los entrevistados, es la mención de

la falta de ingresos, debido a bajos precios que les ofrecen por sus productos. Se van en busca de trabajo, que permita ingresos monetarios para complementar su economía de autoconsumo. La señora Rosa, quien actualmente trabaja en una tortillería en San Gregorio A., comenta que desde hace 20 años que llegó ya había mucha gente de Hueyapan. Los que llegaban de allá trabajan en las chinampas, en las tortillerías, en la construcción y recientemente también en los bicitaxis.

A pesar de esa migración temporal o definitiva de su comunidad de origen, los nahuas de Hueyapan mantienen su identidad y su adscripción y apego a su lugar de origen. Irse a trabajar a otro lado es su estrategia de reproducción, la opción que tienen para la subsistencia de su lugar de origen, de sus tierras, de sus tradiciones, de su memoria, de sus formas de vida. De hecho, es una estrategia que gira alrededor del trabajo agrícola y en la que todos los miembros de la familia colaboran en diferentes tareas.

El ciclo de vida familiar es el que define la temporalidad, la motivación y la estrategia migratoria. Seguramente, las condiciones de vida alargan la permanencia más allá de lo deseado. Por ejemplo, es claro que aunque José ya logró construir su casa, continúa trabajando en las chinampas porque en Hueyapan el trabajo asalariado tanto en el campo como en las maquiladoras es muy mal pagado (de 50 a 60 pesos). Y no es que en San Gregorio se pague bien, se paga más (150 pesos).²¹

Es muy común, por ejemplo, mientras los dos jóvenes esposos encuentran trabajo permanecen en la Ciudad de México,²² una vez que empiezan a tener hijos, la mujer regresa a su lugar de origen, hasta que los hijos están en edad de realizar estudios medios superiores o superiores o de incorporarse a trabajar a las chinampas o a los bicitaxis. Es más barato mantener a la familia en Hueyapan, que en la Ciudad de México, sobre todo si la mujer deja de trabajar fuera de casa.

En general los planes son de volver a Hueyapan. La señora Constantino Hernández afirma, “venimos de pasada, mientras tenemos fuerzas para trabajar”.²³ “No vivimos en casa propia, pagamos renta”. “Allá está mi casa,

²¹ Hay una queja de los migrantes de otras regiones del país, por el mal pago que reciben. Para ellos un pago más justo tendría que rebasar los 200 pesos. Asimismo, señalan que los peor pagados son los de Hueyapan, que se abusa más de ellos, pues los ven más ignorantes.

²² Las mujeres trabajan en el servicio doméstico, en las tortillerías o en el comercio.

²³ Entrevista realizada el 21 de septiembre de 2007; junto con su esposo atiende un taller de bicicletas.

pienso regresar”. Un indicador sobre la temporalidad de la migración, se da con la propiedad de tierra y vivienda. “Los que compran un terreno se quedan”, dice Rosa.²⁴

Otra consideración es la formación de los hijos: “estaremos dos años más echándole ganas y cuando el hijo²⁵ termine sus estudios regresaremos a Hueyapan [...] esa es nuestra meta, apoyar a los hijos”, concluye la señora Constantino Hernández. Ella se vino con su hija hace siete años a acompañar a su esposo, quien trabaja desde los 20 años en la zona.

Otro caso es el de Antonio,²⁶ quien relata que él vive “en el pueblo”, trabaja 20 días y se va, se queda 10 días según el trabajo de allá. Siembra maíz de temporal para autoconsumo, que no alcanza para todo el año y menos en 2007, que “los fregó el aire”. Sus hijos viven allá; dos están trabajando aquí en las chinampas, pero casi no vienen. Su esposa no viene pues tiene animales.

Nunca trajo a la familia, tienen un terrenito, “nuestra casita, ¡cómo vamos a abandonarla!, ¡no tuviera yo nada, donde quiera se puede uno ir a vivir!”.

Trabaja en la chinampa, todo el año hay cultivo, hay verdolaga, lechuga, espinaca, cilantro. “Aquí nos conviene porque ganamos. Allá tarda la cosecha”. Trabaja todos los días que le den chamba. En San Gregorio paga renta.

Muchos de los migrantes se quedaron y empezaron a trabajar la tierra a medias. A partir de la introducción de los bicitaxis un buen número de *hueyapitas* se desplazó a dicha actividad y siguen trayendo a sus familiares. Es así como se van diseñando diferentes estrategias familiares, en las que la temporalidad y el número de miembros que migran varían por diversas razones.

En todos los casos, la motivación y la atención se mantiene en los recursos que requiere la familia, la necesidad de contar con vivienda, la previsión de un futuro deseable. Conforme el ciclo biológico de la familia avanza “y crece el número de integrantes aptos para desarrollar actividades remuneradas las unidades campesinas comienzan a transferir sus integrantes jóvenes y adultos [...] a la venta de fuerza de trabajo” (Bueno y Hernández, 2007:269).

²⁴ Entrevista realizada el 21 de septiembre de 2007.

²⁵ Estudia derecho y quiere regresar a Hueyapan como abogado.

²⁶ Entrevista realizada el 23 de septiembre de 2007; jornalero de alrededor de 50 años.

Al igual que la dinámica migratoria en el resto del país, son los familiares y vecinos quienes han conectado a los nuevos trabajadores con el mercado de trabajo en las chinampas. Se constituyen en las redes de apoyo para migrar. No sólo son los guías, sino también compartirán el alojamiento en su destino, padres e hijos, primos, sobrinos alquilan un cuarto para descansar por las noches, pues durante el día trabajan toda la semana, incluso fines de semana y días festivos, si hay quien les contrate. Los cultivos y la venta de hortalizas, exigen atención todos los días. Además de las diferentes operaciones de cultivo, hay que regar, y cortar y empacar las hortalizas que están listas para la venta.

Se dice que en San Gregorio hay alrededor de mil inmigrantes de Hueyapan. De acuerdo con diferentes fuentes –un funcionario municipal y el Plan de desarrollo municipal–, se calcula que entre 20 y 50% de los adultos migran desde Hueyapan a todo el país y al otro lado de la frontera.

Ante la pregunta de qué más vincula a Hueyapan con San Gregorio, inmediatamente se alude a la lengua náhuatl²⁷ que se habla en ambos lugares y a que hay un barrio de San Andrés que celebran a esa imagen religiosa en las mismas fechas de la fiesta patronal de Hueyapan. Estos elementos para algunos justifican y refuerzan la migración hacia ese lugar. En palabras del Padre Faustino Jaime Lino,²⁸ párroco de Hueyapan:

Es claro que toda la gente de San Gregorio tiene una raíz náhuatl, igual que Hueyapan; por eso es lógico que hubiera un entendimiento tanto cultural como religioso, entonces se involucran entre ellos y la gente empieza a involucrarse y los pueblos se van hermanando, y la gente se siente segura al ir apara allá, segura porque sabe que va encontrar a alguien conocido, que le puede decir dónde trabajar, en qué lugar y con trabajo seguro.

Una peregrinación ciclista llega cada año a tender el puente entre los hueyapenses que trabajan en San Gregorio y la población de su comunidad de origen. Desde este puente, de este ir y venir por temporadas, ya sea para visitar a la familia o incluso para dejar lista la parcela de siembra de temporal de Hueyapan y mantener el espacio productivo vivo para la familia, reproducen su cultura conjugando su trabajo asalariado como jornaleros y su participación en la vida comunitaria de su pueblo de origen.

²⁷ Es curioso este comentario, ya que en San Gregorio, sólo algunos adultos mayores recuerdan todavía el náhuatl.

²⁸ Entrevista realizada el 30 de noviembre de 2008.

Este año, en la fiesta patronal, llegó una señora que había migrado hace 20 años llevando una promesa, un grupo de chinelos, danzantes típicos de San Gregorio, como una manera de honrar sus raíces.

El trabajo en las chinampas y en los bicitaxis

El flujo migratorio de Hueyapan, Puebla, hacia Xochimilco atrajo jornaleros agrícolas para trabajar en las chinampas, desde hace por lo menos dos o tres décadas, o sea dos generaciones. Muchos de ellos ahora trabajan la tierra por su cuenta o se han incorporado a otras actividades, entre las que destaca el manejo de bicitaxis.

La identidad de los de Hueyapan, la visión de sí mismos, está marcada fuertemente por su identidad indígena, que se hace presente cotidianamente a través del lenguaje, la manera de expresarse, su reconocimiento como grupo de migrantes que se reúne en la plaza todos los días a cierta hora; en el caso de las mujeres, su manera de vestir diferente a las de San Gregorio. A diferencia de otros migrantes, quienes hallan su lugar de oportunidad en otros destinos, los de Hueyapan no encuentran en San Gregorio las grandes empresas capitalistas agrícolas, sino pequeñas unidades familiares, que requieren mano de obra intensiva. En las relaciones de contratación de los jornaleros todavía hay esta costumbre de facilitarles la alimentación tanto en la mañana como en la tarde, que ingieren en la casa del que los contrata o se la llevan al campo.

Para los de Hueyapan es atractivo trabajar en las chinampas, les gusta manejar el lodo, aunque es diferente del proceso productivo de las formas de cultivo en su tierra, es un trabajo agrícola al que están acostumbrados. Un joven productor atlapulquense señaló que hay cierto rechazo hacia los *huayapitas*,

[...] por envidia, son muy trabajadores y ayudaron a que evolucionara al trabajo agrícola. Son más prácticos, ellos metieron fertilizante y aunque generaron problemas de desahue, ahorran tiempo [...] El intercambio de conocimientos ha sido mutuo. De hecho, los de fuera también aprendieron técnicas y se las llevaron a sus pueblos.

Otro espacio al que se han incorporado es el manejo de bicitaxis. En San Gregorio es un medio de transporte muy utilizado. Los dueños de los bici-

taxis contratan jóvenes en su mayoría migrantes, en particular de Hueyapan, al grado que se ha estigmatizado su presencia, por dos razones: invasión del espacio de los bicitaxis que vinculan con los migrantes, y la rudeza, que algunos sienten amenazante, con la que conducen estos medios de transporte. De hecho, los dos elementos: la incorporación de algunos peones como arrendatarios o propietarios de las chinampas y su expansión en el negocio de los bicitaxis, ha agudizado la discriminación y el racismo con que se expresan los originarios de estos “invasores”.

DE VUELTA AL ORIGEN: LA FIESTA

Los de Hueyapan van a San Gregorio por las oportunidades de trabajo, pero no pretenden quedarse. La forma en que se expresan los migrantes de Hueyapan sobre su tierra de origen muestra el apego, el vínculo afectivo, a pesar de haber sido expulsados o forzados a abandonarla. Aunque en su imaginario se sienten migrantes temporales que están de paso, y que tarde o temprano volverá a su origen.

San Gregorio Atlapulco representa un lugar transitorio, mientras trabajan. Pero su vida, sus tierras y muchas veces su familia están por lo general en Hueyapan. Por eso regresan, vuelven a ver a los suyos, a trabajar en sus parcelas, a sembrar, y vuelven también a la fiesta patronal, la de San Andrés Hueyapan, a la cual llegan, donde confluye un gran número de personas que si bien son originarios, muchos de ellos han migrado a San Gregorio Atlapulco.

Todos ellos están presentes cada año para la fiesta patronal y para otros momentos de la vida familiar y comunitaria, por lo general vinculada a ceremonias religiosas. Por ejemplo, la esposa de José comenta que si bien él no pudo asistir a la fiesta patronal, pues no le había pagado su patrón, tendría que estar en diciembre, pues “somos comité de la capilla y tenemos que llevar al niño Jesús para que pidamos posada”.

La fiesta patronal de Hueyapan es también el espacio en el que se refrenda la identidad, como dice el párroco de San Andrés Hueyapan, “la importancia de que los migrantes regresen en esas fechas, les permite el reencuentro con sus danzas, los rituales, las procesiones que revalidan un origen común” (Atilano, 2005:236). El sentido de pertenencia se refuerza en los momentos festivos del pueblo.

Al igual que en San Gregorio Atlapulco, y de manera más clara, el sincretismo se palpa durante la festividad. Las danzas indígenas en la iglesia y en el atrio, los sahumeros y los mariachis acompañan los rituales de la liturgia católica. Los voladores de Papantla alternan con el rodeo, el nombramiento de la reina y la música popular. También los juegos pirotécnicos, los toritos y los castillos iluminan la noche de cierre.

CONCLUSIONES

Dos estrategias para la reproducción de un espacio agrícola, rural, de gran tradición indígena, con una religiosidad popular muy rica, cargadas de una memoria colectiva que no debe perderse, con un conocimiento de una forma de producción casi única en el mundo, se reúnen en una región que ha sido incluso reconocida como parte del patrimonio de la humanidad: San Gregorio Atlapulco, un espacio cultural, que no sería tal sino a partir de sus actores, de sus habitantes originarios y de sus migrantes.

En dicho lugar confluyen los valores, las aspiraciones, los deseos, las cosmovisiones, los conocimientos, la memoria colectiva, las experiencias, las estrategias de sobrevivencia y de reproducción de dos lugares distantes entre sí, pero que comparten parte de su población: el mismo San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, y Hueyapan, Puebla.

Desde la perspectiva del desarrollo local, las estrategias de vida de la comunidad local quedan plasmadas en la identidad territorial y en función de un proyecto productivo, que en este caso gira en trono a la agricultura y a las tradiciones del lugar. En el caso de San Gregorio Atlapulco, la chinampa tiene un gran significado, en términos identitarios, para los originarios. Por su parte, los de Hueyapan, Puebla, centran sus estrategias de reproducción en la migración a un espacio que no deja de estar divorciado del paisaje de su tierra natal y de sus propias tradiciones.

En el desarrollo local –en el marco de las estrategias de reproducción–, el proyecto común, que en este caso es implícito, más que explícito, resulta de una intersección de intereses. Por ende, es importante comprender el sentido que tiene habitar un espacio concreto para las diversas comunidades que lo componen; el significado colectivo que se le da al espacio; destacar las distintas trayectorias que los grupos sociales transitan; pues es a partir de ahí que se puede trabajar en conjunto y en beneficio de la colectividad y del territorio que les es propio.

BIBLIOGRAFÍA

- Atilano, Juan José (2005), “La identidad mixteca y trabajo jornalero migratorio”, en Gabriela Kraemer y Martha Judith Sánchez (coords.), *Derechos étnicos y territoriales de la población indígena y campesina en México*, tomo 4, AMER, México.
- Ávila Sánchez, Héctor (2005), *Lo urbano-rural, ¿nuevas expresiones territoriales?*, UNAM/CRIM, México.
- Ayuntamiento del municipio de Hueyapan (2008), “Plan de desarrollo municipal 2008-2011”, Puebla [<http://bit.ly/cCHTnR>].
- Bueno, Carmen y Martha Hernández (2007), “La reproducción compartida: las familias de los trabajadores de la construcción en la Ciudad de México”, en David Robichaux (coord.), *Familias mexicanas en transición: unas miradas antropológicas*, UIA, México.
- Castellanos, Alex (2007), “Los tatuajes de la tierra. Territorio, identidad y cultura en el sur del Distrito Federal”, en Roberto Diego y Carola Conde (coords.), *El cambio en la sociedad rural mexicana, ¿se valoran los recursos estratégicos?* tomo 3, AMER.
- Chapa, Sóstenes (1957), *San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Distrito Federal, pueblo que nació luchando por sus tierras y ha vivido defendiéndolas*, México.
- Giménez, Gilberto (1988), “Territorio, cultura e identidades. La región sociocultural”, mimeo, México.
- González, Alberto *et al.* (2005), “Catalogación de las chinampas de Xochimilco: inicio de un proceso indispensable”, mimeo, UAM, México.
- González, Ángeles (2006), “Chinampas”, *La Jornada*, 23 de julio [<http://bit.ly/cfW4OK>].
- Jefatura de Gobierno del Distrito Federal (s/f), “Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social 2001-2003” [<http://bit.ly/d0tYHZ>].
- Instituto Nacional de Ecología (1992), “Declaratoria que establece como zona prioritaria de preservación y conservación del equilibrio ecológico y se declara como área natural protegida, bajo la categoría de Zona sujeta a Conservación Ecológica, la superficie que se indica de los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, Distrito Federal” [<http://bit.ly/aEuZVh>].
- Klein, Juan Luis (2006), “Geografía y desarrollo local”, en Daniel Hiernaux y Alicia Lindón (dirs.), *Tratado de geografía humana*, Anthropos/UAM-Iztapalapa, México.
- Medina, Andrés (2007), *La memoria negada de la Ciudad de México. Sus pueblos originarios*, UNAM/Instituto de Investigaciones Antropológicas, México.
- Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) (2005), “Elementos para una gestión adecuada del Suelo de Conservación del Distrito Federal”, [<http://bit.ly/a3n5u1>].

“De autonomía a autonomía”. La vinculación para el desarrollo entre la UAM-Xochimilco y el Municipio Autónomo de San Juan Copala

Luciano Concheiro Bórquez
Patricia Couturier Bañuelos
Carmela Cariño Trujillo
Armando Martínez Rosales*

En el presente trabajo reflexionamos acerca de la importancia de la vinculación, tanto de profesores-investigadores como de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, con comunidades indígenas, con la finalidad de coadyuvar en la solución de problemas sociales. En particular, nos referiremos al acompañamiento que el posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco ha realizado con el pueblo triqui, de San Juan Copala, Oaxaca.

En enero de 2007, algunas comunidades triquis de la región de Copala, decidieron conformar el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC) con la finalidad, primero, de reconciliar a sus comunidades hasta antes enfrentadas e inmersas en una ola de violencia fratricida; en segundo lugar, establecer un territorio de paz en la región; y en tercer lugar, impulsar el desarrollo de sus comunidades acorde a sus necesidades y cultura, es decir, desde su particular forma de ver el mundo. Lo anterior sin la intervención

* Luciano Concheiro es profesor-investigador en el Departamento de Producción Económica, UAM-Xochimilco. Patricia Couturier es jefa del área “Economía agraria, desarrollo rural y campesinado”, Departamento de Producción Económica, de la UAM-Xochimilco. Carmela Cariño es maestra en Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco. Armando Martínez es maestro en Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco.

de partidos políticos y acudiendo a sus formas tradicionales de organización política.

En febrero de ese mismo año, las autoridades del Municipio Autónomo de San Juan Copala decidieron, recién habían sido nombrados, solicitar la colaboración de la UAM-Xochimilco. Así, establecieron contacto con los profesores del Posgrado en Desarrollo Rural y, en una primera plática, preguntaron directamente si la Universidad era Autónoma de los partidos y el gobierno, porque requerían de la colaboración de esta institución a partir de una vinculación de “autonomía a autonomía”.

Esta pregunta, en apariencia tan simple, denota un cambio sustancial en las relaciones que tradicionalmente se han establecido entre los movimientos sociales y las universidades públicas. Las anteriores formas y contenidos dominantes de dicha relación obedecen a modelos asistencialistas y a la segmentación del conocimiento en disciplinas. En particular, el llamado “servicio social”—aún en su versión “extensionista”—obedece, en general, a la utilización por parte de las universidades de los espacios sociales para “experimentar”, “hacer”, “practicar” o “vincular” desde la ayuda, como un ente externo. Esta relación utilitarista y a la vez asistencialista de la universidad con la sociedad se ha visto además cuestionada por los propios actores y sujetos sociales, y ha perdido sentido para un Estado que, en su afán privatizador, ha puesto en cuestión la función de las universidades públicas.

El tema de la soberanía y la toma de decisiones en el ámbito de un cierto territorio, en particular en el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC), no son los mismos en otros territorios existentes, aquí surge de un territorio étnico, habitado por triquis, a quienes el gobierno estatal, encabezado por Ulises Ruiz Ortiz, ofreció reconocer su municipio,¹ siempre y cuando dejaran la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).² Ante tal “oferta”, los pueblos triquis respondieron que “nadie les podía escoger sus amistades”, y decidieron que no era tan importante el reconocimiento gubernamental como construir, en los hechos, un proceso de reapropiación de su vida colectiva; el reconocimiento sí era importante, pero no en el sentido jurídico-formal, sino en su existencia como pueblo.

¹ Cabe señalar que dicho ofrecimiento significaba el reconocimiento estatal como Municipio, lo que no implicaba el reconocimiento de su autonomía.

² Organización en la que los triquis tuvieron una amplia participación, puede decirse que protagonista, desde su formación en 2006.

Es importante no olvidar que la formación del Municipio Autónomo se dio en el contexto del movimiento de la APPO e incluso en el momento en que más se golpeaba a dicho movimiento. Así, el espacio que los triquis lograron negociar frente a esta presión general sin romper con sus alianzas –como ellos las definen–, fue fundamental porque construyeron consenso en ámbitos de violencia extrema. De tal manera que el desmontar la violencia hacia el interior de las comunidades aparece central y no como una tarea sólo de buena voluntad, sino de construcción de un sentido de administración, de referentes autogestivos, radicalmente distinta desde el ámbito de la autonomía municipal.

LA UAM-XOCHIMILCO Y EL MASJC CAMINANDO JUNTOS

En este sentido, pensamos que es importante hacer énfasis en la forma en que inició la relación entre el MASJC y la UAM-Xochimilco. Fueron ellos los primeros en acercarse a nuestra Universidad sin haber asistido nosotros previamente a San Juan Copala; de la misma manera, fueron también ellos quienes propusieron las formas y los aspectos en los cuales requerían dicha colaboración. Así nació la idea de establecer un convenio, desde un punto de vista interdisciplinario (acorde al modelo de la UAM-Xochimilco), que intentó responder a sus planteamientos dentro del marco normativo y de las posibilidades de nuestra casa de estudios. Así, el día de la firma del convenio,³ las autoridades autónomas triquis llegaron a la UAM-Xochimilco acompañados de niños, jóvenes y mujeres, que en tres autobuses viajaron desde sus comunidades, trayendo consigo su fiesta de carnaval a la Universidad, para celebrar la colaboración que se iniciaba entre ellos y nosotros. Las autoridades universitarias miraron con asombro la felicidad de los asistentes, quienes rompieron con la solemnidad característica de dichos eventos.

Con la fiesta, la música y la poesía, finalmente nos compartieron toda su cultura: se realizó un intercambio simbólico muy importante. Demostraron en su proceder que conferían a la Universidad no solamente el papel de los especialistas, sino de compañeros de trabajo, en toda la extensión de la palabra, y ratificaron su disposición de iniciar un camino, donde juntos

³ El 22 de febrero de 2007 se celebró el convenio con la UAM-Xochimilco ante la presencia del rector de la Unidad Académica, Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas, y el presidente del MASJC, José Ramírez Flores.

UAM y MASJC, aprendiéramos y compartiéramos nuestros puntos de vista. También incluía, por parte de los triquis, la idea de que una universidad nacional puede servir de intermediaria para acceder a ciertos programas gubernamentales, particularmente los que tienen que ver con la educación y la salud comunitaria, sin comprometer la autonomía municipal.

Luego de la firma del convenio, iniciamos el trabajo sobre las ideas y las prioridades que ellos presentaron. Primero, en un gran evento, nos hicieron toda una exposición de lo que ellos entendían por autonomía, que iba mucho más allá del ejercicio de las labores propias de un municipio reconocidas en el artículo 115 constitucional. Plantearon que su autonomía “quería entrarle” al tema de la educación y las palabras del propio presidente autónomo lo expresaron de la siguiente forma en aquella ocasión:

Hemos visto que cuando se asiste a la escuela se aprende el español y se olvida el triqui, se aprende historia, ciencias naturales, y matemáticas pero con textos y temas alejados de nuestra cultura, así cuando nuestros jóvenes estudian, se olvidan del campo, de nuestro idioma y muchas veces se olvidan de su propio pueblo. Queremos que además del español y los conocimientos que se aprenden en la escuela, los jóvenes se sientan orgullosos de ser triquis y no se olviden de nuestras tradiciones.

En otros términos, nos plantearon que, en el ámbito educativo, era necesario reapropiarse de su cultura y generar un sistema de educación triqui propio, construyendo sus libros de texto, recuperando su historia, y planteando la educación alrededor de los propios saberes y de los temas centrales que, desde su punto de vista, podía permitir el inicio de un proceso de reconstrucción del “tejido social”.

Nos parece relevante la manera como plantearon el tema de sus reivindicaciones en relación con su vida cotidiana y con los asuntos que en ella inciden directamente, en el campo de la educación pero también en el de la salud, por poner dos ejemplos. Para el primero se estableció llevar a cabo un Diplomado en la cabecera del MASJC, dirigido a los profesores bilingües y a la población triqui en general, donde se realizara, en un primer momento, un diagnóstico de la situación de la educación en las comunidades triquis que impulsaron la autonomía, para que, en un segundo momento, se impulsara un sistema educativo acorde a los principios que dieron origen al Municipio Autónomo.

El convenio también planteó enviar médicos pasantes, superando los engorrosos trámites que entorpecen la voluntad de la universidad, para que realicen su servicio social en la región, desde una perspectiva de medicina comunitaria, que permita conjuntar las labores de la medicina triqui y la medicina occidental. Así, la respuesta en materia de salud tendría una visión mucho más amplia, permitiendo incluir los conocimientos de medicina que por años han transmitido curanderos y curanderas, presentes en la atención de los pacientes triquis.

Otra de las demandas de colaboración fue en materia de medios de comunicación; el MASJC, desde su creación, se planteó construir una radio comunitaria propia para reivindicar su derecho como pueblo a la comunicación y fortalecer la difusión de su cultura transmitiendo programas en su propio idioma y ofreciendo sus servicios a las comunidades, permitiéndoles mantener un enlace permanente por este medio, que muchas veces no es posible por la lejanía entre las mismas y la situación geográfica propia de la región. Por lo anterior, se propuso colaborar con talleres de producción radiofónica y capacitación en el uso de tecnologías propias de la radiotransmisión mediante la licenciatura en Comunicación Social de nuestra Universidad.

Otro aspecto más tuvo que ver directamente con la producción y distribución de sus productos artesanales, tales como huipiles, morrales, pulseras y otros artículos tejidos por las sabias manos de las mujeres triquis. Es importante señalar que los triquis son una comunidad localizada, en términos territoriales, en el triángulo formado por las tres ciudades mixtecas de Oaxaca: Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla; sin embargo, la búsqueda de trabajo remunerado económicamente y la situación política de la propia región, han impulsado en algunas ocasiones, y en otras obligada, la migración triqui a distintos puntos del la República Mexicana y de Estados Unidos, posicionando al pueblo triqui, como uno de los que tienen presencia en prácticamente todo el país.⁴ En este sentido, la colaboración de la Universidad se

⁴ Se pueden encontrar grupos, comunidades y organizaciones de triquis en por lo menos 16 estados de la República Mexicana. Los tres principales destinos a escala nacional son: San Quintín en Baja California, Distrito Federal y la capital oaxaqueña. También se dirigen a los estados de Jalisco, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Puebla, Chihuahua, Tamaulipas y Estado de México. Asimismo, migran con o sin papeles a Estados Unidos, principalmente a los estados de Arizona, California, Connecticut, Florida, Georgia, Indiana, Michigan, Nueva York, Ohio, Oregon y Washington (París, 2006:76). En testimonios recabados por Carmela Cariño y Armando Martínez, durante su estancia de investigación en el MASJC (2008-2009), se habla de migración también a Canadá y Alaska, para trabajar a bordo de buques pesqueros que permanecen en altamar por meses.

planteó en el diseño de cooperativas de productoras artesanales que permita una mejor distribución de sus productos en México y el extranjero.

Aunque el tema de la producción agrícola también fue considerado en el convenio, los propios triquis plantearon que sería parte de una segunda etapa pues, aunque las características propias de la región permiten el cultivo de café, mangos, plátano y otros productos que pueden generar un ingreso importante a la población, los terrenos de cultivo y huertos han sido abandonados en los últimos años por la propia situación de inestabilidad política en Copala. Sin embargo, plantearon que es importante trabajar conjuntamente con la UAM-Xochimilco en proyectos de producción agrícola que permitan mejorar las condiciones del pueblo triqui.

En términos generales, estos fueron los principales puntos de acuerdo en torno a la colaboración de la UAM-Xochimilco con el MASJC, donde las autoridades de este último plantearon sus necesidades y la Universidad ofreció su colaboración en la medida de sus posibilidades.

Los referentes simbólicos de los triquis autónomos

San Juan Copala ha prestado especial atención a reforzar el sentido territorial de su lucha, particularmente en términos de la memoria y los referentes simbólicos que le dan forma. La serie de fiestas relacionadas con la recuperación del “ombbligo” cósmico, expresado en su *Chuman’a*,⁵ las remisiones constantes a la fundación histórica del municipio, o el cuartel –donde en tiempos no tan remotos el ejército federal permaneció varias décadas, que hoy permanece abandonado y que la autonomía ha pensado en recuperar para crear la escuela preparatoria autónoma–, sólo representan una importante reflexión alrededor de la recuperación de los espacios, de lo que significa no solamente San Juan Copala como centro, como confluencia, sino respetar la existencia de las comunidades que juntas integran una territorialidad distinta.

⁵ El *Chuman’a* es la figura que agrupa a las comunidades triquis de la región y representa culturalmente el centro religioso y político, donde tradicionalmente han residido los representantes de las comunidades expresados en sus autoridades políticas (cabildo) y sus autoridades religiosas (mayordomos). En este sentido, San Juan Copala representa el *Chuman’a* de las comunidades que integran la Región Triqui Baja, y San Andrés Chicahuaxtla lo es para aquellas de la Región Triqui Alta, aunque culturalmente el significado es más fuerte para San Juan Copala.

En relación con otros espacios presentes en el territorio, se encuentra el que anteriormente ocupaba la Policía Judicial; el MASJC considera debe transformarse en un lugar comunitario que acoja la radio u otros servicios autónomos.

Por todo ello, consideramos que estamos asistiendo a la reconstrucción de una espacialidad de corte simbólico, fundamental para la vida comunitaria, de una comunidad dislocada y rota en sus referentes al ser desmembrada en otros municipios:⁶ aquí vemos cómo se da una reconstrucción alrededor de elementos que hablan de una disputa espacial concreta.

Reflexionando nuestra intervención como universidad

Respecto de la relación entre la UAM-Xochimilco y el MASJC, la reflexión no sólo se dirige a la manera de involucrarnos en una “educación para la liberación”, o para la transformación social –planteamientos que quizá puedan contener los documentos originales de la UAM-Xochimilco y que, particularmente, el Posgrado en Desarrollo Rural trata de desplegar en este mismo sentido–, sino también para discutir si las investigaciones “militantes” pueden tener una construcción científica, objetiva, etcétera.

De tal forma que la reflexión nos lleva a plantearnos si podemos involucrarnos en los procesos por medio de las llamadas metodologías participativas, o de la intervención, o bien si podemos pensar en una relación que nos lleve a avanzar en términos de un conocimiento, claro está, siempre relativo, y de la construcción de un sentido de transformación, conjunta-mente con las comunidades.

De acuerdo con lo planteado, ¿qué significa este tipo de intervención, y cuál debe ser el papel de los universitarios? Es decir, no sólo como acompañamiento, sino en la construcción de algo que termina siendo una relación distinta, donde la decisión de las comunidades finalmente está sujeta a su propia estructura de toma de decisiones, compleja por cierto, pero donde

⁶ En 1826, acabado el movimiento independentista, San Juan Copala adquiere la categoría de Cabecera Municipal; sin embargo, en 1948 dicha Cabecera es degradada a Agencia Municipal (categoría inferior) dependiente del Municipio mestizo del Juxtlahuaca y otras comunidades pasan a depender de otros Ayuntamientos también mestizos, haciendo un rompecabezas del territorio triqui como parte de la estrategia del Estado para desarticular la organización triqui tradicional.

también nosotros, quienes acompañamos, estamos sujetos a ciertas estructuras. Así, tenemos que probar una relación distinta no sólo para el estudio sino para la acción; no se trata sólo de que ellos lo decidan o lo prioricen, sino de una relación que ha rendido algunos frutos; esperamos nos exijan, como universidad, ponernos a nosotros mismos en cuestión, para atrevernos a criticar nuestra acción y nuestro trabajo.

Como consecuencia del modelo económico neoliberal prevaleciente en los últimos años, se han dado cambios fundamentales en diversas áreas de la vida de nuestro país. Esencialmente, el Estado ha dejado de cumplir el papel de promotor del desarrollo económico y social que había desempeñado. La universidad pública no escapa a tal fenómeno. Los objetivos para los que fue creada han cambiado, ahora es común el argumento que plantea a “la universidad como empresa”, y que ha penetrado el ambiente académico. No obstante, hay contratendencias muy importantes que enfrentan el modelo dominante, planteando modelos alternativos de universidad. Por ello consideramos la experiencia de la UAM-Xochimilco, para evaluar en qué medida ha evolucionado, de manera congruente con su papel social.

Es importante mencionar que la vinculación universidad-grupos sociales plantea una situación que debe estar sobre la base de un compromiso institucional permanente y no depender de la voluntad política de las autoridades en turno; en áreas tanto de docencia como de investigación que, por su propia definición, las mantiene vinculadas con diversos grupos sociales y con el compromiso de algunos profesores y estudiantes. De acuerdo con ello, consideramos que la voluntad política académica ha permeado las relaciones con diversos grupos sociales, en especial –para el caso que nos ocupa– con campesinos e indígenas, pero debido a las tendencias dominantes dicha relación no ha logrado extenderse al conjunto de la universidad dándole un nuevo sentido a su carácter público. De tal manera que es necesario regresar a la historia, especialmente al proyecto que le dio origen a nuestra Universidad, no sólo para darle fuerza a un proyecto alternativo, sino para recuperar la centralidad de la vinculación universidad-sociedad. En este esfuerzo es determinante estudiar la forma en que tal vínculo se ha dado, para hacer un diagnóstico orientado hacia una propuesta.

Para tal propósito, es trascendente reconocer en nuestro trabajo cotidiano como investigadores los principios con los que se creó la UAM, como la necesaria vinculación del quehacer universitario con problemáticas de la realidad social, y reflexionar de una manera crítica acerca de los resultados a 35 años de su puesta en marcha.

Lo anterior, ante un contexto de crisis de la educación que no sólo obedece a la determinación neoliberal de la privatización, descapitalización y transnacionalización de la universidad pública, sino a una crisis más profunda y de más largo alcance, que se expresa en la crisis de paradigmas del conjunto de las ciencias que –en términos de las ciencias sociales– alcanza la definición misma de la universidad, las bases de su legitimidad y sus estructuras y relaciones.

Entre los problemas a identificar destacan las viejas y nuevas versiones del ordenamiento propio de una producción de conocimiento disciplinar, la confrontación entre el llamado conocimiento científico y los también llamados conocimientos tradicionales, hoy cuestionados no sólo en cuanto a la recuperación de una visión de la totalidad y de la necesidad de un pensamiento complejo, sino en relación con la raíz del principio de racionalidad, fundamento de la modernidad existente. En este sentido, se requiere de una revisión que tiene que ver con la posibilidad de integrar no sólo los conceptos de multiculturalismo y de pluriculturalismo como una forma de educación, donde puedan converger la democracia, la ciudadanía y la educación, sino también de ir más allá: atreverse a pensar una universidad pública para el siglo XXI (Santos, 2006).

“Como movimiento de reforma programática, la educación multicultural liberal se orienta a garantizar la equidad en las escuelas”. En este contexto, los segmentos más liberales del movimiento consideran esencial que sus objetivos desarrollen un concepto de tolerancia multicultural. No obstante, como analiza Frazer (1997:174), la lucha por la equidad y el reconocimiento debe acoplarse con la lucha por la redistribución y la igualdad, no sólo por la equidad (Torres, 2001:220). Y también enseñar la tolerancia multicultural.

Multiculturalismo es uno de los conceptos que atañen a la sociedad entera y que comprenden nuevas formas de entendimiento social, se habla entonces de una cultura de respeto, tolerancia y reforzamiento de la multiplicidad de visiones. No se trata del proceso de integración-exclusión, donde las visiones que no buscaron su transformación profunda de acuerdo con el sistema neoliberal fueron excluidas. Se trata más bien de la conformación de un orden social que no sólo respete las diferencias sino que las ensalce. Este proceso implica a la universidad de una manera importante, ya que en su interior se reproducen las relaciones sociales, y al exterior se busca una relación directa con los problemas sociales; así, el involucramiento de la universidad debe ampliarse de tal manera que consolide y re-

fuere el ambiente de respeto y reconocimiento de la sociedad y sus múltiples visiones.

Educar para liberar es un precepto de Freire que debe ser rescatado, y que nos ayuda a entender la educación democrática, la cual no debe separarse de quienes serán educados (ciudadanos). Ello nos debe llevar de la mano hacia una seria discusión sobre la forma en que la universidad y el conocimiento científico se han manejado respecto de su relación con otras formas de creación del conocimiento:

- Una concepción de comunidad y de participación, así como del saber popular, como formas de constitución y a la vez como producto de un episteme de relación.
- La idea de liberación a partir de la praxis, que supone la movilización de la conciencia, y un sentido crítico que lleva a la desnaturalización de las formas canónicas de aprehender-construir-ser en el mundo.
- La redefinición del rol de investigador social, el reconocimiento del *otro* como *sí mismo* y, por lo tanto, la del sujeto-objeto de la investigación como actor social y constructor de conocimiento.
- El carácter histórico, indeterminado, indefinido, no acabado y relativo del conocimiento. La multiplicidad de voces, de mundos de vida, la pluralidad epistémica.
- La perspectiva de la dependencia y luego la de la resistencia. La tensión ente minorías y mayorías y los modos alternativos de hacer-conocer.
- La revisión de métodos, los aportes y las transformaciones provocados por ellos. Las contribuciones principales a este episteme latinoamericano las ubica Montero en la teología de la liberación y la filosofía de la liberación, así como en la obra de Paulo Freire, Orlando Fals Borda y Alejandro Moreno (Lander, 2000:9).

Así, la crisis de valores actual es de tal envergadura que nos lleva a una crítica profunda de la relación entre la universidad y la sociedad, el positivismo y el capitalismo ponen en cuestión todo, incluso Alberto Melucci (2001) plantea que estamos en la sociedad de la información, y que estamos en un quiebre histórico donde se cuestiona también la propia generación del conocimiento.

El conocimiento ha tenido desde sus inicios diversas formas de interpretarse y transmitirse, es decir, la sabiduría como transformación del ser humano, o también como control de masas. En este sentido, la cultura

occidental ha puesto énfasis en las relaciones económicas de la sociedad, y el conocimiento se da en función de la eficacia y la eficiencia; así, la lógica que acompaña al sistema educativo es la de generar seres capaces de responder a las demandas del sistema capitalista rindiéndose a las reglas del libre mercado. De tal manera que todos aquellos individuos que partieran de supuestos distintos a los del sistema eran excluidos, alienados de la vida política, social y económica. Ante este panorama surge la necesidad de cuestionar el papel actual del conocimiento: ¿reproductor de un sistema económico o generador de una conciencia social distinta? Es en este último sentido donde se pretende ubicar la creación de nuevas alternativas que busquen integrar a las diferentes visiones de la sociedad, y que por medio del respeto y la tolerancia, y acudiendo a los saberes de las comunidades se logre rescatar el carácter liberador de la educación, resistiendo a la cultura de masas, como lo planteara Paolo Freire.

Considerando retomar algunos de estos saberes, continuamos con la reflexión sobre los triquis, a partir del trabajo realizado en el diplomado *Educación para la Autonomía*, celebrado en el *Chuman'a* de Copala en el que participamos.

“EL DIPLOMADO” EDUCACIÓN PARA LA AUTONOMÍA

Aunque las escuelas en la zona de San Juan Copala son de tipo bilingüe, y atendidas en su mayoría por profesores y profesoras triquis, los programas de estudio, los materiales didácticos, los libros de texto gratuito y demás recursos en el aula son idénticos a los que se utilizan en una primaria nacional, hecho que en el discurso parecería equitativo; sin embargo, los contenidos educativos planteados por la Secretaría de Educación Pública son totalmente ajenos a la vida cotidiana de los pueblos indígenas, por lo que la niñez triqui se encuentra en franca desventaja al recibir una educación descontextualizada y que atenta en contra de su propia cultura. El bilingüismo de los docentes triquis de educación básica tiene como fin último, utilizar el conocimiento del propio idioma para garantizar el aprendizaje del castellano; así, el triqui como idioma se convierte en herramienta castellanizante y no en eje central de la enseñanza de la lecto-escritura.

Por lo anterior, las autoridades autónomas de Copala plantearon la necesidad de una educación acorde con su cultura y contexto, que permitiera al triqui fortalecer su identidad y lengua desde su cosmovisión, pidiendo

concretamente el acompañamiento de la UAM-Xochimilco, en la conformación de planes de estudio y en miras de construir un Bachillerato Autónomo que permitiera a los egresados de la secundaria continuar con sus estudios, sin que ello significara dejar de pensar y aprender como triquis, porque “los jóvenes de nuestra comunidad que van a estudiar fuera, regresan a mirarnos desde arriba, despreciando nuestra cultura, no queremos más eso”, plantearon las autoridades triquis durante la firma de convenio con la UAM-Xochimilco.

Estudiantes e investigadores del Posgrado en Desarrollo Rural

La respuesta por parte de la UAM-Xochimilco, a través del Posgrado en Desarrollo Rural, fue iniciar el proceso de construcción de un proyecto de educación autónoma con un diplomado que sirviera de preludeo a otras acciones más elaboradas como la construcción del propio Bachillerato. El proyecto del *Diplomado para la Autonomía* fue diseñado por varios investigadores del Posgrado en Desarrollo Rural y otros departamentos, como José Manuel Juárez, Carlos Rodríguez Wallenius, Yolanda Massieu Trigo, Dolores Paris Pombo, Gisela Espinosa Damián, María Tarrío García y Luciano Concheiro, entre otros; así como los estudiantes de la Maestría en Desarrollo Rural: Carmela Cariño Trujillo y Armando Martínez Rosales. La coordinación estuvo a cargo de Sonia Comboni Salinas, quien ha estado involucrada en otros proyectos de educación en el ámbito indígena.

La participación de profesores y estudiantes de la maestría en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco consistió en la coordinación de los grupos de trabajo durante las sesiones del diplomado, así como en el acercamiento de los estudiantes de la Maestría en Desarrollo Rural, quienes mediante sus proyectos de investigación permanecieron durante varios meses en la comunidad, conviviendo y compartiendo la vida cotidiana con los habitantes de las comunidades triquis que conforman el municipio autónomo. Esta cercanía permitió también reconocer e identificar elementos importantes en torno a la educación comunitaria, fundamental en la construcción hacia una educación para la autonomía.

Nuestra participación como organizadores y coordinadores de grupos en todas y cada una de las sesiones, nos permitió ser observadores participantes de la realidad cotidiana y educativa en la región, gracias a las experiencias planteadas por los profesores y profesoras de educación básica que asistie-

ron. Compartir la experiencia de trabajar al lado de las y los triquis durante las sesiones del diplomado “Educación para la Autonomía”, así como convivir en otros espacios de su vida cotidiana, permitió un acercamiento con su realidad, que muchas veces no es comprendida por quien no ha vivido junto a ellos y ellas en sus fiestas, sus angustias, su muerte y sus sueños.

El diplomado “Educación para la Autonomía” se organizó en cuatro módulos con el objetivo de aportar conocimientos que permitieran a los profesores y ciudadanos triquis comprender el sentido y la relación que guarda la escuela con las labores cotidianas de las familias triquis para responder a las necesidades de aprendizaje y de desarrollo que plantearon las propias comunidades del MASJC, dando respuesta a su configuración étnica y a los sentidos políticos y culturales que estructuran al pueblo triqui.

El diplomado se llevó a cabo de acuerdo con la organización pedagógica del sistema modular puesto en práctica en la UAM-Xochimilco, por medio de seminarios/talleres de discusión y construcción colectiva de conocimientos que inició en septiembre de 2008 y concluyó en abril de 2009. El trabajo colectivo entre profesores y alumnos permitió la construcción de conocimientos y la recuperación de elementos fundamentales que sustentan la vida comunitaria de los y las triquis de San Juan Copala, sobre las diversas problemáticas que viven como pueblo, con base en la experiencia, los conocimientos y saberes que los participantes recuperaron a lo largo del diplomado.

La convocatoria para el diplomado fue abierta, aunque finalmente los y las asistentes fueron en su mayoría docentes originarios de distintas comunidades triquis que se encuentran laborando en comunidades dispersas de la región baja triqui: Yosoyuxi, Agua Fría, Carrizal, Tierra Blanca, Guadalupe Tilapa, Santa Cruz Tilapa, San Juan Copala; así como docentes de la triqui alta de San Andrés Chicahuaxtla. Entre los asistentes también se dieron cita profesores y profesoras adscritos a la región triqui de otros grupos indígenas como: mixtecos, mixes y nahuas que, a pesar de ser numéricamente minoritarios respecto de los y las triquis, su participación permitió intercambiar miradas y experiencias vivientes convirtiendo el diplomado en un verdadero diálogo intercultural.

La experiencia de construcción colectiva del conocimiento representó una novedad para los y las asistentes, acostumbrados a recibir de manera vertical los conocimientos, donde el que sólo los acumula es el ponente o profesor del curso y los participantes únicamente reciben pasivamente la información “verdadera”, ello en un principio resultó una dificultad; sin

embargo, al explicar la metodología y técnicas del sistema modular, y conforme se avanzó en cada una de las sesiones de los cuatro módulos, se abrió realmente un diálogo intercultural de saberes donde todos los que participamos aportamos y aprendimos de todos y todas.

El módulo I, “Educación y autonomía”, se planteó como introducción al tema desde la reflexión de su propia experiencia como docentes frente al grupo en la región triqui. En este primer módulo los y las profesoras triquis discutieron sobre el sentido de la educación en la región y en general hacia los pueblos indígenas, así como su visión de la relación *educación-autonomía* y la importancia de construir un proyecto educativo para el Municipio Autónomo de San Juan Copala.

El módulo II abordó el tema “Educación, lengua y cultura”, en el cual la reflexión giró en torno a la importancia de la interculturalidad en la educación para la construcción, desde los propios sujetos, de un proyecto educativo para y desde el pueblo triqui, acorde con las necesidades de la comunidad y que respondiera a la realidad y entorno de los triquis.

En el módulo III, los “Conocimientos y saberes locales” desempeñaron el papel central, de tal forma que los y las profesoras recuperaron las historias, leyendas, mitos, tradiciones, recetas, medicinas tradicionales, contadas por los abuelos y abuelas. Esto fue fundamental en la resignificación de la importancia que desempeñan estos conocimientos muchas de las veces son desdeñados o no considerados como tales por la educación occidental u oficial, y que juegan un papel fundamental en la propia cultura. Los y las asistentes al diplomado reflexionaron en torno a estos saberes que ellos mismos habían olvidado; si bien la recuperación tuvo un límite y no se recuperó del todo la gran cantidad de saberes acumulados por este pueblo, la parte más importante fue el reconocimiento de que éstos han sido olvidados o discriminados tanto por la “educación formal” como por ellos mismos desde su papel como profesores.

En el módulo IV, “Autonomía y organización política”, el ejercicio de reflexión se dio en torno a los diversos sentidos del concepto de autonomía, las implicaciones políticas, sociales y culturales en su construcción, las diversas formas de la organización de los municipios autónomos. En este módulo también se trabajó sobre la reconstrucción de la memoria histórica del pueblo triqui, a través de los y las maestras, quienes establecieron un diálogo con los abuelos y abuelas y demás personas de la comunidad, para reconstruir su memoria, así como los significados culturales de las formas políticas propias de organización y el Municipio Autónomo de San Juan Copala.

A lo largo del diplomado nos enfrentamos a distintas dificultades, sobre todo en la coincidencia de los calendarios académicos de los participantes de la UAM-Xochimilco, con el calendario escolar y político de los profesores y profesoras inscritos, además del compromiso académico de algunos y algunas que los fines de semana aprovechan para concluir sus estudios en la Universidad Pedagógica Nacional en la sede de Tlaxiaco y Huajuapán de León. Sin embargo, al final logramos abarcar los objetivos del diplomado y concluir las sesiones en tiempo y forma, adquiriendo compromisos puntuales con los y las asistentes, así como con las autoridades autónomas, hecho que se pudo comprobar con el ejercicio de evaluación llevado a cabo al final de las sesiones, donde se pidió que en unas líneas, explicaran qué había significado personalmente asistir a éste; entre las reflexiones de los y las asistentes nos encontramos con muchas sorpresas en torno a las expectativas que en un inicio habían planteado en torno al diplomado y lo que al final del mismo habían elaborado:

Al inscribirme muchas cosas pasaban en mi mente, claro que a mí me interesaba mucho conocer el término de autonomía en todos sus sentidos y así comprender lo que estaba sucediendo en mi comunidad; y así poder hacer comprender a las demás personas a qué se referían nuestras autoridades cuando hablaban de ser autónomos. Gracias al diplomado y a los compañeros maestros en sus participaciones he aprendido cosas nuevas que al principio me inquietaban. Creo que este diplomado sirvió para compartir nuestras ideas y así aprender de los demás. También para poder plantearle a mi autoridad y preguntarles ¿cuál es el objetivo de nuestra autonomía?, ¿hasta dónde queremos llegar? y ¿cuáles serían los pasos a seguir?⁷

En este sentido, los resultados del diplomado fueron satisfactorios en la medida que los propios asistentes así lo consideraron; al final, la mayoría estaba sorprendida por la cantidad de conocimientos y saberes con que cuenta el pueblo triqui y la posibilidad de utilizarlos en la propia enseñanza de niños y niñas, permitiendo vincular el trabajo en las aulas con las tradiciones, trabajos y demás situaciones cotidianas de las familias.

⁷ Evaluación final de un asistente al Diplomado para la Autonomía.

Los compromisos y los retos

Dentro de las tareas y compromisos al finalizar el diplomado se plantearon las siguientes: elaboración de un *alfabeto triqui* que permitiera escribir el triqui en San Juan Copala, pues a pesar de que existen experiencias en San Andrés Chicahuaxtla, en la región triqui alta, las diferencias lingüísticas no permiten utilizar el mismo alfabeto. Para ello se pretende realizar un congreso local sobre la lengua triqui en San Juan Copala, donde participen abuelos y abuelas, hombres y mujeres, jóvenes y niños; es decir, la comunidad y las autoridades para llegar a una convención en torno a cómo escribir su lengua, paso decisivo para la continuación del proyecto educativo; continuar con la agenda de gestión rumbo a la apertura de un bachillerato autónomo, así como la elaboración de los programas y planes de estudio, respetando e incorporando las necesidades concretas para la autonomía y los saberes locales triquis; y continuar los talleres puntuales para la formación de los posibles profesores del bachillerato.

Por todo lo anterior, hablamos de un caso particular donde las formas de vida se expresan como praxis política, donde una nueva cultura y sentido de cambio se construyen desde abajo en relación de continuidad con la cultura indígena y particularmente su sentido comunitario y horizontal para la toma de decisiones (Miras, 2009).

La conciencia adoptada como práctica política –la recuperación del sentido y ser de los triquis desde la base de la autonomía– establece notablemente una abierta disputa con la cultura creada por la clase dominante y despliega elementos de una “alternativa global comunitaria democrática”, con fuertes elementos solidarios, de valores compartidos, de cumplimiento de los acuerdos comunes (Miras, 2009:3) y de un sistema de reciprocidades que le da fundamento a la comunidad en el ejercicio del poder sobre bases distintas.

Así, la territorialización del movimiento del pueblo triqui al luchar por su municipio, con carácter de autónomo y en explícita referencia a la memoria histórica colectiva que hace del centro ceremonial –el *Chuman’a*– un centro político, un lugar en el tiempo, constituido sobre la base de identidades profundas, modifica sustancialmente la caracterización de los movimientos sociales. No se trata entonces de movimientos de “simple” resistencia, sino de procesos en abierta confrontación con la lógica de la llamada globalización y que, en ese sentido, podemos definir como movimientos antisistémicos, de carácter alternativo al modelo dominante y, en particular, al sistema político hegemónico.

Cuando las acciones se refieren a aspectos como la cultura, el control del territorio de cada casa, barrio y el conjunto del municipio, así como a la alimentación, la salud, la conservación de los bosques y otros aspectos de la cotidianidad, se genera una conciencia que refiere a las familias, por extensión a los barrios y poblados, como base de un cambio de actitudes, en lo que Víctor Manuel Toledo (2009:7) define como “micropolítica doméstica”, con un alcance sobre la visión comunitaria de y por la vida.

Por ello, desde nuestro punto de vista, asistimos a un proceso que se fundamenta en la “reinención de los territorios” (Porto-Goncalves, 2009). Y viceversa, el orden nuevo existe ya *in nuce*, en fermento, en esa nueva cultura, que sólo por existir, disputa con la otra, creada por la clase dominante, sus formas de vida y sus valores. La cultura, son esas culturas de vida (Galiza Libre, 2009:3); para Gramsci o Pasolini –Thompson– es la nueva cultura forjada por los individuos de abajo, en continuidad con las culturas anteriores, no las culturas manipuladas por los medios de comunicación y la industria de bienes de consumo, la que crea el *sujeto nuevo*. Es la idea de la Reforma moral, de Gramsci. Sin nueva forma de vida verdaderamente autónoma, sin valores de vida encarnados en usos, en costumbres –cultura material en sentido antropológico–, no existe condición alguna de exigir, de imponer un orden nuevo, y un poder cívico político nuevo, moralmente fundamentadas en las ideas de igualdad, libertad, democracia, las que elaboran desde sus axiologías de valor, vividas e intelectualmente defendidas, y dan sentido a las ideas de alternativa global comunitaria, democrática. Esas ideas de alternativa, desarraigadas de las bases culturales que las elaboran y dan sentido, son imaginaciones de individuo inmaduro.

Así, la autonomía refiere un sentido del “nosotros” entre los triquis, donde no se individualiza y se hace culpable a “uno”, sino que se asume, en términos éticos, un nosotros en la búsqueda de los cambios. Se trata de una responsabilidad compartida (heterónoma) que carga con los muertos en la espalda de los vivos como parte de los futuros posibles (Rabinovich, 2009).

La recuperación de la historia, como memoria colectiva, compromete a la comunidad que en el camino se identifica a sí misma y se vincula con sus muertos, los recupera de los cementerios del olvido, cementerios de los vencedores, para dirigirse a las generaciones por venir, presentes en los giros de utopía que van definiendo.

El ejercicio de la recuperación histórica, que rompe con la invisibilización de los triquis, se ubica también en la llamada “gran historia nacional”, en un ejercicio no sólo de la historia de la subalternidad, sino en la conquis-

ta de lo “nacional-popular” frente a lo “nacional-estatal”. Es, entonces, un ejercicio simultáneo de visibilización tanto de los triquis como de una historia nacional desde lo popular (crítica a Scott, 2000), y en ello un especial ejercicio de descolonización en cada oleada revolucionaria, ya sea la Guerra de Independencia, la lucha por conservar la tierra durante la Reforma, y el “arreglo” municipalista, la Revolución mexicana y el reparto agrario, así como el cardenismo del general Lázaro Cárdenas como presidente del país y después como presidente de la Comisión del Balsas, que trabajó, más que otro programa de gobierno, en la región entre 1960 y finales de la década de 1970.

Tender puentes hacia otra autonomía, la universitaria, permite a los triquis re-construirse en un diálogo intercultural, en un natural diálogo de saberes; en una revaloración de lo propio en el sentido simbólico de universidad, como portadora de un conjunto, no cerrado y menos finito de otro conjunto de saberes.

Cuando se retoma la cultura y su temporalidad ligadas al cambio, esta transformación adquiere un sentido radicalmente distinto, al no representar una homogeneización modernizante.

En la cultura se verifica un eje de alternativa revolucionaria, en especial cuando los espacios de producción simbólica se utilizan para darle a los triquis un sentido de identidad. Pero cuando se habla de revolución puede pensarse que nos referimos a los “grandes hechos”, y no es así; nos traslada también a la recurrente cotidianidad, que a su vez remite a elementos de resistencia en la disputa por el poder, en el ámbito, en este caso, municipal.

En relación con los bienes comunes en tanto cosmovisión crítica emancipatoria, dan al movimiento por la autonomía una perspectiva estratégica (Brand, 2008). No se trata de un proceso defensivo o de resistencia sino que contiene, en tanto se plantea la autonomía, un planteamiento de sustracción de los recursos, básicamente la tierra, y en su conjunto los bienes culturales comunes, de la lógica del capital (Miras, 2009).

Frente a un proceso cada vez más claro de privatización del conocimiento, por ejemplo, el de las universidades públicas –por medio de las patentes (Rodríguez, 2008)– que usaron para las investigaciones presupuesto público y que en el extremo ha llevado a universidades o equipos de universitarios a apropiarse (piratearse) conocimiento comunitario, apareciendo como intermediarios de las transnacionales, situación que implica una pérdida del sentido de servicio a la sociedad en general, y en particular de los sectores

más vulnerables como plantean los documentos de fundación de la universidad misma.

Así, entender que es diferente la forma de interpretar la realidad y acercarse al conocimiento, nos lleva a entender que en realidad es un error hablar de “objetos” de conocimiento. Los científicos sociales, analistas o teóricos son los objetos de la acción social como ésta lo es de nuestras investigaciones. “Somos construidos por la acción social cuando menos tanto como contribuimos a la construcción de dicha acción” (Melucci, 2001:85).

El resultado de esta actitud autorreflexiva hacia el conocimiento es que ya no es posible analizar los fenómenos sociales en general, y los movimientos sociales o la acción colectiva en particular, como fenómenos independientes del observador y de la posición del observador en el campo. “Esta opción conlleva consecuencias metodológicas [...] pero acarrea asimismo implicaciones éticas y políticas que tal vez sean más importantes para la discusión de los movimientos sociales” (Melucci, 2001).

Es decir, en lugar de contemplar a los científicos sociales y analistas en los márgenes del campo y considerar el conocimiento como un proceso lineal, hemos de cobrar cada vez mayor grado de conciencia del hecho de que contribuyen a crear el campo, que lo que reciben de los actores es cuando menos tan importante como lo que ellos mismos introducen en su campo de acción. El así llamado “conocimiento científico” es la capacidad de hacer este proceso visible y consciente.

Esto diferencia el conocimiento científico del conocimiento de sentido común, en tanto permite explicar nuestra ubicación a partir de nuestra capacidad para explicar la relación que mantenemos con el sujeto. En caso de no lograr esta conciencia y capacidad, “entonces el conocimiento se convertirá en una fuente de conflictos debatidos ciega e inconscientemente desde todos los sectores implicados” (Melucci, 2001).

Esto significa que el discurso de los investigadores se introduce en la arena social, donde alguien se apropia de él y donde entra en circulación en redes pequeñas o grandes dependiendo de su influencia, tanto si les gusta como si no. Así, el conocimiento científico forma parte de estos campos y por ello “participa del poder y de la responsabilidad asociados a la nominación del mundo, que es la tarea de la adquisición de poder y de los conflictos en este tipo de sociedad” (Melucci, 2001).

En este sentido, sabemos que no podemos sustraernos a la trampa de las consecuencias no intencionadas de nuestras acciones y de la formulación permanente de una visión de futuro que orienta nuestra acción. Del modo

en que imaginemos un futuro diferente dependerá que la sociedad reduzca las consecuencias no intencionadas de la acción humana para construir una acción social (Melucci, 2001).

PARA TERMINAR

Consideramos que la UAM-Xochimilco, en especial el área “Economía agraria, desarrollo rural y campesinado”, y el posgrado en Desarrollo Rural, realmente intentan, y muchas veces lo logran, un trabajo social que desde abajo realiza actos revolucionarios, no en el sentido violento, sino en la acepción de cambios.

En el fondo de los trabajos, de las asesorías, de las investigaciones, buscamos –como dijera Melucci– construir acciones sociales para reducir las consecuencias de un modelo económico y social que provoca la exclusión y la pobreza.

Planteamos que desde nuestras autonomías se puede crear la capacidad de autogobernarse y autodefinirse.

Las reglas que rigen las instituciones, en el sentido de Piaget, pueden ser modificables al ser producto y productores de acuerdos de los diferentes actores que intervienen en los procesos de autodeterminación.

Las nuevas formas de gobernar bajo un Estado con modelos neoliberales capitalistas han propiciado que las comunidades indígenas se integren bajo sus propias normas y se autogobiernen, y es ahí donde necesitan apoyo, asesoría y aparece la gran oportunidad para las universidades públicas de hacer su labor social.

BIBLIOGRAFÍA

- Aquín, Nora (2003), “El trabajo social comunitario en las actuales condiciones: fortalecer la ciudadanía”, en N. Aquín (comp.), *Ensayos sobre la ciudadanía. Reflexiones desde el trabajo social*, Espacio, Buenos Aires, pp. 113-126.
- Brand, Ulrich (2008), “La convergencia de movimientos. Los bienes comunes en tanto que cosmovisión crítica emancipatoria y en tanto que perspectiva estratégica”, en S. Helfrich (comp.), *Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía*, Frente y Vuelta, México, pp. 302-310.

- Castro Gómez, Santiago (2007), “Descolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes”, en S. Castro Gómez y Ramón Grosfoguel, *El giro neocolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Siglo del Hombre Editores/Universidad Central/IESCO-UC/Pontificia Universidad Javeriana/Pensar, Bogotá, pp. 79-92.
- De la Peña, Guillermo (1994), “Etnicidad, ciudadanía y cambio agrario: apuntes comparativos sobre tres países latinoamericanos”, en *XVI Coloquio. Las disputas por el México rural*, El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán México.
- Díaz-Polanco, Héctor (2009), *Para entender la diversidad cultural y la autonomía en México*, Nostra, Guangdong, China.
- Fals Borda, Orlando (2006), “Las ciencia y el pueblo: nuevas reflexiones”, en M.C. Salazar (coord.), *La investigación-acción participativa. Inicios y desarrollos*, Editorial Popular/ Laboratorio Educativo, México, pp. 59-76.
- Fernández Liria, Carlos; Fernández Liria, Pedro; y Alegre Zahonero, Luis (2007), *Educación para la ciudadanía. Democracia, capitalismo y Estado de derecho*, José Martí, La Habana.
- Flórez, Juliana (2007), “Lectura no eurocéntrica de los movimientos sociales latinoamericanos. Las claves analíticas del proyecto modernidad/colonialidad”, en S. Castro Gómez y Ramón Grosfoguel, *El giro neocolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Siglo del Hombre editores/Universidad Central/IESCO-UC/Pontificia Universidad Javeriana/Pensar, Bogotá, pp. 243-266.
- Galiza Libre (2009), “Las formas de vida como praxis política. A propósito del campesinado y del industrialismo desarrollista. Entrevista a Joaquín Miras”, *Sinpermiso*, 10 de mayo, Barcelona.
- García, Rolando (2006), *Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*, Gedisa, Barcelona.
- González Casanova, Pablo (2004) *Las nuevas ciencias y las humanidades. De la academia a la política*, Anthropos/IIS, UNAM, Madrid.
- Mansilla, Claudia (2007), “Capacidad endógena, innovación y universidad. La experiencia del Programa Desarrollo Local y Ciudadanía Social”, en R. Zárate y L. Artés, *Ciudadanía, territorio y desarrollo. Resistencias y mediaciones de las políticas locales en las encrucijadas del neoliberalismo*, Biblos, Buenos Aires, pp. 227-262.
- Melucci, Alberto (2001), *Vivencia y convivencia. Teoría social para una era de la información*, Trotta, Madrid.
- Miras, Joaquín y Tafalla, Joan (2004), “Condiciones de posibilidad para el comunismo en el nuevo siglo”, en L. Sève, J. Texier y C. Samary, *Socialización, democracia, autogestión. Un debate marxista en los tiempos de la izquierda plural*, El Viejo Topo, Madrid, España, pp. 7-46.

- Montero, Maritza (2005), *Teoría y práctica de la psicología comunitaria. La tensión entre comunidad y sociedad*, Paidós, Buenos Aires.
- Paris Pombo, Dolores (2006), *La historia de Martha*, UAM-Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, México.
- Porto Gonçalves, Carlos Walter (2005), “Educación, medio ambiente y globalización”, *Ilé. Anuario de Ecología, Cultura y Sociedad*, año 5, núm. 5, Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre/Cries/COSUDE, Buenos Aires, pp. 173-185.
- Rodríguez, Silvia (2008), “La monopolización del conocimiento universitario ‘un asalto a los valores de la academia’”, en S. Helfrich (comp.), *Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía*, Frente y Vuelta, México, pp. 161-179.
- Santos, Milton (1988), “Espacio y método”, *GEOCrítica*, núm. 65, septiembre, Universidad de Barcelona, Barcelona, pp. 5-52.
- Scott, James C. (2000), *Los dominados y el arte de la resistencia*, ERA, México.

Partidos políticos, grupos de poder y organizaciones campesinas en el municipio de Las Margaritas, Chiapas

Roberto Diego Quintana*
Carlos Rodríguez Wallenius**

La política de desconcentración y descentralización de las funciones y atribuciones gubernamentales hacia los gobiernos municipales en México, ha transferido a estos espacios locales funciones y financiamiento inéditos en el México posrevolucionario. Estos procesos han puesto en el escenario municipal la toma de decisión sobre el acceso a bienes y servicios públicos por parte de los distintos poblamientos, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y élites locales.

Conforme los municipios tienen mayores recursos y responsabilidades, hacen más obras de infraestructura social y manejan más presupuesto. Este cambio en las arenas de negociación, de las instituciones federales y estatales hacia los gobiernos locales, ha generado una reactivación de la política local en el país.

En efecto, en un lapso de apenas 25 años, los gobiernos municipales pasaron de meter a los borrachos a la cárcel, mantener el orden en su circunscripción y mendigar apoyos de diverso tipo a los gobernadores de los estados y las instituciones federales, a tener asignado un importante presu-

* Profesor-investigador en el Departamento de Producción Económica y en el Posgrado en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco [rdq@correo.xoc.uam.mx].

** Profesor-investigador en el Departamento de Producción Económica y coordinador del Posgrado en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco [carlosrow@gmail.com].

puesto propio, y planear y controlar la construcción de infraestructura y equipamiento urbano (camino, escuelas, viviendas, redes de agua entubada, drenaje y energía eléctrica, centros médicos y áreas de esparcimiento, entre otros), servicios públicos (asesoría técnica agropecuaria, educación, salud) y hasta el financiamiento de proyectos productivos y culturales.

En esencia, el acceso que tengan los distintos actores sociales a los bienes, servicios y recursos controlados por los gobiernos municipales, dependerá de qué camarilla política u organización social tenga en sus manos estos gobiernos. En la estrategia por influir en las decisiones y acciones locales, cada uno de estos actores tratará de tejer alianzas, de establecer redes de solidaridad con otros actores locales, regionales, estatales y nacionales, con el fin de lograr montarse sobre la silla del gobierno municipal.

La pugna entre los diferentes actores en el escenario municipal por hacer valer sus intereses, sus proyectos, sus discursos, por lograr hacerse de este espacio de poder, se ha vuelto por demás evidente y relevante en el país. Mientras que muchos de los movimientos sociales tienden a ser reactivos y pendulares, la lucha por los gobiernos locales se ha vuelto una constante dentro y fuera de los procesos electorales (López, 2004).

La relevancia de tener el control político de estos espacios trasciende con mucho el interés de los actores locales. Es a partir de la labor política que se lleva al cabo en lo local que se van tejiendo lealtades y compromisos para los procesos electorales de los representantes legislativos en los ámbitos federal y estatal, de los gobernadores de los estados y del mismo presidente de la República. Así, a veces hasta en contra de los intereses de las fuerzas políticas y de la población municipal, para los partidos políticos y para las camarillas al interior de ellos, es sumamente importante que quienes detenten el poder en cada municipio sean fieles a su causa o, cuando menos, sus aliados.

La lucha por democratizar al México posrevolucionario tuvo su clímax en el año 2000, cuando figuras relevantes en el partido eternizado en el poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), finalmente admitieron haber perdido las elecciones para la presidencia de la república y entregaron el poder al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada. Esta lucha, sin embargo, ya había tenido logros similares en los gobiernos locales a lo largo y ancho del territorio mexicano. El reconocimiento del triunfo de partidos de oposición en los gobiernos municipales se había dado a cuenta gotas desde hacía tiempo; sin embargo, es a partir del cambio de milenio cuando estos reconocimientos se dan con más frecuencia.

La experiencia con gobiernos municipales de alternancia ha sido de lo más variada: ha habido administraciones locales tanto o más clientelares y/o corruptas que aquellas del PRI que las antecedieron; ha habido otras con muy buenas intenciones, pero con pocas capacidades para llevar a cabo un buen gobierno; también ha habido aquellas que han logrado instrumentar en los hechos una distinta forma de gobernar, de hacer política pública, abriendo espacios para la participación de los actores sociales interesados.

En trabajos anteriores hemos tratado las experiencias de los municipios de Cuquío en Jalisco y Cunduacán en Tabasco (Rodríguez y Diego, 2008a). Ambas exitosas como gobiernos locales alternativos.

El caso del Consejo Democrático Municipal (Codemuc) de Cuquío fue por una década (1993-2003) la experiencia más paradigmática de participación ciudadana en gobiernos locales,¹ que fue tanto potenciada como limitada por los procesos de descentralización en materia presupuestal y de planeación del desarrollo.

El Codemuc fue un espacio de planeación y toma de decisión con mecanismos participativos que tuvo importantes logros en relación con un desarrollo equilibrado en el escenario municipal, con base en una economía productiva, en la que las distintas comunidades asumieron de manera activa su papel en la promoción de procesos de cambio para mejorar la calidad de vida local, en materia de redistribución de recursos e ingreso, priorización de actividades, y organización y capacitación y aprendizajes ciudadanos (Almeida, 2002:110-113).

Por otra parte, el gobierno local de Cunduacán logró incorporar en la administración a un equipo de políticos y activistas sociales que abrieron espacios democráticos y participativos a la población, permitiéndoles incidir en programas, obras y acciones gubernamentales. Fue mediante estos procesos incluyentes, abiertos a todos aquellos que quisieron participar, que el gobierno municipal tejió alianzas con grupos de mujeres en las comunidades e impulsó políticas públicas, apoyándose para ello en la participación de organizaciones de la sociedad civil (OSC).

No obstante haber logrado gobernar de una manera más participativa, incluyente y transparente, y de haber ampliado el acceso a los bienes y servicios controlados por el municipio, ambas experiencias no lograron re-

¹ Esta experiencia fue reconocida en el 2001 con el premio de Gobierno y Gestión Local que entrega el CIDE y la Fundación Ford.

frendar el triunfo en las siguientes elecciones municipales teniendo que entregar el poder a los candidatos de otro partido.

A partir de estas experiencias, pareciera ser que gobernar mejor que el gobierno anterior es insuficiente para garantizar el apoyo de quienes van a las casillas a emitir su voto. La moraleja de estos casos pareciera apuntar a que los gobiernos locales de la alternancia, a la par que tienen que ir construyendo otra forma de hacer gobierno conjuntamente con la gente, no debieran descuidar aquellos aspectos de la política electoral que al final de su gobierno les garanticen que el apoyo de los habitantes del municipio se vea reflejado en las urnas.

En un país donde la cultura política electoral se ha fincado en el clientelismo, las lealtades, los favores, la compra del voto y el fraude electoral, difícilmente quienes intentan hacer buen gobierno pueden abstraerse de la existencia de estas prácticas y, peor aún, no llevar a cabo alguna de ellas con el fin de nivelar el tablero con sus opositores políticos, que sin duda recurrirán a este tipo de argucias con el fin de inclinar la balanza electoral a su favor.

Las efímeras experiencias como las arriba citadas, así como sus posibles causas, motivaron el interés por estudiar un gobierno local que hubiera logrado refrendar su triunfo en las elecciones municipales con el fin de averiguar las razones de semejante comportamiento atípico en el escenario político mexicano. Este caso lo encontramos en el municipio de Las Margaritas, en Chiapas, ya que es uno de los pocos donde el gobierno de alternancia, en este caso del PRD, había logrado refrendar su triunfo en las urnas en tres ocasiones consecutivas desde el 2001.

EXPERIENCIAS MUNICIPALES Y LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA

Centrarnos en la perspectiva de las organizaciones campesinas indígenas de Las Margaritas en su disputa por el poder municipal y la promoción del desarrollo local, nos ha llevado a cuestionar algunos de los enfoques predominantes en el estudio de los procesos municipales, en específico, el de la Nueva Gestión Pública (NGP), de gran influencia en las investigaciones sobre instituciones gubernamentales en México (Arellano, Cabrero y del Castillo, 2003; Montaña y Alvarado, 2004).

Este enfoque, que privilegia el estudio de las instituciones y su marco regulatorio y jurídico, tomó relevancia por las políticas de desconcentra-

ción y descentralización de funciones y atribuciones gubernamentales hacia los gobiernos municipales, impulsadas en nuestro país desde la década de 1980. Ello se expresó en las reformas constitucionales de 1983 y 1999 al artículo 115 constitucional, que regula al municipio o la creación de la Ley de Planeación, Ley de Desarrollo Social, o la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, las cuales tienen vinculada la creación de instituciones municipales como los Comités de Planeación del Desarrollo Municipal (Coplademun), los Consejos Municipales de Desarrollo Social o los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable. Todos estos cambios, y las mayores atribuciones y recursos destinados a los municipios, hicieron que este espacio político tuviera una creciente importancia pública.

Muchas de las experiencias de gobiernos locales que se generaron a partir de la descentralización han sido estudiadas desde el enfoque de la Nueva Gestión Pública, que considera que cada ámbito de gobierno debe preocuparse por hacer mejor las cosas, es decir, su quehacer debe centrarse en la eficiencia y eficacia, así como mejorar los procedimientos y resultados de las acciones públicas, ya que éstas crean una base de legitimidad que permite un sano ejercicio de gobierno (Cabrero, 1995).

La NGP tiene como referente teórico el nuevo institucionalismo –entre los principales exponentes de esta corriente están Guy Peters, Douglass North, James March y Johan Olsen–, en el cual la principal función de las instituciones (como los gobiernos municipales) es dar certeza a las interacciones humanas. Para ello se valen de incentivos políticos, sociales y/o económicos. En este sentido, el avance de las instituciones está en relación con su desempeño frente al cambio, el cual depende de los costos de transacción (North, 2002:7). Si las instituciones son ineficientes, tienen menos desarrollo y cooperación, y sus costos de transacción resultan elevados. Por el contrario, donde existen instituciones eficientes hay más certidumbre y se reducen los costos de transacción y, en consecuencia, se da un mayor grado de desarrollo y cooperación. North (2002:76) lo plantea de la siguiente manera: “la incapacidad de las sociedades para establecer el cumplimiento de los contratos eficazmente y a bajo costo es la fuente más importante de la estagnación histórica y del subdesarrollo contemporáneo que priva al Tercer Mundo”, es decir, para ser desarrollados y modernos hay que tener instituciones eficientes y eficaces.

La perspectiva del nuevo institucionalismo, así como de la NGP, han tenido fuertes críticas, pues plantean cierta autonomía de las instituciones y de las leyes frente a la acción de los actores. Al contrario de esta perspecti-

va, el espacio municipal resulta ser un ámbito privilegiado para ubicar los impactos que tienen los actores en la construcción de las relaciones de poder y su expresión institucional.

Las luchas municipalistas por democratizar los gobiernos locales se han enfrentado a regímenes políticos que hacían uso de prácticas autoritarias y antidemocráticas que eran producto y a la vez alimentaban al PRI, que fungía como una institución que monopolizaba el acceso al poder público mediante prácticas corporativas y clientelares, y que servía de canal de transmisión de las estrategias gubernamentales. Las alternancias políticas en los gobiernos municipales en las décadas de 1970 y 1980, fueron un tanto esporádicas; sin embargo, poco a poco se fueron generalizando, llegando a convertirse en una verdadera “insurrección municipal”, retomando el término de López (1979).

Para Morales y Díaz (1997:180) este auge en la disputa por el poder municipal vino a representar una vía centrípeta para la transformación del régimen político nacional, en la medida que fue minando el control que tenía el partido hegemónico sobre la estructura política y gubernamental desde los espacios municipales. Fueron estas luchas las que colocaron a la democracia local como un elemento fundamental para un cambio el régimen político del México contemporáneo.

De esta manera, nosotros pensamos que la conformación de instituciones y su funcionamiento y transformación, así como la constitución de leyes y su aplicación dependen de la correlación de fuerzas en el campo de poder que tienen los distintos actores. Esto concuerda con las críticas a las teorías pluralistas del sistema político (Melucci, 1999:177) que separan la acción política institucionalizada (los partidos políticos), de los comportamientos colectivos no institucionalizados, como los que se desarrollan en los movimientos y organizaciones sociales.

Por ello, contrario al neo institucionalismo que deduce que la democratización o el desarrollo local han sido determinados por las instituciones, consideramos que son las prácticas y acciones de los actores sociales las que incentivan los cambios en el régimen político local, y con ello las políticas gubernamentales, mediante diferentes estrategias de lucha y tipos de acción, que ponen en marcha redes sociales a partir de identidades y solidaridades (Diani, 1998), las cuales hacen que el sistema político sea “moldeado por la interacción del Estado y la sociedad” (Favela, 2006:22).

ESPACIOS, ARENAS Y GOBIERNOS LOCALES

Al estudiar los vínculos entre actores sociales e instituciones gubernamentales, suelen emerger diversos conflictos que se expresan en las relaciones de poder entre los actores político-institucionales y los actores sociales. En estos espacios de confrontación, los distintos actores sociales negocian sus intereses con los otros actores, en lo que Long ha dado en llamar relaciones de interfase; él mismo menciona que la interfaz puede ser una categoría que ayude a analizar las teorías de cambio a escala macro y micro (Long, 2007:137-138). Esta interfase delimita un campo de conflictos entre los actores que controlan el aparato gubernamental y tratan de mantener sus redes de poder y dominación y los grupos opositores que impulsan constantemente acciones de cambio. En este sentido, los municipios son un espacio político donde “se presenta una condensación de los poderes políticos regionales y locales” (García, 1999:46).

En esta perspectiva, los gobiernos locales son espacios donde diversos actores sociales se confrontan buscando imponer sus discursos y sus intereses. Son de hecho arenas, en la idea de Long (2007), es decir, espacios sociales en los que tienen lugar contiendas sobre asuntos, recursos, valores y representaciones.

La confrontación entre actores sociales y poder gubernamental va conformando una arena de disputa sobre una multitud de situaciones de resistencia social de parte de actores sociales frente a actores que ejercen su dominio por medio de instituciones, leyes y políticas públicas; éstos incluyen la toma de decisiones y ejecución de acciones que afectan a la sociedad (Leyva, 1993). Los actores que intervienen en la arena son múltiples y diversos, incluyendo individuos y asociaciones de diversos tipos: caciques, líderes locales y regionales, familias, grupos informales, organizaciones sociales, instituciones gubernamentales, partidos políticos, instituciones religiosas, empresas privadas, narcotraficantes, ejército, por mencionar algunos. Cada uno de estos actores tiende a desplegar una diversidad de discursos y estrategias con el fin de impulsar sus intereses implícitos y explícitos, sus acciones, sus proyectos, su visión del mundo, buscando en ello cooptar, convencer, tejer alianzas con otros actores del escenario. El ámbito de esta lucha se suele dar en aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, pudiendo todos ellos confluir en lo que Schutz (1974) denominara “mundos de vida”.²

² Mundos de vida es el término utilizado por Schutz (1974) para referirse al mundo vivido y asumido como dado por los actores sociales. Éste implica acción práctica moldeada

En un escenario y en un tiempo dado, cada actor manifiesta un mayor o menor poder en relación con los demás actores. Este poder está relacionado con los recursos, capacidades, conocimiento y relaciones que cada uno de ellos haya logrado hasta ese momento. La posición de cada uno de ellos es vislumbrada y reconocida por los demás actores, y es uno de los factores que determinan la preeminencia del mundo de vida y los intereses de un actor o una coalición de actores frente a los otros.

Esta lucha de los distintos actores por tratar de que su mundo de vida y sus intereses prevalezcan sobre los de los demás, implica en muchas ocasiones tener que ir tejiendo alianzas con otros actores, y este tejer inevitablemente conlleva negociar con esos otros actores aspectos de ese mundo de vida y de esos intereses con el fin de poder imponer sobre los demás cuando menos las cuestiones consideradas en ese momento como fundamentales.

Las alianzas se dan entre actores cuyo poder está todo el tiempo transitando entre y desde ellos. Al mismo tiempo, estas alianzas suelen entreverar discursos, estrategias, intereses y proyectos de estos actores, en constante reelaboración y resignificación y que, por lo tanto, implican una constante renegociación. La permanencia, característica y destino de estas alianzas estará determinada por las percepciones que de estos cambios tengan cada uno de los distintos actores, ya que al interior de la coalición cada uno de ellos mantendrá una lucha constante con sus aliados para tratar de mejorar los términos bajo los cuales se adscribió a la coalición. En este sentido, el actor que vaya logrando un mayor poder en el escenario, ira modificando su discurso y sus estrategias, tratando de lograr una mayor influencia en la alianza, y así disminuir la de los otros integrantes de la misma.

El cambio de las condiciones sociales en lo local y sus impactos en la políticas públicas son parte de un proceso complejo y dialéctico, pues si bien la acción social, en su articulación con movimientos y organizaciones en el territorio, trata de modificar las condiciones locales y regionales, los actores gubernamentales también tratan de adaptarse a esos cambios, creando nuevas condiciones de dominación (por ejemplo, cooptando a líderes, reprimiendo las luchas sociales, abriendo espacios de participación), con lo que se modifica el campo de poder, las arenas de disputa y las inter-

por un *background* de intencionalidades y valores y es por lo tanto definido por los propios actores (Schutz y Luckmann 1974); gracias a ello la vida diaria es experimentada como una especie de realidad ordenada, compartida con otros.

fases del conflicto. En este sentido, el gobierno municipal forma parte de un proceso de continuos cambios, confrontaciones, adecuaciones y alianzas que expresan una lucha social compleja y dinámica, coincidiendo con la propuesta de Alberoni (1981) de que los actores sociales y el sistema político constituyen “un campo social único en el que las dos partes están obligadas a cambiar, aunque ese cambio desemboque en una nueva reglamentación o en un conflicto mortal”.

LAS MARGARITAS Y LA CONSTITUCIÓN DE NUEVOS GRUPOS DE PODER

El municipio de Las Margaritas se encuentra localizado en el extremo sur de la Selva Lacandona y entre los límites del Altiplano Central,³ tiene una población de 87 034 habitantes (50.28% mujeres, 49.72% hombres) (INEGI, 2006), predominantemente joven, pues 66% de sus habitantes es menor de 30 años y la media se ubica en 17 años; además su población es mayoritariamente indígena: casi la mitad de sus pobladores (48.5%) es hablante de alguna lengua originaria de la familia mayense (tojolabal, principalmente). Este pueblo originario ha modificado en el tiempo muchas de sus costumbres tradicionales. Hoy en día, la gran mayoría de los tojolabales, si bien no ha perdido la lengua materna, se comunica en buen español, su vestimenta no es diferente de la de cualquier habitante de la región, y han adoptado como propias las formas de organización y gobernabilidad comunitaria ejidal, debido a la fuerte influencia que tuvo en esta región la reforma agraria. Por ello, para quienes visitan el municipio por primera vez es difícil percatarse que gran parte de los individuos con quienes se topan son indígenas tojolabales (Mattiace, 2001).

La población económicamente activa es de 26 380 habitantes, 77.07% se ocupa mayoritariamente en el sector primario y reside en poblaciones rurales. El 82.83% de la población vive en el campo, caracterizado por la dispersión de los asentamientos humanos: la densidad poblacional se ubica en 16 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que la media estatal es de 52 habitantes. Entre los habitantes ocupados en el sector rural 43.87%

³ Limita con los municipios de La Independencia, Maravilla Tenejapa, Comitán de Domínguez, La Trinitaria, Frontera Comalapa.

no recibe ingresos directos por sus actividades y apenas 0.23% recibe más de cinco salarios mínimos. El analfabetismo y los bajos ingresos económicos se traducen en deteriorados niveles de bienestar de la población.

El municipio de Las Margaritas⁴ plantea un caso interesante para estudiar la manera como algunos actores que habían sido excluidos y reprimidos del sistema político, pudieron transformar las relaciones de poder impuestas por grupos tradicionales y conformar un nuevo grupo hegemónico en lo local a partir del acceso al gobierno municipal.

En efecto, aglutinados en una organización de base tojolabal, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), en alianza con sectores medios de la cabecera municipal, y utilizando las siglas del PRD, estos actores lograron quitar de la presidencia municipal a los grupos políticos impuestos por las familias caciquiles asentadas en Comitán,⁵ dando pie a la primera alternancia partidista en varias décadas, misma que han podido refrendar en las urnas en dos ocasiones más. Esto les ha permitido mantener la continuidad de un proyecto de gobierno que, aun teniendo sus diferencias trienales, tiene como base un importante componente social y comunitario, por medio del cual se han impulsado prácticas como la planeación por zonas y la descentralización de decisiones y recursos para las comunidades.

Este proceso ha sido sumamente conflictivo, pues hay que añadir que Las Margaritas fue el epicentro de la insurrección y base de la resistencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que con los años ha ido generando una serie de instituciones (municipios rebeldes zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno) que mantienen un divorcio total con todo programa o acción gubernamental, incluyendo al gobierno municipal del Partido de la Revolución Democrática.

⁴ “Fue erigida en pueblo y Cabecera Municipal mediante decreto del 9 de diciembre de 1871, promulgado por José Pantaleón Domínguez, gobernador del estado. La formación del pueblo se hizo con los habitantes de la entonces rancharía Las Margaritas, del departamento de Comitán. Fue el propio jefe político del Departamento quien hizo la delineación y demarcación del fundo legal del nuevo asentamiento, concediendo a cada familia de indígenas tojolabales suficientes tierras para casa y sitio. El 24 de marzo de 1981, la cabecera municipal fue elevada al rango de ciudad por decreto promulgado por el gobernador Juan Sabines Gutiérrez” (Inafed, 2003).

⁵ Los grupos de poder aglutinados en familias mestizas como Domínguez, Castellanos, Albores, de la cuales surgieron gobernadores del estado como Absalón Castellanos Domínguez, Roberto Albores Guillén y Jorge de la Vega Domínguez.

LUCHA POR LA TIERRA Y ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA EN LAS MARGARITAS

Autores como Ruz (1992), Lenkersdorf (1996), Van der Haar (2005) y Estrada (2007) han estudiado el proceso de conformación de cacicazgos regionales desde finales del siglo XIX –que tenían como base de su forma de vida la concentración de tierras, y como centro de organización la ciudad de Comitán–, el cual incidió en la constitución de una élite local en Las Margaritas.

Hasta 1930, la mayor parte de la tierra de Las Margaritas estaba en manos de familias mestizas de Comitán, dueñas de fincas, principalmente dedicadas a la producción de maíz y ganado bovino de engorda. Las fincas se fueron haciendo de tierra de las comunidades al cobijo de las leyes liberales de desamortización y terrenos baldíos que adjudicaban la tierra a quienes la denunciaran como baldía, y las comunidades tenían pocas pruebas escritas y recursos para defender sus tierras. El tamaño promedio de estas fincas era de tres mil hectáreas y el hacendado más importante de la región tenía cerca de 20 mil hectáreas.

Los tojolabales vivían y trabajaban en estas fincas como baldíos⁶ o peones acasillados (Van der Haar, 2005:486-487), bajo un sistema de dominación de los finqueros sobre los peones con base en la concentración de la tierra. De esta forma, el finquero controlaba a los campesinos que dependían del trabajo agrícola para lograr su sustento y mantener sus formas de vida.

El reparto agrario de estas propiedades se inició en 1933 con el impulso de las políticas agraristas del régimen posrevolucionario. La mayoría de las expropiaciones tuvo lugar entre 1933 y 1952, en particular entre 1941 y 1945 se realizaron 47% de las afectaciones (35 expropiaciones) y entre 1946 y 1952 se expropiaron ocho haciendas con 22% del total (43% de las tierras de las fincas había regresado a manos de familias tojolabales). En resumen, de 1933 a 1970 se expropiaron 50 143.73 hectáreas para la creación de ejidos, afectando a 37 fincas. Además, se dispuso de 8 848 hectáreas de terrenos nacionales para el mismo fin. Respecto de las ampliaciones ejidales, entre 1940 y 1969 se dedicaron 14 974.03 hectáreas para tal fin, de las cuales casi

⁶ El término baldío, que se utilizaba a fines del siglo XIX, significaba que un campesino “estaba de balde”, o sea, que era un vago y que trabajaba como jornalero en las haciendas. Con este antecedente, baldío se utilizó para expresar la relación laboral rural, el baldiaje, y a los campesinos, los baldíos, sinónimo de peón acasillado (Ruz, 1992:23).

nueve mil fueron expropiadas a las fincas y casi seis mil tomadas de los terrenos de la nación (Estrada, 2007:74-76).

Las expropiaciones desarticularon el sistema de dominación finquero en el municipio, por lo que prácticamente ya no quedaron, hacia principios de la década de 1970, grandes propiedades que pudieran ser afectables. Así, en esa década 61% de las tierras de las fincas había regresado a manos de familias tojolabales; y para 1993 sólo 3% estaba en manos de los dueños ladinos originales.⁷ Este desplazamiento de las fincas por la reforma agraria y el ejido es particular de esta región y no tiene un caso similar en todo el estado de Chiapas (Van der Haar, 2005:486-488).

En Las Margaritas, el proceso de reparto agrario y los procesos políticos relacionados a éste, están vinculadas a la poca presencia de las instituciones del Estado hasta mediados de la década de 1970, entre ellas la CNC, que fungía como aparato de control campesino con los ejidos y comunidades agrarias, así como de las instituciones públicas cuyo reparto clientelar de bienes y servicios fue esencial para mantener al PRI en el poder por cerca de 70 años, bajo el sistema de partido hegemónico.⁸

Este vacío fue llenado, en una primera instancia, por catequistas de la Diócesis de San Cristóbal, y posteriormente por organizaciones campesinas autónomas que se fueron formando al margen del cobijo y/o control del Estado (Van der Haar, 2005:496). Es en este periodo que entre los tojolabales y sus líderes se va configurando la necesidad de organizarse con el fin de tratar de mejorar su situación, en una región caracterizada por un fuerte cacicazgo de varias de las familias mestizas de Comitán, lideradas de alguna manera por el General Absalón Castellanos Domínguez.

Es en 1978, cuando a instancias de varios de los líderes tojolabales, vinculados con las ideas de la Teología de la Liberación impulsadas por Samuel Ruiz, Obispo de San Cristóbal, así como de la influencia del Partido Comunista, que se constituye la expresión regional de CIOAC,⁹ constituida como

⁷ En 1993 sólo quedaban tres fincas (que conservaban una fracción de éstas) de las que había en 1933 (Van der Haar, 1998:105). En el 2000, según el RAN, en el municipio de Las Margaritas había 149 ejidos y 19 comunidades con una extensión de 256 294.91 hectáreas.

⁸ Algunas denominaciones que encontramos en la bibliografía son “régimen de partido de Estado”, “modelo autoritario clásico”, “Estado populista corporativo” o “social autoritario”, “sistema PRI-gobierno”. De ellas preferimos “régimen de partido hegemónico”, puesto que evidencia la centralidad que tenía el PRI en el sistema político.

⁹ La CIOAC era una organización con estrechos vínculos con el Partido Comunista Mexicano y sus orígenes son la Central Campesina Independientes CCI, que se constituye en la

una organización campesina en el municipio de Las Margaritas.¹⁰ En un principio, la bandera de lucha de la CIOAC en Las Margaritas fue la recuperación de tierras que seguían en manos de finqueros, ya que después del reparto agrario de la década de 1960, algunas propiedades volvieron a incrementarse mediante la compraventa o herencia de ranchos (Estrada, 2007:74-75). Así, la lucha de finales de la década de 1970 derivó en varias tomas de tierras de rancherías.

Las luchas campesinas en Las Margaritas y otros municipios del estado presionaron al gobierno estatal de Juan Sabines Gutiérrez y posteriormente al de Absalón Castellanos. Este último tuvo que crear el Programa de Rehabilitación Agraria para comprar predios privados con el fin de aminorar la presión social de los campesinos (Van der Haar, 1998:104), programa que vino acompañado de una tenaz política de represión por parte de aparatos gubernamentales ligados a los intereses de los finqueros de la región. La legitimidad de los líderes tojolabales, ya como dirigentes de la CIOAC, así como el trabajo desarrollado y su presencia en las comunidades, y la relación que se establece con el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), abren en 1982 la posibilidad de lanzar por primera vez un candidato indígena, Alejandro Aguilar, a la presidencia municipal por este partido. De acuerdo con los resultados oficiales, el candidato de los ladinos de la cabecera municipal del PRI obtuvo 7 503 votos (63.6%), y el candidato tojolabal del PSUM 4 290 (34.6%). Años después, en 1988, quienes renuncian al PRI para formar una alianza con la CIOAC, relatarían en detalle cómo se orquestó este fraude electoral.¹¹

En 1983, siendo gobernador del estado el general Absalón Castellanos, la persecución política se recrudece, lo que empuja a la CIOAC y a otras organizaciones (como la Organización Campesina Emiliano Zapata) a movilizarse en forma conjunta mediante la Coordinadora de Luchas de Chiapas. Entre 1983 y 1987 (Marcha por la Dignidad y la Libertad a la Ciudad de México, a finales de 1983), en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y el Dis-

década de 1960 como alternativa a la Central Nacional Campesina del PRI. La cooptación de sus líderes y la represión hacia sus bases hizo que en 1975 un grupo importante de la CCI se escindiera y formara la CIOAC, con el propósito de luchar por la tierra y organizar sindicatos de obreros agrícolas (Harvey, 2000, 112).

¹⁰ La CIOAC inició sus actividades en Chiapas desde 1976 en los municipios de Simojovel y Huitiupán (Harvey, 2000, 112).

¹¹ Entrevista con José Antonio Vázquez, líder de la CIOAC y ex presidente municipal de Las Margaritas.

trito Federal se realizan varias movilizaciones exigiendo la liberación de presos políticos, la dotación de tierras y apoyos productivos (Harvey, 2000:168-173).

La represión del gobierno estatal hacia el movimiento campesino llega al grado que algunos de los líderes tojolabales de la CIOAC tienen que salir de la región, aunque varios son encarcelados y Andulio Gálvez es asesinado en octubre de 1985.¹²

Debido a este clima de represión, el movimiento social aglutinado por la CIOAC decide no participar en las elecciones municipales de 1985, en las cuales el PRI gana con 11 307 votos, es decir, con 100% del padrón electoral.

El vacío que deja el liderazgo de la CIOAC en el exilio tiene que ser llenado por gente joven, que si bien retoma la lucha agraria, también abre nuevos campos de lucha por la apropiación del proceso productivo para los que ya tenían tierra. Este nuevo liderazgo empieza a presionar a las instituciones públicas para que sus agremiados sean sujetos de crédito y de seguro agrícola, entre otros apoyos gubernamentales. Todo este trabajo amplió la base de apoyo de esta organización.

En 1988, los dirigentes de la CIOAC en la región deciden volver a contender por la presidencia municipal bajo las siglas del Partido Mexicano Socialista (PMS).¹³ En la disputa por las candidaturas a la presidencia municipal, un grupo de mestizos (pequeños y medianos comerciantes y empresarios de la cabecera municipal, que disputaba la candidatura a la presidencia por el PRI), no es favorecido por las negociaciones y decide abandonar este partido. En la búsqueda por tejer alianzas se acercan a la CIOAC que ve en esta propuesta la posibilidad de impulsar nuevamente la candidatura de un tojolabal a la presidencia municipal, ahora con el apoyo de una parte de la población mestiza de la cabecera municipal. El acuerdo básico es alternarse en la candidatura a la presidencia municipal y a la diputación federal.

A pesar de esta alianza, el candidato tojolabal, Antonio Hernández Cruz, no es favorecido por el proceso electoral plagado de irregularidades. Las cifras oficiales dieron el triunfo al candidato del PRI por 5 501 votos (55.3%),

¹² De acuerdo con Polito y González (1997), en este periodo se registran 503 secuestros y un sinnúmero de casos de tortura.

¹³ El PMS se alía con la Corriente Democrática que se escinde del PRI y en 1988 candidata a Cuauhtémoc Cárdenas a la Presidencia de la República. En tanto se crea y se registra formalmente al Partido de la Revolución Democrática (PRD), por lo que muchos de los candidatos a gobiernos locales todavía se registran bajo las siglas del PMS.

contra 4 237 (42.6%) del PMS. Las presiones por limpiar el proceso electoral no logran su objetivo, integrándose entonces un gobierno paralelo, con Antonio Hernández a la cabeza.

Este periodo es fundamental para la conformación de una nueva arena de conflicto en el espacio municipal, pues las organizaciones campesinas como la CIOAC y otras, como la Unión de Ejidos de la Selva,¹⁴ las cuales tienen como base a decenas de ejidos y comunidades, van cambiando la interfaz de confrontación en torno a la lucha por tierra, que tenía como contrincantes primero a los finqueros y después a los rancheros, y pasan ahora al enfrentar al Estado demandando que éste agilice los reconocimientos oficiales de las tierras ejidales, y dote de infraestructura urbana y de servicios públicos a las comunidades del municipio. Varias de estas demandas tenían como referente al gobierno municipal, acaparado por una élite política priísta con estrecha vinculación con los cacicazgos regionales de Comitán, encabezados por los Castellanos, los Domínguez y los Guillén. De esta manera se conforma una arena en la que la CIOAC y otros grupos inconformes y excluidos del municipio, tratan de disputar el poder público municipal mediante las reglas electorales y con la alianza del naciente Partido de la Revolución Democrática, para que desde el ayuntamiento se pudiera incidir en las políticas gubernamentales.

Las elecciones en 1991 tienen una evolución similar a las de 1988, a pesar del impacto de programas federales de carácter electoral, como el Programa Nacional de Solidaridad (Harvey, 2000:195). En este proceso electoral la selección de los regidores por parte de la CIOAC-PRD se hace por voto directo de los miembros de sus comunidades, logrando de esta manera meter a varios de sus dirigentes como regidores al interior del gobierno municipal.

El levantamiento del EZLN el primero de enero de 1994 cambió las condiciones en la lucha electoral. Para la CIOAC, la presencia del grupo armado en la región no era desconocida. De hecho, el EZLN solía mandar emisarios buscando su incorporación a la lucha armada. El levantamiento dividió a la CIOAC entre quienes optaron por apoyar la lucha armada del EZLN, la CIOAC Independiente, y la CIOAC Nacional que, si bien asumía como propias la mayor parte de las demandas de los zapatistas, optó por una forma

¹⁴ Que forma parte de la Asociación Rural de Interés Colectivo, Unión de Uniones y Grupos Solidarios de Chiapas (ARIC-UU).

no violenta para buscar resolver las demandas de sus agremiados. Con el EZLN aparece un actor político más en el escenario regional, complejizando más aún la pugna electoral por el poder municipal.

Las elecciones municipales se llevan a cabo en 1995. Para la CIOAC, y sus aliados de la cabecera municipal aglutinados bajo el nombre de Auténticos Margaritenses, el escenario electoral se complica ya que 90% de las bases de la CIOAC se alzan en armas como bases de apoyo del EZLN. Si bien muchas de las comunidades mantenían sus dos filiaciones: a la CIOAC-N y al EZLN, y si en un principio se había logrado un acuerdo con este último para que sus bases votaran en el proceso electoral, al final el EZLN terminó por estigmatizar a la CIOAC-N por no apoyar abiertamente la lucha armada y sus bases de apoyo no participaron en las votaciones, perdiendo el líder tojolabal José Antonio Vázquez, el candidato de la coalición CIOAC-Auténticos Margaritenses (CIOAC-AM), por el escaso margen de 550 votos. Es interesante mencionar que por primera vez en las elecciones municipales de Las Margaritas aparecen declarados votos nulos, y que estos 933 votos fueron una cifra significativamente superior a la diferencia de votos entre ambos candidatos.

En 1998, la coalición CIOAC-AM vuelve a resultar perdedora en las elecciones municipales, ahora por una diferencia de 1 799 votos (11.9%), al obtener 6 220 votos (41%), contra el PRI que obtuvo 7 153 (47.1%). Aun así, la actitud del gobernador del estado con la CIOAC y con la coalición cambia, apoyando a la CIOAC en el reparto agrario mediante la compra de fincas llevado a cabo durante su gestión. De 17 mil hectáreas repartidas, a los miembros de la CIOAC les tocaron siete mil hectáreas (según información proporcionada por José Antonio Vázquez). Esta legitimación de la CIOAC frente a la población rural del municipio, vino a influir en la votaciones de 2001.

El año 2001 representa un hito para la Coalición ya que finalmente logran que su triunfo electoral sea reconocido, muy probablemente porque el gobierno estatal también había pasado por el mismo golpe de timón al ser elegido como gobernador del estado un candidato de un partido diferente al PRI. Sin duda, el hecho de tener ahora a Pablo Salazar Mendiguchía, un gobernador del PRD, inclinó la balanza para que el proceso electoral fuera menos sesgado hacia el PRI y finalmente tanto la CIOAC como los Auténticos Margaritenses lograran asumir la presidencia municipal de Las Margaritas. El resultado de las elecciones no deja de sorprender, ya que el PRI apenas obtuvo 6 780 votos (29%), mientras que el PRD logró 10 506 votos

(45%), el PT 4 733, el Partido Alianza Social 934 y, por último, el PAN, que obtuvo 232 votos.

La Coalición con un candidato por el PRD vuelve a ganar las elecciones municipales en 2004, al obtener 14 430 votos contra 13 217 de la dupla PRI-PVEM que, cual Ave Fénix, pareciera haber resurgido de sus cenizas, para paradójicamente ahora perder las elecciones por un escaso margen, similar a los que en el pasado le habían dado la victoria.

CAPRICHOS, ATRIBUTOS PERSONALES Y SENSIBILIDAD ÉTNICA EN LAS PREFERENCIAS ELECTORALES

El comportamiento errático de las votaciones de los últimos procesos electorales en Las Margaritas es por demás evidente. El PRI, el partido que mantuvo el control electoral del municipio desde su creación hasta el 2001, en las elecciones de ese mismo año obtuvo apenas 6 780 votos, mismos que representaron 29% del total de votos emitidos. En las elecciones de 2004, sin embargo, cuando el aparato administrativo municipal y estatal estaban ya en manos del PRD, este partido en alianza con el PVEM recupera milagrosamente sus bases de apoyo llegando a obtener 13 207 votos (44.1%), 1 213 menos que el candidato del PRD, quien resultó triunfador de la contienda con 14 430 votos (48.1%) (CIMAC). Este vaivén de las preferencias del electorado debe obedecer a algo más que a un simple capricho e invita a reflexionar sobre la influencia de otros factores, además de los partidos políticos, en el comportamiento de las preferencias del electorado.

En las elecciones locales, los votantes suelen tener una idea de la historia, atributos y defectos de los candidatos, muchos de ellos incluso suelen conocerlos personalmente. La imagen que se tenga de cada uno de ellos y las redes de solidaridad que se hayan tejido con éstos en el pasado, muchas veces son más importantes que el partido político por el cual se postulen.

En el caso de Las Margaritas, el candidato del 2001 fue Jorge Luis Escandón, uno de los líderes de los Auténticos Margaritenses, moderno empresario oriundo de la cabecera municipal. Este candidato, más allá de la filiación partidista, representa a la nueva élite social de la cabecera municipal, desapegada de su origen finquero y ganadero, un imaginario deseable para muchos de los mestizos de Comitán. Más aún, Jorge Luis es mestizo y no “indio”, en un municipio donde la población mestiza de la cabecera municipal siempre ha discriminado a los tojolabales por su pertenencia

racial y social. Este segundo atributo le otorgaba a este candidato aún más cualidades para recibir el apoyo de la población de la cabecera municipal. La CIOAC, por su parte, si bien había perdido bases en 1994 a favor del zapatismo, mantenía el control de una parte importante de la población rural del municipio fuera de las zonas controladas por el EZLN, e incluso en algunas de las comunidades dentro estas zonas. Esta situación permitió que Jorge Luís tuviera una amplia mayoría en las elecciones del 2001.

Para las elecciones del 2004, con base en el acuerdo sobre la alternancia en las candidaturas para la presidencia municipal y la diputación federal, le tocó a la CIOAC elegir al candidato a la primera, postulando a José Antonio Vázquez, uno de los líderes tojolabales más reconocidos de la CIOAC en la región, quien había sido elegido diputado federal en la contienda anterior. Aunque es una especulación, la caída en la votación por la coalición de la CIOAC y los Auténticos Margaritenses en la cabecera municipal, muy probablemente fue en gran parte debida al origen indígena de José Antonio que no representaba ni el imaginario colectivo, ni las aspiraciones de la población de Las Margaritas y sí una paradoja política por la que muy pocos mestizos, incluso desde la izquierda, estarían dispuestos a apostar.

Lo anterior, es de alguna manera evidenciado por el tipo de críticas que deslizaban los nuevos miembros de la administración municipal que sucedió a José Antonio en 2007, que por el pacto ya mencionado tocó a los Auténticos Margaritenses conformarla. Éstos vinculaban los que ellos calificaban como clientelismo, incapacidades y errores de la administración anterior al origen indígena y campesino del candidato y a su formación y lucha en la CIOAC. Más aún, el malestar de la nueva administración por las exigencias desmedidas de la CIOAC que, si bien asumieron de acuerdo con lo pactado, la candidatura de un Auténtico Margaritense a la presidencia municipal, no se contentaron con la diputación federal y querían que se les dieran varios de los puestos administrativos clave en el municipio, forzando esta situación al límite de la negociación y distanciándose con ello de su contraparte en la Coalición.

RECONFIGURACIÓN DEL PODER LOCAL Y NUEVO PROYECTO DE GOBIERNO

El arribo de la coalición CIOAC-AM-PRD al ayuntamiento de Las Margaritas, planteó nuevos retos y dificultades para los actores del municipio; la

población tradicionalmente excluida tenía expectativas de que el nuevo gobierno resolviera sus añejas demandas, pero los liderazgos de las organizaciones de la coalición velaban por imponer sus intereses políticos y sociales. A ello hay que añadir la resistencia y desdén que los municipios rebeldes zapatistas¹⁵ en la región practicaron ante la alternancia en el gobierno local (Rodríguez, 2005).

Todo ello ha generado tensiones en la arena municipal, entre los grupos que forman la coalición en el gobierno, los representantes ejidales y comunitarios pertenecientes a las CIOAC y otras organizaciones, los municipios zapatistas y la estructura priísta con base campesina de la CNC.

Así, a partir de 2002 los grupos en el poder municipal fueron negociando un proyecto de gobierno que ponía énfasis en el impulso de acciones en materia de desarrollo social (educación, vivienda, salud) y comunitario (infraestructura social y servicios públicos), en las que se retomaban las zonas de influencia de los ejidos y las organizaciones campesinas, que dieron como resultado prácticas como la planeación por microrregiones, la descentralización de decisiones y recursos para las comunidades y ejidos, así como un sistema de arreglos y negociaciones entre los nuevos grupos de poder local (CIOAC, AM, zapatistas).

Cada gobierno municipal mantuvo estos criterios generales de política gubernamental permitiendo, además, los reacomodos en la administración a partir de sistema de cuotas.

Cuadro 1
Presidentes municipales de Las Margaritas desde 2002

Presidente municipal	Periodo de gobierno	Organización
Jorge Luis Escandón Hernández	2002-2004	Auténticos Margaritenses
José Antonio Vázquez Hernández	2005-2007	CIOAC
Rafael Guillén Domínguez	2008-2010	Auténticos Margaritenses

Fuente: elaboración propia.

¹⁵ En Las Margaritas conviven los municipios zapatistas de San Pedro Michoacán, Miguel Hidalgo y Costilla y Tierra y Libertad.

La base de organización de la política gubernamental fue la descentralización y generación de espacios de participación en ocho microrregiones, conformadas por las áreas de influencia de comunidades y organizaciones, donde tienen representación las 347 localidades del municipio, que eligen a sus representantes en los consejos de los centros microrregionales, en los que se desconcentran procedimientos administrativos, recursos y servicios públicos, así como la decisión de las obras e infraestructura social (Rodríguez, 2004:426-428).

Cuadro 2
Centros microrregionales de Las Margaritas

Microrregión	Ubicación	Comunidades	Población
I. Centro	Cabecera municipal	8	30 000
II. Valle periferia	Cabecera municipal	96	27 000
III. Tojolabal	Justo Sierra	44	12 500
IV. Frontera	Nuevo Huistán	58	16 500
V. Selva I	Nuevo Momon	65	18 400
VI. Selva II	Carmen Villa Flores	53	15 000
VII. Plan de Ayala San Agustín	Plan de Ayala	39	11 000
VIII. Lucha Campesina	Lucha Campesina	36	10 000

Fuente: Rodríguez (2004:428).

A partir de esta estructura organizativa se fueron montando no sólo los programas, servicios y políticas públicas del ayuntamiento, sino que las organizaciones y el PRD armaron su estrategia electoral.

Programas como “Construyamos juntos tu casa”, con el que –mediante recursos federales, estatales y municipales– se atendió el problema crónico de la falta y precariedad de la vivienda rural, y en el que los consejos de los centros microrregionales fueron la instancia donde se discutía y se tomaban decisiones sobre este programa, mismos que alcanzó las 18 mil viviendas para unas 90 mil personas (Ixtacuy, 2004:59).

Sobre la base de las microrregiones, también se constituyó el Consejo Municipal de Participación Social en Educación (CMPSE), conformado por elección en asamblea de los centros microrregionales e integrado por docentes, directivos, padres y madres de familia, representantes sindicales y líderes sociales (Rodríguez, 2007).

El ayuntamiento otorgó al CMPSE, en coordinación con la Dirección de Educación Municipal, facultades de decisión sobre el destino de los recursos asignados a la educación por parte del municipio, ya que mediante un acuerdo de cabildo determinó que 10% del total del presupuesto proveniente del Ramo 33 fuera asignado a las obras necesarias para el mejoramiento de los servicios educativos.

El programa “Agua para todos, todos los días”: un programa de rehabilitación integral del sistema de agua potable de la cabecera municipal de Las Margaritas, enfrentó el añejo problema de abasto irregular y mala calidad del agua potable. Este programa fue una apuesta importante del municipio para enfrentar una necesidad socialmente relevante, que implicó negociar con los representantes de barrio en la microrregión centro y los presidentes de los Consejos de Participación y Colaboración Vecinal de los ocho barrios, con el fin de conjuntar todos los recursos del Ramo 33 que se tenían asignados para la cabecera (Ayuntamiento de Las Margaritas, 2006).

LA CODECH. UNA NUEVA ORGANIZACIÓN RURAL APARECE EN EL ESCENARIO POLÍTICO

La Coordinadora de Organizaciones Democráticas del Estado de Chiapas (CODECH) es creada el 17 de diciembre de 2005 por Jorge Luis Escandón, cuando fungía como presidente del PRD en el estado de Chiapas, bajo la gubernatura de Pablo Salazar Mendiguchía. Si bien esta organización fue concebida como el brazo campesino e indígena del PRD en el estado, realmente pareciera haber sido creada a medida de las necesidades de los Auténticos Margaritenses mestizos de Comitán, dirigidos por Jorge Luis Escandón, quienes no veían con mucho agrado el acuerdo de alternancia en las candidaturas con la CIOAC y crean sus propias bases rurales con el fin de liberarse de este pacto que los condiciona a tener que aceptar cada tres años a un candidato tojolabal que, a su juicio, poco representa sus intereses y simboliza una pérdida del control que históricamente han estado acostumbrados a ejercer, como parte de la población mestiza de la cabecera municipal. Lo cierto es que la CODECH ha funcionado y recibido un fuerte apoyo por el gobierno estatal, principalmente en Las Margaritas.

De acuerdo con documentos y opiniones de los dirigentes de la CODECH, esta organización nació de la unión de muchas organizaciones existentes en

Chiapas.¹⁶ Esta coordinadora ha crecido de manera exponencial al tener hoy “presencia en las ocho microrregiones, en los ocho barrios de la cabecera municipal y en las 135 comunidades, rancherías y ejidos del municipio de Las Margaritas. De acuerdo con sus propios datos, cuenta con 13 609 afiliados organizados en 312 grupos de trabajo, siendo representativa la participación de la mujer, pues 55% de los afiliados son mujeres” (CODECH, s/f).

Uno de los requisitos básicos para ser miembro de la CODECH y, por lo tanto, para recibir apoyos es ser miembro del PRD: “es importante recalcar que todos los afiliados sin excepción alguna pertenecemos al Partido de la Revolución Democrática” (CODECH, s/f).

En las elecciones recientes del 2007, en las que el PRD refrendó su triunfo en la contienda electoral, la CODECH se ufana de haber contribuido con 11 mil votos, “más del 50% de los votos obtenidos por nuestros candidatos” (CODECH, s/f), de un total de 21 mil votos obtenidos por el PRD en esta contienda y, más aún, haber participado directamente en la elección del candidato a la presidencia municipal. Estos datos, de ser ciertos, estarían desbancando a la CIOAC a un segundo puesto en la representatividad de la población rural, indígena y campesina, que participa electoralmente.

La CODECH presenta entre sus logros la gestión y la operación de parte de los programas formalmente asignados al gobierno municipal. Este amalgamamiento en algunas acciones como la construcción de infraestructura comunitaria o el Programa de “Piso Firme” es tan íntimo que es difícil diferenciar las acciones y el personal del municipio con las de la CODECH. Esta relación es, en cierta medida, similar a la que la CNC tiene con el PRI, y pareciera apuntar hacia el fortalecimiento de una estructura corporativa del PRD cuando menos en el municipio de Las Margaritas.

El mismo José Antonio Vásquez –en entrevista– no pareció tomar muy en cuenta el peligro que puede representar la CODECH para la CIOAC en la región; viendo como positiva su presencia para dar cabida a quienes están desertando del zapatismo y se niegan a regresar a la CIOAC. Para este líder, “hay acuerdos y hay pactos”, como si la palabra empeñada fuera lacrada. Habrá que ver, sin embargo, si los Auténticos Margaritenses tienen la inten-

¹⁶ Ente ellas, la CODECH cita a Lucha Campesina, SC de Mujeres un Nuevo Sol, SSS Dos Lagunas, SPR Esfuerzo Campesino y Ciudadano, SPR Momon, SPR Región Frontera, SPR Leyva Vázquez, SPR Carmen Villa Flores, SPR Nuevo Plan de Ayala, Unisol, SPR Tojolabal Campesina y grupos independientes.

ción de utilizar a la CODECH y a sus bases para renegociar estos tratos, buscando un mayor espacio de maniobra a favor de sus intereses y, de darse el caso, si la CODECH, de reciente creación, puede responder electoralmente a estos acomodamientos en la arena política, frente a una organización añeja como la CIOAC, que tiene toda una credibilidad ganada con hechos en sus ya 30 años de vida, pese a los cuestionamientos del EZLN, en parte digeridos con el paso del tiempo por la población rural que no pertenece a las bases zapatistas y por muchos de los que se escindieron de ella como la CIOAC Independiente, que en números crecientes han ido regresando a sus filas.

REFLEXIONES FINALES

En la lucha por mantener el poder, los distintos actores políticos en Las Margaritas han desplegado estrategias, tejido alianzas, reconfigurado el espacio político, redefinido sus estrategias de acuerdo con los cambios en los escenarios local, estatal y nacional. Tanto en las acciones como en los discursos, estos actores y sus agremiados tratan todo el tiempo de impulsar sus intereses, de imponer a los demás actores un mundo de vida distinto y que, sin embargo, por la necesidad pragmática de tejer alianzas tienen que negociar.

En el caso de la CIOAC, el discurso político se fundamenta en la justicia social, en la necesidad de mejorar la calidad de vida de la población rural, así como en redignificar el mundo de vida tojolabal. Sus acciones políticas, parecieran estar enmarcadas en una red clientelar tejida en 30 años de lucha, que condiciona en parte sus acciones de gobierno. Para los Auténticos Margaritenses, sin negar o confrontar los fundamentos sociales de la CIOAC, su discurso y sus prácticas políticas añaden aspectos simbólicos similares a los planteados en la NGP y perspectiva neoinstitucional, al hacer referencia, en distintos momentos de las entrevistas, a la necesidad de llevar a cabo las acciones de buen gobierno con eficiencia y eficacia, aunque queda claro que en la práctica muchas de sus acciones como gobierno local pecan tanto de clientelismo como las de la CIOAC, más aún con la creación y relación corporativa que el gobierno local recreó con la CODECH.

En este sentido, el discurso neoinstitucional se convierte fundamentalmente en una bandera de legitimidad, en una arena política definida por la intersubjetividad y las prácticas sociales de los distintos actores. Esto no quiere decir que tanto la CIOAC como los Auténticos Margaritenses no se

esfuercen por mejorar los procedimientos burocráticos administrativos y de toma de decisiones, cuando les toca estar sentados en la silla municipal.

No se puede negar que cualquier mejora en este sentido sea deseable, pero este tipo de movimientos tecnocráticos en el tablero de la política local no dejan de representar una mejor forma de administrar, mientras que los distintos actores políticos en Las Margaritas tienen puesta su atención en reconfigurar con cada jugada el escenario más a su favor y en detrimento de los otros actores. Y es en esta confrontación de discursos, acciones, estrategias que se irá definiendo el futuro político de este gobierno local.

La singularidad del municipio de Las Margaritas, como gobierno de alternancia que se ha mantenido en el poder durante tres procesos electorales, puede entenderse por la confluencia de un conjunto de situaciones: el trabajo organizativo desde 1978 y la lucha electoral desde 1982 de la CIO-AC, la escisión del PRI de un grupo empresarial de corte más moderno que la élite mestiza ganadera y finquera y su alianza con la CIOAC, el reconocimiento del triunfo de un candidato a la gubernatura del estado de Chiapas de oposición y del mismo partido que el utilizado para postular a los candidatos de oposición al gobierno municipal en Las Margaritas, el símbolo político que vino a representar en la nación el triunfo de un candidato de oposición en la elección presidencial del 2000.

Los actores políticos en la arena del municipio de Las Margaritas han llevado a cabo distintas prácticas sociales que les han generado bases sociales suficientes como para aspirar al gobierno local. Tal es el caso de la CIO-AC que —a partir del trabajo organizativo, en un principio sobre las tomas de tierra y posteriormente en la apropiación del proceso productivo— busca el acceso de sus agremiados a los bienes y servicios públicos relacionados con la producción agropecuaria. Estas bases le han permitido lograr un fuerte poder político electoral en el medio rural.

Por otra parte, las nuevas élites empresariales de la cabecera municipal que se escindieron del PRI, con el tiempo han logrado construir una importante base social entre la población mestiza. Ambos actores, sin embargo, por sí solos no serían lo suficientemente fuertes para lograr mantener el poder local, debido al apoyo que siguen teniendo algunos candidatos del PRI en el medio rural y urbano del municipio.

El escenario en el estado no pareciera inclinarse del lado de la tribu del PRD de Izquierda Unida —los Chuchos, como se les conoce—, sobre todo después de que Jorge Luis Escandón, siendo presidente del PRD en el estado, fuera hecho a un lado de la candidatura del PRD para gobernador del

estado por el mismo Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo a bien dar un albazo y levantar la mano de Juan Sabines como su candidato a la gubernatura cuando éste aún era miembro del PRI y presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez; hecho simbólico que confronta al PRD de Las Margaritas con López Obrador y con Juan Sabines, actual gobernador del estado.

Hasta ahora, la dirigencia del PRD estatal y nacional ha respetado que la nominación de candidatos para la presidencia municipal de Las Margaritas salga de acuerdo con los usos y costumbres de ambos grupos, así como el acuerdo de alternancia en la nominación de los candidatos. Cabe elucubrar, sin embargo, sobre los resultados que tendría tratar de imponer un candidato que respondiera a los intereses del gobernador, a los de alguna de las tribus no favorecida y hasta repudiada en este escenario, actualmente fiel a las huestes de Jesús Ortega, quien por otra parte en 2008 recibió la dirigencia del PRD con el fallo del tribunal electoral a su favor, o bien a las perversas alianzas que puede llegar a hacer la cúpula del PRD como cualquier otro partido político.

BIBLIOGRAFÍA

- Alberoni, Francesco (1981), *Movimiento e institución*, Editora Nacional, Cultura y sociedad, España.
- Almeida, José (2002), “Cuquío Jalisco: por una cultura de rendición de cuentas con responsabilidad”, en Dionisio Córdova, *Antología de participación ciudadana*, Cesem, México.
- Arellano, David, Enrique Cabrero y Arturo del Castillo (coords.) (2003), *Reformando al gobierno: una visión organizacional del cambio gubernamental*, Miguel Ángel Porrúa/CIDE, México.
- Ayuntamiento de Las Margaritas (2006), “Rehabilitación del sistema integral de agua potable en la cabecera municipal. Las Margaritas, Chiapas”, en *Premio Habitat* [<http://bit.ly/dauKyN>].
- Cabrero, Enrique (1995), *La nueva gestión municipal en México. Análisis de experiencias innovadoras en gobiernos locales*, CIDE/Miguel Ángel Porrúa, México.
- CODECH (s/f), “Es tu casa”, tríptico de la Coordinadora, CODECH, México.
- Diani, Mario (1998), “Las redes de los movimientos: una perspectiva de análisis”, en Pedro Ibarra y Benjamín Tejerina (coords.), *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*, Trotta, España.

- Estrada Saavedra, Marco (2007), *La comunidad armada rebelde y el EZLN. Un estudio histórico y sociológico sobre las bases de apoyo zapatistas en las cañadas tojolabales de la Selva Lacandona 1930-2005*, El Colegio de México, México.
- Favela, Margarita (2006), *Protesta y reforma en México. Interacción entre Estado y sociedad 1946-1997*, CEIICH-UNAM/Plaza y Valdés, México,
- Flores, Joaquín y Carlos Rodríguez (1997), “El nuevo federalismo, a prueba por las demandas del movimiento indio”, *Revista Relaciones*, núm. 15-16.
- García del Castillo, Rodolfo (1999), *Los municipios en México. Los retos del futuro*, Miguel Ángel Porrúa/CIDE, México.
- Gómez Hernández, Antonio y Mario Humberto Ruz (1992), “Memoria baldía. Los tojolabales y las fincas”, testimonios, UNAM/UACH, México.
- Guillén, Tonatiuh (2000), “Las reformas del 115 constitucional. El gobierno municipal, federalismo y relaciones intergubernamentales”, en Juan Pablo Guerrero y Tonatiuh Guillen (coord.), *Reflexiones en torno a la reforma municipal del artículo 115 constitucional*, CIDE/Miguel Ángel Porrúa, México.
- Harvey, Neil (2000), *La rebelión de Chiapas. La lucha por la tierra y la democracia*, Era, México.
- Inafed (2003), “Estado de Chiapas”, en *Enciclopedia de los municipios de México*, Secretaría de Gobernación, México.
- Ixtacuy, Octavio (2004), “Construyamos juntos tu casa en Las Margaritas”, en Rodolfo García del Castillo (coord.), *Gestión local creativa. Experiencias innovadoras en México*, CIDE/Inafed/Fundación Ford, México.
- Lenkersdorf, Carlos (1996), *Los hombres verdaderos: voces y testimonios tojolabales*, Siglo XXI Editores, México.
- Leyva, Xochil (1993), *Poder y desarrollo regional. Puruándaro en el contexto norte de Michoacán*, México, El Colegio de Michoacán/CIESAS, México.
- Long, Norman (2007), *Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor*, Colegio de San Luis/Ciesas, México.
- López Monjardín, Adriana (1979), “Lucha popular en los municipios”, *Cuadernos Políticos*, núm. 20, México.
- (2004), “Los ciudadanos excluidos, la agenda pendiente en los municipios rurales”, en Roberto Diego, Luciano Concheiro y Patricia Couturier (coords.), *Políticas públicas para el desarrollo rural*, Juan Pablos/UAM-Xochimilco, México.
- March, James y Johan P. Olsen (2006), “Elaborating the New Institutionalism”, en R. Rhodes, S. Binder y B. Rockman (coords.), *The Oxford Handbook of Political Institutions*, Oxford University Press, Inglaterra.
- Mattiace, Shannan (2001), “Regional Renegotiations of Space: Tojolabal Ethnic Identity in Las Margaritas, Chiapas”, *Latin American Perspectives*, vol. 28, núm. 2.

- Melucci, Alberto (1999), *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México, El Colegio de México, México.
- Montaño, Luis y Sergio Alvarado (coords.) (2004), *Los estudios organizacionales en México. Cambio, poder, conocimiento e identidad*, Cámara de Diputados/UAM-Iztapalapa/Miguel Ángel Porrúa, México.
- Morales, Marta Gloria y Ana Díaz (1997), “Democracia municipal en México”, en Rodolfo Vega y José Rodríguez (coords.), *Municipio*, IAPQ/Fundap/Ameinape, México.
- North, Douglass (2002), *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*, FCE, México.
- Núñez Rodríguez, Violeta (2004), *Por la tierra en Chiapas... el corazón no se vence. Historia de la lucha de una comunidad maya-tojolabal para recuperar sus nantik lu'um, su Madre Tierra*, Plaza y Valdés, México.
- Peters, Guy (2003), *El nuevo institucionalismo*, Gedisa, España.
- Polito, Elizabeth y Juan González (1997), *Cronología de 20 años de conflictos en el campo 1974-1993*, ERA, México.
- Rodríguez, Luis (2004), “Microrregiones y participación ciudadana en Las Margaritas, Chiapas”, en Rodolfo García del Castillo (coord.), *Gestión local creativa. Experiencias innovadoras en México*, CIDE/Inafed/Fundación Ford, México.
- (2005), “Etnicidad y ciudadanía ‘en los márgenes del conflicto’. La lucha por la territorialidad en la Selva Fronteriza de Chiapas México”, *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales* vol. XLVII, núm. 195, UNAM, México.
- (2007), “Programa Intermunicipal de Inclusión Escolar de menores entre 5 y 14 años en Chiapas”, en Tonatiuh Guillén López, Liliana González Pantoja y Pablo Rojo Calzada (coords.), *Gobierno de proximidad. La capacidad y el ingenio de la gestión local mexicana*, Colección Premio Gobierno y Gestión Local, CIDE/Inafed/Colef, México.
- Rodríguez, Carlos y Roberto Diego (2008a), “Las incongruencias de la participación ciudadana y la descentralización en municipios rurales: el caso de Cuquío (Jalisco), en México”, en Alberto Arce, Gustavo Blanco y Margarita Hurtado, *Políticas públicas como objeto social: imaginando el bien público en el desarrollo rural latinoamericano*, Flacso/Universidad Austral de Chile/WUR.
- (2008b), “La Coordinación de Atención a la Mujer en el municipio de Cunduacán, Tabasco. Las paradojas en la intervención de un gobierno local de oposición”, ponencia presentada en el XXI Congreso Departamental de Investigación del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, Cocoyoc, Morelos.
- Ruz, Mario Humberto (1992), *Sabia india, floración ladina. Apuntes para una historia de las fincas comitecas. Siglos XVIII y XIX*, Conaculta, México.

- Scott, James (1990), *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, Yale University Press, Michigan.
- (2000), *Los dominados y el arte de la resistencia*, Era, México.
- Shutz, Alfred (1974), *El problema de la realidad social*, Amorrortu, Buenos Aires.
- y Thomas Luckman (1974), *The Structures of the Life World*, Heinemann, Londres.
- Van der Haar, Gemma (2005), “Land reform, the state, and the Zapatista uprising in Chiapas”, *Journal of Peasant Studies*, vol. 32, núm. 3.

Desarrollo rural, Estado de excepción y memoria. Una reflexión desde los movimientos sociales

Alejandro Cerda García*

Han pasado casi tres décadas desde que Guha (1983) elaborara su crítica a la forma como las revueltas campesinas en el sur de la India, durante los siglos XIII y XIX, quedaron fuera de la historia oficial de dicho país, así como la manera como desde dicha versión de la historia se creó una imagen de los campesinos que les negaba su capacidad de agencia y sus posibilidades de contar con un sentido propio de la historia. Lo documentado en su libro sobre las insurrecciones campesinas en la época de la relación colonial de la India, bajo el yugo inglés, parece tener un correlato en la manera como la mayoría de los países de América Latina, con una historia de relación colonial principalmente con países europeos, ha continuado describiendo y construyendo la relación entre dichos actores y los Estados nacionales de los que forman parte. Hoy en día, bajo el cobijo de discurso de la modernidad, se asume una concepción del desarrollo rural que pugna por una tecnologización del campo, al tiempo que busca su integración a las relaciones de libre mercado; una concepción de modernidad del campo que conlleva una matriz de colonialidad, en tanto que se sustenta y confirma dichas relaciones de dominación.

Sin embargo, esta modernidad-colonialidad es impugnada por sujetos sociales que cuestionan sus falacias, al tiempo que son herederos de una

* Profesor-investigador en el Departamento de Educación y Comunicación, UAM-Xochimilco.

tradición de pensamiento que generan sus propias formas de entendimiento de relación con el Estado y la sociedad, tal como se puede observar en los movimientos sociales de América Latina a principios del siglo XXI. Se trata de movimientos sociales marcados por una situación paradójica en la que, por un lado, existe una cierta opinión compartida en torno a la constatación de un avance hacia sociedades democráticas sustentadas en los procesos electorales universales, mientras que por otro, se observa una creciente represión y criminalización hacia movimientos sociales críticos del proyecto neoliberal hegemónico, que ha alcanzado también a comunicadores y defensores de derechos humanos. ¿Cómo explicar esa violencia estatal?, ¿cuáles son las condiciones y el contexto que la hace posible, así como los argumentos con los que se pretende justificar?, ¿cómo explicar la respuesta política de los movimientos sociales rurales frente a dicha actuación estatal?, ¿qué implica pensar el desarrollo rural en este contexto de violencia estatal hacia movimientos sociales críticos?

Partiendo de las premisas de que el desarrollo rural no es posible sin justicia social, sin la perspectiva de los sujetos y bajo la amenaza de la violencia estatal, en este trabajo nos proponemos analizar la manera como ha venido ejerciéndose la violencia hacia movimientos sociales críticos de los proyectos hegemónicos en México, con el fin de reflexionar sobre la posibilidad de explicarla a partir de los debates teóricos y políticos de las nociones de Estado de excepción y de los usos públicos de la historia y las memorias.

MOVIMIENTOS SOCIALES Y VIOLENCIA ESTATAL

La historia de los países de América Latina ha sido fuertemente marcada por regímenes dictatoriales y represivos, la mayoría de las veces vinculados a intereses económicos tanto nacionales como internacionales. En el caso de México, esta represión hacia movimientos sociales cuenta con un relevante antecedente en la violencia estatal practicada contra los disidentes durante la dictadura de Porfirio Díaz y a lo largo del proceso revolucionario iniciado en 1910, entre los que se distingue la represión, exilio y encarcelamiento a los opositores políticos. Sin embargo, esta acción represiva estatal viene a intensificarse a partir de la segunda mitad del siglo XX con la decisión del presidente Ávila Camacho de proponer, en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, la inclusión en el Código Penal de los Delitos de Disolución Social. Es en este periodo que se da inicio a una estrategia

represiva que se ampara en la aplicación tendenciosa y distorsionada de este tristemente célebre delito, que si bien en su contenido formal aludía a quienes hiciesen propaganda en contra de la nación mexicana, en la práctica fungió como el mecanismo aparentemente legal para reprimir y encarcelar a militantes de movimientos sociales disidentes. Una represión que va desde el movimiento ferrocarrilero en 1958 y 1959, del movimiento magisterial en 1959-1960, del movimiento médico en 1965, y contra el Movimiento Cívico en Guerrero en 1960-1962, entre otros.

En su objetivo estudiantil, la violencia del Estado mexicano transita desde la ocupación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 1966, hasta la toma militar de la Universidad de Sonora en 1967, para desembocar en las conocidas masacres estudiantiles de 1968 y 1971.¹

Si bien algunos ubican como uno de los saldos positivos de la movilización social y estudiantil de estos años la derogación del delito de disolución social del Código Penal, durante la primera década del presente siglo, el gobierno mexicano se ha encargado ya de revivir, durante el sexenio iniciado en 2006, este tipo de delitos a partir de propuestas legislativas que irónicamente podrían ser caracterizadas como “avanzar al pasado”.² Asimismo, de promover una iniciativa de ley para que el ejército amplíe sus atribuciones y realice funciones policiacas, medida que puede crear un mayor margen de discrecionalidad para las fuerzas armadas, si se toman en cuenta los antecedentes de su actuación y la problemática actual del país.³

Esta tendencia encuentra una de sus mejores justificaciones en el creciente fenómeno del narcotráfico e inseguridad, dando así los motivos perfectos para la creación de los delitos de secuestro equiparado, asociación delictuosa y crimen organizado, mismos que hoy en día constituyen el moderno mecanismo para criminalizar a los movimientos sociales. Son precisamente este tipo de acusaciones a partir de las cuales se asignó una pena

¹ Acerca de los antecedentes de represión estatal en el ámbito rural mexicano, véase Piñero (2006).

² Una detallada argumentación acerca de la manera como las recientes modificaciones al Código Penal conllevan una serie de contradicciones y ambigüedades a partir de las cuales la violencia del Estado se presenta como “legal” y se hace posible la criminalización de las luchas sociales a partir de la aplicación distorsionada de los delitos de privación ilegal de la libertad y terrorismo puede encontrarse en Montemayor (2010).

³ Al respecto, véase el actual debate sobre la solicitud de la Secretaría de la Defensa Nacional para ampliar sus facultades, misma que ha sido evaluada como una propuesta que pretende implantar el Estado de excepción (Garduño y Méndez, 2010).

de 112 años de cárcel a uno de los líderes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra en Atenco.⁴

Si bien el régimen del PRI como partido de Estado, que durara más de siete décadas, vino a ser sustituido en el año 2000, a partir de ese año se cuenta ya con al menos 108 desaparecidos políticos (Arenas, 2008) y con 59 periodistas asesinados, el ejército ya está en las calles y realiza funciones de policía en un controvertido argumento legal superficial y México destina grandes esfuerzos para hacer para Estados Unidos el trabajo sucio de detectar y detener a terroristas y hacer de barrera para el creciente contingente de migrantes centro y sudamericanos.

Una de las tendencias que actualmente coinciden en denunciar distintos movimientos sociales latinoamericanos es lo que, en sus palabras, se define como un proceso de criminalización de sus demandas, sus estrategias de lucha y sus integrantes. Ya sean los mapuches frente a los Estados Chileno y Argentino, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, o del movimiento zapatista o del Frente por la Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco frente al Estado mexicano, estos movimientos buscan denunciar la forma como la puesta en práctica de este modelo neoliberal genera un creciente descontento social y echa mano de la represión estatal para lograr imponerse. Frente a este propósito, los movimientos sociales críticos se convierten en uno de sus obstáculos más importantes, por lo que se requiere expulsarlos del espacio público o minimizar su acción política para lo cual se giran órdenes de aprehensión, se tortura, se asesina, se generan ataques de paramilitares que jamás quedan esclarecidos y se desaparece a sus militantes. La continuidad temporal de estas prácticas puede corroborarse al observar que a pesar del cambio de partidos políticos casi en ningún país latinoamericano ha sido posible juzgar o penalizar a los dictadores y a otros agentes de la represión.

⁴ A partir de la movilización y la presión social nacional e internacional y después de cuatro años de prisión injustificada, el 30 de junio de 2010 fueron liberados los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. La Suprema Corte de Justicia admitió como injustificada la acusación de “secuestro equiparado” al considerarla, según el ministro Juan Silva Meza, “como una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición” (Aranda, 2010). Si bien este hecho muestra las posibilidades de la lucha organizada y el carácter “injusto” del encarcelamiento de que fueron objeto estos luchadores sociales, su consecución fue sumamente desgastante y acaparó inevitablemente los esfuerzos de este Frente de Pueblos. La figura jurídica de “secuestro equiparado” sigue vigente y continúa siendo utilizada para atacar a movimientos sociales críticos del actual proyecto neoliberal.

Durante la década de 1990 y la primera década del siglo XXI, hemos presenciado una serie de cambios en las presidencias de varios países de América Latina que, en cierto modo, podrían calificarse como un viraje hacia proyectos nacionales orientados hacia la justicia social y el reconocimiento de la diversidad cultural en la región. Si bien no es posible hablar de América Latina como un todo homogéneo, podemos observar en esta región, que a pesar de contar con partidos en el poder que se adscriben a la izquierda y sin negar la importancia del socialismo del siglo XXI impulsado por Venezuela y Bolivia, existe una tendencia a la profundización de políticas de liberalización de mercados que recurre de manera cada vez más frecuente y abierta a la represión como estrategia para imponer un modelo económico caracterizado por el empobrecimiento masivo y el creciente descontento social.

ESTADO DE EXCEPCIÓN Y REPRESIÓN

Para comprender los Estados latinoamericanos es necesario considerarlos como una forma particular de organización social que representa y se ordena en torno a los intereses de la clase dominante, a la vez que mantiene sus propias alianzas internacionales. América Latina, sin dejar de reconocer su heterogeneidad y sus particularidades, ha mostrado a lo largo de su historia, como región de países independientes, una importante tendencia a la conformación de Estados autoritarios. En varios países latinoamericanos como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay, El Salvador o Guatemala, esta forma totalitaria de gobernar se puso en práctica a partir de la puesta en práctica de regímenes dictatoriales que aglutinaron intereses militares y de oligarquías económicas y que desembocaron en fuertes medidas represivas.

Al intentar reflexionar de manea genérica sobre la violencia ejercida por los Estados latinoamericanos, encontramos que ésta podría relacionarse tanto con el tipo de régimen político que se adopta, como con formas particulares y recurrentes de las acciones gubernamentales.

En cuanto a los regímenes de gobierno, son especialmente significativas las experiencias de dictaduras militares durante la segunda mitad del siglo XX, mismas que fueron caracterizadas por el ejercicio de la violencia estatal hacia movimientos o sujetos que se posicionan críticamente ante dichos

regímenes o que contaban con una trayectoria de militancia política desde posiciones críticas.

En países como México, que no cuentan con una historia de dictadura militar, podemos observar la puesta en práctica de regímenes autoritarios que de igual forma han utilizado la violencia estatal como forma de garantizar la continuidad del poder. Este ejercicio de la violencia estatal en América Latina puede ubicarse a partir de la promulgación de leyes, decretos y sentencias que muestran alianzas implícitas entre el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto es, que a partir de medidas “legales” en tanto siguen los procedimientos establecidos, el resultado concreto deviene en la justificación del ejercicio de la violencia estatal.

Otra modalidad de esta violencia ejercida por el Estado a partir de motivaciones políticas, son las acciones directas de represión contra movimientos sociales o sujetos mediante grupos paramilitares solapados o de los mismos agentes estatales en circunstancias difícilmente demostrables, ya sea a partir de estrategias represivas aplicables directamente en las movilizaciones sociales o bien, mediante acciones represivas en las sedes, localidades o regiones en las que la población ha mostrado su adhesión a proyectos políticos distintos al hegemónico.

Este tipo de situaciones puede ser pensada desde la idea de Estado de excepción, misma que requiere una breve revisión con el fin de esclarecer su alcance y distinguir entre los cada vez más frecuentes usos que se le confiere. Una idea de Estado de excepción planteada inicialmente por Walter Benjamin en sus reflexiones sobre el concepto de historia: “la tradición de los oprimidos nos enseña que el ‘Estado de excepción’ en el cual vivimos es la regla. Debemos adherir a un concepto de historia que se corresponda con este hecho” (Benjamin, 2007).

Esta idea de Estado de excepción puede sernos útil para pensar tanto la violencia ejercida por regímenes autoritarios a lo largo del siglo XX, como para reflexionar sobre la violencia estatal que se ejerce durante el XXI. La reflexión de Agamben (2007) tiene como punto de partida la constatación de la forma como, bajo circunstancias de “necesidad” o extraordinarias, se consideró válido y legal que determinadas funciones del poder Legislativo pasen a ser ejercidas por el Ejecutivo, o la manera como este último lograra invariablemente resoluciones del poder Judicial que le fueran favorables.

A partir de un análisis histórico de las condiciones de excepción, en las que se aplica el derecho, es necesario reflexionar sobre aquellas situaciones en las que el poder Ejecutivo tiene la obligación de poner remedio a las la-

gunas del derecho, siguiendo la máxima de que la ley puede tener lagunas, pero el derecho no. Reflexionar sobre las lagunas que se generan cuando existen situaciones en las que la aplicación del derecho queda suspendida. Situaciones en las que un principio que corresponde al poder Judicial es extendido al Ejecutivo. Sin embargo, se trata de lagunas que no corresponden a la interpretación de la norma, es decir, a una carencia del texto a ser llenado por el juez, sino más bien, a la suspensión del ordenamiento vigente para garantizar su existencia.

La cuestión radica, entonces, en las lagunas que se generan entre la norma y su aplicación, en lo que podría llamarse la *práctica jurídica*; es decir, en la relación entre norma y anomia, precisamente el campo de la relación entre derecho y política. Focalizar la relación entre la norma y su aplicación implica reconocer que estas últimas no están contenidas en la primera, que la aplicación no puede ser definida en la norma, sino que más bien se trata de una zona de aplicación suspendida, de una fuerza de ley que aplica desaplicando.⁵ La relación entre norma y realidad es una soldadura imposible, un nexo entre lógica y praxis que no puede presuponerse.

El Estado de excepción busca colmar esta fractura entre la norma y su aplicación, entre lógica y praxis, a partir de la aplicación de una ley que es suspendida, pero que permanece en vigor. Lógica y praxis se indeterminan y es, entonces, que una violencia sin *logos* pretende actuar un enunciado sin ningún referente real. Esta forma de concebir el Estado de excepción trasciende tanto su pura explicación histórica como su definición a partir de las previsiones constitucionales para situaciones extraordinarias y su interpretación como laguna interpretativa inherente a toda norma. Por el contrario, ubica el Estado de excepción como esa fractura imposible de soldar entre la norma y su aplicación que la coloca en el vínculo entre lo jurídico y lo político.

Aunque se trata de un planteamiento que de entrada puede generar cierta resistencia ya que devela la insuficiencia del carácter normativo del derecho y remite a considerar el ámbito ideológico de derecho, es decir, la relación entre derecho y política, o bien, entre poder y práctica. Se trata de un planteamiento que cuestiona la hegemonía del derecho como discurso neutral y acabado; que resulta útil puesto que remite a la práctica jurídica, a la tensión entre norma y aplicación, a considerar el derecho como construcción social y en su necesario vínculo con los procesos políticos, enfoque

⁵ La noción de fuerza de ley está tomada de Agamben (2007).

que puede enriquecer otras conceptualizaciones como la reflexión sobre la interlegalidad o la noción de campo jurídico.

Cuando los movimientos sociales hablan de represión y criminalización a ellos mismos y a sus demandas, aluden precisamente a la denuncia de la actuación gubernamental represiva sin ninguna norma que la regule, al ejercicio de la violencia con la justificante de la preservación de un “Estado de derecho” que, para conservar su vigencia, recurre a la tortura, a la desaparición forzada, a las detenciones arbitrarias, actuando de manera totalmente opuesta a los principios del mismo Estado de derecho que pretende preservar. A la recurrencia al sistema jurídico para dictar órdenes de aprehensión y encarcelar a líderes sociales cuyo único delito es el posicionarse críticamente frente a los proyectos hegemónicos impulsados por el sector gobernante.

Las condiciones de excepción en las que se sustentan la mayoría de los Estados latinoamericanos, son las que posibilitan la represión y criminalización de movimientos sociales a la que hemos aludido. Condiciones cuya detección y denuncia se vuelven cada vez más difíciles en tanto que, a diferencia de otros momentos históricos en los que los Estados se veían en la necesidad de promulgar decretos y anunciar públicamente el Estado de excepción para poder justificar la adopción de medidas fuera de la ley, hoy se legitima en tanto que se sostiene que se trata de Estados que han sido electos por voto universal y secreto, que tienen permiso de hacer lo que fuera necesario para conservar el orden y la seguridad nacional. Se crean, entonces, lagunas de excepción en las que se violan derechos humanos y se permite actuar a la autoridad sin tener que restringirse a ningún límite legal.

Este Estado de excepción, no es, desde luego, exclusivo de América Latina, sino que también puede identificarse en el nacional socialismo alemán y con las medidas estadounidenses frente a los prisioneros de guerra o de la Comunidad Económica Europea a través de su directiva de retorno. Como ha señalado Agamben, el gobierno del presidente Bush ha marcado una pauta internacional al instaurar una “guerra civil legal” a través del Estado de excepción, a partir de la emisión de una *military order* en 2001 que autoriza la “detención indefinida” de los no-ciudadanos estadounidenses sospechosos de actividades terroristas. Son estas condiciones de excepcionalidad las que se manifiestan en el control de la vida, en la decisión sobre la vida de personas a quienes no se les reconoce ningún tipo de derecho, a quienes por la vía de los hechos se despoja de su condición de ciudadanos.

MOVIMIENTOS SOCIALES: USOS PÚBLICOS DE LA HISTORIA Y LA MEMORIA

Es en este contexto latinoamericano podemos analizar la relevancia del surgimiento de estudios sobre la memoria social, que se ponen en práctica sobre todo a partir de la década de 1990. La emergencia de los usos de la memoria y la necesidad mostrada por los mismos movimientos sociales, acciones colectivas y demás acciones de estratos sociales que se han visto agredidas y reprimidas por un Estado que ve en su proyecto político una amenaza. Campo que puede entenderse como una guerra de memorias en tanto que desde los lugares estatales de poder se producen también versiones de lo sucedido tendientes a su autolegitimación. Memorias subalternas que contienden con versiones oficiales de la historia y de las que se desprende el imperativo de descolonizar dichas versiones legitimadas desde los polos de poder.

La reflexión y uso cada vez más frecuente de los campos de la historia, la memoria y su interacción como ámbitos de disputa política constituye un campo en el que la acción de movimientos sociales ha adquirido mayor relevancia. Entre los sucesos históricos que han dado motivo –casi obligado– a los movimientos sociales a usar políticamente la memoria colectiva y su necesario vínculo y tensión con la historia, puede ubicarse tanto en la denuncia ciudadana de hechos represivos perpetrados por regímenes autoritarios, como en la impugnación y presión social para lograr el cabal ejercicio de la justicia ante tales actos, tanto por mecanismos legales como por medio de la condena social cuando los primeros no funcionan. Asimismo, el uso de la historia y las memorias ha fungido como una forma de oponerse a la manipulación de la historia por parte de un determinado proyecto político de grupos gobernantes (Todorov, 2000).

Desde América Latina, la reflexión sobre los usos públicos de la historia y sobre la memoria social, retoma la reflexión crítica sobre la relación de colonialidad que ha dejado una profunda huella en su pasado común. Por un lado, hace uso de la crítica a la historiografía elaborada desde los estudios poscoloniales en la India, con su cuestionamiento a la manera como oficialmente se excluye de la escritura de la historia a grupos o estratos sociales que ocupan una posición subalterna al tiempo que se les construye como sujetos que no tuvieran capacidad de agencia ni un sentido propio de la historia (Guha, 1983; Dube, 1999; Spivack, 1999), perspectiva que también tendría un correlato en América Latina (Castro-Gómez y Mendieta,

1998). Asimismo, compartiendo esta visión crítica de la relación colonial como elemento imprescindible para comprender América Latina, la reflexión sobre los usos públicos de la historia y la memoria social puede vincularse con la propuesta del pensamiento decolonial. A partir de la crítica a la manera en que el discurso de la modernidad conlleva una matriz de colonialidad, el pensamiento decolonial enfatiza la manera como a lo largo de la historia colonial y hasta nuestros días existe también de manera constante una serie de giros y momentos en los que la población de los países colonizados toman distancia de las formas de pensamiento propuestas por ese discurso de la modernidad/colonialidad y abre nuevas opciones de pensamiento que tiene como referente las problemáticas latinoamericanas y a sus propios pensadores (Mignolo, 2007). De esta forma, la “memoria” en el campo de la represión política ha enriquecido también el campo de la lucha de los movimientos sociales. Se desprende aquí, la necesidad de llevar a cabo un ejercicio descolonial que se ha llevado al campo del feminismo (Hernández y Suárez, 2008), de la política e incluso de las metodologías mismas de investigación (Smith, 1999).

La memoria colectiva puede ser entendida como un proceso construido socialmente mediante el cual el recuerdo específico de distintos colectivos o estratos sociales, generados a partir del conjunto de huellas que dejan los acontecimientos históricos y que se pone en juego el espacio público (Ricoeur, 1999).

Sin embargo, la memoria pierde sentido si no es historizada, si no se vincula y entra en diálogo con la historia. En tanto que no hay una sola historia ni una sola memoria, sino múltiples formas de aludir a ellas en las que necesariamente se juegan relaciones de poder, perspectivas e intereses de determinados estratos sociales, la relación entre historia y memoria es polisémica, se da en múltiples niveles y conlleva distintos tipos de relación; es un hiato, hueco o fractura irresoluble. Una distancia entre los hechos dolorosos o impactantes ocurridos en algún lugar específico y las maneras en que los participantes, o quienes forman parte de su colectividad o sociedad, relatan, recuerdan y simbolizan esos hechos. La memoria es una fuente especialmente fecunda para la historia, incluyendo sus tergiversaciones, desplazamientos, negaciones, así como los mecanismos de transposición y descomposición del tiempo que funcionan en la subjetividad.

En contraparte, la historia cuestiona y prueba críticamente los contenidos de las memorias. De esta forma, ni la historia se diluye en la memoria, ni la memoria debe ser descartada como dato por su volatilidad o aparente

falta de “objetividad”. La historia dura, fáctica, es imprescindible pero no suficiente para comprender la manera en que los sujetos sociales interpretan esos mismos hechos (Jelin, 2002).

El ámbito de la memoria es, por tanto, un espacio de significación, de disputa por los significados, de resignificación. Un terreno tan heterogéneo como lo son los sujetos mismos, en el que, sin embargo, ciertas versiones de lo recordado devienen hegemónicas y otras permanecen como subalternas. Una guerra de memorias que se relaciona directamente con la correlación de fuerzas que organizan las relaciones en una sociedad situada histórica y geopolíticamente (Calveiro, 1998).

Si bien la reconstrucción de la memoria puede ser considerada un acto de denuncia del poder, este tipo de procesos no provoca automáticamente un cambio social, sino que éste está más bien relacionado con el uso político que se hace de ella, ya sea por quienes han vivido la represión, por la clase gobernante, por las fuerzas militares, entre otros. Cada actor social hace su propia memoria independientemente de la posición social o el grado de poder acumulado con que cuente en un determinado momento histórico (Jelin, 2002). Las marcas o huellas de la historia sólo son posibles de reconocer y resignificar a partir de que éstas quedan plasmadas en una superficie. Pero esas superficies son distintas y de acuerdo con cada una de ellas, la huella puede adquirir un significado muy distinto.

La memoria social y colectiva es selectiva, se recuerda sólo o preferentemente aquello que hace sentido. A esto remite la idea de Halbwachs (1925) sobre los marcos sociales de la memoria, los cuales son construidos socialmente. Es a partir de estos marcos compartidos por una sociedad o una colectividad que se seleccionan y se da sentido a la memoria. Esos marcos sociales funcionan como filtros de la memoria que, sin embargo, son distintos para cada sujeto; hitos que toman sentido diferenciado en la vida de distintas personas.

Es por ello que la memoria individual siempre está enmarcada socialmente, en las visiones del mundo, necesidades y valores de las colectividades y las sociedades. Lo social está presente en lo que pudiera parecer el recuerdo más individual, ya que éste se hace posible a partir que los acontecimientos pasados, pueden ser ubicados en los marcos de la memoria colectiva (Jelin, 2002). La memoria es, así, más una reconstrucción que un recuerdo.

Esta heterogeneidad y selectividad de la memoria se hace también manifiesta en aquello que se silencia o se olvida (Connerton, 2008). No hay memoria que pueda construirse si no es a partir de silenciar u olvidar cier-

tos pasajes, dimensiones o elementos significados para dar sentido al pasado. La identificación y estudio de lo no dicho o de lo acallado es un campo fecundo para la comprensión de las memorias y del papel que éstas desempeñan en el ámbito público. Estas reflexiones sobre los usos públicos de la historia y la memoria pueden observarse, de manera empírica, en ámbitos como los lugares, las temporalidades, las diferencias de género y las corporalidades, aspectos que esbozamos a continuación.

La memoria se expresa de manera especialmente significativa en la espacialidad. No es posible hablar de la memoria social y colectiva sin hacer alusión a referentes espaciales. Los lugares de memoria aluden tanto a los memoriales, los lugares de represión en los que se materializan decisiones públicas sobre la manera como ha de gestionarse el pasado, como el uso político del espacio que hacen movimientos sociales y acciones colectivas, a partir de la toma de plazas públicas, edificios gubernamentales, inmuebles desocupados o, simplemente, la calle.

El vínculo entre temporalidades y memorias es, asimismo, un ámbito que ha generado un amplio debate en tanto que memorias colectivas y sociales específicas, no sólo son distintas sino que en ocasiones impugnan las temporalidades establecidas por las versiones hegemónicas del pasado, situación que se expresa de manera emblemática en las fechas conmemorativas en las historias sociales, nacionales o internacionales. Las memorias colectivas y sociales aluden a sus propios hitos, etapas, definiciones del antes y el después, distintas formas de hacer presente determinados hechos del pasado, reflexionar sobre lo que pudo haber sido y lo que puede ser (Jelin, 2002).

La diferenciación de género ha sido también reflexionada en su vínculo con la memoria. Mujeres y hombres recuerdan y hacen uso de manera diferencial de la memoria. La manera de hacer uso político de la memoria por parte de mujeres implica no sólo su contundente participación en el ámbito público, a partir de que consiguen abrirse nuevos espacios de participación, sino que su participación adquiere una posición protagónica en movimientos reivindicatorios de la memoria hoy en día (Cerde y Chapela, 2010).

Finalmente, los cuerpos están siendo abordados también como un ámbito de la memoria, tanto por ser un ámbito privilegiado para identificar y comprender las huellas, físicas y simbólicas, que la memoria imprime en esta superficie viva, al tiempo que los distintos sentidos que se le confieren; pero también el cuerpo como un espacio de resignificación de la memoria a través de los espacios colectivos de elaboración y de estrategias utilizadas por movimientos sociales en los que se hace uso de los rostros, las siluetas

de personas, o bien de los plantones, las manifestaciones públicas, las huelgas de hambre o la presentación de los propios cuerpos desnudos como forma de brindar mayor contundencia a sus demandas vinculadas a las disputas por determinados significados y usos del pasado.

RESIGNIFICAR ESPACIO Y TIEMPO

Este mismo uso político de la memoria puede ejemplificarse en el testimonio de Romualdo Santiago, integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Mepa'a (OPIM), en el sureño estado de Guerrero, en el que también fueron desaparecidos y asesinados Raúl Lucas Lucía y su compañero Manuel Ponce Rosas, en febrero de 2009.

La militarización en las zonas indígenas [señala Romualdo] se lleva a cabo poniendo retenes. Mi tía Inés Hernández Ortega⁶ fue violada por los militares, para que nos espante a nosotros como indígenas, para que no defendamos nuestros derechos. Luego se siguieron con la violación de Valentina Rosendo. Es la manera que el gobierno utiliza para tratarnos a nosotros los indígenas, para desbaratar las organizaciones. No hay justicia, nosotros exigimos justicia por las violaciones sexuales, pero no hay justicia. Lo que hay son más amenazas, el gobierno quiere meternos miedo porque piensa que de esa forma nos vamos a callar. También, yo fui preso, como preso de conciencia, me detuvieron como culpable de un asesinato de un paramilitar, pero como soy inocente, aquí estamos, seguimos luchando con nuestra organización.

El testimonio de Cuauhtémoc Ramírez muestra la manera como la militarización de las regiones indígenas del país ha ido acompañada de la violencia estatal, especialmente dirigida hacia las mujeres:

Los ataques sexuales a Valentina y a Inés fueron muy seguidos. Fueron en 2002. El ejército en Guerrero ha estado prácticamente todo el tiempo, pero

⁶ A partir de las denuncias realizadas por la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sometido a dos juicios al Estado mexicano por los casos de Inés Hernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, violadas por militares del 41 Batallón de Infantería durante el primer trimestre de 2002 (Olivares, 2010).

a partir del levantamiento zapatista se incrementaron. Y mucho más después de la masacre del Charco. En el 94, allá en Guerrero, militarizó todo el estado y las zonas indígenas, principalmente. Y desde ese tiempo se dieron violaciones sexuales en contra de mujeres indígenas. En una comunidad que se llama Barranca de Guadalupe, que participa en la organización. Nos han contado. Y la compañera que ahora ya es mayor, fue violada por los militares, junto con su hija y otras dos mujeres. Pero las anduvieron cargando dos noches, y las torturaron y las obligaban a hacer comida para ellos, y a su esposo lo golpearon. En ese tiempo, no se atrevieron a denunciar las compañeras. Pero hoy ya lo hicieron. Aunque es extemporáneo, pero hay todavía una queja en la CNDH de que se dio ese caso. Y el ataque a Inés que fue en 2002 y el de Valentina que fue como un mes después, con un periodo de un mes de diferencia. A Valentina la violaron en febrero y a Inés en marzo, los mismos militares. También la consideramos como un ataque a la organización. El ataque al cuerpo de la mujer es un agravio a todo un pueblo. Porque los pueblos así también lo entendieron. Se levantaron actas en todos los pueblos y todo el pueblo estuvo de acuerdo en apoyar.

De esta forma, la memoria de lo sucedido, en este caso la agresión sexual a mujeres, lejos de prescribir se convierte en un motivo de nuevas formas de organización y de lucha que incluyen la recurrencia a mecanismos de justicia en el ámbito internacional:

Porque las compañeras sí tuvieron la decisión de hacer la denuncia y desde ese tiempo estamos trabajando en ese caso, que pues obviamente no hubo ninguna respuesta del gobierno federal. Aunque hubo una recomendación de la CNDH, donde sí reconoció que hubo violación a Inés, pero el caso se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los dos. Y actualmente están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que parece que el próximo año va a ser la audiencia en la Corte. Eso nosotros lo entendimos como una agresión a la organización. Y lo entendimos como un mensaje de que nosotros tenemos el poder y podemos hacer lo que queramos cuando queramos. Si hoy violamos a una mujer, mañana matamos a otro, o encarcelamos a otro. Y así ha sido. Ese mensaje fue claro.

En este marco, la adopción de esta posición y la utilización de este tipo de estrategias, se vuelve un motivo más para generar nuevas agresiones estatales:

Porque después de eso, el año pasado que se recrudeció la represión hacia nosotros, fue asesinado el hermano de Inés, y este año, en febrero, mataron a otros dos compañeros. Y el año pasado encarcelaron al compañero Romualdo y a otros cinco más. Y hemos resistido, toda esta represión en contra nuestra. Pensamos que es por varias cosas. Porque el pueblo tuvo el valor de organizarse y denunciar los atropellos del ejército. Desde cuando la masacre del Charco. Y eso no lo permite el ejército.

Sin embargo, los miembros de la organización no se asumen como un ente pasivo o que resiste de manera receptiva las agresiones estatales. En contraparte, desarrolla sus propias estrategias para contrarrestar dichas agresiones en las que toma centralidad el control del espacio:

Alguien decía que el ejército hace lo que quiere, y sí es cierto. Ellos tienen las armas, tienen el poder. Pero en 2004, a finales del año, en Barranca de Guadalupe y en Barranca Tecuani, que es de donde es Inés, los compañeros expulsaron al ejército del territorio. Nosotros estamos pensando que es territorio nuestro, que no tienen por qué estar los militares ahí. Y para ellos es muy vergonzoso, porque ellos tienen el poder, cómo pueden expulsarlos unos indígenas. Y en esa expulsión participaron las mujeres. No sabemos en qué otros estados se ha hecho, pero lo que sí sabemos, porque de ahí se tomó la muestra, porque los compañeros compramos un video de los zapatistas, cuando expulsaron a los militares, yo no recuerdo en qué comunidad, pero donde participaron el pueblo, las mujeres, estaban voceando. Y ese video les gustaba mucho a los compañeros y cuando se dio el caso, pues lo pusieron en práctica. Y lo sacaron. Y hay un video que los mismos compañeros hicieron cuando los expulsaron. Y eso creo que no lo tolera el gobierno y, no sé cómo decirlo, y lo encabrona al gobierno que lo hagan eso. Nosotros creemos que la resistencia de nosotros es un poco complicada, porque ha habido muchas amenazas, está difícil, pero estamos buscando cómo resistir.

A pesar de que los representantes del gobierno mexicano no reconocieron las acusaciones a partir de los casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado mexicano es responsable de violación y tortura a ambas mujeres indígenas y ordenó la implementación de una serie de medidas de reparación del daño (CIDH, 2009a; 2009b). Esta resolución tendrá un efecto in-

mediato en la vida de Inés y Valentina, además de que sienta un precedente altamente significativo sobre la actuación de los cuerpos militares en México. A pesar del ordenamiento al Estado mexicano de adoptar medidas legislativas para que el fuero militar esté excluido de conocer violaciones a los derechos humanos, particularmente casos de violencia sexual, las decisiones de los actuales poderes Ejecutivo y Legislativo apuntan al aumento atribuciones y recursos destinados a las fuerzas armadas.

Aunque la comprensión cabal de estos procesos organizativos y su relación con el Estado mexicano requeriría una mayor contextualización, estos testimonios resultan ilustrativos al mostrar tan sólo un ejemplo de la forma como operan actualmente los mecanismos de militarización, represión y criminalización de movimientos sociales críticos al proyecto hegemónico en el país.

Estos testimonios y acciones de organizaciones y movimientos sociales muestran la manera como hacen un uso político de la memoria colectiva y se colocan como parte de las contiendas por la legitimación de las memorias. Este tipo de ejercicios adquiere aún mayor relevancia en el momento actual en que se hacen celebraciones oficiales por los centenarios o bicentenario de la revolución o de la independencia, tal como sucede en México o en Ecuador.

Pero también muestran la manera como, al retomar la perspectiva de la memoria social e histórica como instrumento de su lucha, cuestionan los sentidos aceptados sobre los espacios físicos y geográficos, al tiempo que les confieren nuevos significados. Es esta resignificación del espacio a partir del ejercicio de la memoria política, la que podemos observar en la creación de municipios autónomos zapatistas superpuestos a la geografía reconocida oficialmente; en la recuperación de las construcciones y predios en los que se practicó la tortura para convertirlos en memoriales; en el *escrache* y los cacerolazos argentinos en las casas de los dictadores o en las instituciones públicas que los protegen; o en la retirada de nombres de dictadores en las calles para ser sustituidos por los nombres de los desaparecidos.

A esta resignificación de los espacios se añade una redefinición de las temporalidades, que se observa cuando los movimientos sociales impugnan las fechas y periodos reconocidos por las historias oficiales de nuestros países, contraponiendo su memoria colectiva sustentada en sus experiencias de represión; cuando reconstruyen sus historias particulares para actualizar y reinventar sus tradiciones y sus identidades; al impugnar los tiempos legales y la idea de que los delitos de represión pueden proscribir o

pueden ser inactivados mediante documentos de reconstrucción histórica o de memoriales promovidos como acción gubernamental.

La violencia de Estado en México permanece como una constante, al menos, a partir del periodo posrevolucionario y viene a exacerbarse a inicios del siglo XXI teniendo como uno de sus principales sustentos en las indefiniciones en la formulación y el uso tendencioso de los recientemente creados delitos de privación ilegal de la libertad y terrorismo. Éstos son utilizados como forma de represión hacia movimientos sociales críticos de un sistema neoliberal que ha mostrado ser excluyente y empobrecedor de mayorías y que continúa generando un fuerte descontento social.

Una forma de gobierno mexicano que fuera caracterizada desde hace décadas como un dictadura constitucional (Valadés, 1974) puede ser entendida hoy en día como un Estado de excepción, que se expresa y hace posible a partir de la conformación de lagunas tanto temporales como territoriales en las que se suspenden los derechos fundamentales y, en nombre de la preservación del Estado de derecho, las fuerzas públicas pueden realizar evidentes violaciones a los derechos humanos. Así, los movimientos sociales se enfrentan a un Estado que no sólo no asume sus funciones de brindar a la población rural las condiciones necesarias para su desarrollo, sino que mediante la acción represiva obstaculiza doblemente la posibilidad de avanzar en dicha ruta.

En este contexto, el uso político de una memoria social historizada por parte de movimientos reivindicatorios de los derechos humanos toma cada día más relevancia. Sin remitirse a la conformación de memoriales o monumentos, esta memoria social pone en cuestión los usos dominantes y oficiales de los espacios y las temporalidades al tiempo que genera o impone estrategias de resignificación que fortalecen identidades y refuerzan los proyectos políticos de dichos movimientos.

BIBLIOGRAFÍA

- Agamben, G. (2007), *Estado de excepción, I, II*, Adriana Hidalgo, Argentina.
- Albo, X. y Barrios, R. (s/f), *Violencias encubiertas en Bolivia*, CIPCA, Bolivia.
- Almeyra, G. (2004), *La protesta social en la Argentina. 1990-2004*, Peña Lillo/Ediciones Continente, Argentina.
- Aranda, Jesús (2010), “Liberan a los doce presos atenguenses”, *La Jornada*, 1 de julio, México.

- Arenas, G. (2008), “Presas políticas y Sistema Judicial Penal”. ponencia presentada en el Foro Itinerante de Mujeres: violencia institucional e impunidad en México, Penal de Chiconautla, ENAH, Estado de México.
- Arias, A. y Del Campo, A. (2009), “Memory and popular culture”, *Latin American Perspectives*, vol. 36, núm. 168, septiembre, pp. 3-20.
- Benjamin, W. (2008), *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*, Itaca/UACM, México.
- Buhl, K. y Korol, C. (2008), *Criminalización de la protesta y de los movimientos sociales*, IRLS, Brasil.
- Calveiro, P. (1998), *Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina*, Colihue, Buenos Aires.
- Carreras, J.J. y Forcadell, C. (2003), *Usos públicos de la Historia*, Prensas Universitarias de Zaragoza, España.
- Castro-Gómez, S. y Mendieta, E. (1998), *Teorías sin disciplina. Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización*, Porrúa/Universidad de San Francisco, México/Estados Unidos.
- Cerda, A. y Chapela, M.C. (2010), “Los sentidos de la experiencia traumática: testimonio, salud y resignificación”, en Martínez, C. (comp.), *Por los caminos de la investigación cualitativa. Exploraciones en el ámbito de la salud*, UAM-Xochimilco, México.
- Comisión Civil Internacional (CCI) (2006), *Informe preliminar sobre los hechos de Atenco*, CCI, España.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2009a), *Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Inés Fernández Ortega (Caso 12.580) contra los Estados Unidos Mexicanos*, CIDH, Estados Unidos.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2009b), *Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Valentina Rosendo Cantú y otra (Caso 12.579) contra los Estados Unidos Mexicanos*, CIDH, Estados Unidos.
- Connerton, Paul (2008), “Seven types of forgetting”, *Memory Studies*, vol. 1, núm. 1, pp. 60-72.
- Dube, S. (coord.) (1999), *Pasados poscoloniales*, Colmex, México.
- Garduño, R. y Méndez, E. (2010), “El ejército seguirá en las calles de 5 a 10 años más, prevé Galván”, *La Jornada*, 8 de abril, México.
- González, A. (2010), “Guerrero, donde se castiga la pobreza y se reprimen las opciones de desarrollo: efectos psicosociales”, protocolo de investigación, México.
- Guha, R. (1983), *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, CUP, Delhi.
- Gutiérrez, R. y Escárzaga, F. (2005), *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, tomos I y II, UAM, México.
- Halbwachs, M. (1994), *Les cadres sociaux de la mémoire*, Albin Michel, París.
- (1997), *La mémoire collective*, Albin Michel, París.

- Hernández, R.A. y Suárez, L. (2008), *Descolonizando el feminismo: teorías y prácticas desde los márgenes*, Cátedra, España.
- Jardón, R. (2004), “La represión en México: 1950-1971”, *La Fogata* [<http://bit.ly/c63rGu>], fecha de consulta: abril de 2010.
- Jelin, E. (2002), *Los trabajos de la memoria*, Siglo XXI Editores, España.
- Mignolo, W. (2007), “El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto”, en S. Castro-Gómez, y R. Grosfoguel, *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Siglo de Hombrs/Universidad Central/Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, pp. 25-46.
- Montemayor, C. (2010), *La violencia de Estado en México antes y después de 1968*, Debate, México.
- Oikión, V. y García, M.E. (2006), *Movimientos armados en México, siglo XX*, Colmich, México.
- Olivares, E. (2010), “México enfrentará juicio en la CIDH por la violación de militares contra mujeres”, *La Jornada*, 7 de abril, México.
- Piñeyro, J.L. (2006), “Las Fuerzas Armadas y la guerrilla rural en México. Pasado y presente”, en V. Oikión y M.E. García, *Movimientos armados en México, siglo XX*, Colmich, México.
- Ricœur, P. (1999), *La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido*, Arcife/Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.
- Smith, L.T. (1999), *Decolonizing methodologies. Research and indigenous people*, Zed Books Ltd, Estados Unidos.
- Romo, P. (2008), *La criminalización de la protesta social en México*, Serapaz, México.
- Spivak, G.C. (1999), *A critique of Postcolonial Reason. Toward a History of the Vanishing Present*, Harvard University Press, Inglaterra.
- Todorov, T. (2000), *Los abusos de la memoria*, Le Seuil, Francia.
- Valadés, D. (1974), *La dictadura constitucional en América Latina*, UNAM, México.

LOS AUTORES

ACUÑA RODARTE, BLANCA OLIVIA. Licenciada en Sociología por la FES Acatlán, UNAM. Maestría en Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco. Profesora de tiempo completo adscrita al Departamento de Relaciones Sociales de la UAM-Xochimilco. Durante 10 años impartió docencia en las licenciaturas de economía y sociología de la FES Acatlán. Actualmente imparte docencia en la licenciatura en sociología y la maestría de la que es egresada, en los temas de historia agraria, economía campesina y organización en el medio rural en la UAM-Xochimilco. Desde hace varios años se ha vinculado con procesos organizativos de los estados de Chiapas y Oaxaca, particularmente de cafetaleros; asimismo, ha colaborado con organizaciones campesinas de granos básicos del país, en especial con la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC). En los últimos años ha escrito artículos relacionados con las estrategias campesinas para enfrentar las condiciones de los mercados agroalimentarios y la lucha por la soberanía alimentaria, en las revistas *Argumentos. Estudios críticos de la sociedad* y *Veredas. Revista del pensamiento sociológico*, respectivamente.

BARTRA VERGÉS, ARMANDO. Nació en Barcelona, España, en 1941, y vive en México desde 1948. Estudió filosofía y ha sido docente en la Facultad de Economía de la UNAM, en la ENAH y, desde 2006, es profesor-investigador de la UAM-Xochimilco. Dirige el Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural “Maya”, y coordina el suplemento *La Jornada del Campo*. Es autor de numerosos libros; entre los más recientes: *El capital en su laberinto*, *El hombre de hierro*, *Tomarse la libertad y La utopía posible*.

CARIÑO TRUJILLO, CARMELA. Socióloga por la UAM-Azcapotzalco. Maestra en desarrollo rural por la UAM-Xochimilco con el estudio “Juventud triqui, radio comunitaria y autonomía. La voz que rompe el silencio”. Ha trabajado con organismos civiles acompañantes de procesos de los pueblos indígenas y campesinos de la región mixteca y triqui de Oaxaca, purépechas de Michoacán y mazahuas del Esta-

do de México. Docente del diplomando “Diversidad cultural, políticas públicas y derechos de los pueblos originarios de México”, organizado por la CDI y la UAM-Xochimilco. Actualmente es parte del proyecto de investigación “Migración y cultura política en regiones de alta intensidad migratoria”, y profesora de asignatura en FES Acatlán, UNAM.

CERDA GARCÍA, ALEJANDRO (México, 1971). Doctor en sociología, con especialidad en antropología social por la Universidad de París III y el CIESAS. Actualmente se desempeña como profesor-investigador en la UAM-Xochimilco y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con publicaciones disponibles en línea en las revistas *Andamios* de la UACM, *Espacios Públicos* de la UAEM y en las revistas *Tramas. Subjetividad y Procesos Sociales*, *Reencuentro* y *Argumentos. Estudios críticos de la sociedad* de la UAM. Publicaciones recientes: *Imaginando zapatismo. Autonomía indígena desde un municipio autónomo en Chiapas* (UAM-Xochimilco/ Miguel Ángel Porrúa, 2010) y *Metrópolis desbordadas: poder, cultura y memoria en el espacio urbano* (UACM/Universidad Libre de Berlín) en coautoría con Anne Huffschmid, Iván Azuara y Stefan Rinke. Sus líneas de investigación: políticas de la multiculturalidad, movimientos indígenas, migración y derechos humanos [acerta@correo.xoc.uam.mx].

COBO GONZÁLEZ, MARÍA DEL ROSARIO. Maestra en antropología social (ENAH), doctorante en el posgrado de Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco. Investigadora asociada del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya, al que pertenece desde 1977, con experiencia profesional de más de 33 años en trabajos de investigación del campo mexicano. Experiencia docente como maestra titular de asignaturas en la licenciatura en Antropología Social de la ENAH. Miembro del Consejo Editorial de la revista *Cuadernos Agrarios*, nueva época (1990-2003) y de la Editorial El Atajo (1993-1999). Colaboradora en el suplemento mensual *La Jornada del Campo* (2007-2010). Entre sus publicaciones se cuenta: *Tosepan Titaniske. Abriendo horizontes. 27 años de historia*, Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan-Instituto Maya, 2004; *Estrategias cafetaleras*, Indesol/Instituto Maya. 2006; *Modelo organizativo de las mujeres que luchan por la defensa del medio ambiente, la seguridad alimentaria y el ahorro. La Omesp, cinco años de lucha*, Indesol/Instituto Maya. 2007; *Puerta del Viento. Cerro de las Flores, área comunitaria protegida*, CONAMP/UCIRI/Instituto Maya, 2007; *Milpas y cafetales en Los Altos de Chiapas*, CBMM/Conabio, 2009.

CONCHEIRO BÓRQUEZ, LUCIANO. Profesor del posgrado en Desarrollo Rural e investigador en el Departamento de Producción Económica de la UAM-Xochimilco. Economista, Maestro en ciencias sociales y Doctor en desarrollo rural. Autor de diversos artículos y coordinador de libros sobre la cuestión agraria, movimientos campesinos e indígenas, conocimiento tradicional, nueva ruralidad, propuestas alternativas de desarrollo, políticas públicas. Asesor y colaborador de diversas organizaciones campesinas, entre ellas del Municipio Autónomo Triqui de San Juan Copala (Oaxaca), el movimiento comunero por la recuperación de sus tierras de Tepoztlán (Morelos) e integrante de la coordinadora del Movimiento de Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía Nacional; vice coordinador de *La Jornada del Campo*. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.

COUTURIER BAÑUELOS, PATRICIA DELIA. Licenciada en administración con estudios de Maestría en Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco. Fue coordinadora del área “Planeación y desarrollo académico” y de la Licenciatura en Administración. Actualmente es jefa del área “Economía agraria, desarrollo rural y campesinado”. Profesora-investigadora en la UAM-Xochimilco; pertenece al Departamento de Producción Económica y es profesora de la licenciatura en Administración. Algunas de sus publicaciones son: *Política pública para el desarrollo rural*, en coautoría con el profesor Roberto Quintana y Luciano Concheiro. *La sociedad frente al mercado* (La Jornada/UAM-Xochimilco). *Hacia una alternativa de política pública para el desarrollo rural* (Juan Pablos/UAM-Xochimilco, 2003). *Los problemas del financiamiento en el medio rural: posibles aportes de las cajas de ahorro* (UAM-Xochimilco, 2003). Se ha hecho acreedora de algunos premios y reconocimientos como el premio anual a las áreas de investigación, ha dirigido tesis de maestría, presentó conferencias y ponencias y ha sido asesora interna de un gran número de alumnos de servicio social en la UAM-Xochimilco.

DUARTE BASTIAN, ÁNGELA IXKIC. Comunicadora social por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Realizó estudios de maestría y doctorado en antropología social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Actualmente realiza una estancia Posdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Fue “Científica social invitada” en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (City University of New York, CUNY). Ha sido becaria del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) de El Colegio de México (Colmex), del Conacyt, del Future of the Minorities Project (FMS), de UC Mexus y del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM. Realizó una estancia posdoctoral en el Centro de Estudios de la Mujer en la

Universidad de Syracuse (Syracuse University) y otra en el Departamento de Estudios Chicanos de UCLA. Ha publicado trabajos periodísticos y académicos.

ESPINOSA DAMIÁN, GISELA. Profesora-investigadora en la UAM-Xochimilco. En su vida profesional ha combinado la docencia y la investigación de temas rurales y de género; entre estos últimos destacan sus estudios sobre la organización y lucha social de mujeres de clases subalternas, urbanas, rurales e indígenas, mismos que han sido publicados por varias universidades y casas editoriales. Sus dos libros más recientes en esta línea son: *Cuatro vertientes del feminismo en México. Diversidad de rutas y cruce de caminos* (2009) y *La Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas: construyendo la equidad y la ciudadanía* (2010) –coordinado junto con dos mujeres líderes indígenas–, ilustra la investigación en colaboración que caracteriza sus estudios de género.

GUZMÁN GÓMEZ, ELSA. Profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estudios de agronomía y Maestría en Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco, y Doctorado en Antropología en la UNAM. Ha trabajado las líneas de investigación de estrategias y reproducción campesina, cultura e identidad campesina, uso y apropiación de recursos naturales y productivos para el desarrollo rural, así como las estrategias de resguardo de maíz en comunidades campesinas del estado de Morelos. Cuenta con diversas publicaciones (artículos y capítulos de libros), es coautora de los libros *Relaciones de género en el acceso a la tierra. Estudio de tres ejidos en condiciones de pobreza* (2005) y *Campesinos jitomateros. Especialización diversificada en Los Altos de Morelos* (2008), y autora de *Resistencia, permanencia y cambio. Estrategias campesinas de vida en el poniente de Morelos* (2005). Es miembro del SNI nivel I.

LANDÁZURI BENÍTEZ, GISELA. Profesora-investigadora en el Departamento de Política y Cultura y en el posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco. Cuenta con Licenciatura y Maestría en economía (Facultad de Economía, UNAM); Maestría y Doctorado en ciencias antropológicas (UAM-Iztapalapa) Ha publicado los siguientes libros: *Azúcar y Estado, Encuentros y desencuentros en Cuentepec, Morelos, Diversidad religiosa en Xochimilco*. Ha coordinado seis libros colectivos y publicado numerosos artículos y capítulos de libro en México y en el extranjero.

LEÓN LÓPEZ, ARTURO. Profesor-investigador de la UAM-Xochimilco. Estudió economía en la UNAM y es Doctor en desarrollo económico y social por la Sorbona en París I, Francia. Realiza investigaciones en distintas líneas como: desarrollo campe-

sino, organizaciones y movimientos campesinos, agricultura mundial. Ha escrito y publicado múltiples artículos, ensayos y libros: *La política agrícola europea y su papel en la hegemonía mundial* (1999), es coautor de los libros *Relaciones de género en el acceso a la tierra. Estudio de tres ejidos en condiciones de pobreza* (2005) y *Campesinos jitomateros. Especialización diversificada en Los Altos de Morelos* (2008). Ha coordinado diversos libros: *Migración, poder y procesos rurales* (2002, 2005), *Diversidad rural, estrategias económicas y procesos culturales* (2006). Desde 1990 forma parte del SNI, nivel II.

LÓPEZ LEVI, LILIANA. Doctora en geografía por la UNAM. Actualmente es profesora-investigadora en el Departamento de Política y Cultura de la UAM-Xochimilco y responsable del área “Sociedad y territorio” del doctorado en ciencias sociales de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Sus líneas de investigación son imaginarios y territorio, espacio y cultura urbana, cultura política y geografía electoral, en torno a los cuales ha publicado un libro, 24 capítulos de libro y 29 artículos en revistas nacionales e internacionales.

MARTÍNEZ ROSALES, ARMANDO. Sociólogo por la UAM-Azcapotzalco. Maestro en Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco, con el estudio “La escuela en la conquista del pueblo triqui. Del grupo de promotores bilingües a la educación para la autonomía en San Juan Copala”. Ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil que acompañan procesos de desarrollo en pueblos indígenas y campesinos de la región triqui y mixteca de Oaxaca. Autor de artículos sobre temas indígenas. Docente del diplomando “Diversidad cultural, políticas públicas y derechos de los pueblos originarios de México”, organizado por la CDI y la UAM-Xochimilco. Actualmente es parte del proyecto de investigación “Migración y cultura política en regiones de alta intensidad migratoria”.

MEZA CASTILLO, MIGUEL. Licenciado en Economía por la UNAM, con maestría y doctorado en desarrollo rural por la UAM-Xochimilco. Actualmente es profesor-investigador de la UAM-Xochimilco con la Cátedra Óscar Uribe Villegas. Con experiencia profesional de 30 años en el campo de la investigación sobre diferentes aspectos de la problemática rural. Entre sus trabajos de investigación se encuentran la evaluación de distintos programas gubernamentales y de políticas públicas—entre los que destacan “El Programa de Estímulos Regionales de Granos Básicos” (PER) en los estados de Chiapas y Guerrero para la Sagar, el “Programa Café”, en el estado de Hidalgo, 1998, 1999 y 2000 para el Cecafé, y el Programa de Subsidio al Fertilizante en el estado de Guerrero—, el “Estudio de Gran Visión, Café en los

estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, 1999 y la investigación sobre el Financiamiento Rural en el estado de Guerrero.

PAZ PAREDES, LORENA. Licenciada en Filosofía, con estudios de maestría en la ENAH. Actualmente es doctorante en Desarrollo Rural en la UAM-Xochimilco, socia fundadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural ‘Maya’, con cerca de 30 años de experiencia en investigación rural, particularmente en temas cafetaleros, organizativos y de mujeres rurales; colaboradora regular del suplemento *La Jornada del Campo*. Algunas publicaciones recientes son *Milpas y cafetales en Los Altos de Chiapas* (CBMM, 2010), en coautoría con Rosario Cobo; *Metodología participativa para el diagnóstico socioeconómico de regiones rurales* (2004), en coautoría con Gisela Espinosa y de la parte nacional de “Compromisos y realidades de la Salud Reproductiva en México” Foro Nacional de Mujeres y políticas de Población, 1999; y de los estudios sobre Costa Grande junto con Cobo en “Crónicas del Sur”, 2001.

RODRÍGUEZ WALLENIUS, CARLOS ANDRÉS. Coordinador del Posgrado Integrado en Desarrollo Rural y profesor-investigador en el Departamento de Producción Económica de la UAM-Xochimilco. Doctor en Ciencias Sociales y Maestro en desarrollo rural por la UAM-Xochimilco. Es miembro del SNI con nivel I; socio de la Red de Investigadores sobre Gobiernos Locales (IGLOM), de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), y de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales (AMER). Fue director general del Centro Servicios Municipales “Heriberto Jara” del 2003 al 2006. Ha escrito más de 40 artículos en revistas y libros sobre desarrollo local, municipalismo, participación ciudadana y territorio. Entre sus libros recientes están: *Luchas municipalistas en México. Acciones ciudadanas por la democracia y el desarrollo local* (México, UAM-Xochimilco/Juan Pablos, 2009); *Agua, municipio y sustentabilidad. El debate entre los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua potable* (Cesem, 2006); *La disputa por el desarrollo regional. Movimientos sociales y constitución de poderes locales en el oriente de la Costa Chica de Guerrero* (Plaza y Valdés/Cesem, 2005).

DIEGO QUINTANA, ROBERTO SERAFÍN. Profesor-investigador en el Departamento de Producción Económica y en el posgrado en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco. Es Doctor en Desarrollo Rural, por la Universidad de Londres, Inglaterra. Es miembro del SNI, nivel II. Sus temas de investigación: gobierno local, desarrollo comunitario, intervención y acompañamiento en el desarrollo, financiamiento rural y territorialidad, mercado, tratos y derechos agrarios.

*Espacios públicos y estrategias campesinas
ante la crisis en México,*

núm. 7 de Pensar el futuro de México.

Colección Conmemorativa de las Revoluciones Centenarias,
se terminó de imprimir el 30 de noviembre de 2010,
la producción estuvo al cuidado de mc editores,
Selva 53-204, colonia Insurgentes Cuiculco, 04530,
México, Distrito Federal, 2650 3422 y 5665 7163,
mceditores@hotmail.com. La edición consta de
1 000 ejemplares más sobrantes para reposición.

